

La Cultura política de la democracia en Costa Rica, 2004.

**Un estudio del Proyecto de Opinión Pública en América
Latina (OPAL)**

Jorge Vargas-Cullell
Luis Rosero-Bixby
Mitchell A. Seligson

Centro Centroamericano de Población (CCP)
de la Universidad de Costa Rica
San José 2005

Publicado por:
Centro Centroamericano de Población
de la Universidad de Costa Rica
San José 2060, Costa Rica
Teléfono (506)207-5693 / 207-4803
<http://ccp.ucr.ac.cr>

320.972.86

V297c Vargas-Cullell, Jorge, 1959-

La cultura política de la democracia en Costa Rica, 2004: un estudio del proyecto de Opinión Pública en América Latina (OPAL) / Jorge Vargas-Cullell, Luis Rosero-Bixby, Mitchel A. Seligson. -- San José, C.R.: Centro Centroamericano de Población, 2005. [Imprenta Nacional] xx,163,17 p.: il, mapa

ISBN 9977-15-131-8

1. Costa Rica – Política y Gobierno, 2004. 2. Cultura Política. 3. Democracia. 4. Política Social. 5. Corrupción Política. I. Rosero-Bixby, Luis 1952, coautor. II. Seligson, Mitchel, A., 1945, coautor. III. Título

CIP/1483

CC/SIBDI.UCR

Impreso en Costa Rica por
Imprenta Nacional
Tel. 296-9570

Reconocimientos

La publicación de este libro fue posible gracias a una donación de la *Fundación Andrew W. Mellon* al Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Colaboraron en el estudio y la preparación del informe: *Auria Villalta* y *Luis Oviedo* asistentes en procesamiento de datos. *Ericka Méndez*, coordinadora de campo y de procesamiento. *Gustavo Alfaro*, entrada de datos. *Martín Fallas*, dirección de trabajo de campo. *Matilde Rosero*, diseño de portada.

El estudio es parte del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (OPAL) de la Universidad de Vanderbilt (durante muchos años el proyecto estuvo en la Universidad de Pittsburgh). La investigación contó con el generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID). El estudio costarricense se efectuó en el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica.

Índice de contenidos

Índice de contenidos	v
Índice de tablas y de gráficos	viii
Siglas y abreviaciones	xiii
Resumen Ejecutivo	xv
Prólogo: Estudiando los valores democráticos en ocho países latinoamericanos: El reto y la respuesta	xix
Capítulo I. Contexto	1
1.1 Introducción	1
1.2 Evolución histórica	1
1.3 Evolución económica y social reciente	6
1.4 Evolución política reciente	7
1.5 Estudios recientes en cultura política	10
Capítulo II. Datos y métodos	13
2.1 Introducción	13
2.2 Diseño de la muestra	13
2.3 Instrumentos para la recolección de la información	15
2.3.1 El mapa del segmento	15
2.3.2 La hoja de ruta	15
2.3.3 Consentimiento informado	15
2.4 El trabajo de campo	16
2.5 Procesamiento de la información	16
2.6 Definición de variables para el análisis	17
2.7 Resultados de la muestra y descripción de los entrevistados	18
2.7.1 Características de la muestra con las de la población correspondiente en el censo del 2000	19
2.8 Análisis estadísticos	20
2.9 Precisión de los resultados	21
Capítulo III. Apoyo a la democracia	25
3.1 Introducción	25
3.2 Comunidad política y confianza en instituciones	26
3.3 Apoyo al sistema	29
3.4 Tolerancia política	35
3.6 Nota comparativa con otra medición de apoyo a la democracia	43
3.7 Un resultado sorpresivo: las actitudes hacia un golpe de estado	48
Capítulo IV. Corrupción en los asuntos públicos	55
4.1 Contexto	55
4.2 Percepción sobre la prevalencia de la corrupción	56
4.3 Aquiescencia a la corrupción	58
4.4 Victimización por actos corruptos	61

4.5 Corrupción y apoyo a la democracia	64
Capítulo V. Protección de derechos y seguridad ciudadana	67
5.1 Introducción	67
5.2 Protección de derechos	68
5.3 Percepción de seguridad	73
5.4 Medidas de protección adoptadas por los hogares.....	77
5.5 Victimización de hechos delictivos	80
Capítulo VI. Gobiernos locales.....	83
6.1 Contexto	83
6.2 La especificidad de los problemas locales	84
6.3 Desempeño del gobierno municipal	87
. 6.3.1 Eficacia y “responsiveness”.....	87
. 6.3.2 Rendición de cuentas.....	95
6.4 Participación ciudadana en asuntos municipales	99
6.5 Nota final: transferencia de obligaciones a municipalidades	102
Capítulo VII. Comportamiento electoral.....	105
7.1 Introducción	105
7.2 Actitudes sobre el voto	105
7.3 Participación electoral	108
. 7.3.1 El ejercicio del voto.....	108
. 7.3.2 Participación electoral más allá del voto	112
7.4 Modos de participación electoral	115
7.5 Nota final: apoyo a reformas políticas.....	117
Capítulo VIII. Participación ciudadana y capital social	121
8.1 Introducción	121
8.2 Niveles de participación	122
8.3 Correlatos de la participación en la sociedad civil.....	123
8.4 Acción comunitaria.....	125
8.5 Correlatos de la acción comunitaria.....	125
8.6 ¿Cómo se compara Costa Rica con otros países en el grado de participación?.....	128
8.7 Capital social	129
8.8 Correlatos del capital social	131
8.9 El capital social de Costa Rica en perspectiva comparada.....	133
Capítulo IX. La inmigración nicaragüense	135
9.1 Introducción	135
9.2 Actitudes hacia los inmigrantes	136
9.3 Integración con los inmigrantes	137
9.4 Correlatos de la aceptación o tolerancia de los inmigrantes	139
Apéndice A: Bibliografía.....	143
Apéndice B: El proceso de organizar el trabajo científico de este estudio	153
Apéndice C: Diseño de la Muestra.....	157
Universo.....	157

Población	157
Unidad de Observación.....	157
Consideraciones para el Muestreo	157
Marco Muestral	158
Tamaño de la Muestra.....	159
Selección de la Muestra	159
Selección de Individuos por Cuota	160
Niveles de Confianza y Márgenes de Error.....	161
Apéndice D: Cuestionario	164

Índice de tablas y de gráficos

Tabla I.1 Periodización y características del proceso de transición democrática de Costa Rica.....	4
Tabla I.2 Costa Rica: Algunos indicadores sociales y económicos 1940-2002 a inicios de cada década.....	6
Tabla I.3 Control de los poderes Ejecutivo y legislativo, número de partidos efectivos y volatilidad electoral 1974, 2002.....	9
Tabla II.1 Características de la muestra y el censo del 2000.....	19
Tabla II.2 Características de los entrevistados por sexo.....	20
Tabla II.3 Errores de muestreo para índices seleccionados.....	22
Tabla II.4 Errores de muestreo para preguntas seleccionadas.....	23
Gráfica III.1 Confianza promedio en valores, instituciones, organizaciones y asuntos, Costa Rica 2004, escala 0-100.....	27
Gráfica III.2 Confianza promedio en instituciones comparables por país.....	28
Gráfica III.3 Apoyo al sistema democrático en Costa Rica, 1985-2004, con la metodología de M. Seligson.....	31
Gráfica III.4 Promedio del índice de apoyo al sistema por país, 2004, escala 0-100.....	31
Tabla III.1 Variables empleadas para el cálculo del Índice de apoyo a la democracia.....	32
Tabla III.2 Predictores del apoyo al sistema democrático (Modelo B).....	33
Gráfica III.5 Apoyo a la democracia según evaluación de labor del presidente, combate a la corrupción y combate a la pobreza.....	34
Gráfica III.6 Apoyo a la democracia según el índice de control social.....	35
Gráfica III.7 Tolerancia promedio hacia el ejercicio de derechos por parte del grupo menos gustado, Costa Rica 2004, escala 0-100.....	37
Gráfica III.8 Puntajes <i>promedio</i> nacionales en el índice de tolerancia política en perspectiva comparada (2004).....	38
Tabla III.3 Predictores de la tolerancia política (Modelo B).....	39
Gráfica III.9 Tolerancia promedio por grado de educación, Costa Rica 2004.....	39
Tabla III.4 Relación empírica entre tolerancia y apoyo al sistema en Costa Rica.....	41
Gráfica III.10 Apoyo a una democracia estable en perspectiva comparada.....	41
Tabla III.5 Predictores del apoyo a una democracia estable (Modelo B).....	42
Gráfica III.11 Porcentaje de apoyo a una democracia estable según desempeño de gobierno en protección de democracia y confianza en los vecinos.....	43
Tabla III.6 Análisis factorial de preguntas que conforman el índice de orientación a la democracia (escala 0-100).....	45
Tabla III.7 Relación entre el Índice de apoyo al sistema (Seligson) y el Índice de orientación democrática (Kikut, Gómez y Vargas Cullell).....	47
Gráfica III.12 Justificación de un golpe de estado como respuesta a problemas políticos, 2004, escala 0-100.....	49
Tabla III.8 Nivel de justificación de un golpe de estado al analizar las cinco situaciones en su conjunto.....	50
Gráfica III.13 Índice de justificación de golpe de estado en perspectiva comparada.....	50
Tabla III.9 Nivel de justificación de un golpe de estado y actitudes no delegativas.....	52

Tabla III.10 Perfil sociodemográfico y político de los grupos según su justificación a un golpe de Estado y actitudes no delegativas.....	53
Gráfica IV.1 Percepción acerca de la generalización de la corrupción en los funcionarios públicos en perspectiva comparada, escala 0-100, 2004.....	57
Tabla IV.1 Actitudes ante situaciones de corrupción	59
Tabla IV.2 Predictores de la intolerancia a la corrupción.....	60
Tabla IV.3 Promedio en los índices de apoyo al sistema, tolerancia política e intolerancia a la corrupción según el acuerdo con que el presidente abuse de su puesto con tal de que sea eficaz.....	61
Gráfica IV.2 Proporción promedio de personas víctimas de al menos un acto de corrupción por país	63
Tabla IV.4 Predictores de la victimización de actos corruptos	63
Gráfica IV.3 Víctimas de actos de corrupción por nivel de ingreso y ocupación.....	64
Gráfica IV.4 Diferencias promedio nacionales en el apoyo al sistema democrático según victimización de corrupción por país.....	65
Gráfica V.1 Confianza promedio en las instituciones de protección de derechos en perspectiva comparada	69
Tabla V.1 Predictores de la confianza en las instituciones de protección de derechos	71
Gráfica V.2 Índice de protección de derechos según victimización delincriminal y apoyo al sistema democrático.....	71
Tabla V.2 Resultados del análisis factorial con la confianza promedio en instituciones públicas en Costa Rica.....	72
Gráfica V.3 Percepciones de seguridad del país y del barrio	74
Gráfica V.4 Percepciones de seguridad en el barrio y de amenaza delincriminal al bienestar del país en perspectiva comparada	75
Gráfica V.5 Porcentaje que perciben: a) país amenazado pero comunidad segura y b) país y barrio inseguro.....	76
Gráfica V.6 Medidas de protección adoptada por los hogares en los últimos años por región	78
Tabla V.3 Predictores del nivel de medidas de protección adoptadas por las personas en su hogar.....	79
Gráfica V.7 Número medio de medidas de protección adoptadas por los hogares según experiencia de victimización delincriminal y nivel de riqueza	80
Gráfica V.8 Proporción promedio nacional de personas víctimas de un hecho delincriminal por país	81
Gráfica V.9 Proporción promedio de víctimas que denuncian hechos delictivos ante instituciones por país	81
Gráfica V.10 Tasa de victimización delincriminal por educación y nivel de ingreso	82
Tabla VI.1 Problema local más importante según región (en porcentajes).....	85
Tabla VI.2 Problema nacional más importante según los entrevistados por región	86
Tabla VI.3 Proporción de personas que identifican el mismo problema local y nacional....	87
Tabla VI.4 Eficacia percibida de la municipalidad para resolver el problema más grave que afecta a la comunidad	88
Gráfica VI.1 Percepción de eficacia de municipalidad para resolver principal problema local según la creencia en la participación popular para resolverlo	89

Gráfica VI.2 Relación entre la percepción promedio cantonal de eficacia municipal según el Índice de desarrollo social de MIDEPLAN.....	90
Gráfica VI.3 Percepción sobre la sensibilidad (<i>responsiveness</i>) del gobierno local ante peticiones de la gente.....	91
Gráfica VI.4 Ente que mejor responde para resolver problema de comunidad: Satisfacción con servicios municipales.....	92
Gráfica VI.5 Percepción de las personas sobre la calidad de los servicios que brinda su municipalidad.....	92
Gráfica VI.6 Satisfacción de las personas con los servicios municipales en perspectiva comparada, 2004, escala 0-100	93
Tabla VI.5 Predictores de la evaluación de la calidad de los servicios municipales	94
Gráfica VI.7 Valoración de la calidad de los servicios municipales por percepciones de eficacia del gobierno central y de sensibilidad del gobierno local.....	96
Tabla VI.6 Significados del concepto de rendición de cuentas según los entrevistados	98
Gráfica VI.8 Percepciones sobre la rendición de cuentas por las municipalidades	99
Gráfica VI.9 Proporción promedio de personas que asisten a reuniones y peticionan a municipalidad en perspectiva comparada	100
Tabla VI.7 Predictores de la participación en asuntos municipales	101
Tabla VI.8 Probabilidad de resolver el problema local mediante la participación del pueblo según la asistencia de las personas a la reunión municipal	101
Gráfica VI.10 Petición a municipalidad y características sociales de las personas	102
Tabla VI.9 Traslado de obligaciones y servicios a las municipalidades	103
Gráfica VII.1 Proporción de personas con temor a votar y a postularse a un cargo público en perspectiva comparada	107
Gráfica VII.2 Percepción de la eficacia del voto como medio para cambiar las cosas	108
Gráfica VII.3 Proporción de personas que dicen haber votado en la última elección presidencial en perspectiva comparada.....	109
Tabla VII.1 Regresión logística para identificar los predictores del voto en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2002	110
Gráfica VII.4 Porcentaje que votó en las elecciones de febrero de 2002 por estado civil, edad, percepción de eficacia del voto y apoyo al sistema democrático.....	111
Tabla VII.2 Comparación de las razones para abstenerse a votar según el nivel de temor para sufragar	112
Gráfica VII.5 Participación electoral más allá del voto: procuraron convencer a otros y trabajaron para un candidato en las elecciones pasadas	113
Tabla VII.3 Predictores de la participación política electoral más allá del voto.....	114
Gráfica VII.6 Porcentaje que procuró convencer a otros en elecciones de febrero de 2002 por edad, ingreso, acción comunitaria y percepción de eficacia del voto.....	114
Gráfica VII.7 Importancia relativa de los modos de participación electoral en la ciudadanía por país	116
Tabla VII.4 Perfil social y político promedio de las personas según sus modos de participación electoral.....	117
Gráfica VII.8 Niveles promedio de acuerdo con tres reformas electorales en una escala 0-10	118
Gráfica VIII.1 Participación en reuniones de organizaciones de la sociedad civil	122
Tabla VIII.1 Matriz de componentes rotados	123

Tabla VIII.2 Regresión múltiple explicatoria de los dos índices de participación	124
Gráfica VIII.2 Participación en la solución de problemas comunitarios en el último año	125
Tabla VIII.3 Regresiones múltiples explicatorias del índice de acción comunitaria.....	126
Gráfica VIII.3 Tres índices de participación comunitaria por edad	127
Gráfica VIII.4 Índices de participación por educación y religiosidad.....	127
Gráfica VIII.5 Índices promedio de participación y acción comunitaria por países.....	128
Tabla VIII.4 Respuestas a las preguntas sobre capital social (porcentajes).....	129
Tabla VIII.5 Coherencia entre las tres respuestas de confianza interpersonal.....	130
Tabla VIII.6 Regresiones múltiples para los tres indicadores de capital social.....	131
Gráfica VIII.6 Diferencia en los porcentajes de confianza y desconfianza	132
Gráfica VIII.7 Indicadores de cohesión social y modelos a seguir por tipo de localidad...	132
Gráfica VIII.8 Correlaciones entre capital social y acción comunitaria	133
Gráfica VIII.9. Diferencia entre los porcentajes que confían menos los que desconfían...	134
Tabla IX.1 Actitudes hacia los inmigrantes nicaragüenses	136
Gráfica IX.1 Actitudes hacia los inmigrantes nicaragüenses	137
Tabla IX.2 Tienen interacción con nicaragüenses	138
Tabla IX.3 Matriz de componentes rotados.....	138
Tabla IX.4 Regresión múltiple explicatoria de los dos índices de interacción con nicaragüenses (coeficiente de regresión simple y estandarizado).....	139
Tabla IX.5 Regresión múltiple del índice de aceptación de los inmigrantes nicaragüenses(coeficiente de regresión simple y estandarizado).....	140
Gráfica IX.2 Diferencia en el porcentaje de aceptación menos rechazo de inmigrantes....	141
Tabla A.1. Cantones seleccionados por estrato.....	160
Tabla A.2. Distribución de la población y la muestra por estrato	160
Tabla A.3. Distribución poblacional y muestral según los grupos de cuota	161
Tabla A.4. Estimación <i>a priori</i> de errores muestrales	162
Gráfica A.1. Mapa de conglomerados en la muestra, regiones de Costa Rica.....	163

Siglas y abreviaciones

ADEMUR	Índice de apoyo al sistema recodificado
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCP-UCR	Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CsPRO	Census and Survey Processing System
DEF	Efecto de diseño
EE	Errores estándares
GAM	Gran Área Metropolitana
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
IDESPO	Instituto de Estudios sobre Población de la Universidad Nacional
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IDS	Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN
IIS-UCR	Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
INS	Instituto Nacional de Seguros
IRB	Comité de Revisión Institucional de la Universidad de Pittsburgh
Km	kilómetros
MIA	Diseño de muestra irrestricto aleatorio
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación y Política Económica
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
NPE	Número de partidos efectivos
OPAL	Proyecto de Opinión Pública de América Latina
PIB	Producto Interno Bruto
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PRODE	Índice de Protección de Derechos
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
USAID	Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos

Resumen Ejecutivo

El presente estudio sobre la cultura política democrática en Costa Rica es parte de una investigación comparada que se realiza en ocho países de América Latina: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. La investigación procura no solo comparar la cultura política de estos países sino crear una herramienta útil para dar seguimiento a los cambios que éstas experimenten a lo largo del tiempo. El estudio de Costa Rica se basa en los resultados de una encuesta nacional sobre valores, actitudes y opiniones que se realizó en el mes de marzo de 2004, mediante la cual se entrevistaron a 1.500 personas. Las personas estudiadas, que se seleccionaron con muestreo probabilístico, representan a la población nacional de 18 o más años de edad con derecho a voto. El cuestionario aplicado tiene un tronco común, compartido con el conjunto de los países incluidos en el estudio, así como temas específicos desarrollados para el caso costarricense. La coordinación técnica de la investigación para toda la región estuvo a cargo de Mitchell Seligson, Profesor de la Universidad de Vanderbilt y creador del proyecto OPAL. En Costa Rica, la investigación estuvo a cargo del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR).

El estudio confirma el amplio apoyo ciudadano a la democracia existente en Costa Rica. Por una parte, el apoyo a las instituciones del sistema político es el más alto de los ocho países estudiados en el estudio de OPAL -el puntaje promedio del país en una escala de 0-100 es 68. Este resultado supone una cierta recuperación del nivel de apoyo registrado cinco años atrás (61). Empero, desde una perspectiva de más largo plazo, no alcanza los niveles de veinte años atrás (85), por lo que puede hablarse de una tendencia al declive. El comparativo alto apoyo a las instituciones del sistema político es parte de una confianza genérica en las instituciones públicas del Estado costarricense, incluyendo tanto a las entidades de protección de derechos (Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República) como a las entidades de prestación de servicios (CCSS, INS, ICE). (Solo los partidos políticos tienen un resultado francamente negativo, al igual que ocurre en los demás países). Por otra parte, dentro de los ocho países estudiados Costa Rica registra el mayor grupo de personas que apoyan al sistema político y, al mismo tiempo, tienen una alta tolerancia política hacia grupos minoritarios, lo que en el estudio se denomina apoyo a la democracia estable.

Uno de los factores que más influyen sobre el apoyo al sistema es el capital social. Costa Rica es el único país de los 8 estudiados en el que el número de los individuos que confían en las personas de la comunidad supera al número que desconfía – en los demás países la desconfianza predomina sobre la confianza (es especialmente relevante el contraste con los dos vecinos de Costa Rica: Nicaragua y Panamá). Otras dimensiones de capital social se midieron solo en Costa Rica y por tanto no es posible hacer comparaciones; sin embargo, los resultados del análisis de cohesión social de los barrios con respecto a la confianza interpersonal sugieren que el capital social en Costa Rica es más elevado.

Por otra parte, y este es otro punto destacable, la victimización de las personas por actos de corrupción en Costa Rica es muy baja y, además, entre las menores de los ocho países estudiados. Este es un dato importante pues las víctimas de actos corruptos muestran menor nivel de apoyo al sistema. Pese a ello, este es el país en el cual, en

promedio, es más alta la percepción de corrupción en los asuntos públicos. Como se señala en el informe, este dato –aunque indicativo de un clima de opinión- es un pobre predictor tanto del nivel de victimización de la corrupción como de la aquiescencia a la misma, que en Costa Rica es también baja.

No obstante, existen motivos de preocupación. En primer lugar, hay fuertes vetas de intolerancia política entre la ciudadanía. A pesar de vivir en la democracia más antigua y estable de América Latina, la ciudadanía costarricense muestra niveles de intolerancia similares a los de ciudadanía de las democracias más noveles de México y Centroamérica. Cerca de la mitad de la población tiene actitudes predominantemente intolerantes. Más aún, en los últimos diez años no ha habido progreso en esta materia, de acuerdo con mediciones comparables sobre el tema. En contraste con el apoyo al sistema, el capital social no influye sobre la tolerancia política.

Este perfil de intolerancia se aplica a otros ámbitos de la vida social. El estudio indagó sobre las actitudes en relación con la inmigración nicaragüense en el país (aproximadamente 8% de la población). Existe entre la ciudadanía una fractura en este punto. El mayor número de entrevistados (29%) tiene actitudes neutras o ambivalentes hacia los inmigrantes nicaragüenses. Porcentajes similares (19%) están polarizados con actitudes muy negativas o muy positivas. En balance, la diferencia entre actitudes positivas y negativas es de -4%, es decir que predominan ligeramente las actitudes desfavorables hacia la inmigración. Pese a esta fractura, existe una fuerte integración entre costarricenses y nicaragüenses, especialmente por los contactos por amistad, en el trabajo o como vecinos (“integración horizontal”).

En segundo lugar, hay claros síntomas de descontento ciudadano. Al ser consultada, una parte importante de la ciudadanía manifestó su acuerdo con un golpe de estado para resolver una serie de problemas críticos del país. Cuando se analiza en profundidad estas actitudes, la conclusión que emerge es que las personas no están abogando por una salida autoritaria sino por una mayor capacidad del liderazgo político para resolver los problemas nacionales. Sin embargo, ésta es una llamada de atención sobre el complejo clima político por el que atraviesa el país.

Uno de los resultados más llamativos del estudio es la importancia de los factores locales sobre los valores y actitudes de las personas. Esto es especialmente cierto en relación con el capital social, la seguridad ciudadana y la percepción sobre el desempeño del gobierno local. (En otros temas como la corrupción, estos factores no son importantes). En el tema de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad es mayor en la GAM y menor en zonas rurales; también varían las medidas de protección que los hogares adoptan para enfrentar lo que perciben como amenazas a su seguridad. En el tema de la seguridad cabe subrayar la brecha existente entre la percepción casi unánime de la delincuencia como amenaza al bienestar del país (Costa Rica es el país donde mayor ésta es), y la difundida sensación de seguridad que las personas manifiestan sentir en sus comunidades. Por su parte, el capital social –tanto en su dimensión de confianza interpersonal como en la de cohesión social- exhibe un comportamiento territorial similar: los niveles de capital social son menores en la GAM y mayores en zonas rurales. Finalmente, las y los ciudadanos manifiestan evaluaciones sobre la eficiencia, apertura y sensibilidad de sus gobiernos locales a las necesidades de la gente que varían significativamente entre los municipios. No obstante, es mayoritaria la percepción de que las corporaciones municipales rinden menos cuentas a la ciudadanía

que las instituciones del gobierno central. A esto se suma una clara división en dos grupos casi del mismo tamaño entre quienes favorecen y adversan una mayor descentralización del Estado a favor de las municipalidades: en Costa Rica, no hay acuerdo para avanzar en este tema, a diferencia de otros países de América Latina donde las mayorías acuerpan la descentralización.

La importancia de los factores locales en la configuración de valores, actitudes y percepciones apunta a una cuestión poco explorada en los estudios comparados sobre la democracia: que las y los ciudadanos no experimentan una democracia “en promedio”, pues tanto la convivencia como la cultura democrática tiene texturas que varían en el plano subnacional.

El presente estudio confirma hallazgos de anteriores investigaciones en materia de participación ciudadana. En Costa Rica la participación electoral es mucho más frecuente –aunque declinante– que las otras modalidades de participación (de carácter no electoral) en los asuntos públicos, nacionales o locales. Más aún, el país tiene uno de los más bajos niveles de participación en asuntos municipales entre los ocho países del estudio USAID-CAM 2004 y, pese a la amplia trayectoria democrática del país, los niveles de participación comunitaria no son mayores que los del resto de países. Por otra parte, participación electoral significa, en Costa Rica, básicamente sufragar; es muy baja la proporción de personas que se involucran con partidos políticos o intentan persuadir a otros durante un proceso electoral. El bajo nivel comparado de participación ciudadana en asuntos no electorales tiene una consecuencia no deseable desde el punto de vista democrático. De acuerdo con los resultados del estudio, una mayor participación comunitaria está asociada con un mayor apoyo al sistema.

Prólogo:

Estudiando los valores democráticos en ocho países latinoamericanos: El reto y la respuesta

Por: Mitchell A. Seligson
Centennial Professor de Ciencia Política
Y director, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
Universidad de Vanderbilt

La publicación que tiene ante Usted hace parte de un número creciente de estudios producidos por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (OPAL). Este proyecto, iniciado hace dos décadas, y por muchos años albergado en la Universidad de Pittsburgh, está ahora albergado por la Universidad de Vanderbilt y en los últimos años ha recibido el generoso apoyo de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). El proyecto se inició con el estudio de los valores democráticos en un país, Costa Rica, en un momento en el que la mayor parte de los países latinoamericanos se encontraban atrapados por regímenes represivos que prohibían ampliamente la realización de estudios de opinión pública (y violaban sistemáticamente los derechos humanos y las libertades civiles). Por fortuna, hoy esos estudios pueden ser llevados a cabo abierta y libremente en casi todos los países de la región.

El presente estudio, al incorporar ocho países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia), representa el esfuerzo más grande llevado a cabo hasta el momento por el OPAL. Los diseños de la muestra y el cuestionario fueron uniformes para los ocho estudios, permitiendo comparaciones directas entre ellos, así como análisis detallados dentro de cada país. El ciclo del 2004 incluye un total de nueve publicaciones, una para cada uno de los ocho países, de autoría de cada uno de los equipos de trabajo nacionales, y un estudio global, escrito por el autor de este prefacio quien ocupa el cargo de Director del OPAL y es además el coordinador científico de los estudios en los ocho países. Fortuitamente, muchas de las preguntas hechas en las encuestas administradas en esos ocho países fueron también incluidas en las muestras nacionales de los estudios del OPAL llevados a cabo en el 2004 en Ecuador y Bolivia, lo que significa que para algunos ítems es posible hacer comparaciones entre los diez países de América Latina. Al momento de escribir esto, los datos del 2004 de Bolivia no están disponibles, es así que en este volumen se utilizan los resultados de Bolivia 2002. Finalmente, una investigación en colaboración en República Dominicana, en la que fueron incluidas un pequeño número de preguntas centrales del OPAL, amplía la muestra de países del 2004 a once y nos da por lo menos un panorama limitado del Caribe, que se suma al de Centroamérica y la Región Andina, aunque esos datos no estuvieron disponibles para el análisis en este escrito. La única región ausente en Latinoamérica es el Cono Sur, un déficit que esperamos remediar en el futuro. Para varios de los países en el presente ciclo, el OPAL había realizado encuestas previamente usando baterías de preguntas idénticas. Por esta razón, en los reportes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, se hicieron comparaciones con los estudios anteriores.

Las encuestas de opinión pública en América Latina se han vuelto muy populares en años recientes. Desafortunadamente, muy pocos de esos estudios siguen los rigurosos procesos científicos que hoy son la norma básica para investigaciones de opinión pública en Estados Unidos y Europa. Dichos estudios frecuentemente padecen de cuestionarios pobremente diseñados, muestras no aleatorias y que carecen de representatividad, escasa supervisión en cuanto al trabajo de campo se refiere, un errático ingreso de datos y un análisis de los mismos que rara vez va más allá de una presentación de porcentajes. Como resultado, estos estudios son usualmente desechados por académicos y formuladores de políticas públicas.

El proyecto OPAL ha intentado, yo diría que con un éxito considerable, desviarse de la norma imperante en América Latina para producir encuestas de calidad que cumplen los más altos requisitos de investigaciones académicas en los Estados Unidos y Europa. Las encuestas en que se basa el presente estudio, ya que fueron diseñadas desde el inicio para permitir comparaciones entre países, fueron realizadas con especial rigor y atención al detalle metodológico, tal como se describe en este prólogo y en la sección metodológica de este reporte y en sus volúmenes individuales. Reconocimos desde el principio que todo estudio científico, por su propia naturaleza, contiene errores (derivados de muchas causas, incluyendo errores que resultan de muestras probabilísticas, desatención del entrevistado, errores de codificación y de ingreso de datos). Nuestra meta fue reducir cada uno de estos errores a su mínimo absoluto; y hacerlo de una manera costo-efectiva.

También desde el comienzo, buscamos crear una metodología transparente y replicable. La esencia de la investigación científica es que esta puede ser replicada. La emoción generada por los prospectos de la “fusión fría” desapareció rápidamente cuando los físicos fueron incapaces de replicar su inicial “descubrimiento”. Demasiadas encuestas publicadas en América Latina carecen absolutamente de información sobre el diseño muestral, y cuando dicha información es provista, esta es tan limitada que es imposible determinar con algún grado de detalle como fue conducido el muestreo. Otro serio problema es que rara vez la base de datos es puesta a disposición del público en general; casi sin excepción los datos son celosamente guardados, volviendo imposible el re-análisis por parte de científicos sociales y formuladores de políticas públicas, conducido con el afán de buscar nuevas perspectivas o de replicar los resultados originales. Los datos conseguidos con fondos públicos deberían estar disponibles al público. El no hacerlo deriva en una privatización de los bienes públicos. Por supuesto que, en la diseminación de los datos deben ser rigurosamente obedecidas las regulaciones de protección de los sujetos humanos, gobernadas por los Comités de Revisión Institucionales (los IRBs), y de esta manera proteger los derechos y la identidad de dichas personas.

Cuando los lectores examinen los resultados presentados en este volumen sintetizado, así como en los estudios de los países; y encuentre que dichos resultados coinciden con sus expectativas, seguramente dirán, “Es justo lo que esperaba, así que esta encuesta no me dice nada nuevo.” Por otro lado, cuando los resultados difieran de sus expectativas, probablemente dirán, “Esto no tiene sentido, estos datos deben estar equivocados.” Estas reacciones a los datos presentados en nuestras encuestas son comunes, y para algunas encuestas emergentes en los países en desarrollo, los datos pueden efectivamente ser “erróneos”. No podemos garantizar que nuestros resultados

sean sin error, pero hemos hecho todos los esfuerzos, como se vera descrito en adelante, para minimizar el error. Dado que estamos trabajando con una muestra de población de cada país, en lugar de entrevistas con todos los adultos en edad de votar, existe siempre un chance en veinte de que nuestros resultados no estén dentro del $\pm 2.5\%$ de margen de error encontrado en cada una de nuestras muestras nacionales. Así como indicamos en la sección metodológica del reporte de cada país, estos intervalos de confianza pueden ser más anchos para algunas variables en ciertos países como resultado de los “efectos de diseño,” i.e., utilizamos una muestra estratificada y conglomerada, que es una practica estándar en los muestreos modernos, cuyo impacto es afectar la precisión de nuestros estimados mientras se mantienen dentro de un limite razonable los costos del trabajo de campo (como resultado de los conglomerados del muestreo). Rara vez en las encuestas modernas se utiliza un simple muestreo aleatorio, y para este proyecto nosotros tampoco lo hemos hecho. En resumen, si los lectores encuentran cierta inconsistencia entre los resultados y sus expectativas, puede ser porque estamos trabajando con muestreos probabilísticos, y existen posibilidades de que en alguna ocasión nuestros resultados estén fuera del margen. Pero, 95 de cada 100 veces, nuestros resultados deberán estar razonablemente cerca de lo que hubiésemos obtenido al entrevistar a millones de adultos en edad de votar en los países incluidos en este estudio (una imposibilidad obvia). Es más, al haber tomado medidas especiales para tratar con el problema de “no cobertura,” algo que casi no se ha visto hacer en ningún lado de América Latina, creemos que nuestros resultados son tan buenos como pueden ser.

Lo que ustedes tienen ante sí, entonces, es el producto de un intenso trabajo de investigadores altamente motivados, expertos en diseño muestral, supervisores de campo, entrevistadores, digitadores, y, por supuesto de más de 12,000 encuestados. Nuestros esfuerzos no serán en vano si los resultados presentados aquí son utilizados por formuladores de políticas públicas, ciudadanos y académicos para ayudar a fortalecer la democracia en América Latina.

Agradecimientos

El estudio fue posible gracias al generoso apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). Margaret Sarles, Bruce Kay y Eric Kite en la Oficina de Democracia y Gobernación de USAID, apoyada por Maria Barrón en la Directiva de América Latina y el Caribe, aseguraron la financiación e hicieron posible todo el proyecto gracias a su apoyo incesante. Todos los participantes en el estudio están agradecidos con ellos, así como con Todd Amani, USAID/Guatemala, quien asumió el papel de coordinación del proyecto en la orilla de USAID. ARD de Burlington, Vermont, manejó las finanzas del proyecto y el diseño de las publicaciones. Un aspecto crítico para el éxito del proyecto fue la cooperación de muchos individuos e instituciones en los países estudiados quienes trabajaron incansablemente para cumplir con lo que en ocasiones parecían fechas límites imposibles. Ellos son, para México, Jorge Buendía y Alejandro Moreno del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); para Guatemala, Dinorah Azpuru y Juan Pablo Pira de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); para El Salvador y Honduras, Ricardo Córdova de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), José Miguel Cruz del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana, UCA, y Siddharta Baviskar de la Universidad de Pittsburgh; para

Nicaragua, Luis Sierra y Pedro López Ruiz de la Universidad Centroamericana (UCA); para Costa Rica, Luis Rosero-Bixby de la Universidad de Costa Rica y Jorge Vargas del Programa Estado de la Nación; para Panamá, Marco A. Gandásegui del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y Orlando J. Pérez de la Universidad de Central Michigan; para Colombia, Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría (CNC), y Juan Carlos Rodríguez-Raga de la Universidad de Pittsburgh. Polibio Córdova de CEDATOS Ecuador, proporcionó una guía excelente a lo largo del diseño muestral. El equipo de asistentes de postgrado de la Universidad de Pittsburgh ha trabajado arduamente en numerosos aspectos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina: Miguel García (Colombia), Daniel Moreno (Bolivia), Sawa Omori (Japan) y Rosario Queirolo (Uruguay). John Booth de la Universidad de North Texas, y Miguel Gómez, anteriormente en la Universidad de Costa Rica, proporcionaron un excelente consejo en el diseño del cuestionario. Chris Sani se desempeñó admirablemente como asistente de pregrado. El proyecto debe profunda gratitud a todas esas excelentes personas por su excepcional trabajo en este estudio. Finalmente, queremos agradecer a los 12,401 individuos en esos ocho países que entregaron tiempo de sus ocupaciones diarias para contestar nuestras preguntas. Sin su cooperación, este estudio habría sido imposible.

Nashville, Tennessee
Septiembre, 2004.

Capítulo I. Contexto

1.1 Introducción

Costa Rica es una de las democracias más antiguas de América Latina y, ciertamente, la más estable de ellas (Booth, 1995, 1998; Booth & Seligson, 1994; Chalker, 1995; Mahoney, 2001; Peeler, 1985, 1991; Programa Estado de la Nación, 2001a; Yashar, 1997). Su régimen democrático fue el resultado de una larga transición política (O'Donnell & Schmitter, 1986) iniciada a finales del siglo XIX, la que incluyó un conflictivo proceso de desarrollo de instituciones políticas durante la primera mitad del siglo XX. (Lehouq, 1998; Ivan Molina & Lehouq, 1999). Aunque puede debatirse acerca de la fecha de finalización de esta transición, no es controversial afirmar que a mediados de la década de 1950 la mayor parte de las instituciones y libertades asociadas a un régimen democrático habían sido establecidas (Booth, 1998; Peeler, 1991).

En la segunda mitad del siglo XX el país experimenta una convergencia única de procesos económicos, sociales y políticos. Por una parte, al igual que muchos otros países, Costa Rica experimentó un rápido crecimiento económico y demográfico, en especial entre 1950 y 1980. Por otra parte, a diferencia del resto, combinó lo anterior con un desarrollo democrático e importantes logros en equidad social. Esta convergencia inédita contribuyó a la estabilidad social y política del país, pese a las turbulencias que experimentaba su entorno regional (Programa Estado de la Nación, 2002).

Entre 1980 y 1982 el país padeció una severa crisis económica –aunque menos intensa y prolongada que en el resto de América Latina. La crisis fue seguida por cambios económicos e institucionales importantes. El país adoptó un nuevo estilo de desarrollo económico, basado en la apertura comercial y la promoción de la inversión extranjera, que generó un dinámico y diverso sector externo. Una serie de cambios constitucionales y legales alteraron la estructura y funcionamiento del Estado y robustecieron sus instituciones. Sin embargo, el país no retornó a la época de las altas tasas y sostenidas de crecimiento económico y rápido progreso social disfrutado con anterioridad a 1980.

A estos cambios económicos e institucionales se sumaron hechos políticos inéditos: debilitamiento de los partidos tradicionales, erosión del bipartidismo, aumento en la desconfianza ciudadana hacia la política y caída en la participación electoral.

1.2 Evolución histórica

El establecimiento de un régimen democrático en Costa Rica, en la primera mitad del siglo XX, es parte de un proceso más amplio de desarrollo del Estado y de las luchas por expandir el reconocimiento y tutela de los derechos ciudadanos en la esfera política, civil y social. En los aproximadamente noventa años de la transición democrática, hay cambios fundamentales tanto en las instituciones de acceso al poder político (por ejemplo, el sistema electoral) como en el de las instituciones a cargo de asegurar que en

el ejercicio del poder político, los gobernantes se sujeten al “imperio de la ley” y respeten los derechos ciudadanos (Tabla I.1).

Al iniciarse el siglo XX, Costa Rica experimentaba una liberalización política. Las elecciones eran ya el principal canal para obtener el poder político. La frecuencia de asonadas, levantamientos y golpes era mucho menor. Se había logrado la separación y supremacía del Estado sobre la iglesia y, con excepción de la dictadura de 1917-1919, la supremacía civil sobre los militares (Campos, 2000; M. Muñoz, 1990; Soto, 1985). Sin embargo, el Poder Ejecutivo manipulaba el sistema electoral; no había voto secreto y una parte importante de la población carecía de derechos políticos (Ivan Molina & Lehouq, 1999; O. Salazar, 1997). Al mismo tiempo, las instituciones del Estado de derecho eran incipientes. El Poder Judicial estaba subordinado al Congreso, quien nombraba y removía a los funcionarios judiciales (M. A. Jiménez, 1974; Segura, 1990). No había protección institucional a los derechos y libertades constitucionales ni controles institucionales que exigieran la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

En contraste, ya para la década de 1960 existía un sistema electoral capaz de realizar elecciones libres, limpias y competidas, dirigido por un Tribunal Electoral independiente. El Poder Judicial se había convertido en un poder independiente del Estado, con monopolio sobre la función jurisdiccional, no solo por las provisiones de la Constitución de 1949, sino por la autonomía financiera y funcional garantizada en 1957 (C. J. Gutiérrez, 1983). Se había creado la Contraloría General de la República en 1949, como órgano auxiliar del Poder Legislativo, el primer mecanismo de “accountability” horizontal (O'Donnell, 1998) dentro del Estado a cargo del control de legalidad de la hacienda pública.

Este desarrollo de las instituciones democráticas fue acompañado por la expansión del reconocimiento y tutela de los derechos políticos, civiles y sociales asociada a las crecientes demandas de la población (Víctor Acuña, 1993; De la Cruz, 1977; Oliva, 1985, 1997; Pérez, 1997). Las luchas por los derechos sociales se entrelazaron con las demandas por la expansión de derechos políticos (por ejemplo, el voto secreto, el sufragio femenino) y por una representación política más efectiva (por ejemplo, de los trabajadores de las plantaciones bananeras y los artesanos urbanos) (M. Aguilar, 1989a, 1989b; Barahona, 1994). En particular, el conflictivo reconocimiento de derechos sociales fue uno de los motores de la inclusión ciudadana durante la primera mitad del siglo XX. Estas demandas contribuyeron a gestar importantes cambios legales e institucionales en el Estado, particularmente en la década de 1940, con la aprobación del Código de Trabajo y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, y el desarrollo de políticas sociales.¹ Ciertamente, las reformas sociales de los 1940 no se extendieron a la mayoría de la población sino hasta las décadas de 1960s y 1970s, pues al inicio tenían una cobertura limitada a las clases medias urbanas. (Garnier, 1990; Rosenberg, 1980) Sin embargo, importa resaltar que el creciente reconocimiento de derechos sociales, y del desarrollo de políticas públicas en esos ámbitos, fue

¹ Aunque las principales reformas sociales fueron promulgadas en los 1940, desde el inicio del siglo XX el Estado puso en marcha intervenciones sociales. En las primeras décadas del siglo, el gasto público en educación aumentó y sobrepasó a los gastos militares, que mostraron un decrecimiento (Quesada, 1999; Muñoz, 1990). Intervenciones y gasto público sostenidas en salud pública pueden encontrarse también tan temprano como los años veinte (Román, 1995).

concomitante con el progresivo establecimiento de las instituciones de la poliarquía, del Estado de derecho y del reconocimiento de derechos políticos y civiles.

La guerra civil de 1948 y la Constitución Política del año siguiente liquidaron los restos institucionales autoritarios dentro del régimen político costarricense². Una reforma fundamental fue la abolición del ejército, que eliminó un factor de inestabilidad y permitió redireccionar recursos públicos a otros ámbitos de acción. Además, se universalizó el derecho al sufragio y se eliminó la intromisión del Ejecutivo en otros Poderes del Estado. Empero, pese al decisivo impulso democratizador que provocaron, no crearon de súbito la democracia. Por una parte, la transición venía de antes. Por otra, pese a los avances citados, el sistema político mantuvo una exclusión antidemocrática durante el período de 1949 a 1975. El párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política permitía la proscripción de partidos “antidemocráticos,” a juicio de la Asamblea Legislativa. La amplitud e intensidad de la exclusión se redujo hacia el final del período, pero ello significó que un conjunto de ciudadanos no pudieron ejercer sus libertades de pensamiento, organización y voto libre. Al derogarse esta norma constitucional en 1975, se puso punto final al largo proceso de creación de un régimen democrático.

El final de la transición política coincidió con un ciclo de rápido crecimiento económico y demográfico. La población costarricense pasó de poco más de 800 mil habitantes en 1950 a casi 2.3 millones en 1980. La economía creció aún más rápidamente: el PIB per cápita aumentó de un estimado de 850 dólares a 2,032 dólares entre esos años. Además, hubo importantes logros sociales (Fallas, 1984; Garnier, 1990; Rosenberg, 1980; Rovira, 1982). Al inicio de la década de 1960, aproximadamente la mitad de la población era pobre; veinte años después, el nivel era cercano a uno de cada cuatro. Las condiciones sociales mejoraron: la mortalidad infantil, la desnutrición y el analfabetismo descendieron rápidamente; la expectativa de vida al nacer aumentó así como la cobertura del Régimen de Enfermedad y Maternidad (REM) de la seguridad social, que pasó de 15% a 70% de la población entre 1960 y 1980. (Tabla I.2).

² Sobre la guerra civil de 1948 existe una profusa literatura. Véase entre otros. Acuña, 1993; Cerdas y Contreras, 1988; Lehouq, 1998; 1992; Rojas, 1986; Salazar, 1990; 1981; Shifter, 1986; Soto, 1991; Villegas y Núñez, 1997.

Tabla I.1 Periodización y características del proceso de transición democrática de Costa Rica

Dimensiones de democracia	República autoritaria (Independencia – fin de siglo XIX)	Transición			Democracia Poliarquía y Estado democrático de derecho (1975-.)
		Etapa 1: Liberalización (fin de siglo XIX – 1917)	Etapa 2: Inclusión política (1919 – 1948)	Etapa 3: Bases institucionales (1948-1975)	
Inclusión ciudadana 1/	<ul style="list-style-type: none"> • Extremadamente restringida 	<ul style="list-style-type: none"> • Restringida • Principal canal para acceso a poder. • Control del Poder Ejecutivo sobre proceso electoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Restringida • Principal canal acceso a poder político • Control del Poder Ejecutivo sobre proceso electoral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuasi-universal • Unico canal para acceso a poder político • Tribunal Electoral independiente controla proceso electoral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universal • Unico canal para acceso a poder político • Tribunal Electoral independiente controla proceso electoral.
Elecciones 2/	<ul style="list-style-type: none"> • Uno entre varios canales de acceso al poder 	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusión selectiva de partidos políticos • Fraude electoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusión selectiva de partidos. • Fraude electoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusión sistemática de partidos izquierda. • No fraude electoral 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay exclusiones. • No hay fraude electoral.
Derechos y libertades 3/	<ul style="list-style-type: none"> • Sin protección institucional. • Sin tolerancia • Poder judicial débil y controlado por otros poderes 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin protección institucional. • Tolerancia variable • Poder judicial débil y controlado por otros poderes 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin protección institucional. • Tolerancia variable • Poder judicial débil, con alguna independencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección institucional débil. • Intolerancia selectiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte protección institucional • Amplia tolerancia
Poder Judicial 4/	<ul style="list-style-type: none"> • Sin controles institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin controles institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin controles institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder Judicial independiente • Pocos controles institucionales con cobertura selectiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder Judicial independiente y fuerte • Múltiples controles institucionales con cobertura completa
Accountability sobre acciones públicas 5/	<ul style="list-style-type: none"> • Sin controles institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento legal a educación primaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento parcial de derechos laborales y sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Universalización de seguridad social 	<ul style="list-style-type: none"> • Universalización de seguridad social
Reconocimiento de derechos social 6/	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto social escaso y ocasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto en educación, no en otros rubros sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto en educación, no en otros rubros sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de gasto social 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de gasto social

1/ Extremadamente restringida: menos de 25% de población adulta tiene plenos derechos políticos. Restringida: 50% o menos de la población adulta tiene plenos derechos políticos. Cuasi-universal: toda la población adulta tiene derechos políticos pero existen excepciones constitucionales. Universal: toda la población adulta tiene derechos políticos sin excepción.

2/ Elecciones como uno entre varios canales: las elecciones se alternan con golpes de estado u otros mecanismos para escoger al Jefe de gobierno. Elecciones como canal principal: se utilizan las elecciones como único medio para escoger al Jefe de gobierno pero hay episodios recurrentes en los que el perdedor de los comicios desconoce resultados y realiza levantamientos. Elecciones como único canal: perdedores aceptan resultados electorales

3/ Sin protección institucional: no hay entidades con responsabilidad específica de tutelar derechos constitucionales de la población. Protección institucional débil: existen instituciones responsables de velar por derechos constitucionales de la población pero hay escaso acceso ciudadano a ellos. Fuerte protección institucional: existen instituciones responsables de velar por derechos constitucionales de la población y hay amplio acceso ciudadano a ellos. Sin tolerancia: encarcelamiento y exilio de oponentes como práctica usual. Tolerancia variable: hay períodos en los que se acepta la oposición política pero tolerancia depende del Presidente. Intolerancia selectiva: se persigue y censura solo a ciertos grupos.

4/ Poder judicial débil y controlado por otros poderes: el nombramiento del personal del Poder Judicial es realizado por el Poder Legislativo; no hay normas que garanticen recursos al Judicial, mínima infraestructura administrativa y técnica, Poder legislativo posee facultades para revertir fallos judiciales y el Ejecutivo desacata fallos sin que existan consecuencias políticas y legales. Poder judicial débil con alguna independencia: el nombramiento del personal del Poder Judicial es realizado por el Poder Legislativo; no hay normas que garanticen recursos al Judicial, mínima infraestructura administrativa y técnica pero otros poderes acatan fallos judiciales. Poder judicial independiente: las normas constitucionales y legales garantizan independencia presupuestaria, jurisdiccional y funcional al Poder Judicial. Poder judicial independiente y fuerte: las normas constitucionales y legales garantizan independencia presupuestaria, jurisdiccional y funcional al Poder Judicial; el Poder Judicial ejerce un control constitucional y de legalidad eficaz sobre la acción de los otros poderes de Estado.

5/ Sin controles institucionales: las entidades responsables de ejercer control sobre la legalidad de los actos administrativos de las instituciones y funcionarios públicos son inexistentes o tienen una existencia jurídica con exiguas capacidades operativas y técnicas. Pocos controles con cobertura selectiva: se crean entidades con potestades de ejercer control sobre la legalidad de los actos administrativos y técnicos de las instituciones y funcionarios públicos, estas entidades tienen capacidades técnicas y operativas; sin embargo, amplios ámbitos de la acción pública se desarrollan sin controles. Múltiples y fuertes controles institucionales con cobertura completa: una pluralidad de entes de control ejercen controles especializados sobre la legalidad de los actos de la administración pública sin que existan ámbitos reservados, de facto o de jure.

6/ Gasto social escaso y ocasional: gastos en educación, salud, vivienda y seguridad social representan menos de 10% de los gastos del gobierno central, con marcadas oscilaciones anuales. Alto gasto social: gastos en educación, salud, vivienda y seguridad social representan más del 25% del gasto del gobierno central.

Fuente: elaboración propia con base en (Programa Estado de la Nación, 2001a) y las siguientes obras: (Víctor Acuña, 1993; Victor Acuña, 1995; Victor Acuña & Molina, 1991; M. Aguilar, 1989a, 1989b; O. Aguilar, 1977; Barahona, 1994; Booth, 1995, 1998; Booth & Seligson, 1994; Campos, 2000; J. M. Cerdas & Contreras, 1988; R. Cerdas, 1998, 1999; Chalker, 1995; De la Cruz, 1977; Delgado, 1997; C. González & Céspedes, 1995; C. J. Gutiérrez, 1983; Hilje, 1997; M. A. Jiménez, 1974; Jurado, 2000; Lehouq, 1992, 1995, 1998; Ivan Molina & Lehouq, 1999; Iván Molina & Palmer, 1992, 1994; J. Mora, 1989; I. Muñoz, 1988; M. Muñoz, 1990; Murillo, 1995; Oliva, 1985, 1997; Paige, 1997; Peeler, 1985, 1991; Peralta, 1962; Pérez, 1997; Quesada, 1999; Rojas, 1986, 1990; Román, 1995; Rosenberg, 1980; Rovira, 1982; J. Salazar, 1981, 1990; O. Salazar, 1997; O. Salazar & Salazar, 1992; Samper, 1992, 1993; Seligson & Muller, 1990; Shifter, 1986; Silva, 1993; A. Sojo, 1984; Soto, 1985; Soto Harrison, 1991; Vargas, 1999; Villegas & Núñez, 1997; Yashar, 1997; Zeledón, 1992).

**Tabla I.2 Costa Rica: Algunos indicadores sociales y económicos
1940-2002 a inicios de cada década**

Variables	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2002
Índice Desarrollo Humano	N.D	N.D	0,55	0,65	0,75	0,85	0,82	0,83
Población (en miles)	656	812	1.199	1.758	2.302	3.050	3.925	4.089
Hogares pobres (%)			50	29	26	27	21	21
Esperanza de vida al nacer (años)	46,9	55,6	62,5	65,4	72,6	76,7	77,7	78,5
Mortalidad infantil (por mil nacimientos)	123	90	68	61	19	15	10	11
Desnutrición menores de 6 años (%)	N.D	N.D	14	12	4	4	3	
Cobertura de la seguridad social (%)		8	15	39	70	82	88	87
Analfabetismo en mayores 12 años (%)	27	21	16	13	10	7	5	N.D.
Líneas telefónicas (10,000 hab)	N.D	N.D	74,2	231,8	788,2	1.029	2.538	2.768
PIB per cápita (US\$1990)	702	847	1.080	1.501	2.032	1.829	3.290	3.218
Trabajadores agrícolas (%)	66	63	59	49	35	25	20	16
Déficit fiscal / PIB (%)	N.D	0,03	0,94	1,40	8,97	3,40	3,00	4,30
Deuda interna / PIB (%)	N.D	4,1	4,2	9,6	14,8	20,5	37,8	39,8
Remuneración de los empleados del Gobierno Central / Remuneración Total (%)	N.D	N.D	19,7	22,7	30,6	46,5	32,4	33,5
Gastos totales del gobierno / PIB (%)	N.D	2,1	4,9	6,6	12,2	12,0	15,6	16,9

Fuente: (Programa Estado de la Nación, 2002) con base en: PNUD, CCP-UCR, INEC, MINAE, Ministerio Salud, CCSS, MOPT, ICE, BCCR, Bureau of Economic Analysis

1.3 Evolución económica y social reciente

El período de rápido crecimiento económico y progreso social concluyó con la crisis económica de 1980-1982 y las ramificaciones internas de los conflictos militares que asolaron Centroamérica. Pese a que la intensidad y duración de esta crisis fue menor a la de otros países latinoamericanos, tuvo profundas consecuencias en la sociedad costarricense. En dos años el nivel de pobreza de la población se duplicó: saltó de 26% en 1980 a cerca de 55% en 1982. Luego de aumentar la deuda externa casi ocho veces en solo seis años (1974-1980), en 1981 el país se convirtió en el primero del hemisferio en declarar una moratoria unilateral en el pago de la deuda externa, lo que cerró los canales al financiamiento externo (C. González & Céspedes, 1995). Un elevado déficit fiscal (superior al 8% del PIB) estrujó el gasto público, particularmente el gasto social, que experimentó una fuerte caída. Uno de cada seis estudiantes de secundaria abandonaron el sistema educativo (Programa Estado de la Nación, 2002, 2003a). Pese a este abrupto retroceso económico y social, las mediciones de Seligson y Gómez de esa época mostraron un sólido apoyo ciudadano al sistema político (Seligson & Gómez, 1987).

La respuesta política a la crisis fue la implantación, una vez lograda la estabilización macroeconómica, de un nuevo estilo de desarrollo basado en promoción de exportaciones, la apertura comercial, la atracción de inversión externa y la reducción del intervencionismo estatal en la economía. Hacia 1990, en términos generales el país había logrado alcanzar los niveles económicos y sociales pre-crisis. En ese año, el PIB per cápita era ligeramente inferior al de diez años atrás, el nivel de pobreza apenas un punto superior y se había logrado llevar el déficit fiscal a dimensiones manejables (circa 3% PIB) (Tabla I.2). Una década más tarde, al finalizar el siglo XX, el país mostraba importantes logros: su apertura comercial permitió quintuplicar las exportaciones en diez años y Costa Rica se convirtió en el mayor exportador per cápita de América Latina; el PIB per cápita se duplicó en una década y el nivel de pobreza de la población disminuyó del 27% al 21% entre 1990 y 2000 (Programa Estado de la Nación, 2001b, 2002, 2003a, 2003b).

Sin embargo, el pasado reciente no puede homologarse a la época de rápido progreso social y económico característica del período 1950-1980. Ciertamente, algunos indicadores sociales continuaron mejorando (aumento de la esperanza de vida al nacer y la escolaridad y reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición). Empero, en los últimos veinte años el crecimiento económico ha sido irregular y en promedio inferior al de décadas atrás. En segundo lugar, durante los años noventa, la sociedad costarricense se volvió más inequitativa. En efecto, el coeficiente de Gini aumentó de 0.37 a 0.425 entre 1997 y 2002 (PEN, 2003). En tercer lugar, aunque la pobreza disminuyó en la primera mitad de los noventa, el crecimiento económico ocurrido entre 1995-2003 no se tradujo en reducciones ulteriores. Esta cierta desconexión entre desempeño económico y equidad social se ha convertido en uno de los puntos de mayor controversia en el país (C. Sojo, 2000).

1.4 Evolución política reciente

A pesar de las tensiones sociales y políticas generadas por la crisis económica de 1980-1982 y por los efectos de los conflictos centroamericanos, la democracia que emergió tras la larga transición se caracterizó por su estabilidad. En el período 1972-2003, el Índice de Freedom House calificó la democracia costarricense de manera muy similar a países como Estados Unidos y Suecia (Freedom House, 2004). Una situación parecida se registra en Polity IV y en la base de datos Poliarquía de Vanhanen (Gurr & Jagger, 2000; Vanhanen, 1990). Además de la estabilidad, otro rasgo clave de la evolución democrática reciente son las reformas institucionales ocurridas durante la última década del siglo XX.

Tras la transición, la variedad costarricense de democracia puede definirse como un régimen presidencialista estable con un estado altamente centralizado³ y un sistema de partidos bipartidista. Sin embargo, esta variedad se distingue de sus homólogas en la región por los cada vez más numerosos y fuertes controles políticos, legales y administrativos que pesan sobre el Ejecutivo, desarrollados en las últimas décadas del siglo XX. Además, registra una importante expansión en el reconocimiento de derechos a

³ La carga tributaria municipal en relación con el PIB —el peso de los tributos que recolectan las municipalidades dentro de la economía— no superó el 1% (Alfaro, 2003; Programa Estado de la Nación, 2003a).

la población y un fortalecimiento de los mecanismos de protección y tutela. En la actualidad, múltiples actores políticos e institucionales, incluso la ciudadanía en general, tienen (por lo menos alguna) capacidad efectiva de vetar la formulación o ejecución de políticas públicas (Programa Estado de la Nación, 2001a).

Desde un punto de vista institucional, el Poder Ejecutivo costarricense es constitucionalmente débil (Carey, 1998). A diferencia de otros sistemas políticos latinoamericanos, en Costa Rica las facultades legislativas del Ejecutivo están subordinadas a las leyes aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo carece de poder de veto en materia de aprobación de presupuestos públicos. Por su parte, el Poder legislativo comprende un complejo entramado institucional. Además de la Asamblea Legislativa, incluye dos poderosas instituciones: la Contraloría General de la República, que vigila la ejecución del gasto público y aprueba dos terceras partes de la totalidad del gasto del Estado, y la Defensoría de los Habitantes, creada en 1993 con el propósito de velar por los derechos de los habitantes frente a las acciones u omisiones de la gestión pública. Ambas instituciones ejercen fuertes controles sobre la acción del Ejecutivo, aunque gozan de independencia frente a la Asamblea Legislativa.

No obstante, el cambio reciente más importante en la estructura del Estado costarricense es el desplazamiento de poder en favor del Poder Judicial. En 1989, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución Política (Ley 7128) y aprobó la ley de Jurisdicción Constitucional (7531), que agregaron a la Corte Suprema de Justicia un nuevo órgano: la Sala Constitucional o Sala IV, como órgano único y supremo de la jurisdicción constitucional en el país. La Sala IV puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto público, resuelve sobre los conflictos de competencia entre poderes y evacúa consultas preceptivas o facultativas que le formulan otras instituciones públicas. Además, introdujo un cambio sustancial en el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional y en las relaciones entre poderes (Jurado, 2000; Volio, 2000). Mientras que el período 1938-1989 se plantearon 155 casos de inconstitucionalidad, entre 1990 y 2003 fueron planteadas 110,000 casos. Al mismo tiempo, en la Asamblea Legislativa se ha establecido la costumbre de consultar las iniciativas de legislación con la Sala de previo a su aprobación final y por lo general acata sus resoluciones (aunque en esta etapa no son vinculantes) (J. C. Rodríguez, 2003). Paralelamente, se ha incrementado fuertemente el gasto público en el sistema de administración de justicia, el cual en el año 2002 atendió aproximadamente un millón de nuevos casos (sobre una población de cuatro millones de personas) (Programa Estado de la Nación, 2003a).

Mientras que en los cambios institucionales en la estructura del Estado en los últimos veinte años puede apreciarse una clara tendencia a robustecer las instituciones del Estado de derecho y la protección de los derechos ciudadanos, las tendencias en el sistema político son menos claras (Tabla I.3). Por un lado, las normas e instituciones que regulan el sistema electoral se han mantenido estables. El sistema ha mantenido su capacidad de asegurar la celebración de comicios limpios y libres: en el período 1990-2002 no se registra ninguna denuncia pública, legal o en medios, por fraudes e irregularidades en las elecciones nacionales y municipales, o por amenazas a la integridad y patrimonio de algún candidato a un cargo público⁴. En términos generales, la desproporcionalidad electoral en Costa Rica se mantuvo baja en todo el período (Lijphart, 1999).

⁴ Aunque sí en las convenciones internas de los partidos

Tabla I.3 Control de los poderes Ejecutivo y legislativo, número de partidos efectivos y volatilidad electoral 1974, 2002

Período de 4 años	Control del Ejecutivo	Control del Legislativo	NPE elecciones pre-sidencia a/	NPE elecciones legislativas a/	Volatilidad elecciones pre-sidencia (%) b/	Volatilidad elecciones legislativas (%) c/
1974-	PLN	Sin mayoría	3.3	4.0	13.8	41.7
1978-	CU d/	Sin mayoría	2.2	2.9	3.9	19.6
1982-	PLN e/	PLN	2.2	2.5	13.5	16.0
1986-	PLN	PLN	2.1	2.5	6.7	8.1
1990-	PUSC f/	PUSC	2.1	2.6	5.2	10.3
1994-	PLN	Sin mayoría	2.1	2.7	4.1	13.0
1998-	PUSC	Sin mayoría	2.4	3.4	29.0	..
2002-	PUSC	Sin mayoría	3.2	3.7		

a/ NPE: número de partidos efectivos. Mide el peso real de los partidos de acuerdo con la proporción de votos que obtuvieron. La fórmula empleada es la desarrollada por Laakso y Taagapera.

b/ Volatilidad electoral presidencia: la fórmula empleada es la desarrollada por Pedersen. Mide la proporción de votos que cambian de un partido a otro en dos elecciones sucesivas.

c/ Para el cálculo de la volatilidad electoral en las elecciones legislativas se aplicaron las siguientes reglas para contar como un mismo partidos a: (a) los partidos que cambian de nombre pero mantienen la misma dirigencia, orientación política y obtienen representación parlamentaria con el nuevo nombre; (b) los partidos que se agrupan para formar una coalición y obtienen representación parlamentaria como coalición.

d/ Coalición Unidad

e/ Partido Liberación Nacional

f/ Partidos Unidad Social Cristiana

Sin mayoría = Ningún partido tienen la mayoría parlamentaria de 29 escaños. En todos los casos, el partido en el gobierno es la primera minoría.

Fuente: adaptado de (Programa Estado de la Nación, 2001b) y actualizado con información de (Programa Estado de la Nación, 2002; F. Sánchez, 2002).

Sin embargo, los partidos políticos, el sistema de partidos y la participación electoral han experimentado fuertes cambios. Durante el período 1982-1994 funcionó en Costa Rica un sistema bipartidista estable, con partidos “atrápala todo” y baja volatilidad electoral.⁵ En efecto, el número de partidos efectivos (NPE) en las elecciones legislativas se mantuvo alrededor de 2.5 y la volatilidad en el legislativo osciló entre 8% y 16%. Empero en ese período, el bipartidismo empezó a mostrar serias fracturas en las elecciones legislativas y municipales de 1998 –especialmente en estas últimas. En esa oportunidad, el NPE en el legislativo aumentó a 3.4 –en tránsito a un sistema multipartidista- y en la mayoría de los municipios, los partidos tradicionales enfrentaron fuerte competencia (Alfaro, 2002).

Esta situación se profundizó en los comicios más recientes. Por primera vez en casi ochenta años hubo segunda ronda electoral pues ningún partido logró superar la barrera del 40% de los votos válidos necesaria para el triunfo electoral; en los comicios presidenciales el NEP pasó de 2.4 en 1998 a 3.5 en el 2002; en los legislativos, subió a 3.9 (Programa Estado de la Nación, 2003a). Adicionalmente, la volatilidad electoral se disparó, especialmente la volatilidad entre partidos pertenecientes a distintos bloques

⁵ La primera investigación que aporta datos útiles sobre este carácter atrápalotodo trabaja con información de mediados de la década de 1970 (M. Sánchez, 1985).

ideológicos (F. Sánchez, 2002). En la actualidad, el sistema de partidos está en estado de fluidez. A diferencia de otros países de América Latina, los partidos tradicionales no han desaparecido, pero su estabilidad y futuro (y la de los emergentes) es incierta.

A la par de la erosión del bipartidismo han ocurrido dos hechos importantes: un debilitamiento interno de las organizaciones partidarias y una sensible baja en la participación electoral de las y los ciudadanos. En cuanto al primer aspecto, la estructura de los partidos se democratizó, con la adopción de convenciones abiertas y elecciones directas para la escogencia de candidatos a cargos públicos (Fernández, 1996; Pizsk & Segura, 1983; Programa Estado de la Nación, 2001a). Pero con la democratización se exacerbaron los conflictos internos y se afectó fuertemente la disciplina partidaria, tanto en el “partido en el congreso” como en el partido en los municipios.⁶

En cuanto a la participación electoral, ésta ha disminuido sensiblemente. Por casi 40 años, durante el período 1966-1994, el abstencionismo fue inferior al 20%. En las elecciones presidenciales de 1998 y 2002, aumentó al 30%, nivel solo comparable con la elección de 1953, la primera celebrada después de la guerra civil de 1949 y en la que hubo dos fuerzas políticas proscritas (Programa Estado de la Nación, 2002). En diciembre de 2002 se realizaron las primeras elecciones para alcalde en la historia del país – elecciones no concurrentes- y el abstencionismo ascendió al 70%, un nivel superior al registrado en países con tradicional alto nivel de abstencionismo (Alfaro, 2002).

Finalmente, los estudios de opinión pública muestran un creciente escepticismo ciudadano hacia los partidos políticos, claramente discernible desde mediados de los años noventa. Como en otros países de América Latina, la confianza hacia los partidos es la más baja entre todas las instituciones públicas y organizaciones sociales (Programa Estado de la Nación, 2002; Seligson, 2001) con base en datos de (UNIMER R.I., 1996, 1999, 2000, 2001, 2002)

1.5 Estudios recientes en cultura política

Los primeros estudios empíricos sobre la cultura política en Costa Rica datan de la década de 1970.⁷ En 1973 se efectuó una encuesta nacional sobre participación política (Booth, 1998). La creación de la Oficina de Información de la Casa Presidencial durante la administración Oduber (1974-1978) se inició la práctica sistemática de sondeos de opinión pública para efectos de adoptar decisiones políticas. Hacia finales de la década, empresas de estudios de opinión pública como la CID-GALLUP empezaron sus labores (al día de hoy, esta empresa posee la serie más antigua de tendencias de opinión pública en Costa Rica, con datos desde 1978).

No obstante, no es sino en la década de 1980 que se inician los estudios más académicos sobre la cultura política costarricense. En esta década los principales análisis los realiza Mitchell Seligson, que contó en diversas oportunidades con la colaboración del E. Mueller y del profesor Miguel Gómez Barrantes (Seligson & Caspi, 1983; Seligson

⁶ La expresión “partido en el congreso” es tomada de Coppedge en su estudio sobre Venezuela (Coppedge, 1996).

⁷ Existe una serie de estudios cualitativos sobre cultura política, de carácter antropológico e históricos que no son referenciados en esta breve nota. Véase, entre otros: (R. Cerdas, 1999; Iván Molina & Palmer, 1992, 1994; Murillo, 1995). Recientemente, debe destacarse el trabajo de Alexander Jiménez, que analiza la cultura política desde la filosofía (A. Jiménez, 2002).

& Gómez, 1987; Seligson & Muller, 1990)Hacia finales de los años ochenta inició el proyecto de opinión pública de la Universidad de Costa Rica, dirigido por Jorge Poltronieri y Nora Garita, que mantuvo su actividad a lo largo de la siguiente década (Nora Garita & Poltronieri, 1989; N. Garita & Poltronieri, 1997).

A partir de los años noventa se registró un considerable aumento de los estudios empíricos sobre cultura política costarricense. En Costa Rica, nuevas empresas de opinión pública como UNIMER R.I., Demoscopía y Borge-Asociados han generado series temporales de opinión pública sobre distintos temas, especialmente en materia de evaluación del desempeño de instituciones públicas, partidos políticos y pulso electoral. UNIMER R.I. ha realizado para el periódico La Nación estudios en profundidad sobre valores y actitudes.⁸ En el ámbito de las universidades públicas destaca el aporte del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), de los Institutos de Investigaciones Psicológicas y de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIP-UCR e IIS-UCR, respectivamente). IDESPO cuenta con una serie temporal que arranca en 1995 y, desde 1997, efectúa un pulso mensual de opinión pública sobre un tema de interés.⁹ Por su parte, el IIP ha realizado diversos estudios en el área de psicología social. Más recientemente, IIS-UCR incursionó en los estudios de opinión pública (Fournier, Gutierrez, & Cruz, 2002; Fournier, Raventós, & Sandoval, 2003) y está por publicar un estudio en profundidad sobre los abstencionistas del 2002, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones.

Otros centros de investigación han realizado estudios sobre la cultura política costarricense. En este ámbito destacan los centros PROCESOS, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede Costa Rica (FLACSO) y el Programa Estado de la Nación. Bajo el auspicio de PROCESOS se han publicado dos importantes obras con estudios comparativos sobre cultura política en Centroamérica (Gómez & Madrigal, 2004; F. Rodríguez, Castro, & Espinoza, 1998; F. Rodríguez, Castro, & Madrigal, 2004). Por su parte, FLACSO-Costa Rica ha efectuado investigaciones sobre valores y actitudes tanto en el ámbito nacional (C. Sojo & Rivera, 2002), como parte de investigaciones regionales (Rivera, 2001). Finalmente, el Programa Estado de la Nación ha auspiciado un estudio sobre valores y satisfactores (Gómez, 1998) y la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia, que incluyó el tema de los valores y actitudes de la población (Programa Estado de la Nación, 2001a).

Desde fuera de Costa Rica, los estudios más relevantes sobre cultura política siguen siendo son los efectuados por el proyecto de opinión pública de la Universidad de Vanderbilt, dirigido por M. Seligson (Seligson, 1996, 1999, 2000, 2001; Seligson & Booth, 1993; Seligson & Carrión, 2002; Seligson & Caspi, 1983; Seligson & Gómez, 1987; Seligson & Muller, 1990). Recientemente, Booth estudia la democracia costarricense y sintetiza como parte de su análisis resultados de diversas investigaciones empíricas sobre la cultura costarricense (Booth, 1998).

⁸ Véase: (UNIMER R.I., 1996, 1999, 2000, 2001, 2002). Un caso interesante de analizar es el estudio sobre valores ambientales efectuado en el 2002.

⁹ IDESPO realiza dos tipos de sondeos de opinión pública: (a) un pulso mensual a una muestra telefónica de 300 personas del Gran Area Metropolitana de San José. Por lo general, este pulso se centra en un tema particular y, cada cierto tiempo, el tema se reitera. (b) Un estudio semestral de opinión pública, con base en una muestra de 600 personas del Gran Area Metropolitana, una parte de las cuales es entrevistada vía telefónica y otra mediante trabajo de campo.

A pesar de sus diferencias metodológicas y de resultados, los estudios convergen en mostrar algunos hallazgos: la existencia de un continuado apoyo ciudadano a la democracia, aunque con oscilaciones; un creciente descontento con el funcionamiento de las instituciones públicas, una fuerte desconfianza hacia los partidos políticos; una creciente sensación de inseguridad pública y la percepción de un aumento de la corrupción en el ejercicio de la función pública. Finalmente, varios estudios muestran la persistencia de valores de intolerancia hacia grupos minoritarios entre extendidos segmentos de la población.

Capítulo II. Datos y métodos

2.1 Introducción

En esta publicación se presentan y analizan los datos obtenidos para Costa Rica en la encuesta: “Auditoría de la democracia: Centroamérica, Panamá, México y Colombia.” Este es un estudio colaborativo llevado a cabo en muestras nacionales probabilísticas de ocho países, coordinado por Mitchell Seligson como parte del proyecto Opinión Pública en América Latina del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. USAID financió el estudio. El Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica efectuó el estudio en Costa Rica.

El estudio se basa en procedimientos estándar para los ocho países. Ellos incluyen el diseño muestral, el consentimiento informado de los participantes, el cuestionario, el procesamiento y el análisis de la información. Desde luego que cada país debió hacer adaptaciones a su realidad particular, así como adiciones al cuestionario y a la muestra de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, en lo esencial se mantuvo la comparabilidad entre países y la metodología común.

Los métodos del estudio, en particular, los temas investigados y la obtención de información de la población, siguen una línea de investigación de más de dos décadas del Profesor Seligson (Seligson y Caspi, 1983; Seligson, 2001) sobre democracia en Costa Rica y en América Latina.

En este capítulo se resume el método usado para definir la muestra, obtener la información en el campo, procesar y depurar la información y analizar los datos. Se da énfasis a aspectos particulares de Costa Rica, pues los elementos comunes de los ocho países serán presentados en otro informe. El capítulo concluye con un breve análisis de los resultados obtenidos en lo referente a representatividad de la muestra y características de los entrevistados y una valoración de la precisión de los resultados o error muestral.

2.2 Diseño de la muestra¹⁰

El estudio se llevó a cabo siguiendo un diseño probabilístico de encuestas. En la definición del diseño se buscó compatibilizar varios aspectos, algunos de ellos contrapuestos, como son las metas del estudio, la claridad para facilitar el trabajo de campo y evitar los errores en el terreno, la capacitación y calidad del personal de campo, el marco muestral disponible, el presupuesto, ciertas demandas del análisis, los costos y el nivel de precisión de los resultados, entre otros.

Para los propósitos de esta encuesta, la población de interés la constituyen todas las personas con ciudadanía costarricense por nacimiento o naturalización, de edad de 18 años o más, residentes en el país. Se excluye de la encuesta a los inmigrantes que no se

¹⁰ En el Apéndice C consta la descripción completa del diseño de la muestra..

han nacionalizado (aproximadamente 10% de la población adulta), a los menores de edad y a los residentes en viviendas colectivas. También se excluyen las personas con discapacidades físicas o mentales para responder el cuestionario.

Como marco muestral se utilizó la cartografía por segmentos censales, construida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el Censo de Población y Vivienda de junio del 2000. El segmento censal es una unidad de enumeración del censo, bien delimitada en un mapa, que contiene alrededor de 60 viviendas. Los segmentos seleccionados se visitaron previo al levantamiento de la información para, si era del caso, actualizar los mapas.

De antemano se definió un tamaño de muestra de 1,500 entrevistas efectuadas. Este tamaño permite obtener resultados con un razonable grado de precisión, incluso para subpoblaciones. La selección de la muestra se realizó de manera estratificada, probabilística y en varias etapas. Los estratos fueron el Área Metropolitana de San José, Resto del Valle Central y Fuera del valle Central y, dentro de cada cantón, área urbana o rural según definición censal. El tamaño de la muestra en cada estrato se definió utilizando afijación proporcional al tamaño.

Dentro de cada estrato se seleccionaron cantones como unidades primarias de muestreo (UPM). La selección se efectuó de manera sistemática con probabilidad proporcional al “tamaño” (PPT) del cantón. El indicador de tamaño fue el número de costarricenses de 18 y más años empadronados en el censo del 2000. De antemano se estableció que se deseaba tener 50 entrevistas por cantón, número mínimo necesario para ciertos análisis a nivel de cantón. La selección probabilística escogió 29 cantones (ver mapa en el apéndice). Uno de ellos –el cantón San José- con doble representación (100 entrevistas) dictaminada por el sorteo probabilístico.

Dentro de cada cantón, se seleccionaron segmentos censales con PPT. Los segmentos fueron antes estratificados en urbanos y rurales, con afijación proporcional al tamaño del estrato en el cantón. El número de segmentos seleccionados estuvo determinado por la condición establecida de antemano del número de entrevistas por segmento: alrededor de 6 en el área urbana y 12 en el área rural. Estos números son un compromiso entre el objetivo de concentrar la muestra (para bajar costos y facilitar el trabajo de campo) y el de tener una muestra dispersa que disminuya la homogeneidad dentro de cada conglomerado y, consecuentemente, el efecto de diseño. El tamaño de los compactos se ajustó hacia arriba por no cobertura (no entrevista, rechazos y ausencia, entre otros, de acuerdo con la experiencia de otras encuestas) y no elegibilidad (discapacidad o no tener la ciudadanía costarricense).

Luego de una rápida actualización, los 194 segmentos censales seleccionados, fueron subdivididos en conglomerados compactos para obtener 6 entrevistas en el área urbana y 12 en el área rural. Para el trabajo de campo se seleccionó al azar un compacto por segmento censal.

Se instruyó a los equipos de campo en la manera de visitar ordenadamente las viviendas del segmento compacto seleccionado, hasta obtener una cuota asignada de:

- Hombres de 18-29 años de edad;
- Hombres de 30 y más años de edad;
- Mujeres que no trabajan ni estudian (amas de casa)
- Mujeres que trabajan o estudian (al menos medio tiempo)

Las cuotas se fijaron separadamente en cada segmento por sorteo tipo Monte Carlo, con probabilidades acordes a la población censal en cada grupo, dentro de cada segmento.

Se impuso la restricción de entrevistar solamente una persona por vivienda. Los entrevistadores recibieron instrucciones para seleccionar al azar la persona a entrevistar cuando había varias elegibles en una vivienda.

2.3 Instrumentos para la recolección de la información

El instrumento más importante para la recolección de la información es el *cuestionario* (Apéndice D). Las preguntas en su mayoría fueron definidas para el estudio internacional de los ocho países, con las adaptaciones de rigor al lenguaje y realidad costarricenses. Estas preguntas representan el 71% del cuestionario. Pero también se incluyeron preguntas específicas para Costa Rica. Estas se identifican en el cuestionario con las siglas CR. Algunas de estas preguntas se definieron conjuntamente con los investigadores de los otros países, pero su inclusión quedó opcional para cada país. Otras preguntas son únicas de Costa Rica. El cuestionario iba acompañado de un juego de tarjetas (ver Apéndice D) que se usaron para ayudarle al entrevistado en la selección de sus respuestas. La duración promedio de una entrevista para completar el cuestionario fue 36 minutos; intervalo intercuartílico de 20 a 40 minutos. El cuestionario se probó y refinó en una encuesta piloto en la que se efectuaron 20 entrevistas completas.

Además del cuestionario, en el trabajo de campo se usó el mapa del segmento, la hoja de ruta, y la hoja del consentimiento informado.

.2.3.1 El mapa del segmento

Los equipos de campo recibieron para cada conglomerado un croquis con indicación de las viviendas a visitar y el recorrido a seguir. El mapa fue originalmente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y forma parte de la cartografía del censo del 2000. El mapa contiene también información útil para ubicar el conglomerado, como el norte geográfico y puntos de referencia como iglesias o carreteras. Para el recorrido se estableció la regla de visitar solamente viviendas alternas, es decir, no visitar viviendas contiguas, sino saltando una. El mapa servía además para que el supervisor efectúe luego sus visitas de supervisión a los hogares.

.2.3.2 La hoja de ruta

Indica para cada conglomerado las cuotas de entrevistas a completar. Sirve además para anotar las viviendas visitadas y las personas elegibles para entrevista, así como para chequear el grado de cumplimiento de la cuota. Esta hoja es también esencial para efectuar revisitas ya sea con propósitos de supervisión o de lograr una entrevista pendiente, pues contiene observaciones como conveniencia de horarios.

.2.3.3 Consentimiento informado

El estudio comparativo de países fue revisado y aprobado por el Comité de Protección de Sujetos Humanos (IRB) de la Universidad de Pittsburgh. Como en toda investigación en humanos, fue de rigor contar con un consentimiento informado antes de proceder a la entrevista. Para ello se le leyó una hoja de consentimiento que quedó en poder del entrevistado. El consentimiento fue verbal, pues se trata de una investigación

anónima¹¹. Una vez completado el procesamiento de la información se destruyeron los documentos que podían permitir identificar a los entrevistados.

2.4 El trabajo de campo

El trabajo para recolectar la información en el campo se efectuó del 13 de febrero al 31 de marzo, bajo la coordinación de una persona con amplia experiencia con este tipo de encuestas. Participaron tres equipos de campo. Cada equipo consistía de tres entrevistadores (casi todos mujeres), un supervisor y un vehículo. También se contó con entrevistadores especializados en obtener entrevistas difíciles o pendientes.

Al personal de campo, que en su mayoría ya tenía experiencia en este tipo de encuestas, se le capacitó durante una semana. La capacitación incluyó entrevistas de prueba y simulaciones de entrevistas.

El proceso de recolección de la información incluyó, además de las entrevistas, actividades de revisión y supervisión de campo, así como de crítica en la oficina, con el propósito de corregir errores en el terreno. La supervisión incluyó re-visitas a todos los hogares entrevistados y la comprobación de que la entrevista se había efectuado.

2.5 Procesamiento de la información

Luego de una crítica inicial de los cuestionarios recibidos en la oficina, éstos fueron codificados. Es decir, se anotaron los códigos de todas las respuestas en el espacio previsto para ello al margen derecho del cuestionario. La codificación se efectuó con color diferente (rojo) al usado por los entrevistadores (azul). Esta distinción fue útil posteriormente para clarificar dudas.

Los cuestionarios codificados se digitaron y verificaron con el paquete “Census and Survey Processing System (CSPro),” software de dominio público, diseñado para el procesamiento de censos y encuestas por la Oficina del Censo de los EEUU. En los ocho países del estudio se usó este paquete para la entrada de datos.

La información fue digitada en el computador dos veces, ambas usando CSPro. La segunda entrada de datos se conoce como verificación. Una persona diferente a la que

¹¹ El texto leído y entregado al entrevistado fue el siguiente:

Estimado señor o señora:

Usted ha sido elegido/a al azar para participar en un estudio de opinión pública, el cual es financiado por la AID de los Estados Unidos. Vengo por encargo de la Universidad de Costa Rica para solicitarle una entrevista que durará de 30 a 40 minutos.

El objetivo principal del estudio es conocer la opinión de las personas acerca de diferentes aspectos de la situación de Costa Rica.

Su participación en el estudio es voluntaria. Usted puede dejar preguntas sin responder o terminar la entrevista en cualquier momento. Las respuestas que usted proporcione serán completamente confidenciales y anónimas. Usted no recibirá pago alguno por su participación, pero ésta tampoco le ocasionará gastos.

Si tiene preguntas respecto al estudio, puede comunicarse al Centro Centroamericano de Población, de la Universidad de Costa Rica, al 207-5693 con el Dr. Luis Rosero B. o con Éricka Méndez Ch.

¿Desea Participar?

digitó los cuestionarios se encargó de efectuar la verificación. CSPro da una señal de alerta al verificador cada vez que un dato re-digitado no concuerda con el digitado inicialmente. Ante una situación así se seguían ciertas reglas para corregir, si era del caso, la información en la base de datos.

El uso de CSPro y la verificación de 100% de la información permitió contar de manera inmediata con bases de datos “limpias,” listas para el análisis. Esta información no tenía valores fuera de rango ni errores en los pases o saltos de preguntas, ni tampoco errores de digitación.

La base de datos se exportó al “Statistical Package for Social Science” (SPSS), con el que se obtuvieron los tabulados, gráficas y demás análisis. Tan solo dos meses después de concluido el trabajo de campo se había completado el análisis y se contaba con un borrador del informe de los resultados de la encuesta.

2.6 Definición de variables para el análisis

Como paso previo al examen de resultados se definió un juego de variables generales que caracterizan a la población entrevistada. Este juego de variables, que es usado en todos los capítulos del análisis, y en las regresiones, comprende:

- *Región Valle Central* o resto, variable indicatriz (“dummy”) 0 y 1, en la que “resto del país” es el grupo de referencia.
- *Tipo o tamaño de localidad: Gran Area Metropolitana de San José (GAM)* que incluye la capital y ciudades aledañas (de Paraíso a Atenas, incluyendo Cartago, Heredia y Alajuela). *Resto Urbano* del país (ciudades pequeñas e intermedias). *Rural*. Para los análisis de regresión se usaron dos variables indicatrices (“dummies”), de manera que el grupo de referencia es la GAM.
- *Cantón*: los 29 cantones en la muestra. En las regresiones se usaron 28 indicatrices, una por cantón, excepto San José que fue el grupo de referencia (San José tenía 100 entrevistas mientras que todos los demás, 50).
- *Sexo*. En las regresiones la variable indicatriz tomó el valor de 1 para los hombres.
- *Amas de casa*. Esta es una variable basada en la pregunta Q10 para distinguir las mujeres que trabajan (o estudian) de las que se dedican a las tareas domésticas. En las regresiones, los resultados deben considerarse en conjunto con la variable sexo. El grupo de referencia es el de mujeres que trabajan y a él se comparan los hombres y las amas de casa, con sendas variables indicatrices.
- *En unión* (o casados). Variable indicatriz de que el entrevistado se encuentra en unión marital o consensual. Basada en la pregunta Q11.
- *Educación*. En análisis de regresión se usó la variable de intervalo: número de años aprobados, con rango de 0 a 16, con el último valor para los individuos con 4 años aprobados o más de estudios universitarios. En Costa Rica la educación primaria comprende 6 años y la secundaria se completa en cinco años. Sin embargo, algunos colegios, especialmente de carácter técnico, requieren 6 años. Todos los individuos con secundaria completa se codificaron como 11 años. Para presentación de algunos resultados se usaron las categorías: *Primaria o menos* (hasta 6 años aprobados de educación). *Secundaria* (de 7 a 11 años, es decir con al menos un año de secundaria). *Post secundaria* (12 y más años, es decir estudios universitarios o carreras cortas)

- *Edad* en años cumplidos. En algunas regresiones se introdujo la variable “edad al cuadrado” para captar relaciones curvilíneas con la edad.
- *Ingreso* de la familia en miles de colones mensuales. Son los valores centrales de las clases registradas en la pregunta Q10 del cuestionario (Apéndice D). Al grupo abierto final de 400 mil o más se le asignó el valor 500. Debido a que esta variable tenía un número considerable (5%) de valores faltantes, se imputaron ingresos a estos faltantes con base en un análisis de regresión múltiple¹². Previo a la imputación de valores, el ingreso promedio en miles fue 166.6, luego de la imputación pasó a ser de 167.3.
- *Índice de riqueza*. Indica el número de “comodidades” existentes en el hogar. Se calculó por simple suma de las preguntas R1 a R15. Rango de 0 a 14, promedio 7.7. Para presentar algunos resultados el índice se categorizó en tres grupos: bajo (índice menor que 6), medio (de 6 a 8) y alto (9 o más).
- *Religiosidad* con base en la pregunta Q4 se formaron tres categorías: *Alta*, si asiste a la iglesia todas las semanas; *Media*, si asiste de vez en cuando; y, *Baja*, si asiste rara vez, nunca asiste o no profesa religión. En las regresiones se incluyeron dos variables indicatrices, quedando como grupo de referencia el de alta religiosidad.

También se definieron índices para medir diversos aspectos de la cultura democrática. Las definiciones se detallan en los capítulos correspondientes de este informe. Debe advertirse que a veces es necesario usar alguno de estos índices antes de que haya sido definido en el informe. Por ejemplo, para explicar las actitudes de apoyo a la democracia en el Capítulo III se usa un indicador de cohesión social que se define en el Capítulo IX.

2.7 Resultados de la muestra y descripción de los entrevistados

El diseño probabilístico de la muestra y la disponibilidad de un buen marco muestral hace esperar que el grupo entrevistado sea representativo de la población de costarricenses de 18 y más años de edad. Sin embargo, por efecto de errores aleatorios o por distorsiones que inevitablemente se producen a la hora de ejecutar el diseño, la muestra finalmente obtenida podría desviarse en sus características de la población que representa. Incluso podría presentar sesgos que deberían corregirse. La tabla II.1 permite responder la pregunta ¿hasta qué punto la muestra en estudio resultó representativa de la población? Para ello se comparan algunas. Se observa una buena coherencia entre esta encuesta y el censo. Características como sexo, edad, estado conyugal o actividad económica son prácticamente idénticas. Son excepción los porcentajes con teléfono, computadora y carro. Para estos tres bienes la encuesta muestra valores sustancialmente más altos que el censo (10 puntos porcentuales o más) que no pueden deberse a fluctuaciones aleatorias. Es probable, sin embargo, que la diferencia sea real, es decir, que en los 3.5 años transcurridos entre el censo y la encuesta se haya dado un aumento considerable en los propietarios de estos bienes.

¹² La ecuación para imputar los valores faltantes del ingreso, estimada por regresión múltiple de Poisson, fue: $\text{Ingreso} = \text{EXP}(3.458306 + 0.1370191 * \text{Índice de riqueza} + 0.055558 * \text{Educación} + 0.1053873 * \text{hombre} - 0.0840943 * \text{ama de casa} - 0.1128101 * \text{rural})$; seudo R-cuadrado de 0.48 y una correlación entre valores observados y predichos de 0.71.

.2.7.1 Características de la muestra con las de la población correspondiente en el censo del 2000

La muestra incluyó ligeramente más mujeres (51%) que hombres. La edad promedio de los entrevistados varones es 41 años y, 40 años de las mujeres. El 63% están en unión conyugal (legal o consensual). Poco menos de la mitad tiene únicamente estudios primarios o menos, grupo que incluye a solo 2% sin estudios y 30% con primaria completa (no se muestra en la tabla). Cerca de un 20% de los entrevistados tiene estudios universitarios. Poco más de la mitad son económicamente activos. Entre las mujeres este porcentaje es 31%, el cual sumado a un 8% de estudiantes, deja 61% de “amas de casa.” El ingreso familiar mensual medio es de 167.000 colones o alrededor de 400 dólares de EEUU. Las mujeres viven en familias con un ingreso promedio menor que los hombres. Los grupos de riqueza identifican a alrededor de 20% en la categoría de “alto.” La religiosidad identifica a un tercio de la muestra como de religiosidad media y a una cuarta parte con baja religiosidad, pero estos porcentajes son sustancialmente mayores para los hombres, quienes presentan menor religiosidad que las mujeres.

Tabla II.1 Características de la muestra y el censo del 2000

Características (N)	Censo 2000 (2 169 804)	Encuesta (1 500)
Sexo		
% Hombres	49	49
Edad promedio (años)	39	40
% <30 años de edad	33	32
Estado conyugal		
% Soltero	28	26
% en unión	61	63
Educación		
Promedio años aprobados	8	8
% secundaria o más	45	53
Condición Actividad		
% económicamente activos	52	53
Artefactos seleccionados		
% con teléfono	59	69
% con computadora	16	27
% con carro	29	39
Región		
% Valle Central	67	67
Tipo de localidad		
% Gran San José	42	45
% Resto urbano	19	18
% Rural	39	37

Dado que la muestra representa bien a la población no es necesario introducir ningún ajuste vía factores de ponderación; práctica que es común (y poco deseable) en otras encuestas. La muestra de este estudio es, por tanto, totalmente auto ponderada: todas las entrevistas tienen el mismo valor o ponderación. La tabla II.2 presenta, por otra parte, las características generales de los entrevistados por sexo. Con respecto a las características geográficas de los entrevistados (Tabla II.1), dos tercios residen en el

Valle Central. Este grupo incluye un 45% localizado en la GAM. Los residentes en áreas rurales representan 37%. El restante 18% corresponde a ciudades pequeñas e intermedias.

Tabla II.2 Características de los entrevistados por sexo

Característica (N)	Total (1500)	Hombres (729)	Mujeres (771)
Edad promedio	40	41	40
% En unión	63	63	62
Educación			
% Primaria	47	48	46
% Secundaria	35	34	36
% post-Secundaria	18	19	18
% económicamente activos	53	77	31
Ingreso familiar medio			
Miles de colones	167	177	158
Nivel de riqueza(%)			
Alto (9+)	21	24	19
Medio (6-8)	39	38	40
Bajo (<5)	40	38	41
Religiosidad (%)			
Alta	42	33	50
Media	34	35	32
Baja	25	32	17

2.8 Análisis estadísticos

Se utilizan métodos de análisis estadístico relativamente simples. Para establecer la asociación entre dos variables numéricas se usa el coeficiente de correlación de Pearson. Este tiene valores de 0 a 1. Cuando hay perfecta correspondencia entre dos valores el coeficiente es igual a la unidad.

Para establecer si hay una relación estadísticamente significativa entre dos variables categóricas, se utiliza el test de chi cuadrado.

Para integrar la información de varias preguntas sobre un mismo tema se construyen escalas por simple suma. Siempre se procede a normalizar el índice resultante de modo que tome valores de 0 a 100. Como indicador de la consistencia o confiabilidad interna de las escalas así construidas se utiliza el coeficiente Alfa de Crombach. Coeficientes de 0.70 o más se consideran confiables y consistentes. También se utiliza el análisis factorial para determinar el número de dimensiones o factores implícitos en una serie de preguntas sobre el mismo tema.

En repetidas ocasiones se estiman modelos lineales de regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios. Usualmente la variable dependiente en estos modelos es algún índice construido con varias preguntas. Los coeficientes de regresión de estos modelos (y su significancia) permiten valorar de manera concisa los factores que “explican” estos índices. Aunque a veces nos referimos a estos co-factores como “determinantes,” en realidad, con la información disponible no es posible establecer

relaciones de causalidad. Únicamente se tienen “asociaciones.” En los modelos de regresión también se presentan los coeficientes de regresión estandarizados “Beta.” Estos son útiles para valorar la importancia relativa de los distintos factores explicativos en el modelo, pues miden los efectos en unidades estándar. Como indicador de la bondad del ajuste del modelo en su conjunto se usa el coeficiente de determinación o “R cuadrado.” Este coeficiente informa de la proporción de variancia explicada por el modelo en su conjunto, en comparación con la explicación que se obtendría con un modelo “nulo” (variable dependiente estimada simplemente por su promedio).

2.9 Precisión de los resultados

Toda encuesta por muestreo está afectada por dos tipos de errores: los errores de no muestreo y los errores de muestreo.

Los errores de no muestreo son aquellos que se cometen durante la recolección y procesamiento de la información, estos se pueden controlar construyendo un adecuado instrumento de medición, entrenando a los encuestadores para una correcta aplicación del instrumento, supervisando el trabajo de campo, creando un programa de captura de datos eficiente, revisión de cuestionario y adecuada codificación, así como una limpieza del archivo, entre otros. Estos errores se pueden controlar pero no se pueden cuantificar. Sin embargo la comparación de los resultados de la muestra con los de la población da una idea de si esos errores han generado sesgos que restan representatividad a la muestra

Los errores de muestreo son producto del azar y resultan del hecho de entrevistar una muestra y no el total de la población.

Cuando se selecciona una muestra esta es una de las tantas muestras posibles a seleccionar de la población. La variabilidad que existe entre todas éstas posibles muestras es el error de muestreo, el cual podría medirse si uno dispusiese de todas esas muestras, situación obviamente irreal. En la práctica, lo que se hace es estimar este error sobre la variancia obtenida a partir de la misma muestra.

Para estimar el error de muestreo de un estadístico (promedios, porcentajes, diferencias y totales), se calcula el error estándar que es la raíz cuadrada de la variancia poblacional del estadístico.

Esto permite medir el grado de precisión con que ese estadístico se aproxima al resultado obtenido al haber entrevistado todos los elementos de la población bajo las mismas condiciones. Para el cálculo de este error es muy importante considerar el diseño con el que se seleccionó la muestra.

El efecto del diseño, DEF, indica la eficiencia del diseño empleado en relación a un diseño de muestra irrestricto aleatorio (MIA). Un valor de 1 indica que la variancia obtenida por ambos diseños (complejo y MIA) es igual, es decir el muestreo complejo es tan eficiente como uno MIA con el mismo tamaño de muestra. Si el valor es superior a 1, el muestreo complejo produjo una variancia mayor a la obtenida con un MIA, y si es menor a 1, indica que la variancia obtenida con el muestreo complejo es menor a la obtenida con el MIA.

En las tablas II.3 y II.4 se presentan los errores de muestreo (errores estándar, EE) y los efectos de diseño (DEF) para índices (tabla II.3) y preguntas (tabla II.4) seleccionadas. Las tablas muestran también el valor del estadístico en cuestión (promedio o proporción). Para la tabla II.4 se seleccionaron aquellas preguntas que en la

composición de cada uno de los índices presentaban la mayor carga factorial. Los EE se estimaron con el paquete de cómputo Stata 8.

Tabla II.3 Errores de muestreo para índices seleccionados

Índices y variables	Total				Zona urbana				Zona rural			
	N	X	EE	DEF	N	X	EE	DEF	N	X	EE	DEF
Índice riqueza	1500	7.7	0.23	10.8	941	8.6	0.15	3.58	559	6.3	0.26	6.53
Apoyo a la Democracia	1493	68	0.94	3.50	940	67	0.86	1.83	553	69	1.73	4.41
Tolerancia política	1469	21	0.30	1.40	929	21	0.40	1.40	540	20	0.30	0.53
Justif. golpe de estado	1408	53	1.22	1.40	907	53	1.55	1.50	501	53	2.20	1.54
Orientación a democracia	1424	63	0.81	2.54	904	64	0.52	0.70	520	62	1.76	4.50
Tolerancia a corrupción	1493	11	0.09	2.82	940	11	0.11	2.94	553	11	0.10	1.23
Incidencia de corrupción	1500	0.21	0.01	0.92	941	0.22	0.02	0.88	559	0.20	0.02	1.41
Satisf. Inst. estado de derecho	1377	62	0.71	1.64	890	62	0.65	0.90	487	64	1.23	1.71
Medidas de protección	1485	2	0.06	4.43	929	2	0.06	2.50	556	2	0.08	3.80
Particip. Religiosa-familiar	1500	42	1.41	2.51	941	41	1.20	1.20	559	45	2.20	2.06
Particip. Político-profesional	1500	10	0.50	1.31	941	10	0.64	1.47	559	10	0.70	1.10
Acción comunitaria	1500	20	1.24	2.47	941	19	1.66	2.80	559	21	1.30	1.00
Cohesión social	1409	74	0.83	1.35	874	71	1.12	1.40	535	81	1.03	1.10
Confianza-desconfianza	1500	1.2	2.61	3.61	941	-2.6	3.12	3.29	559	7.5	4.23	3.48
Modelos imitables	1500	66	1.71	4.30	941	61	2.02	3.60	559	74	2.51	4.25
Integ. Horizontal migrantes	1495	56	2.02	5.90	937	54	2.00	3.64	558	59	3.80	7.72
Integ. vertical migrantes	1473	14	1.72	5.40	922	19	2.12	4.00	551	5	1.40	3.74
Actitud hacia inmigrantes	1498	-3.7	2.62	2.20	940	-3.6	2.45	1.72	558	-4.0	4.17	2.02

X: Estadístico estimado (media, proporción,); N: Observaciones; EE: Error estándar; DEF: Efecto de diseño

Las estimaciones son razonablemente precisas ya que presentan errores estándar pequeños. Por ejemplo para el índice de apoyo a la democracia, probablemente el indicador más importante de este estudio, el error estándar es 0.94. Esto significa que el promedio muestral del índice de 68, tiene un intervalo de confianza al 95% de 1.96 veces el EE, es decir de entre 66.2 y 69.8.

Los efectos de diseño son de cierta consideración debido a que se adoptó como UPM a una unidad bastante grande, el cantón. La conveniencia de tener esta muestra para estudios cantonales tuvo, entonces, que pagar el costo de cierta pérdida de eficiencia. Efectos de diseño altos (digamos, mayores que 2) indican que se trata de variables con un fuerte determinismo local, es decir, que varían relativamente poco dentro de la comunidad o, en este caso, el cantón, en comparación con la variación entre comunidades.

La presencia de efectos de diseño sustancialmente mayores que la unidad, obligaría a utilizar estimadores robustos (que tomen en cuenta el efecto de conglomeración) de las pruebas de significancia. Lamentablemente estos estimadores robustos no están disponibles en SPSS, paquete que asume MIA. Las pruebas de significancia estadística deben interpretarse, entonces, de manera conservadora.

Tabla II.4 Errores de muestreo para preguntas seleccionadas

Variable	Total				Zona urbana				Zona rural			
	N	X	EE	DEF	N	X	EE	DEF	N	X	EE	DEF
Q2. Edad años	1500	40.4	0.61	2.15	941	41.6	0.67	1.48	559	38.4	0.96	2.27
ED Educación años	1500	8.3	0.24	5.67	941	9.3	0.27	3.97	559	6.6	0.16	1.49
B4. Orgullo costarricense	1494	4	0.06	1.91	941	4	0.70	1.56	553	4	0.10	2.17
D3. Tolera a quienes hablan mal del gobierno	1471	5	0.10	1.30	931	5	0.12	1.42	540	5	0.11	0.68
CRDE04. Acuerdo cierre Asamblea Legislativa	1484	4	0.08	2.40	935	4	0.07	1.05	549	4	0.13	2.37
CRDE11. Democracia para el desarrollo	1496	0.49	0.02	1.80	940	0.50	0.02	1.90	556	0.47	0.02	1.03
CRDE09. Acuerdo democra. sin partidos	1471	4	0.05	0.92	931	4	0.06	0.73	540	4	0.11	1.44
JC12. Golpe de estado por inflación	1500	0.49	0.02	2.32	941	0.48	0.02	2.15	559	0.52	0.03	2.02
CRC3A: Pago a ministro por agilizar carretera	1500	0.22	0.02	3.33	941	0.22	0.02	3.44	559	0.22	0.02	1.84
EXC6: Solic. Mordida de empleado publico	1500	0.03	0.005	1.43	941	0.04	0.01	1.61	559	0.02	0.01	1.62
B31: Confianza en la Corte SJ.	1432	4	0.05	1.30	919	4	0.05	0.94	513	4	0.06	0.72
CRSE1: Medidas de protecc. de la casa.	1499	0.76	0.02	2.54	941	0.76	0.02	2.52	558	0.76	0.02	1.56
CP7: Reuniones de asocc. de padres.	892	0.59	0.02	1.45	537	0.58	0.03	1.73	355	0.60	0.02	0.87
CP9: Reuniones de asocc. De empleados.	1500	0.10	0.008	1.20	941	0.11	0.01	1.10	559	0.10	0.01	0.97
CP5: Contribuyó solución de prob. Comunal.	1500	0.34	0.02	2.50	941	0.33	0.03	2.88	559	0.35	0.02	0.83
CRIT4: Cuido de la casa por vecinos.	1500	0.84	0.02	1.83	941	0.81	0.02	1.73	559	0.87	0.01	1.04
IT3: Otros se aprovechan	1409	1	0.06	2.42	884	1	0.08	2.60	525	1	0.09	1.90
CRMI06: Amistad con nicaragüense	1497	0.73	0.02	3.10	939	0.72	0.02	2.30	558	0.75	0.04	4.32

X: Estadístico estimado (media, proporción), N: Observaciones; EE: Error estándar; DEF: Efecto de diseño

Capítulo III. Apoyo a la democracia

3.1 Introducción

El apoyo ciudadano es central para la estabilidad democrática. La experiencia histórica enseña que las democracias son derribadas por fuerzas políticas que cuentan con el apoyo (o por lo menos la pasividad) de una parte importante, en ocasiones mayoritaria, de la ciudadanía. Las democracias se tornan vulnerables cuando, entre otros factores, las fuerzas políticas no democráticas encuentran en las actitudes ciudadanas un terreno fértil para crecer y actuar (Linz, 1978).¹³ Por ello, el tema de las actitudes ciudadanas de apoyo al sistema ha sido uno de los temas más estudiados en las últimas décadas por la ciencia política¹⁴ y, además, ha sido constantemente abordado por estudios comparativos de opinión pública.¹⁵ Desde el punto de vista académico, en los últimos años destacan las metodologías desarrolladas por Pippa Norris (Klingemman, 1999; Norris, 1999)¹⁶, Seligson (Seligson, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, forthcoming; Seligson & Azpuru,

¹³ Párrafo tomado, casi ad literam, de: (Vargas Cullell, Benavides, Gómez, & Kikut, 2003b).

¹⁴ Dentro de las ciencias políticas contemporáneas, estos estudios se encuadran en los de cultura cívica, cuyo trabajo seminal es uno de Almond y Verba, luego retomado, desde distintas perspectivas teóricas, por diversos autores y que ha dado paso a intensas polémicas conceptuales y metodológicas (Gabriel Almond, 1980; G. Almond & Verba, 1965; H. Eckstein, 1988; Harry Eckstein, 1990; Pateman, 1980; S. Verba, 1980; Wiarda, 1989).

¹⁵ Destaca aquí el World Value Survey y los distintos barómetros (Eurobarómetro, New Democracies Barometer, Africabarómetro, Asiabarómetro y Latinobarómetro). La World Values Survey se ha efectuado en 65 países, aunque no para todos se cuenta con una serie de opinión pública. Se han realizado tres rondas de encuestas: 1990-1991, 1995-1996, 1999-2001 (www.wvs/isr.umich.edu). El Eurobarómetro, auspiciado por la Comisión Europea se aplica desde 1973 (www.europa.eu.int/public/opinion/indez/en.htm). En los países del antiguo bloque soviético se han realizado distintas rondas por el New Democracies Barometer. Del Afrobarómetro existen tres rondas de estudios. La primera se realizó entre 1999-2000 (12 países) y la segunda en el 2003 (16 países) (www.afrobarometer.com). El Asiabarómetro, el más reciente de todos, tiene dos rondas: una primera en 2000, donde se estudió 9 países, y una segunda en el 2003 (10 países) (www.asiabarometer.com). El Latinobarómetro inició en 1995. Su cobertura inicial fue 10 países de América Latina y, a partir de 1997, se extendió a 17 países (18 países en 2002). En la actualidad ha concluido siete rondas (última fue la de 2003) (www.latinobarometro.com). Estas encuestas preguntan, por lo general, la preferencia por la democracia por sobre otros sistemas para medir el tema del apoyo a ella. Por su parte, el Democratic Indicators Monitoring Survey, auspiciado por USAID y localizado en la Universidad de Pittsburgh, ha realizado estudios en 11 países de América Latina desde mediados de la década de 1990 (www.innerstory.com/newsdsd).

¹⁶ Norris plantea que el apoyo a la democracia debe medirse en cinco niveles, que van de lo más general a lo más particular: apoyo a la comunidad política, a los principios del régimen político, al desempeño del régimen, a las instituciones de régimen y a los actores políticos.

2001; Seligson & Booth, 1993; Seligson & Carrión, 2002; Seligson & Caspi, 1983; Seligson & Córdova, 2001; Seligson & Gómez, 1987; Seligson & Muller, 1990), Inglehart (Inglehart, 1988, 1990, 1997, 1999)¹⁷ y Putnam (Putnam, 1993, 1995, 2000)¹⁸ para a partir de encuestas de opinión pública (aunque no limitadas a ellas) medir la intensidad de dicho apoyo.

En este capítulo se analiza el apoyo ciudadano a la democracia costarricense. El estudio sobre este tema se basa principalmente en la metodología elaborada por Seligson para investigar la legitimidad del sistema y la tolerancia política. Adicionalmente, se comparan los resultados obtenidos con una medición distinta de apoyo a la democracia, con el fin de examinar su robustez. En todos los asuntos abordados se procura analizar la información con una perspectiva comparativa, tanto en relación con otros países latinoamericanos como con estudios previos hechos en Costa Rica.

El capítulo se organiza en seis partes, incluyendo esta introducción. La segunda parte analiza los temas del sentido de pertenencia a una comunidad política nacional y la confianza en las instituciones públicas. La tercera parte, más analítica, examina los resultados obtenidos en este estudio en el Índice de apoyo al sistema (democrático), su comparación con otras investigaciones y un análisis de los factores que podrían predecir el nivel de apoyo al sistema de las personas. La cuarta parte, que posee una estructura muy similar a la anterior, analiza el tema de la tolerancia política. Ambas mediciones – apoyo y tolerancia- se integran en la quinta parte, para examinar el apoyo a la democracia estable. En la sexta parte, se presenta los resultados obtenidos en este tema del apoyo a la democracia con base en una metodología alternativa desarrollada por Gómez, Kikut y Vargas Cullell (Benavides, Vargas Cullell, Gómez, & Kikut, 2003; Kikut, Vargas Cullell, & Gómez, 2003; Vargas Cullell, Benavides, Gómez, & Kikut, 2003a; Vargas Cullell et al., 2003b). La sección final se dedica a un análisis en profundidad sobre un resultado sorpresivo: el aparentemente extendido apoyo en Costa Rica a un golpe de estado como medida ante situaciones difíciles que el país llegue eventualmente a enfrentar.

3.2 Comunidad política y confianza en instituciones

En Costa Rica existe un orgullo casi unánime de ser costarricense. La respuesta a la pregunta B43 “Hasta qué punto está usted orgulloso de ser costarricense” obtuvo, en promedio, 97 de 100 puntos posibles (Gráfica III.1). No se encontraron variaciones – importantes de anotar– en el orgullo nacional debido a las características sociales, económicas y demográficas de las personas ni a la región en la cual habitan. Se trata, pues, de una actitud casi universal entre la población. Aunque la existencia de un alto nivel de orgullo (generalmente superior a 85) es un resultado que se obtiene en otros países de América Latina, el caso costarricense destaca por su intensidad.

¹⁷ En diversos trabajos, Inglehart procura vincular la preferencia ciudadana por la democracia con factores como la confianza interpersonal. También, está interesado en la asociación entre lo que denomina los valores postmaterialistas y el deterioro de la autoridad.

¹⁸ Putnam estudia el apoyo ciudadano a la democracia desde otra óptica: plantea una relación entre cultura cívica, cultura democrática y desempeño democrático. Plantea que el capital social es una variable explicativa para dicho desempeño.

Gráfica III.1 Confianza promedio en valores, instituciones, organizaciones y asuntos, Costa Rica 2004, escala 0-100



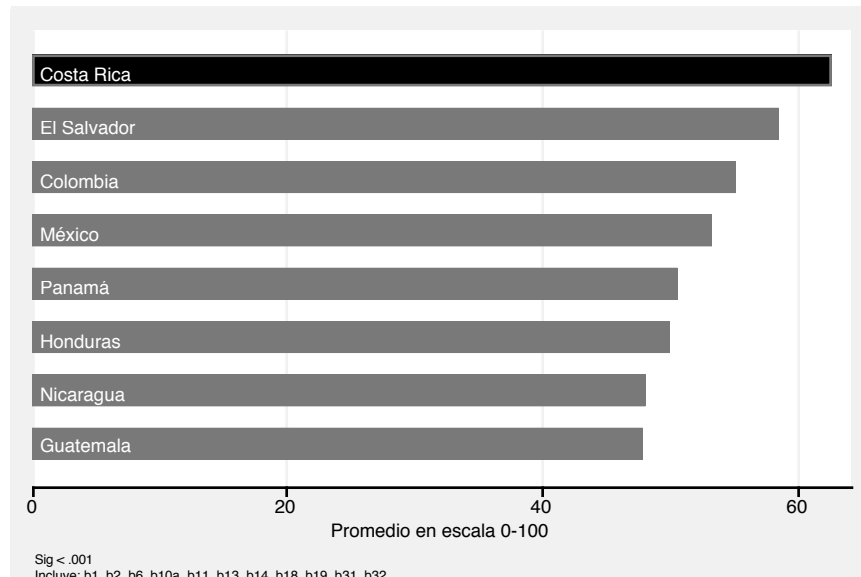
El orgullo nacional se complementa, en el caso costarricense, con altos niveles de confianza en las instituciones públicas (superiores a 50 puntos en una escala de 0 a 100). Cuando se interroga sobre el grado de confianza en instituciones y organizaciones, solo los partidos políticos obtuvieron resultados francamente negativos (35 puntos). Esta baja calificación de los partidos es consistente con lo que diversos estudios de opinión han encontrado, tanto en Costa Rica como en otros países de América Latina (Achard & González, 2004).

Existe un amplio núcleo de instituciones que inspiran fuerte confianza entre los costarricenses. La confianza con el sistema y las instituciones políticas en general reciben

70 puntos o más; instituciones claves del estado de bienestar social costarricense como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) están por encima de esta marca. Dos entidades que ejercen una vigilancia sobre los asuntos públicos, una pública (Defensoría de los Habitantes) y otras privadas (medios de comunicación) reciben altas calificaciones. En un nivel menor de confianza pública, pero siempre en un rango positivo, se tiene a las entidades fundamentales del Estado de derecho en Costa Rica: la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia. Las instituciones peor calificadas reciben un puntaje intermedio: las municipalidades, la policía y la Asamblea Legislativa (Gráfica III.1).

La confianza de los costarricenses en sus instituciones es alta cuando se la compara con otros países.¹⁹ En una escala de 0-100, el promedio de confianza de los costarricenses en las instituciones que también fueron estudiadas en otros países fue de 63, superior al de los otros siete países estudiados (Gráfica III.2). En resumen, alto orgullo nacional y relativamente alta confianza en las instituciones sugieren que en el país existe un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad política.

Gráfica III.2 Confianza promedio en instituciones comparables por país



¹⁹ Para este análisis se procedió de la siguiente manera: (a) Se excluyó preguntas sobre temas que no son instituciones (orgullo en nacionalidad, apoyo a tratado de libre comercio) o que no son comparables (preguntas CRB1-CRB3). Esto dejó un conjunto de 12 entidades comparables. (b) Debido a la elevada “no respuesta” se rescató para efectos de análisis todos los casos donde el respondente hubiese emitido opinión en al menos 8 instituciones. Se imputó el promedio de opiniones a las no respuestas. (c) Las preguntas B17 (Defensoría) y B19 (Contraloría) se excluyeron por tener demasiadas respuestas faltantes. (d) Se trabajó con el promedio nacional para 10 instituciones B1: Tribunales, B2: Inst. Pol., B6: Sist. Pol., B10a: Sist. Just., B11: Trib. Elec, B13: Congreso, B14: Gob. Nac., B18: Policía, B31: Corte Justicia, B32: Municipalidad.

3.3 Apoyo al sistema

¿Se traduce el orgullo nacional y la confianza en instituciones en un apoyo al sistema político? Dadas las respuestas anteriormente analizadas, una respuesta positiva sería lógica de esperar pues las instituciones políticas son un componente del entramado de instituciones una sociedad. No obstante, el vínculo entre orgullo, confianza en instituciones y apoyo al sistema es demasiado importante como para simplemente suponerlo: es necesario fundamentarlo empíricamente. Su importancia reside en el hecho que un alto apoyo al sistema indica que la población lo reconoce como un sistema legítimo, es decir, que las personas aceptan obedecer la autoridad de las instituciones para adoptar decisiones vinculantes al conjunto de la población. Por el contrario, un bajo apoyo al sistema indicaría la existencia de problemas de legitimidad que, eventualmente, podrían tener consecuencias para la estabilidad política.²⁰ Para estudiar este tema, el profesor Seligson ha elaborado el índice de apoyo al sistema.

En Costa Rica existen mediciones de este índice de 1978, lo que permite estudiar la evolución del apoyo ciudadano a la democracia como forma de gobierno –o apoyo difuso al sistema– a lo largo de un período relativamente prolongado.²¹ El índice se elabora a partir de las respuestas de los entrevistados a cinco preguntas (Recuadro III.1).²² Sus resultados se expresan en una escala de 0 a 100, donde 0 es el más bajo nivel de apoyo y 100 el más alto. En nuestro país, se ha utilizado en 9 ocasiones (incluida la presente) y en todas éstas las pruebas estadísticas indican que se trata de una medida confiable y válida.²³

²⁰ Bajo condiciones de baja legitimidad, las personas podrían negarse a reconocer las decisiones que adopten las autoridades públicas como vinculantes para ellas y oponerse a su autoridad para instaurar y mantener un orden público.

²¹ El concepto de apoyo difuso fue elaborado por Easton para referirse a las evaluaciones que las personas realizan acerca de lo que un objeto (en este caso el sistema político) es o representa –no tanto a lo que el objeto hace o como funciona (Easton, 1975; Muller, Jukam, & Seligson, 1982). Este apoyo consiste en una reserva de actitudes favorables, o de buena voluntad, que contribuye a que los miembros de un sistema acepten o toleren resultados o situaciones a los cuales se oponen, o efectos que conviven como perjudiciales (Benavides et al., 2003).

²² El 93.8% de las personas (1,407) contestaron las cinco preguntas. Para disminuir la incidencia de las “no respuesta” se efectuó un procedimiento de rescate de los casos donde las personas respondieron tres y cuatro preguntas. En estos casos, se asignó a las no respuesta el promedio de las calificaciones de la persona en los rubros que sí contestó. Mediante este procedimiento se elevó el número de casos válidos al 99.5% (1,493).

²³ El análisis factorial refleja que las cinco preguntas se agrupan en un solo factor, con cargas superiores a .593. Para medir la confiabilidad de la escala en la que se basa el Índice de apoyo al sistema se emplea la prueba estadística del alpha de Cronbach. Cuando el alpha de Cronbach es superior a .70, la medida en cuestión es confiable. En el caso del Índice de apoyo al sistema, los resultados han sido los siguientes: 1978= 0.77; 1980=0.75; 1983=0.79; 1985=0.75; 1987=0.70; 1990=0.74; 1995=0.73; 1999=0.75. En esta ocasión, el alpha de Cronbach fue de 0.73. Cabe anotar, sin embargo, que en los análisis factoriales realizados, las preguntas b1-b6 que componen el índice no mostraron un comportamiento distinto a la mayoría de las 20 preguntas que indagan la confianza ciudadana en un amplio conjunto de instituciones públicas (Véase Capítulo V “Protección de derechos y seguridad ciudadana” para un comentario sobre este asunto).

Recuadro III.1 Preguntas empleadas para el Índice de apoyo a la democracia de Mitchell Seligson

Ahora vamos a usar una tarjeta... Esta tarjeta contiene una escala de 7 puntos; cada uno indica un puntaje que va de 1 que significa NADA hasta 7 que significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a Ud. no le gusta nada, elegiría un puntaje de 1, y si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho elija un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué punto le gusta ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].

B1. ¿Hasta qué punto cree que los tribunales de justicia de Costa Rica garantizan un juicio justo? Si cree que los tribunales no garantizan en nada la justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio.

B2. ¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Costa Rica?

B3. ¿Hasta qué punto cree que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político costarricense?

B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político costarricense?

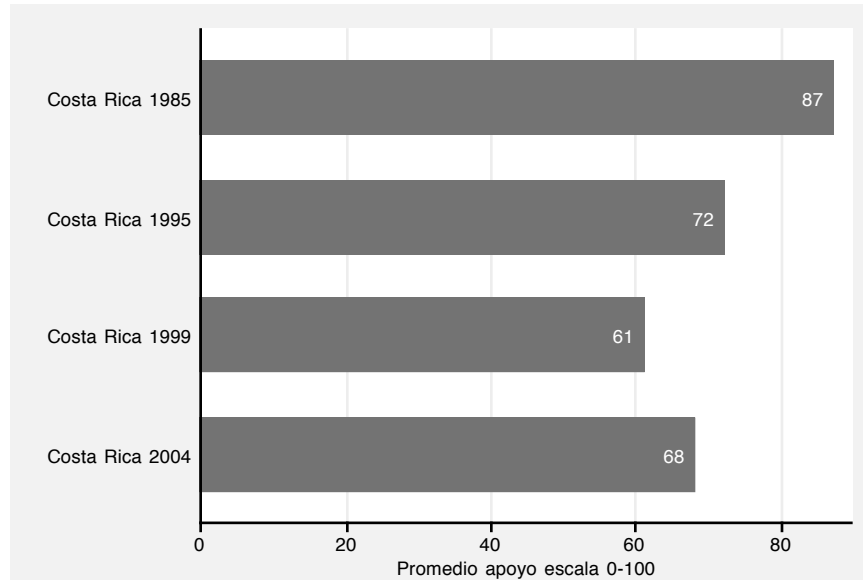
B6. ¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político costarricense?

El apoyo al sistema en Costa Rica se incrementó en relación con la medición efectuada en 1999, pues pasó de 61 a 68. Esta recuperación, ocurrida en un período de fuerte deterioro del sistema de partidos y de disminución de la participación electoral, es positiva. Al igual que en la primera mitad de la década de 1980, el apoyo al sistema se incrementa cuando el país enfrenta circunstancias difíciles²⁴. Sin embargo, la recuperación no revierte la tendencia de largo plazo -anotada por Seligson - de declive en el apoyo al sistema (Seligson, 2001). En efecto, nótese que el resultado de 2002 es inferior al obtenido hace casi diez años (72) y muy por debajo de la medición de 1985, cuando se obtuvo un máximo de 87 (Gráfica III.3).

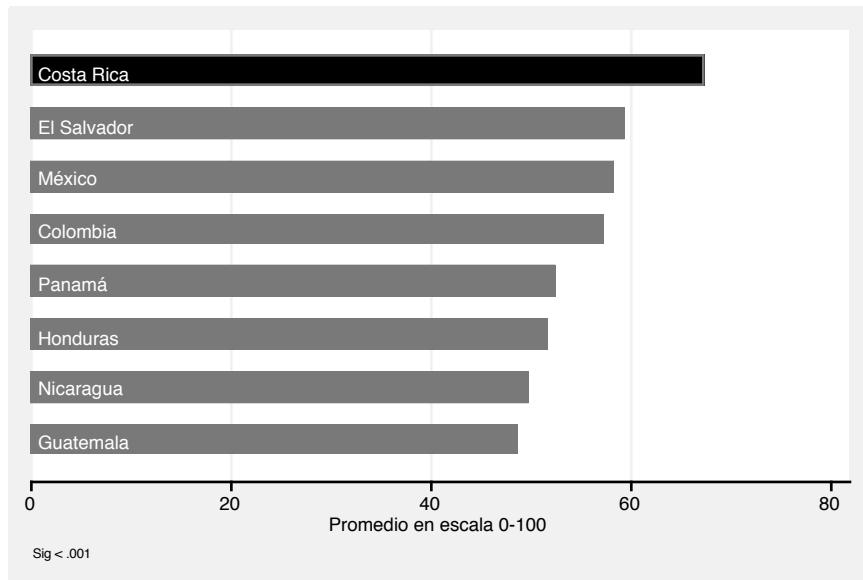
En comparación con otros países, la medición del 2004 rubrica que en Costa Rica el apoyo al sistema es alto. Es entre 15 y 20 puntos porcentuales mayor que Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá; y entre 8 y 10 puntos porcentuales mayor que el apoyo a la democracia en Colombia, México y El Salvador, quien ocupó el segundo lugar (Gráfica III.4). Las diferencias se amplían cuando se compara el apoyo al sistema en Costa Rica con países de la región andina. De acuerdo con las mediciones del Proyecto de Opinión Pública de la Universidad de Vanderbilt (www.innerstory/nsnd.com), en la última década, el apoyo a la democracia medido por este índice osciló entre 35 y 45 puntos en Perú, Bolivia y Ecuador.

²⁴ Como fue indicado en el Capítulo I, durante este período hubo un cambio en el sistema de partidos y el nivel de participación electoral, pese a la emergencia de nuevos partidos, no repuntó. La comparación con los años ochenta, sin embargo, debe tomarse con cuidado pues la naturaleza de estas circunstancias difieren marcadamente. En los años ochenta, el apoyo al sistema creció durante un período de crisis económica; en la actualidad, el apoyo al sistema aumenta durante un período de problemas con el sistema político (en ausencia de crisis económica).

Gráfica III.3 Apoyo al sistema democrático en Costa Rica, 1985-2004, con la metodología de M. Seligson



Gráfica III.4 Promedio del índice de apoyo al sistema por país, 2004, escala 0-100



Dentro de los componentes del apoyo al sistema, los rubros que en Costa Rica reciben las más altas calificaciones son el apoyo al sistema e instituciones políticas en general, y orgullo en el sistema. Las tres reciben calificaciones muy similares (alrededor de 75). En el otro extremo, los dos asuntos relacionados con el tema de la tutela de derechos civiles y políticos –la confianza en que los tribunales garanticen un juicio justo y la protección de derechos ciudadanos son los que obtienen las menores calificaciones

(55 y 57). En este sentido, la medición del 2004 continúa con el patrón de calificaciones de los rubros específicos del índice captado desde 1978 –la novedad en esta ocasión es una leve mejoría en los asuntos tradicionalmente peor calificados (Tabla III.1).

Tabla III.1 Variables empleadas para el cálculo del Índice de apoyo a la democracia

variable	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
B1RN Tribunales de Justicia	1495	0,0	100,0	57,0	27,3
B2RN Instituciones Políticas	1498	0,0	100,0	75,3	28,9
B3RN Derechos básicos del ciudadano	1493	0,0	100,0	55,9	28,0
B4RN Orgullo en el sistema de político	1494	0,0	100,0	74,2	27,9
B6RN Apoyo al sistema político	1493	0,0	100,0	75,4	27,6
ADEMR Índice de apoyo a la democracia	1493	0,0	100,0	67,6	19,5
N válido (según lista)	1493				

Una cuestión a dilucidar es si existen factores que ayudan a predecir el apoyo al sistema. Para esto se exploraron dos modelos de regresión simple (Modelos A y B). Ambos tienen en común la inclusión de las mismas características sociodemográficas como variables independientes.²⁵ La diferencia es que el Modelo B incluye variables políticas para investigar si estas influyen sobre este apoyo (Tabla III.2).

En ambos modelos, los factores sociodemográficos que predicen el apoyo al sistema son la edad y en menor medida la riqueza. A mayor edad y mayor riqueza, más apoyo. Al incluir las variables políticas (Modelo B), la religiosidad pierde significancia. Variables que han sido relevantes en otros estudios (como, educación) no son importantes en este caso. La capacidad predictiva del modelo A es baja ($r^2=0.045$), en cambio la del modelo B es sustancial ($r^2=0.353$). Esto significa que para investigar el apoyo al sistema debe ponerse atención en las variables políticas más que en las sociodemográficas.²⁶ En efecto, aún las sociodemográficas que son estadísticamente significativas introducen cambios muy pequeños en el nivel de apoyo (entre 2 y 3 puntos porcentuales).

²⁵ Se trata de la batería de características sociodemográficas indicadas en la sección 2.6 y que se aplican a todos los análisis multivariados que se realizan de ahora en adelante. Debe notarse que algunas de estas variables son indicatrices (*dummy*) de variables categóricas y que por ello omiten la categoría de referencia.

²⁶ Para descartar que el apoyo a la democracia se afecta por las variables políticas coyunturales, como la evaluación del desempeño del gobierno, se efectuó un análisis de covarianza. Se esperaba que el apoyo a la democracia –que mide apoyo difuso al sistema– no estuviese “contaminado” por las evaluaciones específicas sobre el desempeño de instituciones y actores. Sobre la labor del gobierno se tiene la pregunta M1. “Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que está realizando el Presidente Pacheco es: (1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno ni malo (4) Malo (5) Muy malo.” Sobre la percepción de eficacia se tiene las preguntas N1, N3 y N9 que dicen: “Ahora, en esta misma escala (0-7), hasta que punto diría que el gobierno actual N1 Combate la pobreza. N3 Promueve y protege los principios democráticos. N9 Combate la corrupción en el gobierno.” Los resultados indican que el Índice de apoyo al sistema casi no varía al considerarse estos factores y que, desde el punto de vista de la significación estadística, dicho apoyo no se encuentra afectado por el nivel de popularidad del Presidente Pacheco pero sí -aunque muy levemente- por la percepción de eficacia de su gobierno para atacar graves problemas del país (Preguntas N1, N3, N9). Debido a estos resultados, estas preguntas fueron empleadas como variables independientes dentro del Modelo B.

Tabla III.2 Predictores del apoyo al sistema democrático (Modelo B)

Variable explicativa	B	Beta	Sig.
(Constante)	30,165		,000
REGIONVC Región Valle Central	-1,667	-,040	,180
TAMAÑO C1 Resto Urbano	-3,866	-,078	,009
TAMAÑO C2 Rural	-,055	-,001	,967
Q1R Hombre	-3,525	-,091	,003
OCUP1R2 Amas de casa	-2,148	-,051	,106
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	1,786	,045	,061
EDR Años de educación	-,100	-,020	,515
Q2 Edad en años cumplidos?	,154	,129	,000
Q10R Ingreso-en miles-	-,005	-,035	,268
RIQDX Índice de riqueza	,522	,072	,027
Q4RRC1 Religiosidad media	-1,384	-,034	,185
Q4RRC2 Religiosidad baja	-,568	-,013	,633
PSOLP Índice de acción comunitaria	-,005	-,008	,717
CONFI2 Confianza neta en vecinos	,021	,059	,015
CONSO CR Índice de control social	,038	,053	,033
TOLERPR Índice tolerancia política	,054	,075	,001
M1 Trabajo del actual gobierno	-1,046	-,045	,090
N1 Combate la pobreza	1,208	,108	,001
N3 Promueve principios democráticos	3,458	,297	,000
N9 Combate corrupción	1,952	,189	,000

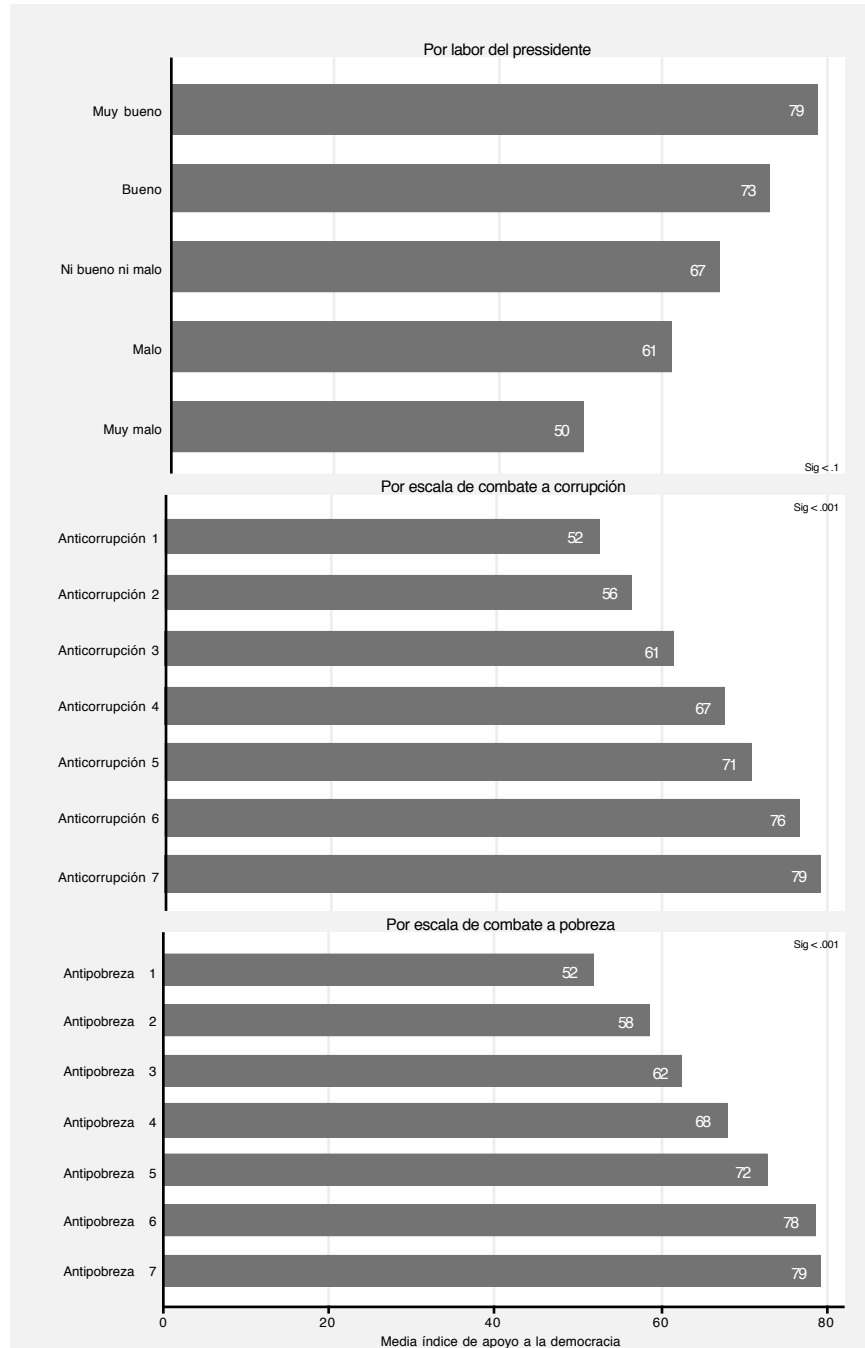
La evaluación que las y los costarricenses hacen de la labor del Presidente y su percepción acerca de la eficacia del gobierno para enfrentar con éxito grandes desafíos del país, tales como combatir la pobreza, combatir la corrupción y proteger los principios democráticos, son factores que inciden marcada y significativamente sobre el apoyo al sistema (en todos los casos: sig < .05). Quienes evalúan mal y muy mal la labor del Presidente puntúan claramente por debajo del promedio nacional; en cambio, quienes tienen una buena o muy buena opinión de su labor muestran un apoyo promedio bastante superior a la media (Gráfica III.5). Un efecto similar introduce la consideración de la eficacia del gobierno para combatir la corrupción: entre quienes asignan las notas más bajas (1= no está haciendo nada), el promedio de apoyo al sistema es inferior en más de 20 puntos en relación con los que asignan las calificaciones más altas (Gráfica III.5). La consideración de la eficacia del gobierno para combatir la pobreza es un predictor cuyo efecto es muy similar a la percepción de eficacia gubernamental para combatir la corrupción (Gráfica III.5).

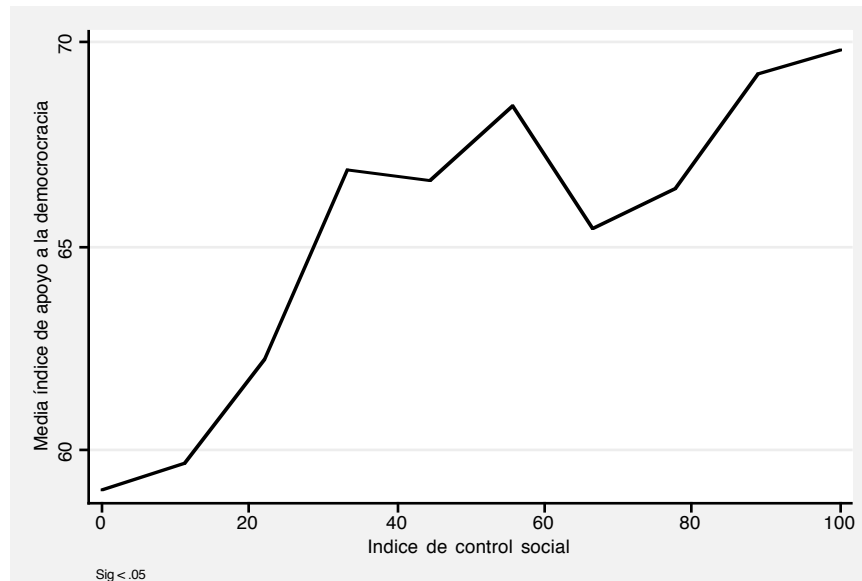
Por último, algunos factores relacionados con el capital social parecen funcionar como predictores del apoyo al sistema. El más destacado es el Índice de control social: vivir en barrios donde existen redes de colaboración social más robustas entre los vecinos tiene un efecto positivo sobre el nivel de apoyo promedio al sistema (Gráfica III.6).²⁷

²⁷ El capítulo 8 aborda el tema del capital social y describe el procedimiento para la elaboración de este índice. Por el momento baste decir que está formado por las preguntas CRIT3, CRIT4 y CRIT5 que indagan sobre la existencia de redes de colaboración social en los barrios. Un mayor puntaje en este índice señala la existencia de redes más robustas.

También, la confianza interpersonal, otra dimensión asociada al capital social, es un factor relevante para el apoyo al sistema: las personas que tienen más confianza en los demás muestran un mayor apoyo promedio al sistema que los más desconfiados (73% frente a 62%, sig <.05).

Gráfica III.5 Apoyo a la democracia según evaluación de labor del presidente, combate a la corrupción y combate a la pobreza



Gráfica III.6 Apoyo a la democracia según el índice de control social

En términos más conceptuales, estos resultados parecieran sugerir dos conclusiones tentativas. Por una parte, que las evaluaciones de las personas sobre instituciones (gobierno) y actores (Presidente) –para emplear la terminología de Pippa Norris (Norris, 1999)- o, en otras palabras, el apoyo específico, pareciera tener un fuerte efecto sobre el apoyo difuso a la democracia (al menos cuando este se mide como apoyo a sus instituciones políticas). Por otra parte, que ciertas dimensiones de capital social parecen estar positivamente relacionadas con este apoyo institucional.

3.4 Tolerancia política

La convivencia democrática depende en buena medida de la tolerancia. Por ello, constatado el amplio apoyo al sistema, un segundo paso en la investigación del apoyo a la democracia es el análisis de la tolerancia política: el respeto a los derechos ajenos aún de los con menor aceptación ciudadana. La tolerancia es indispensable en sociedades cada vez más plurales en razón a factores sociales, económicos, culturales y políticos: En efecto, mientras que, en la esfera política, las personas pertenecen a una misma comunidad de ciudadanos –todos con iguales derechos– en el resto de la vida social las personas pertenecen a mundos muy distintos, desiguales y hasta inconexos. La tolerancia es, en cierta medida, el cemento que amarra la sociedad con la comunidad política.

La tolerancia se funda en la aceptación del pluralismo como valor, indispensable para garantizar el respeto de la integridad personal y patrimonial de las personas (Sartori, 1997; Seligman, 1995; Walzer, 1995; Young, 1995). En una democracia, este pluralismo y su consecuencia, la tolerancia política, están jurídicamente codificados en las normas constitucionales y legales que rigen, en principio, a todos por igual. Estas normas reconocen iguales derechos a personas que son, por lo demás, muy distintas entre sí.

La codificación legal del pluralismo es indispensable pero insuficiente. Toda democracia crea un conjunto de instituciones que velan el pluralismo y la tolerancia

política vía la promoción, tutela y defensa de estos derechos. Pero, aunque indispensable, esta protección institucional es insuficiente. La otra cara de la moneda son las actitudes de la población. Si la población es intolerante con los demás, no está dispuesta ni a reconocer ni a respetar sus derechos, la convivencia democrática se lesiona severamente. Una población intolerante puede desconocer, en la práctica, las normas constitucionales y legales y fomentar, ejecutar y encubrir agresiones contra segmentos de la población.²⁸

Una prueba de fuego para medir la tolerancia política de la población es el examen de sus actitudes en relación con los derechos de aquellas personas que, en principio, le inspiran menos simpatía. Son éstas las que potencialmente son el blanco fácil de la intolerancia.²⁹ En el caso costarricense, esta indagación es importante pues estudios previos muestran la existencia de vetas intolerantes en amplios segmentos de la población (Gómez, 1998). Para estudiar este tema se incluyeron en el estudio cuatro preguntas que se han empleado en diversos países para medir la tolerancia en el ejercicio de los derechos. Además, se incluyó una quinta pregunta –sobre los derechos de los homosexuales, pues este grupo ha sido persistentemente señalado como el que más rechazo genera en la población (Recuadro III.2). A partir de las respuestas de los entrevistados a las preguntas D1-D4 se elabora el Índice de tolerancia.³⁰ Sus resultados se expresan en una escala de 0 a 100, donde 0 es el más bajo nivel de apoyo y 100 el más alto. Se trata de una medida confiable y válida de tolerancia política.³¹

Recuadro III.2 Preguntas empleadas para el Índice de tolerancia

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Costa Rica, no solo del gobierno de turno, sino la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala: [Sondee: ¿Hasta que punto?] Anotar 1-10, NS=88

D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista?

D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas salgan en la televisión para dar un discurso?

D5. (NO SE USA PARA EL INDICE) Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales, ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?

Al examinar las variables por separado, puede apreciarse que hay claras mayorías, superiores a 60%, que aprueban el derecho de las personas que “hablan mal”

²⁸ En el capítulo 8 se examinará otro aspecto de la tolerancia, en este caso referido a los migrantes nicaragüenses, que constituyen la mayoría de la población migrante en Costa Rica.

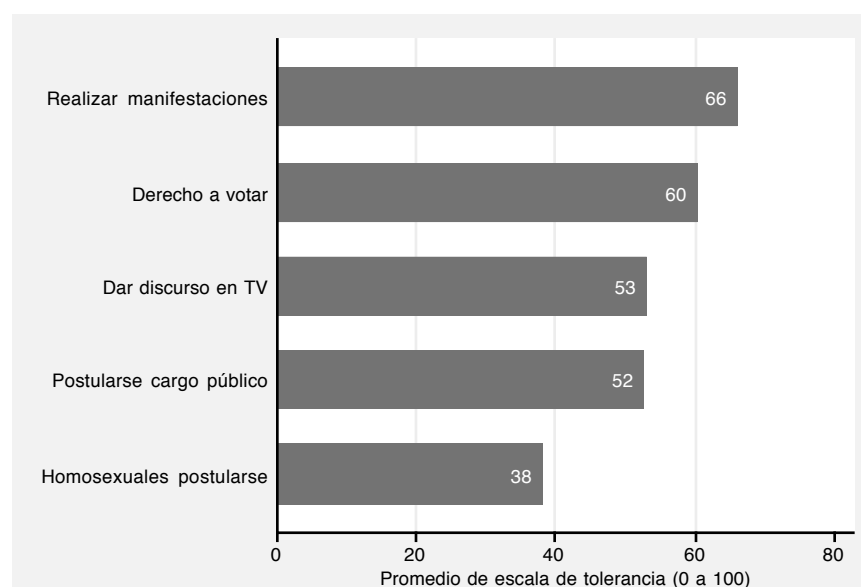
²⁹ Por ejemplo: actos vandálicos y criminales contra miembros de ciertos grupos pueden gozar de aceptación popular.

³⁰ El 97% contestó las cinco preguntas. Para disminuir la “no respuesta” se rescataron los casos donde las personas respondieron tres preguntas, asignando el promedio de la persona en los rubros que sí contestó. Con ello se elevó el número de casos validos al 97.9%.

³¹ El análisis factorial refleja que las cuatro preguntas se agrupan en un solo factor, con cargas superiores a .674. El alpha de Cronbach fue de .80, muy satisfactorio. El análisis reveló que la inclusión de la pregunta D5 (sobre homosexuales) reduciría el alpha de Cronbach ligeramente, 0.75. Sin embargo, para hacer posible comparaciones, se la excluyó del índice.

de la forma de gobierno de Costa Rica a votar y manifestarse. Ligeras mayorías, apenas superiores al 50%, aprueban el derecho de estas personas a dar discursos y a optar para cargos públicos. En cambio, más del 60% de las personas se pronuncian en contra del derecho de los homosexuales a optar a estos cargos. Nótese que en todos los casos siempre hay un importante segmento de la población (que ronda entre el 40% y el 50%) que muestra un importante nivel de intolerancia (Gráfica III.7).

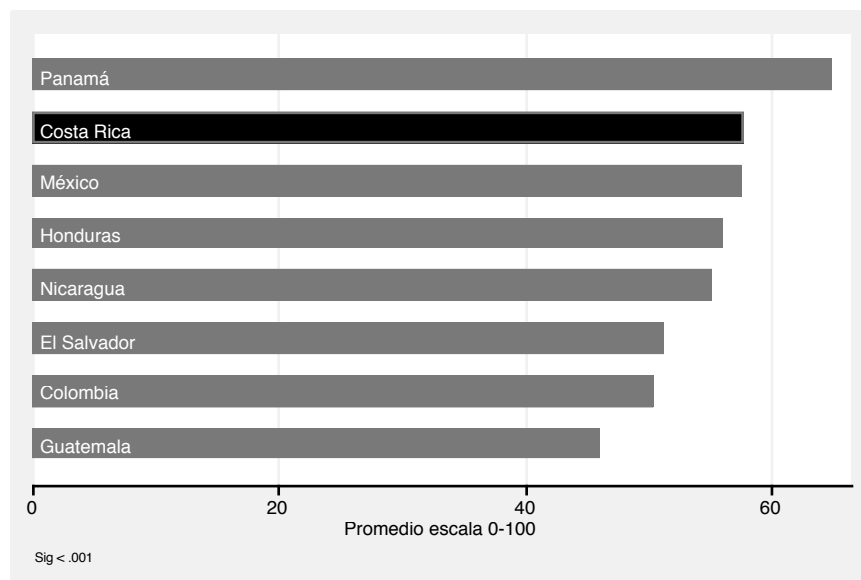
Gráfica III.7 Tolerancia promedio hacia el ejercicio de derechos por parte del grupo menos gustado, Costa Rica 2004, escala 0-100



Cuando las preguntas se analizan de manera agrupada en el Índice de tolerancia el valor promedio del país es 58 (de 100). Si se compara con mediciones anteriores, este resultado señala que en esta materia el país apenas ha variado una década. En otras palabras, diez años más de experiencia democrática no ha producido una ciudadanía más tolerante (Seligson & Booth, 1993). Por otra parte, en una perspectiva comparada, a diferencia del Índice de apoyo al sistema, en el de tolerancia el promedio costarricense es similar a Honduras, Nicaragua y México, claramente superior a El Salvador y, especialmente, Guatemala, pero bastante inferior a Panamá (Gráfica III.8). Las distancias con respecto a los países andinos (Perú, Bolivia y Ecuador) son menores en el tema de tolerancia que en el de apoyo al sistema (www.innerstory.com). El supuesto de que un pilar de una democracia estable es tolerancia política de la población no se cumple en el caso costarricense. Tampoco el supuesto de que una democracia madura tiene niveles superiores de tolerancia política que democracias nóveles.³²

³² Este es un tema complejo que escapa de los alcances del presente estudio y que implicaría una investigación sobre la historia social y política del país. Recuérdese que el proceso de democratización en Costa Rica evolucionó centrada en una región con una relativa homogeneidad étnica y cultural –que durante buena parte del siglo XX excluyó a grupos étnicos distintos (negros e indígenas) y que finalmente se consolidó luego de una Guerra Civil (1948), como resultado de la cual ciertas fuerzas políticas estuvieron proscritas.

Gráfica III.8 Puntajes *promedio* nacionales en el índice de tolerancia política en perspectiva comparada (2004)



En virtud de una tolerancia política menor a la que cabría esperar en una democracia madura como la costarricense, resulta de particular importancia explorar los factores que ayuden a predecir el nivel de tolerancia política de las personas (Tabla III.3). Para ello se aplicó los dos modelos de regresión simple vistos en la sección anterior, solo que en este caso el Índice de tolerancia política fue la variable dependiente.

A diferencia del apoyo a la democracia, el Modelo B no introdujo cambios importantes en la predicción de la tolerancia política. La capacidad explicativa del modelo A es baja ($r^2=.071$) y la consideración de las variables políticas apenas produjo variación (en el Modelo B $r^2=.083$). Las percepciones del desempeño de instituciones y actores, o apoyo específico, no tienen efectos sobre la tolerancia política; tampoco los tienen los indicadores de capital social. Todos ellos no son factores con significación estadística (Tabla III.3). En términos más conceptuales esto plantea implicaciones interesantes: por una parte, en Costa Rica el capital social (que sí influye positivamente el apoyo al sistema) no hace a las personas más tolerantes. Tampoco el apoyo al sistema.³³

A diferencia del apoyo al sistema, en el caso de la tolerancia política las variables sociodemográficas parecen ser más relevantes. Así, las personas que habitan en el Valle Central tienden a ser más tolerantes que las residentes en el resto del país. La educación influye de manera más clara: a más años de educación, más tolerancia. Finalmente, las personas con religiosidad media o baja también tienden a ser más tolerantes.³⁴

³³ Lo que pareciera ocurrir en Costa Rica es que las personas que viven en ambientes de más alto capital social apoyan más al sistema pero no son más tolerantes que el resto –recuérdese que, como ha sido visto, la sociedad costarricense no se destaca por su tolerancia política.

³⁴ Lo cual produce un resultado curioso: los menos religiosos son más tolerantes de los derechos de los demás pero, como se vió en la sección anterior, apoyan menos al sistema. Una explicación es que confían menos en las instituciones políticas, base del índice de apoyo al sistema.

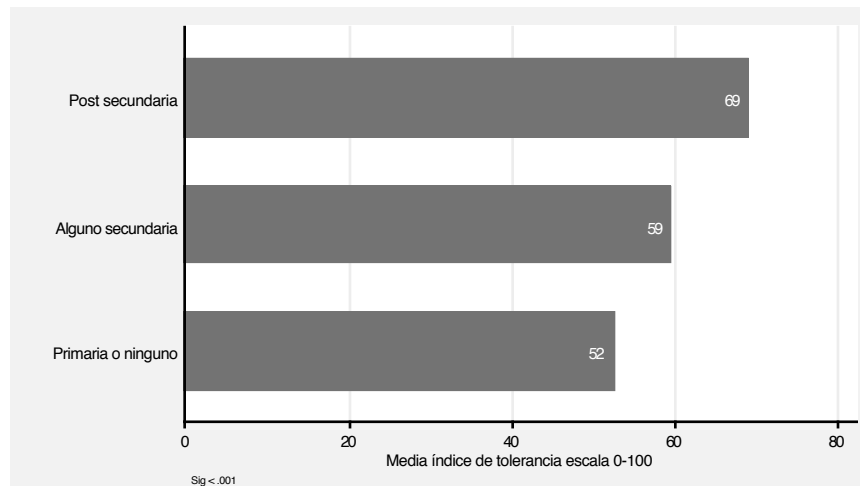
Tabla III.3 Predictores de la tolerancia política (Modelo B)

Variable	B	Beta	Sig.
(Constante)	23,645		,001
REGIONVC Región Valle Central	3,686	,064	,076
TAMAÑOC1 Resto Urbano	3,512	,051	,154
TAMAÑOC2 Rural	5,001	,089	,024
Q1R Hombre	1,755	,032	,383
OCUP1R2 Amas de casa	,206	,003	,926
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	-1,901	-,034	,233
EDR Años de educación	1,468	,213	,000
Q2 Edad en años cumplidos?	-,010	-,006	,837
Q10R Ingreso-en miles-	,007	,037	,318
RIQDX Índice de riqueza	,394	,039	,318
Q4RRC1 Religiosidad media	4,167	,073	,017
Q4RRC2 Religiosidad baja	5,554	,088	,005
PSOLP Índice de acción comunitaria	,016	,018	,514
CONFI2 Confianza neta en vecinos	,010	,021	,475
CONSOGR Índice de control social	-,035	-,034	,240
ADEMR Índice de apoyo a la democracia	,150	,107	,001
M1 Trabajo del actual gobierno	1,882	,057	,068
N1 Combate la pobreza	-,260	-,017	,678
N3 Promueve principios democráticos	-,517	-,032	,401
N9 Combate corrupción	,156	,011	,781

Variable dependiente: TOLERPR Índice de tolerancia política

Conviene detenerse un tanto en la variable de escolaridad, medida en años de educación, que es la que más fuertemente parece incidir en la tolerancia. Nótese que entre las personas con educación primaria (completa o incompleta) y las que tienen educación superior existen más de 18 puntos porcentuales de diferencia (Gráfica III.9). En la escala de 0-100, las primeras puntúan en promedio 51 y las segundas 69. Las personas con algún grado de educación secundaria muestran una situación intermedia. En términos de tolerancia política, el sistema educativo es un poderoso vehículo de socialización.

Gráfica III.9 Tolerancia promedio por grado de educación, Costa Rica 2004



Mejoras en el nivel de escolaridad de la población que desafortunadamente en Costa Rica ha aumentado lentamente en los últimos veinte años, tienen implicaciones políticas y no solo económicas –como usualmente se analiza. La convivencia democrática ganaría mucho si las personas fueran más instruidas, pues la educación las vuelve más tolerantes.

3.5 Apoyo a una democracia estable

La combinación del Índice de apoyo al sistema (sección 3) con el Índice de tolerancia al ejercicio de derechos (sección 4) produce una medida de apoyo más general denominada “apoyo a una democracia estable.” ¿Por qué denominarla de esta manera? Al analizar en conjunto el apoyo al sistema y la tolerancia se pueden interrelacionar actitudes vitales para la preservación de la democracia. En primer lugar, debe recordarse que el apoyo al sistema procura captar el grado en que las personas aceptan obedecer la autoridad de las instituciones para adoptar decisiones vinculantes al conjunto de la sociedad, en este caso, la obediencia a autoridades nombradas por medios democráticos. Así, el apoyo al sistema es una medida de su legitimidad política. En segundo lugar, la tolerancia con los derechos de los grupos que menos les gustan es una pieza clave de la convivencia democrática, sin la cual el disfrute de las libertades puede estar severamente amenazado. En otras palabras, la medición de la tolerancia nos acerca al tema de la libertad política.

La legitimidad del sistema más la aceptación de la libertad política son pilares de una estabilidad democrática. En efecto, cuando las personas aceptan la autoridad democrática, reconocen las instituciones fundamentales de una democracia; y, cuando además aceptan la tolerancia, están dispuestas a vivir sus vidas bajo estas “reglas de juego” que, entonces, se constituyen en normas predecibles y estables a lo largo de un período amplio. Una democracia gozaría de buena salud si estos demócratas tolerantes fueran el grupo más grande e, idealmente, la mayoría. En el lado contrario, quienes no apoyan al sistema ni toleran derechos ajenos no son leales a la democracia y estarían dispuestas a que fuese sustituida por un sistema autoritario en el cual se coartaran los derechos y libertades. Estas personas querrían que dicho sistema autoritario fuera también estable –en el sentido de que sus normas rigieran la vida social y política a lo largo de una larga época. Una democracia se encontraría en serios problemas si dicho grupo reuniese a una gran cantidad de ciudadanos, sino la mayoría. En términos empíricos, se esperaría que tolerancia y apoyo al sistema estuvieran relacionados positivamente: a mayor tolerancia, más apoyo a las instituciones del régimen democrático.³⁵

La situación en Costa Rica es relativamente favorable para la democracia (Tabla III.4). En efecto, los que apoyan la democracia estable son el grupo más extendido (49%), casi a punto de ser mayoría, seis veces mayor que quienes estarían a favor de un rompimiento democrático (8%). Un grupo al que debe ponerse atención, pues reúne a una de cada tres personas, está compuesto por quienes apoyan a las instituciones pero son intolerantes con el ejercicio de derechos ajenos (33%). Estos individuos apoyan la estabilidad per se que proporcionan las instituciones aún en detrimento del ejercicio de los derechos ciudadanos (por esto se denominan “estabilidad autoritaria”). Sin embargo, a diferencia de estudios en otros países, no se encontró una relación significativa entre tolerancia y apoyo al sistema (sig.>.10). En parte esto se explica por el hecho de que en

³⁵ A estos grupos polares –los demócratas tolerantes que apoyan una democracia estable y los no demócratas intolerantes que apoyan el rompimiento autoritario- se suman otros dos grupos que tienen actitudes contradictorias. Nos referimos aquí a los tipos polares para fines didácticos.

Costa Rica el grupo de estabilidad autoritaria es muy amplio -asunto que los resultados del análisis de regresión para el tema de la tolerancia política había adelantado pues, como se vio, el apoyo al sistema no es un predictor. Como a fue mencionado, existe una fuerte veta de intolerancia en la cultura política costarricense, aún de parte de quienes dicen apoyar el sistema democrático.

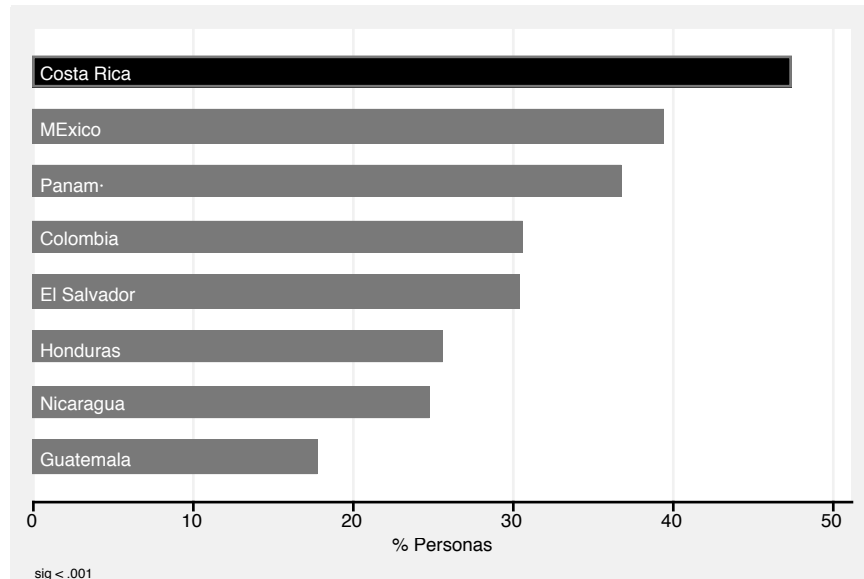
Tabla III.4 Relación empírica entre tolerancia y apoyo al sistema en Costa Rica

Nivel de apoyo al sistema democrático		Nivel de tolerancia política		Total
		Bajo	Alto	
Bajo	Recuento	115	157	272
	% del total	7,9%	10,7% ^a	18,6%
Alto	Recuento	479	711	1190
	% del total	32,8%	48,6%	81,4%
Total	Recuento	594	868	1462
	% del total	40,6%	59,4%	100,0%

^a Índice de apoyo al sistema democrático se recodificó la escala 0-100: (a) Bajo <=50; (b) Alto: >50. Índice de tolerancia política se recodificó la escala 0-100: (a) Bajo <=50; (b) Alto: >50. r=.016, sig= .539

La comparación de este resultado con otros obtenidos en estudios previos indica que, en efecto, la situación de Costa Rica es la más positiva de la región y aumentó ligeramente en los últimos ocho años (www.innerstory.com). Más precisamente, el apoyo a una democracia estable en este país es casi el doble que el registrado en Honduras y Nicaragua y casi el triple del de Guatemala. Las distancias en relación con México, Colombia y El Salvador son un tanto menores, pero siempre marcadas (Gráfica III.10).

Gráfica III.10 Apoyo a una democracia estable en perspectiva comparada



Un paso adicional en el análisis es esclarecer si el grupo que apoyan una democracia estable tienen características sociodemográficas distintas al resto. Para ello se empleó los dos modelos A y B que se han aplicado con anterioridad. Sin embargo, en este caso se aplicó un modelo de regresión logística pues la variable dependiente se recodificó para hacer la binaria (apoyo a democracia estable – no apoyo, es decir, los otros tres grupos). Cuando se incluyen solo las variables sociodemográficas, salvo la educación, ninguna otra es significativa.³⁶ La escasa importancia de estos factores era de esperar debido a los resultados obtenidos en la exploración de los predictores del apoyo al sistema. Por otra parte, la incidencia del nivel de educación sobre la tolerancia política, que ya había sido comentada, parece también influir aquí. En resumen, desde una perspectiva sociodemográfica el grupo que apoya la democracia estable no parece diferenciarse de los demás (Tabla III.5).

Tabla III.5 Predictores del apoyo a una democracia estable (Modelo B)

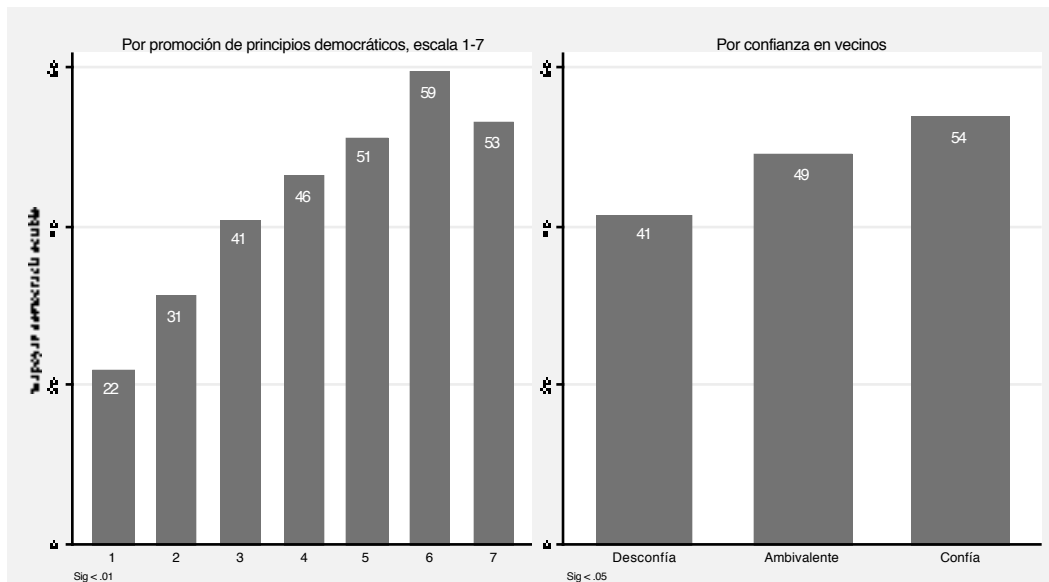
Variable	B	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Constante	-2,415	18,288	1	,000	,089
REGIONVC(1) Valle Central	,144	,779	1	,378	1,155
TAMAÑO		2,378	2	,305	
TAMAÑOOC1 Resto Urbano	,155	,636	1	,425	1,168
TAMAÑOOC2 Rural	,269	2,368	1	,124	1,309
Q1R Hombre	-,009	,003	1	,954	,991
OCUP1R2 Amas de casa	-,204	1,353	1	,245	,816
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	-,129	1,061	1	,303	,879
EDR Años de educación	,060	8,993	1	,003	1,062
Q2 Edad en años cumplidos?	,003	,430	1	,512	1,003
Q10R Ingreso-en miles-	,000	,148	1	,700	1,000
RIQDX Índice de riqueza	,036	1,357	1	,244	1,037
Q4RR		1,536	2	,464	
Q4RRC1 Religiosidad media	,133	,939	1	,333	1,143
Q4RRC2 Religiosidad baja	,177	1,262	1	,261	1,193
PSOLP Índice de acción comunitaria	,002	,862	1	,353	1,002
CONFI2 Confianza neta en vecinos	,002	4,189	1	,041	1,002
CONSOGR Índice de control social	,000	,002	1	,969	1,000
M1 Trabajo del actual gobierno	,007	,008	1	,931	1,007
N1 Combate la pobreza	,025	,257	1	,612	1,025
N3 Promueve principios democráticos	,185	15,084	1	,000	1,203
N9 Combate corrupción	,050	1,291	1	,256	1,051

Como puede apreciarse, la participación en asuntos comunitarios y las redes de colaboración social en las comunidades (ambas dimensiones del concepto de capital social) no son significativas. Tampoco la evaluación de la labor del Presidente. Por contraste, algunos factores propiamente políticos sí ayudan a predecir el apoyo a una democracia estable (Tabla III.5): la valoración sobre la capacidad del gobierno para

³⁶ La capacidad explicativa del Modelo A es muy baja (R^2 de Cox-Snell:.025). En el modelo B, esta capacidad aumenta levemente (R^2 de Cox-Snell:.065).

proteger los principios democráticos (N3) y la confianza interpersonal (confi2). En la Gráfica III.11 puede verse que aquellos que mejor evalúan el desempeño del gobierno en materia de democracia tienden, en promedio, a apoyar más una democracia estable (diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre los que evalúan mal y evalúan bien al gobierno). La confianza interpersonal también tiende a tener un efecto positivo, aunque menos pronunciado (Gráfica III.11).

Gráfica III.11 Porcentaje de apoyo a una democracia estable según desempeño de gobierno en protección de democracia y confianza en los vecinos



3.6 Nota comparativa con otra medición de apoyo a la democracia

En un estudio reciente, realizado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Gómez, Kikut y Vargas Cullell desarrollaron una metodología para estudiar, desde otro ángulo, el apoyo difuso a la democracia (Benavides et al., 2003; Kikut et al., 2003; Vargas Cullell et al., 2003a, 2003b). Se basa en el concepto de orientaciones a la democracia, definidas como posiciones de apoyo o rechazo a la democracia. Este concepto se adapta del originalmente formulado por Easton y empíricamente se la define como un conjunto de actitudes acerca de la conveniencia de la democracia como sistema de gobierno y la aceptación de las normas e instituciones en que ésta se basa. Las orientaciones son patrones que surgen de 11 preguntas (Recuadro III.3)³⁷ incluidas con

³⁷ El estudio original se efectuó con el Latinobarómetro 2002 (www.latinobarometro.com). Las modificaciones introducidas en la presente investigación en relación con dicho estudio fueron las siguientes: (a) se aplicó la misma escala de medición para 6 de las preguntas, a fin de tener una medición más sensible y homogénea –en el Latinobarómetro, las preguntas CRDE08 y CRDE09 eran binarias (sí/no). (b) Las preguntas CRDE04 y CRDE05 eran originalmente una sola. En este estudio se dividieron con el fin de que cada una denotara un actor o institución distinta. (c) Las categorías de respuesta de la pregunta CRDE11 se reformularon, sin cambiar el sentido de la pregunta, con el fin de hacer más sensible la escala ordinal original. (d) Finalmente, en las

modificaciones en el presente estudio con propósitos comparativos con los resultados de una medida ya probada de apoyo al sistema como la propuesta por Seligson.

Recuadro III.3 Preguntas empleadas para el índice de orientaciones a la democracia

Ahora, siempre usando la tarjeta B, quiero que me dé su opinión sobre las acciones del Presidente cuando el país tiene serias dificultades. Dígame, si el país tiene serias dificultades, hasta qué punto estaría Ud. de acuerdo con que el Presidente (LEER) (USE LA TARJETA POR FAVOR: Anotar 1-7, NS=8)

CRDE01 Ponga orden por la fuerza ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?

CRDE02 Controle los medios de comunicación ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?

CRDE03 Pase por encima de ciertas leyes ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?

CRDE04 Deje de lado al Congreso ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?

CRDE05 No tome en cuenta a los partidos políticos ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?

Siempre con la misma tarjeta, quisiera que me dijera hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que: (Anotar 1-7, NS=8)

CRDE08 Puede haber democracia sin Asamblea Legislativa ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?

CRDE09 Puede haber democracia sin que existan partidos políticos ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?

DEM2. Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo:

(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.

(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.

DEM6. Ahora le voy a leer un par de frases sobre la democracia. Por favor, dígame con cual está más de acuerdo:

(1) En general, y a pesar de algunos problemas, la democracia es la mejor forma de gobierno

(2) Hay otras formas de gobierno que pueden ser tan buenas o mejores que la democracia

CRDE10 Si usted tuviera que escoger entre la democracia y el desarrollo económico, Ud. diría que (LEER OPCIONES)

(1) El desarrollo económico es lo más importante

(2) La democracia es lo más importante

(NO LEER) (3) Ambas son igualmente importantes.

ENTREGUE TARJETA D

CRDE11 En esta tarjeta aparecen cuatro afirmaciones. Las vamos a leer y luego quiero que Ud. me diga el número de la opción que más se ajusta a su forma de pensar.

preguntas relacionadas con la dimensión de preferencia por la democracia –ver más adelante– fueron las que más sufrieron cambios. Se conservaron tres de las cuatro preguntas originales pero se eliminaron dos preguntas luego del análisis estadístico y se incluyó otra. Como se verá, medición de la dimensión de preferencia por la democracia es la menos confiable. Cabe anotar que estas cuatro medidas lograron mejorar la confiabilidad de las mediciones e identificar las tres dimensiones de apoyo a la democracia encontradas en el estudio original. En esa ocasión, por no obtenerse mediciones confiables, las preguntas empleadas para el análisis de orientaciones fueron sometidas de manera independiente al análisis de conglomerados.

(LEER PAUSADAMENTE LAS OPCIONES, ESPERE LA RESPUESTA DEL ENREVISTADO Y LUEGO MARQUE EL CODIGO DEBIDO, SI DUDA LEER DE NUEVO)

1. La democracia es indispensable para llegar a ser un país desarrollado
2. No es indispensable pero es el mejor medio para llegar a ser un país desarrollado,
3. En realidad, pueden haber mejores medios que la democracia para llegar a ser un país desarrollado
4. Creo que un sistema de gobierno no democrático es indispensable para llegar a ser un país desarrollado

Las 11 preguntas se agrupan en tres dimensiones. La primera dimensión explica hasta que punto las personas están dispuestas a que, dentro de la formalidad democrática, un presidente realice acciones que en la práctica son contrarias a la vigencia de la democracia. Se denomina “actitudes no delegativas” pues se deriva del concepto de democracia delegativa propuesto por O’Donnell (O’Donnell, 1994).³⁸ Como puede verse en la Tabla III.6, las cinco preguntas empleadas para medir las actitudes no delegativas conforman una medida confiable (alpha Cronbach: 0.78).

Tabla III.6 Análisis factorial de preguntas que conforman el índice de orientación a la democracia (escala 0-100)

Preguntas	Media	Componente			α Crombach
		1	2	3	
<i>Dimensión: Actitudes no delegativas</i>	56,2				0,78
CRDE01RN Opone presidente ponga orden por fuerza	36,5	0,68			
CRDE02RN Opone presidente controle los medios	46,5	0,68			
CRDE03RN Opone a presidente pase por encima leyes	68,3	0,78			
CRDE04RN Opone a presidente deje de lado a la Asamblea Legislativa	65,3	0,72			
CRDE05RN Opone a presidente deje de lado a los partidos políticos	64,6	0,70			
<i>Dimensión: Apoyo a instituciones representativas</i>	64,1				0,77
CRDE09RN Democracia con partidos políticos	66,8		0,87		
CRDE08RN Democracia con Asamblea Legislativa	61,5		0,86		
<i>Dimensión: Preferencia por la democracia</i>	72,1				0,56*
DEM2RN Preferencia por democracia	82,3			0,60	
DEM6RN Democracia mejor forma de gobierno	77,3			0,68	
CRDE11RN Democracia indispensable para desarrollo	73,8			0,62	
CRDE10RN Democracia sobre desarrollo económico	55,1			0,74	
Índice orientación a la democracia (tres dimensiones)	63,4				

Notas: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

* La confiabilidad de la escala de preferencia por la democracia no es satisfactoria (alpha <.7)

La segunda dimensión señala la importancia que adjudicada a dos instituciones políticas fundamentales de una democracia representativa: los partidos políticos y el Congreso. Líderes no democráticos han empleado el argumento de que para “salvar” la

³⁸ De acuerdo con O’Donnell en América Latina surgió un tipo de democracia en la que, una vez en el poder, los presidentes democráticamente electos desarrollan comportamientos autoritarios, aunque sin romper del todo con el orden constitucional.

democracia es necesario clausurar (temporal o totalmente) a los partidos o al Congreso. La medida para esta dimensión también es confiable (Alpha de Cronbach: 0.78).

Finalmente, la tercera dimensión es la de la preferencia por la democracia frente a otros sistemas de gobierno y otro valor de relevancia en las sociedades latinoamericanas: el logro del desarrollo económico y social. Así, se analiza si, puestos a escoger, las personas prefieren la democracia por sobre otras alternativas económicas y políticas. Lamentablemente, la medida para esta dimensión no es enteramente confiable (alpha Cronbach: 0.56). Sin embargo, para efectos ilustrativos de comparar resultados con el ya probado Índice de apoyo al sistema de Seligson, se procedió a calcular el Índice de orientación democrática de las personas, que promedia los resultados en las tres dimensiones y las expresa en una escala de 0 a 100.

En este índice de orientación hacia la democracia,³⁹ una puntuación de 100 la obtiene quien en todas estas preguntas hubiese escogido las respuestas más democráticas. Estas son personas que prefieren la democracia por sobre otros valores socialmente relevantes; que apoyan en todos sus extremos las instituciones fundamentales de la democracia representativa (aún aquellas en las que menos confía, como el Congreso y los partidos), y que no están dispuestas, bajo ninguna circunstancia, que un Presidente electo lesione la legalidad democrática. Por el contrario, una puntuación de 0 la obtendría una persona que a lo largo de las 11 preguntas siempre hubiese escogido las opciones más antidemocráticas. Estas personas prefieren un sistema autoritario que uno democrático; están dispuestas a sacrificar la democracia para obtener otros fines como el desarrollo; no apoyan las instituciones de la democracia representativa y, en especial, estarían de acuerdo con la figura de un Presidente delegativo: estarían de acuerdo que, para resolver los problemas del país, el Presidente invocara poderes especiales y la mano dura.⁴⁰

El resultado promedio obtenido para Costa Rica obtenido con la metodología de la orientación hacia la democracia es 63.4 de 100 puntos, un resultado similar aunque ligeramente inferior al del Índice de apoyo al sistema (67.9). La dimensión con más alto puntaje es la preferencia por la democracia (72.1) y la más baja es la de las actitudes no delegativas (56.2); por su parte, el apoyo a las instituciones de la democracia representativas (64.1) es similar al promedio del índice en su conjunto. Esto quiere decir que la preferencia por la democracia es mayor que el rechazo que cabría esperar a un Presidente con un perfil delegativo.⁴¹

³⁹ En esta ocasión no se efectúa un paso adicional aplicado en la metodología planteada por Gómez, Kikut y Vargas Culléll: el análisis de conglomerados para distinguir grupos según su patrón de actitudes a la democracia (los demócratas, ambivalentes, no demócratas). Con base en esta operación se desarrollan indicadores sobre el tamaño, distancia y activismo de las orientaciones.

⁴⁰ De este modo, entre más cercano a 100 puntúa una persona, más cerca está de una orientación democrática. Entre más cercano a 0, más lo está de una orientación antidemocrática.

⁴¹ Al igual que con el Índice de apoyo al sistema, se efectuó un análisis de covarianza para examinar si el nivel de orientación democrática –que es otra manera de medir el apoyo difuso al sistema– se encuentra afectado por las evaluaciones específicas sobre actores e instituciones, o el apoyo específico. Para ello se empleó las variables M1, N1, N3 y N9, que también utilizadas en el análisis del apoyo al sistema (Ver nota 29). Los resultados fueron muy similares: la evaluación de la labor del Presidente Pacheco no influye, aunque, desde el punto de vista de la significación estadística (N1: sig <.001, N9: sig <.010) la percepción de eficacia del gobierno para resolver

Cuando se analiza la relación entre ambos índices (orientaciones y apoyo al sistema), la correlación es baja ($r^2=.06$), aunque estadísticamente significativa. Es de destacar, empero, que la mayor parte de los casos quedan clasificados en las mismas categorías (alto-alto, bajo-bajo): 61% en alto-alto y 6% en bajo-bajo (Tabla III.7).

Tabla III.7 Relación entre el Índice de apoyo al sistema (Seligson) y el Índice de orientación democrática (Kikut, Gómez y Vargas Cullell)

Nivel apoyo al sistema democrático	Nivel de orientaciones hacia la democracia		Total
	Bajo	Alto	
Bajo	81 5,7%	180 12,7%	261 18,4%
Alto	294 20,7%	865 60,9%	1159 81,6%
Total	375 26,4%	1045 73,6%	1420 100,0%

Sig. < ,01, Correlación de Spearman=.05

La baja correlación entre ambos índices plantea una pregunta inevitable: ¿por qué dos medidas del apoyo difuso a la democracia producen resultados distintos? Una primera explicación es que una de las dos no esté midiendo realmente el apoyo al sistema. Se trata, sin embargo, de una respuesta poco satisfactoria, pues los temas tratados por cada medida tratan aspectos relevantes del apoyo ciudadano a la democracia. En efecto, el Índice de apoyo a Seligson mide conceptos fundamentales para una democracia como lo son la tolerancia y la legitimidad de las instituciones políticas; por su parte, el Índice de orientación democrática mide la preferencia por el sistema democrático, el apoyo a instituciones representativas y el rechazo a la tentación delegativa. Una segunda explicación podría ser que una de las dos medidas simplemente mida mal lo que se propone. En vista de la amplia trayectoria del Índice de apoyo, las sospechas recaerían en este caso en el índice de orientación a la democracia. Ciertamente, el Índice de apoyo al sistema es medida más consolidada y estadísticamente más confiable para explorar el apoyo a la democracia que el Índice de orientación a la democracia -y tiene una ventaja adicional: con menos variables se aproxima al concepto de apoyo difuso. Lo anterior, sin embargo, no implica que el Índice de orientación democrática esté malo. Nótese que ambas metodologías coinciden en mostrar un hecho fundamental: existe en Costa Rica un amplio apoyo a la democracia.

Una tercera explicación a la pregunta sobre la baja correlación entre los índices es que ambos miden aspectos distintos del apoyo ciudadano a la democracia. En efecto, el Índice de apoyo al sistema refiere, principalmente, a variables institucionales –sistema político y Estado de derecho. Por su parte, el Índice de orientación a la democracia aborda el tema del apoyo difuso con temas distintos: la preferencia por la democracia por sobre otros valores⁴² y el apoyo a una norma democrática elemental, a saber, que en una

desafíos nacionales como combatir la pobreza y la corrupción sí lo hacen. Sin embargo, los efectos de estas variables sobre el nivel promedio de orientación democrática fueron muy leves.

⁴² Para evitar la válida crítica de Seligson et. al sobre la pregunta acerca de la preferencia por la democracia (Canache et al., 2001), en el Índice de orientación a la democracia esta preferencia no se mide a partir de una sola pregunta sino que emerge como resultado de cuatro preguntas.

democracia el poder electo está sujeto a la ley. Las variables de apoyo institucional son un componente pero no el principal. Así, a la luz del tema que se comenta en la sección siguiente, el Índice de orientación a la democracia puede estar estudiando ciertas áreas del apoyo al sistema que no han sido exploradas hasta el momento y que son de extrema relevancia en las actuales condiciones políticas que prevalecen en varios países de América Latina: la emergencia de comportamientos autoritarios dentro de la formalidad democrática en gobiernos electos, comportamientos que cuentan en un momento dado con aceptación popular.

En resumen, ambas metodologías obtienen un resultado similar y corroboran que en Costa Rica existe un amplio apoyo a la democracia. Aunque en promedio dan resultados similares, los casos individuales no muestran una correlación. Aunque es necesario profundizar sobre las razones de este resultado, pareciera ser que un motivo importante es que miden dimensiones distintas del apoyo ciudadano a la democracia.

3.7 Un resultado sorpresivo: las actitudes hacia un golpe de estado

En la presente ocasión se incluyó, por primera vez en Costa Rica, una medición sobre el apoyo ciudadano a un eventual golpe de estado ante eventuales condiciones difíciles que afrontara la población. La medición se elabora a partir de las respuestas de los entrevistados a cinco preguntas (Recuadro III.4).⁴³ Sus resultados se expresan en una escala de 0 a 100, donde 0 es el más alto nivel de apoyo o justificación de un golpe de estado como solución ante problemas difíciles, la actitud más antidemocrática; y 100 es la calificación que recoge la actitud de mayor rechazo a un golpe estado la actitud más democrática.⁴⁴ Las pruebas estadísticas indican que las seis preguntas miden una misma dimensión y que se trata de una medida confiable y válida.⁴⁵

Los resultados obtenidos fueron sorpresivos. Indican que, al ser interrogados sobre condiciones concretas que podrían alegarse para dar un golpe de estado, en el mejor de los casos 40 de cada 100 personas estarían de acuerdo en esta medida (ante mucha corrupción); en el peor, 65 de cada 100 estarían de acuerdo con un golpe de estado cuando hay muchas protestas sociales (Gráfica III.12).

Además, dentro del índice, la preferencia por la democracia no es solo en relación con un régimen autoritario sino en relación con un conjunto de valores socialmente relevantes como el buen gobierno y el desarrollo.

⁴³ Para disminuir la incidencia de las “no respuestas” se efectuó un procedimiento de rescate de los casos donde las personas respondieron tres y cuatro preguntas. En estos casos, se asignó a las no respuesta el promedio de las calificaciones de la persona en los rubros que sí contestó. Mediante este procedimiento se elevó el número de casos válidos quedó en 1408 personas ().

⁴⁴ La calificación 0 indicaría que la persona que contestó “se justificaría” a las preguntas JC1, JC4, JC10 y JC12; y en la pregunta JC1A contestó “sí podría haber.” La calificación 100 indicaría que la persona que contestó “no se justificaría” a las preguntas JC1, JC4, JC10 y JC12; y en la pregunta JC1A contestó “nunca habría razón.”

⁴⁵ El análisis factorial refleja que las cinco preguntas se agrupan en un solo factor, con cargas superiores a Para medir la confiabilidad de la escala en la que se basa el Índice de apoyo al sistema se emplea la prueba estadística del alpha de Cronbach. Cuando el alpha de Cronbach es superior a .70, la medida en cuestión es confiable.

Recuadro III.4 Preguntas empleadas para estudiar el apoyo a un golpe de Estado
 Ahora hablemos de otros temas. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que hubiera un golpe de estado. En su opinión bajo qué situaciones se justificaría que hubiera un golpe de estado.

JC1. Frente al desempleo muy alto (1) Se justificaría (2) No se justificaría (8) NS

JC4. Frente a muchas protestas sociales (1) Se justificaría (2) No se justificaría (8) NS

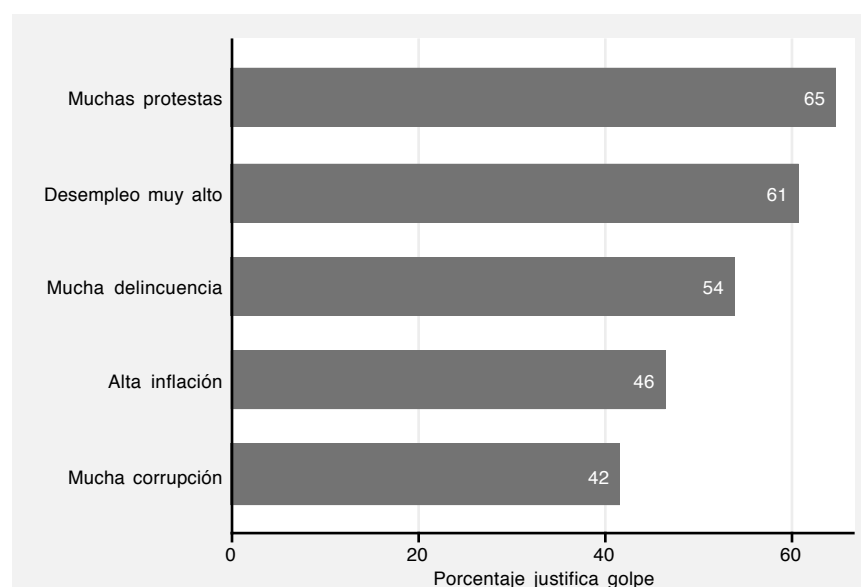
JC10. Frente a mucha delincuencia (1) Se justificaría (2) No se justificaría (8) NS

JC12. Frente a la alta inflación, con aumento excesivo de precios (1) Se justificaría (2) No se justificaría (8) NS

JC13. Frente a mucha corrupción (1) Se justificaría (2) No se justificaría (8) NS

JC1A. ¿Cree Ud. que alguna vez puede haber razón suficiente para un golpe de estado o cree que nunca hay suficiente razón? (1) Si podría haber (2) Nunca habría razón (8)NS

Gráfica III.12 Justificación de un golpe de estado como respuesta a problemas políticos, 2004, escala 0-100



Cuando se analizan las preguntas en su conjunto, una parte importante de la ciudadanía costarricense estaría de acuerdo que ante todas o casi todas estas condiciones, el golpe se justificaría. Un 45.2% de las personas que opinaron aceptan que siempre o casi siempre se justificaría un golpe de estado (en al menos cuatro de las cinco preguntas contestaron que habría justificación para un golpe de estado). Por el contrario, solo un 29.3% rechaza enfáticamente tal acción en todas las ocasiones: los que están ubicados en la categoría “nunca” (Tabla III.8).

En perspectiva comparada, los resultados de Costa Rica no son inusuales en América Latina (Seligson & Carrión, 2002). Cuando se examina el puntaje promedio en el Índice de justificación del golpe de estado, todos los países con la notable excepción de Nicaragua, tienen un puntaje promedio de 50 o más en la escala de 100 -México, Guatemala, Panamá y Colombia muestran puntajes superiores a 60. El nivel de Costa Rica es similar al de El Salvador y Honduras (Gráfica III.13).

Tabla III.8 Nivel de justificación de un golpe de estado al analizar las cinco situaciones en su conjunto

Categorías a/	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre/casi siempre	636	42,4	45,2	45,2
A veces	248	16,5	17,6	62,8
Casi nunca	111	7,4	7,9	70,7
Nunca	413	27,5	29,3	100,0
Total	1408	93,9	100,0	
Perdidos Sistema	92	6,1		
Total	1500	100,0 ^a		

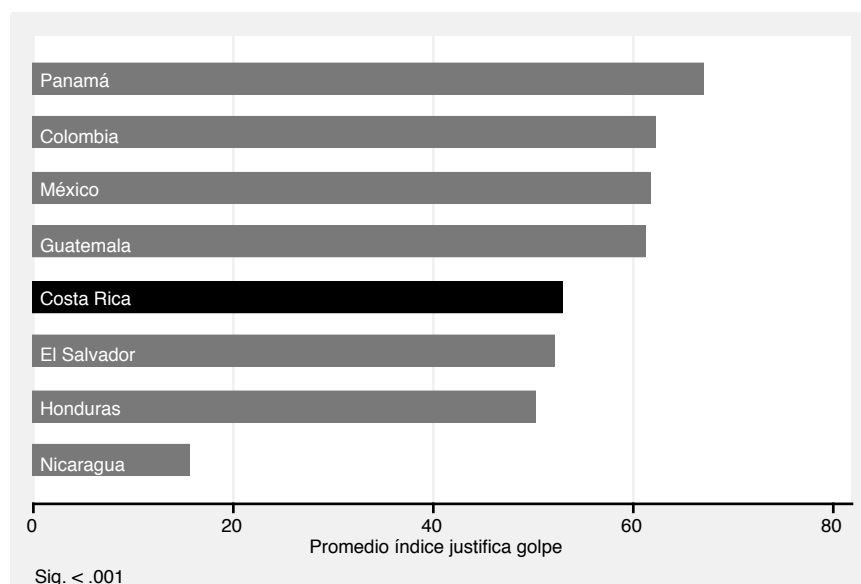
a/ *Siempre/casi siempre*: personas que contestan en al menos 4 de las cinco situaciones interrogadas por las preguntas, que sí habría justificación para un golpe de estado.

A veces: personas que justifican un golpe de estado en 2 o 3 de las cinco situaciones

Casi nunca: personas que contestan en 1 de las 5 preguntas que sí se justificaría

Nunca: personas que en todas las preguntas rechazaron justificar un golpe de estado.

Gráfica III.13 Índice de justificación de golpe de estado en perspectiva comparada



Empero, esta situación es sorpresiva desde múltiples perspectivas. La historia reciente de Costa Rica muestra que el apoyo a la democracia subió ante los embates de la fuerte crisis económica que azotó el país a inicios de la década de 1980 (Seligson & Gómez, 1987). Lamentablemente, no se tiene una medición sobre el tema de la justificación del golpe de estado en esta época. Además, el apoyo de los costarricenses a la democracia, documentado en este mismo capítulo, es alto –el más alto de la región– y ha subido en los últimos años. Una segunda medida independiente del apoyo a la democracia, también consignada en este capítulo, confirma el alto nivel de apoyo de los costarricenses a la democracia. Por último, si bien estudios recientes sobre cultura política en el país habían mostrado que muchos favorecían una “mano dura” para dirigir

el país, la evidencia sugiere que por ello las personas abogaban, más que por una salida autoritaria, por un liderazgo decisivo aunque respetuoso de las libertades.

La sorprendente amplitud del apoyo a un golpe de Estado debe pues analizarse con más cuidado. En principio, parecieran impropiedades dos reacciones: por una parte, tomar los resultados a “valor facial” sin hacer pruebas ulteriores y concluir ad litteram que los costarricenses quieren un golpe de estado; o, por otra, descalificar los resultados arguyendo que las personas se confundieron o no saben de lo que hablan. En cuanto a la primera reacción, cabe anotar que no se formuló una pregunta abierta para indagar lo que entienden por golpe de Estado. En cuanto a la segunda, estaría dando espacio al prejuicio de que, como Costa Rica es una democracia madura y estable, el resultado está “malo”.

Afortunadamente tenemos medios para realizar un análisis más detallado de estos resultados. En primer lugar, en otra parte del cuestionario se incluyó la pregunta AUT1 que explícitamente interroga sobre el líder fuerte que llegue a gobernar en tiempos difíciles aún cuando no sea electo. La pregunta dice así:

AUT1. Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto. Otros dicen que aunque las cosas no funcionen bien, la democracia electoral, o sea el voto popular, es siempre lo mejor. ¿Qué piensa? (1) Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido (2) La democracia electoral es lo mejor (8) NS/NR

El 93% dijo que la democracia electoral es siempre lo mejor. Solo el 7% está de acuerdo con un líder fuerte no electo. Así, pues, pareciera que las personas no implican el rompimiento del régimen democrático cuando manifiestan apoyar un golpe de Estado. Pero esta conclusión preliminar es necesario fundamentarla más, pues la pregunta se podría argumentar que AUT1 coloca a las personas frente una petición de principio: romper o no la democracia. En una sociedad en la que se sabe que, en principio, la democracia goza de apoyo difuso, las personas pueden sentirse incómodas de reconocer que están de acuerdo con acabarla. Además, la indagación sobre eventuales justificaciones a un golpe de Estado remite a reacciones frente condiciones concretas.

Las cinco preguntas que miden las actitudes no delegativas del Índice de orientación democrática son aquí relevantes. Como fue visto, ellas indagan sobre el grado de acuerdo de las personas con que el presidente, ante problemas difíciles, adopte medidas autoritarias como, entre otros, poner orden por la fuerza, controlar los medios de comunicación y dejar de lado los partidos. Es decir, que el presidente haga abusos similares a lo que se harían cuando un golpe de estado se lleva a cabo. Estas preguntas, como se dijo, miden una misma dimensión y son confiables.

El cruce de la variable “justificación de golpe de Estado” con la de “actitudes no delegativas” permite examinar cuán sólidas son las actitudes justificadoras de un golpe. Se espera que quienes siempre o casi siempre apoyan un golpe tengan actitudes muy delegativas, es decir, apoyen que el presidente cometa abusos. Los resultados son, sin embargo, muy diferentes. Una tercera parte de los que siempre o casi siempre justifican un golpe, no están de acuerdo con que un Presidente autoritario. Aunque, como era de esperarse, entre los que nunca justificarían el golpe de Estado la mayoría no está de acuerdo con un Presidente delegativo, no deja de ser llamativo que una parte de ellos sí lo estaría. En resumen, la solidez de la justificación/rechazo a un golpe de estado no parece ser uniforme (Tabla III.9).

Un primer resultado importante es que las personas que apoyan consistentemente medidas antidemocráticas son un grupo minoritario del total. Nótese que las personas que

siempre, casi siempre y a veces apoyarían un golpe de estado y además tienen actitudes no delegativas bajas son el 10.7% del total. Por el lado negativo, un resultado importante es que los que consistentemente se oponen a estas medidas autoritarias son también minoritarios. El tercer resultado es que la mayoría, cerca de 7 de cada 10 personas muestran distintos matices de ambivalencia.

Tabla III.9 Nivel de justificación de un golpe de estado y actitudes no delegativas

Nivel de justificación golpe de estado		Actitudes no delegativas			Total
		Alto	Medio	Bajo	
Siempre/casi siempre	Recuento	198	284	149	631
	% del total	14,2%	20,4%	10,7%	45,3%
A veces	Recuento	101	98	46	245
	% del total	7,3%	7,0%	3,3%	17,6%
Casi nunca	Recuento	45	50	14	109
	% del total	3,2%	3,6% ^a	1,0%	7,8%
Nunca	Recuento	211	128	68	407
	% del total	15,2%	9,2%	4,9%	29,2%
Total	Recuento	555	560	277	1392
	% del total	39,9%	40,2%	19,9%	100,0%

^a La dimensión de actitudes no delegativas del Índice de orientación democrática, se recodificó la escala 0-10 en tres categorías: (a) Alto: 0-33, (b) Medio: 34-67 (c) Bajo delegativo: 67-100. El índice de justificación de un golpe de Estado se recodificó la escala 0-100 en cuatro categorías: (a) Siempre/casi siempre: <50 puntos; (b) a veces: 50 < 83.3; (c) casi nunca: 83.3 < 99.9; (d) nunca: 100 puntos

En síntesis, pueden distinguirse cinco tipos, que agrupan el 94% de los entrevistados que contestaron a las preguntas bajo análisis:

- Grupo 1: Los que siempre, casi siempre y a veces justifican un golpe de Estado y además tienen actitudes fuertemente delegativas. Justifican tanto el golpe el general como las medidas que típicamente se adoptan en estas circunstancias. Son 149 personas, el 10.7% del total que respondieron.
- Grupo 2: Los que nunca o casi nunca justificarían un golpe de Estado y además se oponen fuertemente a que el presidente adopte medidas autoritarias. Son el grupo contrario al anterior, levemente más grande, compuesto por 256 personas, el 18.4% del total que respondieron.
- Grupo 3: Las personas que siempre, casi siempre o a veces justificarían un golpe y con un nivel intermedio de apoyo/rechazo a las medidas autoritarias. Aunque simpatizan, en general, con el golpe pero no están totalmente convencidos con políticas autoritarias concretas. Son 382 personas, el 27.4% del total.
- Grupo 4: Las personas que nunca o casi nunca apoyarían un golpe y con un nivel intermedio de apoyo/rechazo a medidas autoritarias. Son 178 personas o 12.8% .
- Grupo 5: Las personas que parecieran encerrar una contradicción entre una fuerte justificación a un eventual golpe de estado (siempre, casi siempre y a veces) y un fuerte rechazo a las medidas autoritarias. Son un grupo extendido compuesto por 299 personas, el 21.4% del total.

Se estudió el perfil socioeconómico básico de estos grupos y sus actitudes en relación el apoyo a la democracia y la tolerancia al ejercicio de derechos por parte de los grupos que menos les gustan. Los resultados se comportan de la manera esperada. Si se

comparan los grupos opuestos, los que no justifican un golpe de estado ni medidas autoritarias puntúan, en promedio, más alto en el Índice de apoyo al sistema (71.0) y el Índice de tolerancia política (65.2) que el grupo de personas delegativas que apoyan un golpe de estado (69.0 y 57.0, respectivamente en los índices mencionados). En términos sociodemográficos, el grupo que apoya un golpe de estado y las medidas autoritarias tiene una menor edad promedio; menos años de escolaridad promedio y en él predominan las mujeres y las personas no casadas. Este patrón se reproduce, con matices, en los grupos adyacentes a los opuestos: el grupo 5 que no justifica el golpe pero tiene un nivel medio de actitudes delegativas se parece a los más demócratas (grupo 1); y el grupo 3 que justifica el golpe pero no es completamente delegativo se parece al grupo 2 (que apoya consistentemente medidas autoritarias). Y, el grupo 4 que tiene actitudes contradictorias en relación con un golpe de estado muestra también actitudes contradictorias en otras variables: en términos de apoyo al sistema es el que más bajo puntúa, pero en términos de su tolerancia al ejercicio de derechos tiende a puntuar alto (Tabla III.10).

Tabla III.10 Perfil sociodemográfico y político de los grupos según su justificación a un golpe de Estado y actitudes no delegativas

Variables	Grupo 1 No justifica golpe No delegativo	Grupo 5 No justifica golpe Delegativo Medio	Grupo 3 Justifica golpe Delegativo Medio	Grupo 2 Justifica golpe Delegativo	Grupo 4 Justifica golpe No Delegativo
(N)	(256)	(178)	(382)	(195)	(299)
% Mujeres	46,1	47,8	51,8	53,8	51,2
% Casados	61,3	55,6	44,8	41,5	44,8
Edad promedio	44,1	44,7	38,6	36,7	36,6
Años de escolaridad	9,5	8,9	7,8	8,2	8,9
Nivel de riqueza	8,4	7,9	7,6	8,4	7,9
% GAM	49,6	43,3	46,1	48,7	46,8
Índice apoyo al sistema	71,8	69,6	66,2	69,0	63,0
Índice tolerancia política	65,2	56,5	57,9	57	58,5
Índice intolerancia a corrupción	91,5	91,1	88,7	86,6	91,6

Estos resultados refuerzan los motivos para interpretar con cautela las preguntas sobre golpe de estado. Desde una perspectiva comparada, aún los que más fuertemente justifican el golpe de estado y las medidas autoritarias por un presidente puntúan relativamente alto en el índice de apoyo al sistema. En efecto, el grupo que peor puntúa en este índice (Grupo 4) obtiene, en promedio, un 63.6 de 100. Este valor que está por encima del promedio nacional en el resto de los países del estudio. Esto aconseja, para una próxima indagación sobre el tema complementar las preguntas con una que indague lo que la gente entiende por golpe de estado y aplicar una metodología cualitativa para profundizar.

En síntesis, tanto cuando se interroga en general sobre el rompimiento de un régimen democrático, como cuando se examina las actitudes no delegativas concretas, la mayoría de quienes dijeron apoyar un golpe de Estado no parecen estar pensando en una salida autoritaria ante problemas económicos y políticos.

Capítulo IV. Corrupción en los asuntos públicos

4.1 Contexto

El artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los funcionarios públicos –y por extensión los representantes electos– son “simples depositarios de la autoridad” (República de Costa Rica, 2004). Esto significa que su autoridad no es originaria sino derivada de la soberanía popular. Como depositarios de autoridad, en el ejercicio de sus cargos los funcionarios públicos y representantes no pueden ir más allá de las normas constitucionales y legales. En otras palabras, quienes detentan el poder están sujetos a la ley.

Las normas constitucionales y legales establecen los fines, procedimientos y ámbitos para el uso de los recursos que les han sido confiados a representantes y funcionarios públicos. Estipulan como delitos contra la función pública la malversación de fondos, su uso para fines no estipulados por la ley o sus reglamentos, o su uso mediante procedimientos que legal o administrativamente no han sido expresamente autorizados. Esto es así porque en materia de derecho público, las autoridades no pueden hacer aquello que la ley expresamente no faculta.⁴⁶ De ahí que, desde una perspectiva democrática, la corrupción en el ejercicio de la función pública es una trasgresión a la legalidad democrática.⁴⁷ Es un uso ilegítimo de la autoridad, mediante el cual un funcionario público o un representante electo se atribuye poderes que no posee. En este sentido, resultan irrelevantes las motivaciones o los fines que el trasgresor arguya para transgredir la legalidad⁴⁸. En síntesis, corrupción es un término antitético a democracia porque viola una de sus premisas básicas: que en una democracia, el poder está sujeto a la ley. Por ello, un componente estructural de un Estado democrático de derecho son los mecanismos de “accountability horizontal” para velar, o en su caso, sancionar el uso indebido de la autoridad (O’Donnell, 2003; O’Donnell, 1997, 1998).

Además, una extendida corrupción puede tener efectos perniciosos sobre la legitimidad de un sistema político. Si los ciudadanos observan que las autoridades públicas trasgreden, con impunidad, las leyes y utilizan en beneficio propio o de su círculo los recursos públicos, su confianza en ellos y en la institucionalidad que permite

⁴⁶ Este principio es el inverso al que priva en el derecho privado: aquí las personas pueden hacer todo aquello que la ley expresamente no prohíbe.

⁴⁷ Por corrupción se entiende el uso de la autoridad o los recursos públicos para fines privados, propios o de terceros, mediante prácticas que están sancionadas por las leyes nacionales o los tratados internacionales que el país ha suscrito y ratificado .

⁴⁸ Una excusa frecuentemente esgrimida en diversos países de la región (incluyendo Costa Rica) para el uso no autorizado de fondos públicos es el de la “necesidad.” Así, se dice que como el marco legal y administrativo vigente es engorroso y resulta necesario atender las perentorias demandas ciudadanas, transgredir la normativa es un mal menor (y hasta necesario) con el fin de lograr un bien mayor (el bienestar social).

tales abusos puede afectarse seriamente. Esta desafortunada situación puede empeorar si la población se siente afectada por ser víctima de frecuentes y reiterados actos de corrupción. Seligson argumenta, por ello, que la corrupción puede erosionar la legitimidad política (Seligson & Córdova, 2001). Este es un argumento válido aunque, por ser de carácter empírico, es de naturaleza distinta al esbozado en los párrafos anteriores (que resultan de una petición de principio)

En cualquier caso, el tema de la corrupción ha sido sujeto de abundantes estudios empíricos.⁴⁹ En el plano internacional destacan las mediciones internacionales que anualmente realiza Transparencia Internacional.⁵⁰ De acuerdo con estas mediciones de percepción, Costa Rica es, después de Chile (aunque bastante atrás), uno de los países de América Latina donde empresarios y expertos opinan que la corrupción está menos extendida. No obstante, en el plano nacional, las series de opinión pública muestran que, desde mediados de la década de 1990, la percepción acerca de una fuerte penetración de la corrupción en el manejo de los asuntos públicos se extendió a la mayoría de la población (Camp, Coleman, & Davis, 2000; Nora Garita & Poltronieri, 1989; N. Garita & Poltronieri, 1997).

4.2 Percepción sobre la prevalencia de la corrupción

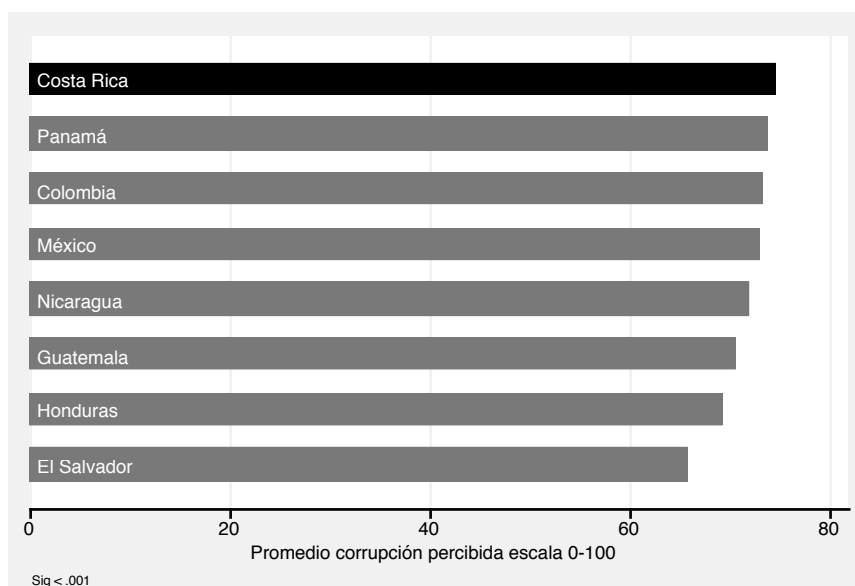
El presente estudio confirma la existencia de una generalizada percepción en la población acerca de la prevalencia de la corrupción en los asuntos públicos. Ante la pregunta EXC 7 “Teniendo en cuenta su experiencia ¿la corrupción de los funcionarios públicos está (1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada,” casi la mitad de la muestra (41.4%) dijo que ésta se encuentra muy generalizada. Si se suman las respuestas muy y algo generalizada, la proporción aumenta a 74.6%. Esto confirma otras mediciones sobre la percepción de corrupción que han sido realizadas en Costa Rica y América Latina.⁵¹ En una perspectiva comparada, la percepción de las y los costarricense sobre lo extendido o generalizado de la corrupción en los funcionarios públicos no es muy distinta a la que prevalece en el resto de los países incluidos en el estudio, aunque es interesante señalar que los ticos parecen ser los más críticos (Gráfica IV.1).

⁴⁹ En este capítulo no se realizará una revisión de la literatura. El lector puede encontrar una síntesis sobre las distintas teorías acerca de las relaciones entre la corrupción en los asuntos públicos y aspectos tales como el desarrollo económico, la estabilidad política y la democracia en el capítulo VI de la Auditoría de la democracia en Ecuador (Seligson & Córdova, 2001). Como ahí se indica, existe un debate acerca del grado que la corrupción “aceita” un sistema político: hay autores que argumentan que la corrupción contribuye a la cohesión social y a la eficacia de un sistema para atender necesidades de la población; otros autores niegan tales efectos benéficos. En los últimos años, el Banco Mundial ha sostenido que la corrupción en los asuntos públicos está asociada negativamente con el desarrollo económico, pues conspira contra la creación de instituciones fuertes (Kaufman, 1998; Kaufman, Kraay, & Zoido-Lobaton, 1999; World Bank, 1997).

⁵⁰ Para una crítica a la metodología de TI véase: (Philps, 2002; Seligson & Córdova, 2001)

⁵¹ En diversos años, la encuesta Latinobarómetro ha incluido la pregunta sobre el grado de corrupción en los funcionarios públicos (en una escala de 0-100). Con excepción de Chile, en los demás países que dicho estudio cubre, los promedios nacionales son superiores a 80. Véase: www.latinobarometro.com

Gráfica IV.1 Percepción acerca de la generalización de la corrupción en los funcionarios públicos en perspectiva comparada, escala 0-100, 2004



Las pocas diferencias en la intensidad de la percepción acerca de lo generalizada que se encuentra la corrupción en los funcionarios públicos en la mayoría de los países y, además, la dificultad para interpretar, cuando existen, esas diferencias, hacen de esta percepción una pobre herramienta para analizar el tema de la corrupción. En efecto, es sabido que el desarrollo de mecanismos de accountability horizontal dentro del Estado es un factor clave para combatir la corrupción: entre más fuertes sean estos mecanismos, más capacidad existe para detectar y sancionar estas prácticas indebidas (O'Donnell, 2003; O'Donnell, 1998; Seligson & Córdova, 2001; World Bank, 1997). Más capacidad de control y sanción implica, en principio, un aumento en los éxitos de la lucha contra la corrupción, por su efecto disuasivo sobre los funcionarios con intención de transgredir la ley; y, cabría esperar también que más éxitos incidieran positivamente sobre las percepciones públicas sobre la corrupción. Pero, precisamente, puede ocurrir lo contrario: entre más expuestos estén los episodios de corrupción más frescos están ellos sobre la memoria de la población y, por tanto, pudiesen tener la inesperada consecuencia de fortalecer la percepción sobre lo extendido de las prácticas corruptas, mientras que la incapacidad de detectar estos casos podría tener el efecto de invisibilizarlas. Debido a estos argumentos es extremadamente difícil entender los motivos para que países con desarrollo institucional muy distintos como Guatemala, Nicaragua y Costa Rica tengan niveles similares de percepción sobre la corrupción de los funcionarios públicos; o las razones por las cuales las percepciones de México y la mayoría de los países incluidos en el estudio son similares cuando, como se verá más adelante, los mexicanos reportan una victimización por actos corruptos que duplica la de esos países.

Dentro de Costa Rica, esta percepción no muestra diferencias importantes según la región del país donde vive la población. Sin embargo, tiende a ser más intensa entre las personas con mayor nivel educativo (R Spearman = $-.091$, sig < $.001$). Así, entre quienes tienen algún nivel de educación post secundaria y respondieron a esta pregunta, el 87.9%

opinó que la corrupción de los funcionarios públicos era algo o muy generalizado, en comparación con el 76.7% de quienes tienen educación primaria o menos.

4.3 Aquiescencia a la corrupción

Una extendida percepción de que la corrupción está generalizada entre los funcionarios públicos no significa que las personas estén molestas por ello. Algunas podrían aceptar los actos de corrupción pública como inevitables, e incluso, de manera más explícita, justificarlos como un medio aceptable (aunque no legal) para el logro de objetivos de carácter individual o colectivo. En otras palabras, una cuestión es lo que las personas creen acerca de lo extendida que se encuentra la corrupción en la gestión de los asuntos públicos y otra es su reacción ante este estado percibido de cosas. Para esclarecer este último tema es necesario indagar el nivel de tolerancia de las personas hacia la corrupción. En el presente estudio, esta tolerancia se indagó mediante seis preguntas que enfrentaban a las personas ante tres situaciones hipotéticas y les solicitaba su opinión al respecto (Recuadro IV.1). Las tres situaciones difieren en la implicación: un acto de corrupción “leve,” uno intermedio y otro “grave”⁵²; asimismo, en cada situación se indagó sobre las dos partes envueltas en la relación: el que paga y el que recibe el pago. Los análisis realizados indican que las seis preguntas miden una misma dimensión y que son una medida confiable y válida⁵³.

Recuadro IV.1 Preguntas empleadas para la tolerancia a la corrupción

En la vida diaria, pasan muchas cosas. Me gustaría que me diga su opinión en los siguientes casos:

CRC1 Supongamos que hay muchos atrasos y trámites excesivos en una oficina pública y una persona paga una propina o da un regalo a un funcionario para que salga rápido el asunto que necesita.

CRC1A Hablando de la persona que paga la propina. Usted diría que esa persona (LEER OPCIONES) 1. No actúa mal, simplemente resuelve su problema 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada

CRC1B. Y pensando ahora en el funcionario que recibió la propina. Ud diría que el funcionario: 1. No actúa mal, ayuda a resolver un problema 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado

CRC2 Una persona paga un poco menos impuestos de lo que debía pero es descubierto por un funcionario de Tributación Directa. Para evitar un fuerte castigo, le da una propina.

⁵² La distinción entre corrupción leve y grave se tomó de los resultados de rondas de grupos focales en Honduras y Costa Rica en el año 2003 efectuadas por la empresa UNIMER RI para el Program Estado de la Nación. Estos grupos focales se realizaron como parte de la preparación del II Informe sobre desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá (Programa Estado de la Nación, 2003b). En todos los grupos las personas distinguieron entre corrupción leve –los actos en los que no hay consecuencias discernibles para terceros y se realizan para solventar una necesidad- y los graves –los actos corruptos en los que la colectividad pierde y donde media ambición desmedida de parte de los funcionarios públicos. En estos grupos focales se encontró una mayor tolerancia de las personas hacia los actos que ellos calificaban como leves.

⁵³ El análisis factorial arrojó que las preguntas CRB1A, CRB1B, CRB2A, CRB2B, CRB3A y CRB3B miden una misma dimensión: con altas cargas, superiores a .628 se agruparon en un mismo factor. El alpha de Cronbach fue muy satisfactorio (.7801).

CRC2A Hablando de la persona que paga la propina. Usted diría que esa persona (LEER OPCIONES) 1. No actúa mal, simplemente resuelve su problema 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada

CRC2B. Y pensando ahora en el funcionario que recibió la propina. Ud diría que el funcionario (LEER OPCIONES): 1. No actúa mal, evita un castigo excesivo 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado

CRC3 La empresa que construyó bien y a tiempo una carretera que el país necesitaba urgentemente, infló el costo para pagar a un ministro porque si no, no le daban el contrato

CRC3A Hablando de la empresa que pagó al ministro. Usted diría que esa empresa (LEER OPCIONES) 1. No actúa mal, simplemente resuelve un problema nacional 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada

CRC3B. Y pensando ahora en el ministro que recibió el dinero. Ud diría que el funcionario (LEER OPCIONES): 1. No actúa mal, ayuda a resolver un problema nacional 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado

La mayoría de las personas tiene una actitud contraria a los actos concretos de corrupción en la gestión pública: ante una situación de soborno para acelerar trámites personales, el 67.8% indica que ambos –tanto el que paga como el que recibe– actúan mal y debe ser castigados. Esta actitud aumenta al 85.1% en el caso de sobornos para evitar el pago de impuestos y al 77.7% en el caso de una empresa que soborne a un ministro (Tabla IV.1).

Tabla IV.1 Actitudes ante situaciones de corrupción

¿Más duro con el que paga o con quien recibe?	CRC1 Soborno para acelerar trámites		CRC2 Soborno para pago impuestos		CRC3 Soborno para obtener obra pública	
		%		%		%
Duro con ambos	1013	67,8	1276	85,1	1164	77,7
Más suave con quien paga	288	19,3	125	8,3	159	10,6
Suave con ambos	170	11,4	80	5,3	167	11,1
Más suave con quien recibe	24	1,6	19	1,3	8	0,5
Total	1495	100,0	1500	100,0	1498	100,0

Nota: CRC1 N= 1495; CRC2 N= 1500; CRC3= 1498

Una mirada más detallada a estas respuestas arroja matices interesantes a la cuestión que, en palabras del soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, puede resumirse así: “¿quién peca más: el que paga por pecar o que el peca por la paga?” Por una parte, nótese que en los tres casos, existe un grupo importante de personas que son más complacientes con el que paga. Este grupo supera varias veces a los que son más duros con el que recibe. En otras palabras, hay mayor condescendencia con el que “paga por pecar.” Por otra parte, nótese que hay más tolerancia cuando el acto de corrupción es más cercano a la vida cotidiana de las personas: ante trámites excesivos y lentos, una de cada tres personas justifica a una de las partes (o a las dos) envueltas en el acto corrupto (33%). Esta tolerancia decrece fuertemente cuando el acto en cuestión tiene una trascendencia pública más tangible: cuando lo que se trata es de escaparse de pagar impuestos, solo un 14.9% de las personas muestran alguna tolerancia con alguna de las partes (o las dos); la proporción aumenta ligeramente al 22.2% cuando se trate de un soborno a un ministro

para “construir una carretera que el país necesita.” En otras palabras, hay un umbral de tolerancia mayor para los actos de corrupción leve y menor para actos de corrupción graves, en el sentido de ocasionar daños al colectivo (Tabla IV.2).

Las seis preguntas de corrupción pueden agruparse en un índice de 0-100, donde 0 indica una actitud de total tolerancia y justificación a un acto corrupto en las tres situaciones analizadas (en todos los casos la persona dice que los actores no actúan mal) y 100 indica una intolerancia radical (en todos los casos la persona dice que los actores actúan mal y debieran ser castigados). Este índice de Intolerancia a la corrupción dio un promedio nacional es de 89.9, lo que indica un elevado grado de intolerancia a la corrupción pública. Hay, sin embargo, diferencias en cuanto a la intensidad de dicha intolerancia. Los factores que ayudan a predecir la intolerancia a la corrupción son básicamente tres: la edad de las personas, el estado civil y los años de educación (Tabla IV.2). Las personas casadas o unidas, las que tienen mayor escolaridad y las de mayor edad son levemente menos tolerantes a la corrupción. El apoyo a la democracia es también estadísticamente significativo, aunque no marca diferencias importantes en la intolerancia a la corrupción. La tolerancia política no es un factor que ayude a predecir la intolerancia a la corrupción.⁵⁴ A las variables antes indicadas, que se mantienen como predictores, se agrega las personas con baja o media religiosidad (sig < .10).

Tabla IV.2 Predictores de la intolerancia a la corrupción

Predictores	B	Beta	Sig.
(Constante)	75,760		,000
REGIONVC Región Valle Central	,359	,010	,769
TAMAÑOC1 Resto Urbano	,359	,008	,805
TAMAÑOC2 Rural	1,616	,046	,212
Q1R Hombre	-,405	-,012	,733
OCUPIR2 Amas de casa	-1,353	-,037	,298
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	3,815	,110	,000
EDR Años de educación	,423	,099	,005
Q2 Edad en años cumplidos?	,156	,149	,000
Q10R Ingreso-en miles-	,002	,014	,693
RIQDX Índice de riqueza	-,066	-,011	,777
Q4RRC1 Religiosidad media	-2,102	-,059	,042
Q4RRC2 Religiosidad baja	-1,506	-,039	,195
ADEMR Índice apoyo a democracia	,049	,056	,032
TOLERP Índice tolerancia	-,029	-,017	,519

Un punto importante de investigar es si la aquiescencia a la corrupción en actos concretos de gestión pública está asociada con una mayor aquiescencia genérica a la corrupción de las autoridades políticas con tal de que éstas sean efectivas a la hora de resolver los problemas sociales y económicas. En diversos países de América Latina las poblaciones suelen excusar a ciertos gobiernos y líderes corruptos con la opinión de que “roban pero hacen” –a su vez, estos gobiernos y líderes corruptos se escudan tras las

⁵⁴ La capacidad explicativa del modelo es baja ($r^2=0.05$). Cuando se introduce los cantones como variables “dummy,” esta capacidad aumenta a casi el doble ($r^2=.0903$).

obras públicas, el progreso, para descalificar las acusaciones de corrupción. Para investigar este tema, en el presente estudio se incluyó la siguiente pregunta:

Anotar 1-7 CRCO1 Finalmente, y en relación con otro tema, dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: No me importaría que un Presidente se aproveche de su puesto con tal de que resuelva los problemas del país⁵⁵

En un ambiente de mayoritaria intolerancia hacia los actos concretos de corrupción en la gestión pública, los más intolerantes son los que menos están dispuestos a que el presidente abuse de su puesto con tal de que resuelva los problemas del país ($r = .182$; $\text{sig} < .01$). Así pues, el argumento de la efectividad para impulsar el progreso no es de recibo para la mayoría de la población (Tabla IV.3). Empero hay un grupo que toleraría un tanto más este argumento: quienes puntúan más bajo en el índice de intolerancia a la corrupción aceptan con más frecuencia que el presidente abuse de su puesto. La intolerancia a los actos concretos de corrupción está positivamente relacionada con el apoyo al sistema ($r = .084$, $\text{sig} < .01$), aunque la asociación es más débil que la anterior, lo mismo que con la no justificación a un golpe de estado ($.064$, $\text{sig} < .05$).

Tabla IV.3 Promedio en los índices de apoyo al sistema, tolerancia política e intolerancia a la corrupción según el acuerdo con que el presidente abuse de su puesto con tal de que sea eficaz

	Nivel alto de acuerdo*		Nivel bajo de acuerdo **	
	N	Media	N	Media
TOLICORR Tolerancia política	223	84,34	1253	90,85
ADEMRR Índice de apoyo a la democracia	225	66,44	1250	67,78
TOLERPR Índice de tolerancia política	223	58,62	1232	57,76

Pregunta CRCO1: "Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: No me importaría que un presidente se aproveche de su puesto con tal de que resuelva los problemas del país" (Recodificada: 0=total acuerdo; 6=total desacuerdo)

* Nivel alto de acuerdo: personas que contestaron 0-2

** Nivel bajo de acuerdo: personas que contestaron 5-6

4.4 Victimización por actos corruptos

¿Vive atrapada la mayoría de las y los costarricenses en un mundo donde son víctimas de actos cotidianos de corrupción? Para estudiar esta cuestión, el estudio formuló una serie de preguntas donde se interroga a las personas si en el último año había tenido que soportar experiencias concretas como víctimas de actos corruptos en una serie de ámbitos de la vida social (Recuadro IV.2).

Recuadro IV.2 Preguntas empleadas para el estudio de la victimización de corrupción

Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en el último año?

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida en el último año?

EXC11. ¿Ha tramitado algo en la municipalidad en el último año? [Si dice no marcar 9, si dice "sí" preguntar lo siguiente]

⁵⁵ La pregunta se recodificó a una escala de 0-6 de la siguiente manera: 0 es la persona que más está de acuerdo con esta afirmación; 6 es la persona que menos de acuerdo está con esta afirmación.

Para tramitar algo en la municipalidad (como un permiso, por ejemplo) durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?

EXC13. ¿UD. trabaja? [Si dice no marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]

En su trabajo, ¿le han solicitado algún pago no correcto en el último año?

EXC14. ¿En el último año, hizo algún trámite con los juzgados, incluyendo juicios de tránsito? [Si dice “no,” marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]

¿Tuvo que pagar una mordida en los juzgados en el último año?

EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice “no,” marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]

Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna mordida o biombo?

EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año? [Si dice “no” marcar 9 si dice “sí” preguntar lo siguiente]

En la escuela o colegio durante el último año. ¿Tuvo que pagar alguna mordida?

Pese a la percepción de un extendida corrupción en el manejo de asuntos de interés público, la gran mayoría de la población entrevistada informa que, en su experiencia personal, no han sido víctimas de un acto de corrupción. En efecto, 85 de cada 100 personas que respondieron a las preguntas sobre el tema, señalaron que no tenían experiencias concretas en el último año; pocas personas (4 en 100) fueron víctimas en más de una ocasión.

Estos resultados no deben interpretarse alegremente: la proporción de víctimas de corrupción (en total, 15% sufrieron uno o más actos corruptos) es cinco veces superior al reportado en los países de Europa Occidental –y para un período de cinco años y no solo de un año como en el presente estudio (Seligson, 2004). Al compararse la proporción de personas que han sido víctimas de al menos un acto de corrupción en el último año, con lo que ocurre en otros países, la conclusión es que en Costa Rica la victimización de la corrupción es, junto con Colombia, la más baja de la región. Sin embargo, no es muy distinta a lo encontrado en la mayoría de los países de Centroamérica donde la proporción de víctimas de actos corruptos ronda aproximadamente el 18%. La única diferencia importante –de Costa Rica y los demás- es en relación con México, país en el que una de cada tres personas revela haber sido víctima de al menos un acto corrupto en el último año (Gráfica IV.2).

En Costa Rica, las víctimas de actos de corrupción no tienen, en términos generales, un perfil muy distinto al resto de la población. A esta conclusión se arriba al analizar los resultados de un modelo de regresión logística (la variable dependiente es dicotómica: víctima – no víctima).⁵⁶ Tienden a tener un mayor ingreso (Q10R) y, en general, las amas de casa son menos víctimas de corrupción que el resto de las personas (OCUP1R2) ($\text{sig} < .1$). También se examinó si las diferencias locales ayudan a predecir la victimización o incidencia de la corrupción (Modelo B que introduce los 30 cantones como variables “dummies”). Los resultados fueron negativos, pues la inclusión de estas variables modificó muy levemente la capacidad predictiva del modelo A (Tabla IV.4).

Del conjunto de variables examinadas únicamente dos: amas de casa y nivel de ingreso fueron estadísticamente significativos ($\text{sig} < .1$). En general el modelo A tiene muy baja capacidad predictiva (R^2 Cox y Snell = .016).

⁵⁶ Debido a la baja incidencia de la corrupción (solo 4% habían experimentado dos o más actos de corrupción) se dicotomizó esta variable: las víctimas de al menos un acto de corrupción y las no víctimas.

Gráfica IV.2 Proporción promedio de personas víctimas de al menos un acto de corrupción por país

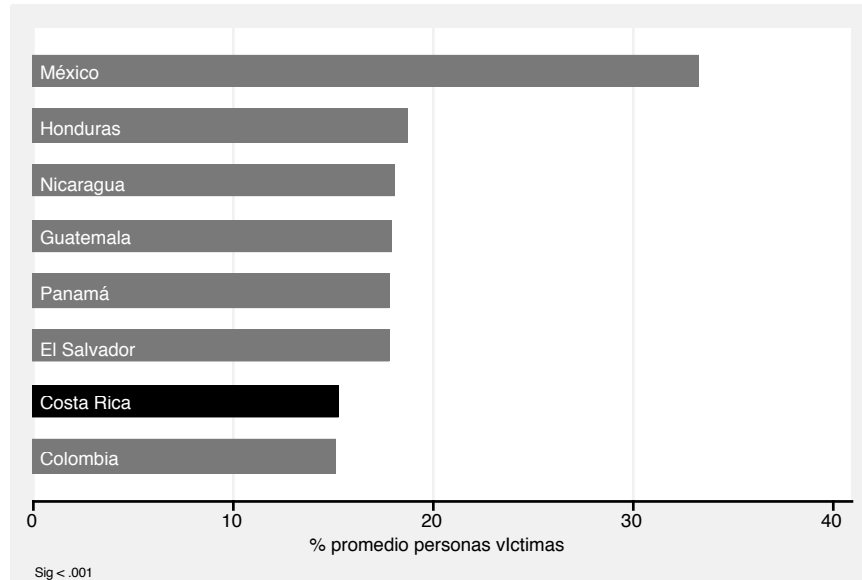


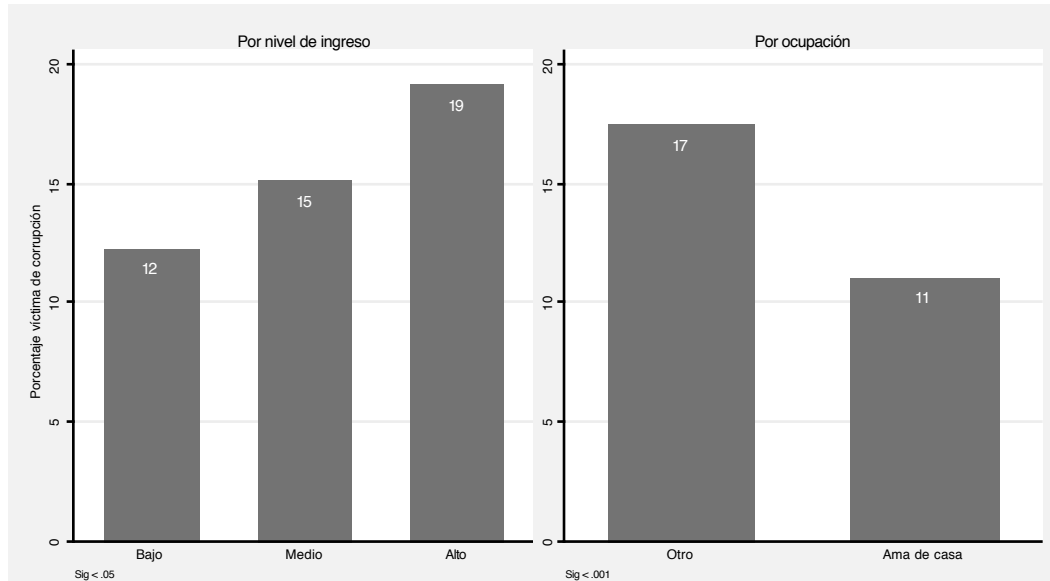
Tabla IV.4 Predictores de la victimización de actos corruptos

Variables	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
REGIONVC(1)	,172	,211	,665	1	,415	1,187
TAMAÑO			,136	2	,934	
TAMAÑO(1)	-,031	,245	,016	1	,900	,970
TAMAÑO(2)	-,078	,219	,129	1	,720	,925
Q1R(1)	,017	,191	,008	1	,931	1,017
OCUP1R2(1)	-,456	,225	4,099	1	,043	,634
Q11R2(1)	,253	,162	2,434	1	,119	1,287
EDR	-,006	,025	,056	1	,813	,994
Q2	-,005	,005	,958	1	,328	,995
Q10R	,001	,001	3,151	1	,076	1,001
RIQDX	-,006	,039	,028	1	,868	,994
Q4RR			2,606	2	,272	
Q4RR(1)	,072	,177	,164	1	,685	1,074
Q4RR(2)	,295	,188	2,462	1	,117	1,344
TOLICORR	-,005	,004	1,570	1	,210	,995
Constante	-1,382	,590	5,484	1	,019	,251

La victimización por actos de corrupción de funcionarios públicos es mayor a más ingreso de la población: entre los de alto nivel de ingreso, la incidencia es de 19%, comparado a 12% de la población con bajo nivel de ingreso (Gráfica IV.3). Las amas de

casa que, en principio, pasan más tiempo dentro del hogar que la población ocupada, muestran una menor tasa de victimización (Gráfica IV.3). En cambio, la victimización de la corrupción no está asociada con una mayor o menor aquiescencia a la corrupción (sig=.30). Tanto víctimas como no víctimas de la corrupción tienen un nivel similar de intolerancia a la corrupción.

Gráfica IV.3 Víctimas de actos de corrupción por nivel de ingreso y ocupación



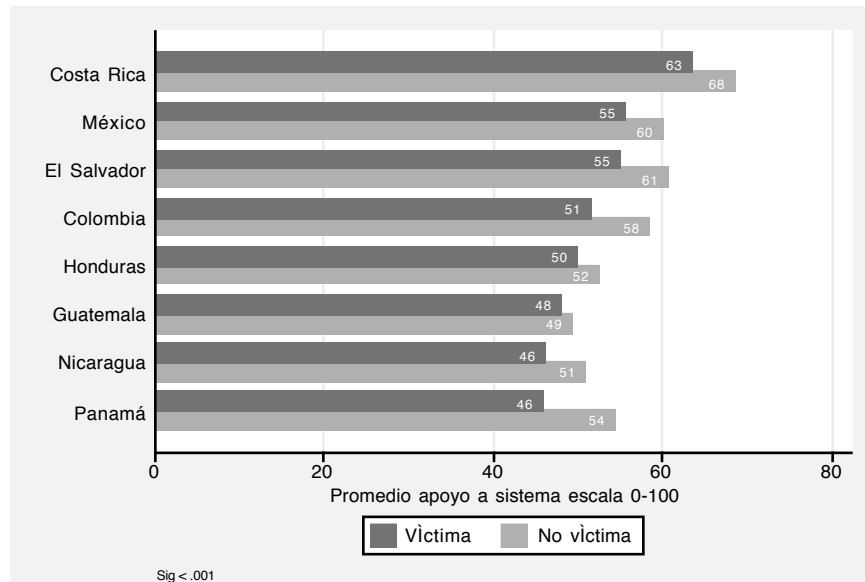
4.5 Corrupción y apoyo a la democracia

El estudio confirma un hallazgo de otras investigaciones del proyecto de Opinión Pública de la Universidad de Vanderbilt: las víctimas de actos corruptos muestran menor nivel de apoyo al sistema. En el índice de apoyo al sistema de Seligson, las víctimas de al menos un acto de corrupción puntúan en promedio 63.1 en una escala de 100, por debajo del promedio nacional (67.9). En cambio, las personas que no han sido víctimas exhiben un más alto apoyo al sistema (69.2 en promedio). En otras palabras, ser víctima de la corrupción está asociado con un menor apoyo al sistema, aunque el efecto no es marcado.⁵⁷

Este hallazgo no solo es válido para Costa Rica: en todos los países incluidos en el estudio 2004, las víctimas de actos corruptos exhiben un menor apoyo al sistema democrático que las no víctimas. Las diferencias son estadísticamente significativas (sig < .001) y, además, en países como México, Guatemala, Panamá y Colombia, son marcadas (Gráfica IV.4)

⁵⁷ No se encontraron diferencias importantes entre las víctimas y no víctimas de actos corruptos al examinar su nivel de tolerancia a los derechos políticos de los demás ni en relación con su aquiescencia a la corrupción. En estas materias, ambos grupos muestran patrones muy similares al promedio nacional.

Gráfica IV.4 Diferencias promedio nacionales en el apoyo al sistema democrático según victimización de corrupción por país



Capítulo V. Protección de derechos y seguridad ciudadana

5.1 Introducción

La protección de los derechos de las personas es un pilar de la democracia.⁵⁸ Sin esta protección se afecta una de las premisas de un sistema democrático: la igualdad política y civil de las personas –igualdad por lo demás, reconocida y garantizada por la Constitución Política de Costa Rica. La ausencia de protección a los derechos ciudadanos crea incertidumbre y, por tanto, inseguridad: si las personas están desprotegidas temen por su integridad física y patrimonial y su dignidad, pues son vulnerables a las amenazas (reales y potenciales) de otras personas, organizaciones o instituciones. Esta situación atenta contra su libertad, pues limita el rango de opciones de vida que ésta pueda querer para sí. Además, hace depender la libertad individual de los recursos económicos y políticos con que cada persona cuente para movilizar los medios necesarios para proteger sus derechos.

La protección de derechos requiere de un entramado de instituciones con las debidas competencias legales y capacidades financieras, técnicas y administrativas que las habilite para cumplir razonablemente con esta función. En el caso costarricense ha existido un vigoroso desarrollo institucional en esta materia durante las últimas décadas, centrado sobre el fortalecimiento del Poder Judicial y entidades como la Defensoría de los Habitantes. Este desarrollo institucional ha ampliado sustancialmente el acceso de las personas a la protección de sus derechos (véase Capítulo 1). Desde un punto de vista internacional, Costa Rica ha sido constantemente reconocida como un líder en la promoción y protección de los derechos humanos.

Podría entonces esperarse que una sociedad que reconoce, promueve y tutela los derechos de las personas sea una en la que éstas vivan en un entorno seguro, con bajas amenazas a la integridad o el patrimonio de las y los habitantes. Si bien es incuestionable que el país tiene niveles de criminalidad inferiores a los de la región inmediata (Cruz,

⁵⁸ En los últimos años se ha generado un debate en los estudios comparados sobre la democracia sobre la relación entre democracia y Estado democrático de derecho. En las teorías procedimentales de la democracia, la existencia de un Estado de derecho es asumido, implícita o explícitamente, como una condición necesaria –aunque externa al régimen (Robert Dahl, 1971, 1989; Robert. Dahl, 1999). Más recientemente, O'Donnell ha postulado un concepto más amplio de democracia –democracia más allá del régimen- según la cual el Estado democrático de derecho es una dimensión constitutiva a la democracia. Argumenta que en el reconocimiento de la igualdad política de los ciudadanos está implicada un conjunto de instituciones capaces de reconocer y tutelar dichos derechos (O'Donnell, 2003; O'Donnell, 1997, 1998). Otros autores han planteado la crucialidad que tiene la consolidación de un Estado de derecho para la democracia, asunto poco tratado por las teorías procedimentales de la democracia (Becker, 1999)

2003; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004; United Nations, 1999), la observación de las estadísticas criminológicas de los últimos veinte años indica un gradual pero sostenido crecimiento de la delincuencia, en especial, de los delitos con violencia (Carranza & Solana, 2004). Este crecimiento ha contribuido a generar un fuerte incremento en la sensación de inseguridad ciudadana (Nora Garita & Poltronieri, 1989; N. Garita & Poltronieri, 1997; Programa Estado de la Nación, 2003a; UNIMER R.I., 1996, 1999, 2000, 2001, 2002).

El presente capítulo se dedica al tema de la protección de derechos y la seguridad ciudadana desde la óptica de las percepciones y experiencias de las personas. Procura identificar, además, posibles implicaciones para la convivencia democrática. Se divide en cinco secciones además de esta introducción. En la segunda sección se aborda el tema de la confianza ciudadana en las instituciones de protección de derechos. En la tercera sección se analiza las percepciones sobre seguridad ciudadana. Posteriormente se estudia las medidas que los hogares han adoptado ante estas percepciones. La sección quinta y final explora la incidencia de los actos delincuenciales y provee un perfil básico de las víctimas de estos actos.

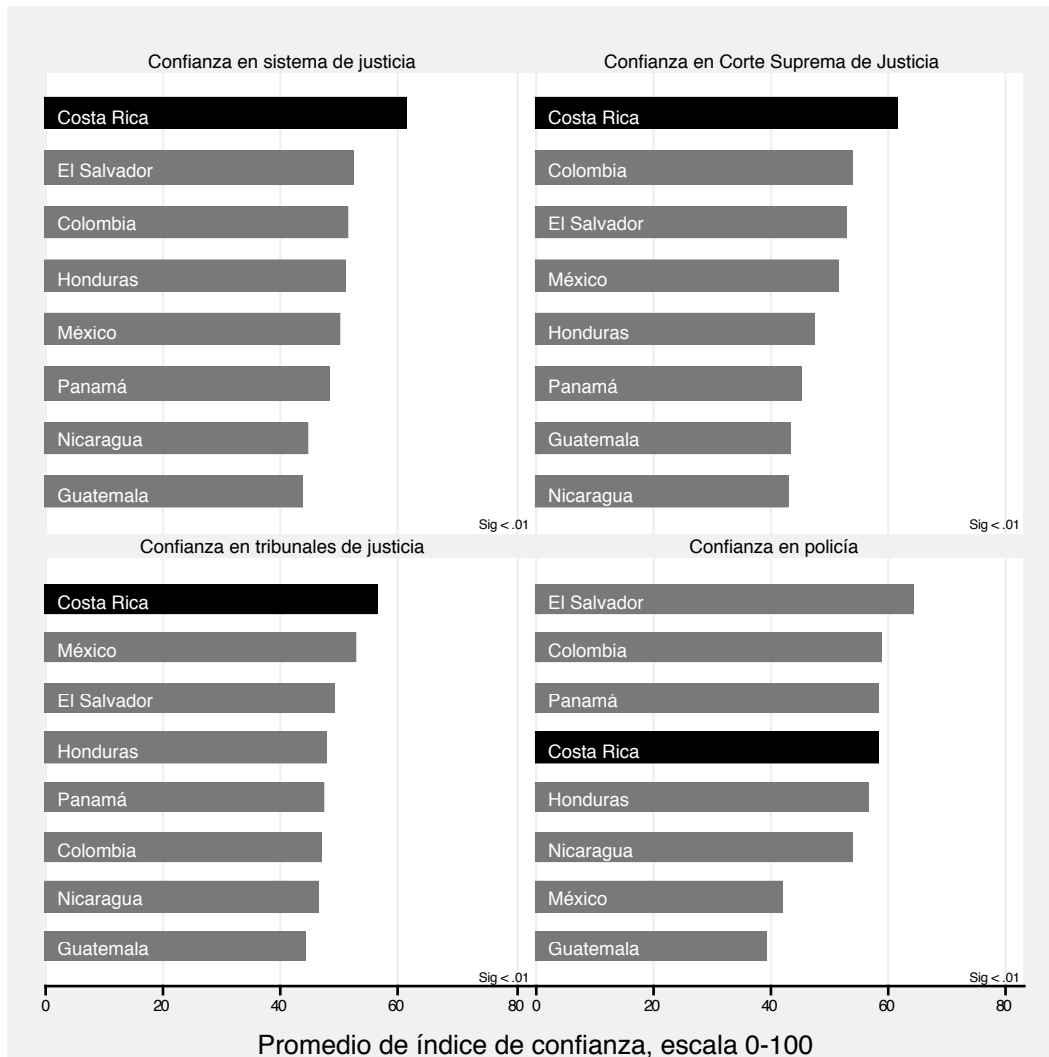
5.2 Protección de derechos

Las y los costarricenses tienden a confiar en las principales instituciones del Estado dedicadas a la protección de derechos: el sistema de administración de justicia, la Defensoría de los Habitantes y la policía. En una escala de 0 (ninguna confianza) a 100 (plena confianza), todas puntúan alrededor de 60, siendo la Defensoría de los Habitantes la mejor reputada. Así, los tribunales de justicia obtienen 56,8 puntos, el sistema de justicia (en general), 61,6; la Defensoría, 73,0 puntos; la policía, 58,6 y la Corte Suprema de Justicia, 62,0. Como fue visto en el Capítulo 3, no son puntajes especialmente altos cuando se le compara con otras instituciones públicas, pero sí cuando se comparan con entidades similares en otros países de la región (Gráfica V.1).

La confianza de las y los costarricenses en las instituciones de protección de derechos es la más elevada de la región y la más consistente. Cuando se comparan las instituciones que existen en todos los países incluidos en el estudio (tribunales, sistema de justicia, policía y Corte Suprema), el caso costarricense es el único donde las cuatro tienen un nivel de confianza superior a 50 puntos en una escala de 100. En Guatemala ninguna entidad logra 50 puntos; en Honduras, Nicaragua y Panamá solo la policía sobrepasa este nivel. Por otro lado, Colombia y El Salvador se asemejan un tanto a la situación costarricense (en ellos, 3 entidades superan los 50 puntos) pero, con excepciones –por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en El Salvador– reciben una confianza promedio ligeramente inferior. En todos los casos, excepto el costarricense, existen fuertes diferencias en el nivel de confianza según la institución que se analice (en ocasiones las diferencias son de 10 puntos porcentuales o más en una escala de 100). En la mayoría, la policía es la entidad que mejores marcas recibe, mientras que en Costa Rica salen mejor paradas las instituciones del Poder Judicial.⁵⁹

⁵⁹ La Defensoría de los Habitantes (o Procuraduría de Derechos Humanos) fue estudiada solo en 4 países (Costa Rica, Colombia, El Salvador y Panamá). En estos casos se repite el patrón de confianza anotado para las otras entidades: la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica obtiene 73 puntos de 100, frente a 65 puntos en Colombia y 64 puntos en Panamá.

Gráfica V.1 Confianza promedio en las instituciones de protección de derechos en perspectiva comparada



Con el propósito de explorar los predictores de la confianza en las instituciones de protección de derechos se efectuaron dos procedimientos. En primer lugar se analizaron las preguntas B1 (Confianza en tribunales de justicia), B10 (Confianza en sistema de justicia), B17 (Confianza en Defensoría de los Habitantes), B18 (Confianza en policía) y B31 (Confianza en la Corte Suprema de Justicia) para determinar si, vistas como conjunto y no de manera individual, sirve para medir la confianza general en la protección institucional de los derechos de las y los habitantes. Para ello se aplicó un análisis factorial y los resultados fueron satisfactorios.⁶⁰ En consecuencia se creó un

⁶⁰ La medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin fue .833. Las cargas factoriales fueron altas en todos los casos: B1=,742, B10=0,795, B17=0,667, B18=0,739, B31=0,799. El Alpha de Cronbach fue muy satisfactorio=.804

índice denominado PRODE, que varía entre 0 y 100, donde 0 es una situación de plena desconfianza en todas las cinco instituciones y 100 es una situación de completa confianza en estas entidades. El promedio nacional de confianza en las instituciones de protección de derecho, según el Índice PRODE, es relativamente alto: 62.4 en la escala de 100 puntos.

En segundo lugar se corrieron tres modelos de regresión lineal tomando el Índice PRODE como variable dependiente. El modelo A incluye como variables independientes las variables sociodemográficas que han sido empleadas a lo largo del presente estudio y algunas actitudes políticas y experiencias pero sin considerar el Índice de apoyo a la democracia de Seligson. El modelo B incluye las variables anteriores más el Índice de apoyo. El modelo X incluye, además, los cantones como “variables dummies.” El modelo A1 tiene una débil capacidad predictiva ($r^2 = .064$). Al incluir el Índice de apoyo a la democracia (ADEMR), la capacidad predictiva del modelo aumenta sustancialmente ($r^2 = .503$). La inclusión de los 30 cantones como variables dummies casi no tiene impacto adicional ($r^2 = .511$). Esto quiere decir que, en materia de confianza en las instituciones de protección de derechos, las especificidades locales no cuentan a la hora de predecir esta confianza. Así pues, el modelo B fue el escogido para el análisis (Tabla V.1). Como puede verse, son cuatro las variables estadísticamente significativas: el sexo –los hombres tienen levemente menos confianza-, la edad –las personas de mayor edad tienen levemente mayor confianza-, la victimización de un delito (Pregunta VIC1)⁶¹ y, especialmente, el apoyo a la democracia ($\text{sig} < .100$).

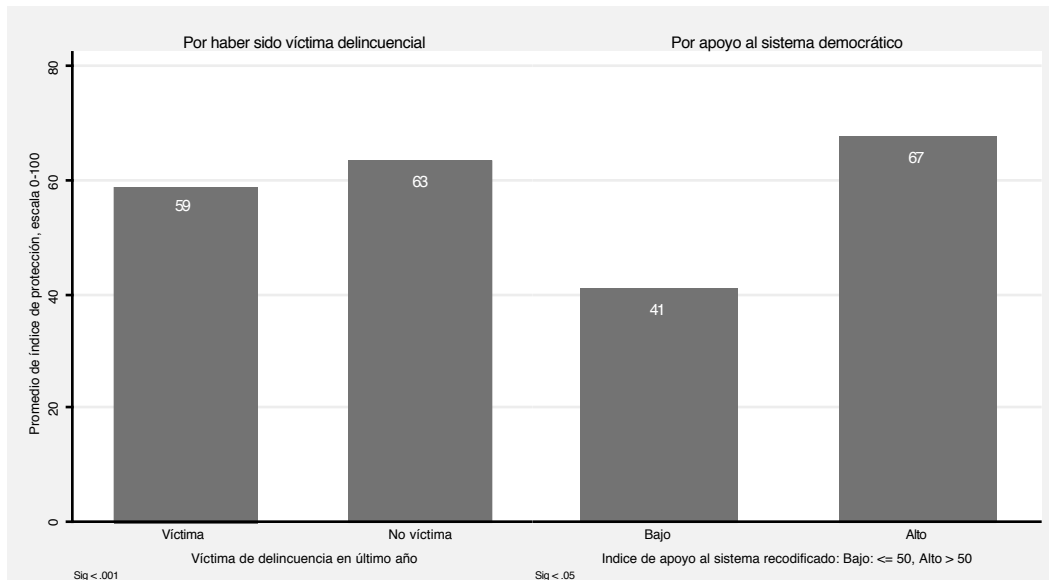
Haber sido víctima de un acto de delincuencia deprime, como era de esperar, la confianza en las instituciones (Gráfica V.2). El factor que más diferencia marca en términos de la confianza en las instituciones de protección de derechos es el apoyo a la democracia. Las personas con apoyo más alto hacia la democracia muestran un nivel marcadamente superior de confianza en las instituciones de protección de derechos que aquellas con bajo nivel de apoyo. Esto pareciera sugerir una estrecha y robusta asociación entre apoyo a la democracia y apoyo a instituciones fundamentales del Estado democrático de derecho, un hallazgo -en principio- importante (Gráfica V.2).

⁶¹ La pregunta VIC1 dice: “¿Ha sido víctima de un acto de delincuencia en los últimos 12 meses?”
1. Sí 2. No 8. NS/NR

Tabla V.1 Predictores de la confianza en las instituciones de protección de derechos

Variables	B	Beta	Sig.
(Constante)	51,716		,000
REGIONVC Región Valle Central	-1,928	-,044	,213
TAMAÑOC1 Resto Urbano	-1,369	-,026	,450
TAMAÑOC2 Rural	2,706	,063	,098
Q1R Hombre	-2,767	-,068	,061
OCUP1R2 Amas de casa	-,321	-,007	,844
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	1,191	,028	,314
EDR Años de educación	-,159	-,031	,398
Q2 Cuál es su edad en años cumplidos?	,193	,151	,000
Q10R Ingreso-en miles-	-,009	-,058	,119
RIQDX Índice de riqueza	,791	,103	,008
Q4RRC1 Religiosidad media	-,631	-,015	,627
Q4RRC2 Religiosidad baja	-4,959	-,106	,001
VIC1R Ha sido víctima de algún delito	-3,373	-,061	,027
AOJ8R Las autoridades deben respetar las leyes	-,005	-,029	,277
TOLERPR Índice de tolerancia política	,046	,062	,024
TOLICORR	,006	,005	,864

Gráfica V.2 Índice de protección de derechos según victimización delincencial y apoyo al sistema democrático



Sin embargo, esta relación empírica debe tomarse con cuidado. Cuando se realiza un análisis factorial con las variables de la batería B que refieren a instituciones públicas, tanto las entidades de protección de derechos como las propias del régimen político cargan a un mismo factor. Es decir, hay sospechas de colinearidad entre el Índice de Protección de Derechos (PRODE) y el Índice de apoyo a la democracia pues, cuando sus

elementos se los analiza en conjunto, ambos parecen estar formando parte de una dimensión más amplia que podría expresarse como: régimen + estado de derecho (Tabla V.2). Pero más importante que esta cuestión metodológica es el resultado: en la perspectiva de los costarricenses, régimen y estado de derecho parecieran estar estrechamente relacionados.⁶²

Tabla V.2 Resultados del análisis factorial con la confianza promedio en instituciones públicas en Costa Rica

Instituciones	Componente	
	1	2
B1R Tribunales de Justicia	,618	,111
B2R Instituciones Políticas	,468	,186
B6R Apoyo al sistema político	,572	,081
B10AR Sistema de justicia	,715	,203
B11R Tribunal Supremo Elecciones	,739	,067
B13R Asamblea Legislativa	,626	,297
B14R Gobierno nacional	,708	,239
B17R Defensoría Habitantes	,534	,295
B18R Policía	,560	,363
B19R Contraloría General República	,658	,281
B31R Corte Suprema de Justicia	,720	,287
B32R Municipalidad	,384	,524
CRB1R Instituto Costarricense de Electricidad	,241	,751
CRB2R Caja Costarricense del Seguro Social	,170	,808
CRB3R Instituto Nacional de Seguros	,126	,803

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Por otra parte, el análisis factorial revela la existencia de un segundo factor formado por la confianza de las personas en las municipalidades y las instituciones autónomas (Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros). Estas entidades prestan servicios a la población y son las instituciones insignias del Estado de bienestar social que se desarrolló en este país luego de la guerra civil de 1948.

⁶² Este resultado empírico aporta una interesante luz a la discusión acerca del concepto de democracia. O'Donnell ha propuesto, como ha fue reseñado anteriormente, que la democracia es más que un régimen político, tesis que en Costa Rica ha sido adoptada por la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia y los informes sobre el Estado de la Nación (O'Donnell, 2003; Programa Estado de la Nación, 2001a, 2003a, 2003b). Los resultados que se comentan parecieran indicar que, más allá de los significados que las personas adjudican al concepto de democracia, generalmente circunscritos a nociones como libertad y voto libre, en la práctica parecieran tener una noción más amplia de ella. Otras evidencias sobre lo mismo, puede encontrarse en el reciente estudio de Miguel Gómez y Johnny Madrigal sobre la visión de la democracia cultura entre los jóvenes (Gómez & Madrigal, 2004).

5.3 Percepción de seguridad

Pese a la alta confianza en las instituciones de protección de derechos, diversos estudios de opinión pública señalan la extendida percepción acerca de la falta de seguridad ciudadana (Poltronieri y Garita, 1997; UNIMER R.I). En este estudio se identificó que la inseguridad ciudadana es el problema nacional más importante invocado por las personas y uno de los problemas locales más severos (Véase capítulo VI para un análisis sobre el tema) –aunque, como se indicó al inicio, el país tiene comparativamente bajas tasas de criminalidad.⁶³ Conviene pues examinar este tema con más detalle, pues una extendida percepción de inseguridad podría estar asociada a una pérdida de la libertad personal (por temor las personas dejan de hacer cosas) y, eventualmente, a una demanda por medidas drásticas de parte de las autoridades con el fin de resolver este problema, aún a costa de las leyes y los derechos de los demás.

Para estudiar la percepción de seguridad ciudadana se incluyó en el presente estudio una batería de preguntas (Recuadro V.1). En general, estas preguntas indagan sobre la amenaza que la delincuencia representa tanto para el país como, especialmente, para las comunidades. También, se explora si las personas tienen confianza en la capacidad punitiva de las instituciones.

Recuadro V.1. Preguntas para el estudio de la percepción de seguridad ciudadana

AOJ11. Hablando del lugar/barrio donde vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿Se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?

(1) Muy seguro (2) algo seguro (3) Algo inseguro(4) Muy Inseguro (8) NS

AOJ11A. Y hablando del país en general, ¿Qué tanto cree Ud. que el nivel de delincuencia que tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro futuro?

(1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS/NR

AOJ12. Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial castigaría al culpable?

(1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS/NR

AOJ17. ¿Hasta que punto diría que su barrio esta afectado por pandillas? ¿Diría mucho, algo, poco o nada?

(1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS

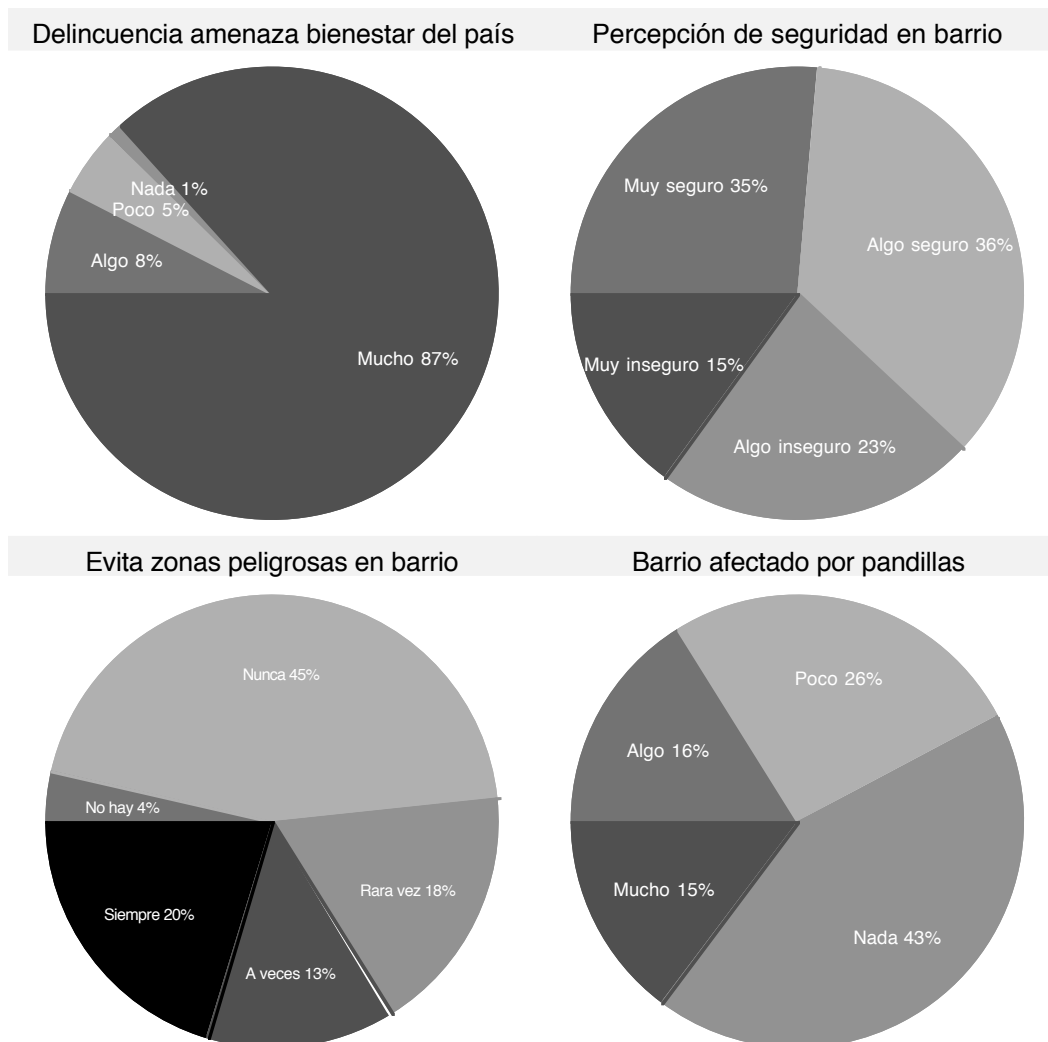
CRAOJ20 ¿Con que frecuencia Usted evita pasar por algunas zonas del vecindario por considerarlas peligrosas? ¿Siempre, a veces, rara vez o nunca?

(NO LEER) 0. En el barrio no hay zonas peligrosas

(1) Siempre (2) a veces (3) rara vez (4) nunca (8) NS/NR

La delincuencia es percibida con mayor intensidad como una amenaza para el país que para las personas en las comunidades: 94.5% creen que el nivel de delincuencia actual amenaza “mucho” o “algo” el bienestar nacional. Contrástese con la situación reportada en las comunidades: aquí la percepción mayoritaria es de seguridad, pues entre el 60% y el 70% de los entrevistados que respondieron, lo hicieron señalando que siente muy o algo seguros en sus localidades (Gráfica V.3). Existe, pues, una importante brecha entre la percepción de inseguridad en el plano nacional que en el plano local.

⁶³ La tasa de homicidios es ligeramente superior a 6 por cada 100.000 habitantes. En América Latina solo los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) muestran tasas inferiores (Cruz, 2003). Sin embargo, comparada con la situación prevaleciente en la sociedad costarricense a mediados de la década de 1980, en la actualidad se tienen tasas muy superiores tanto en homicidios como en delitos contra la propiedad (Carranza & Solana, 2004).

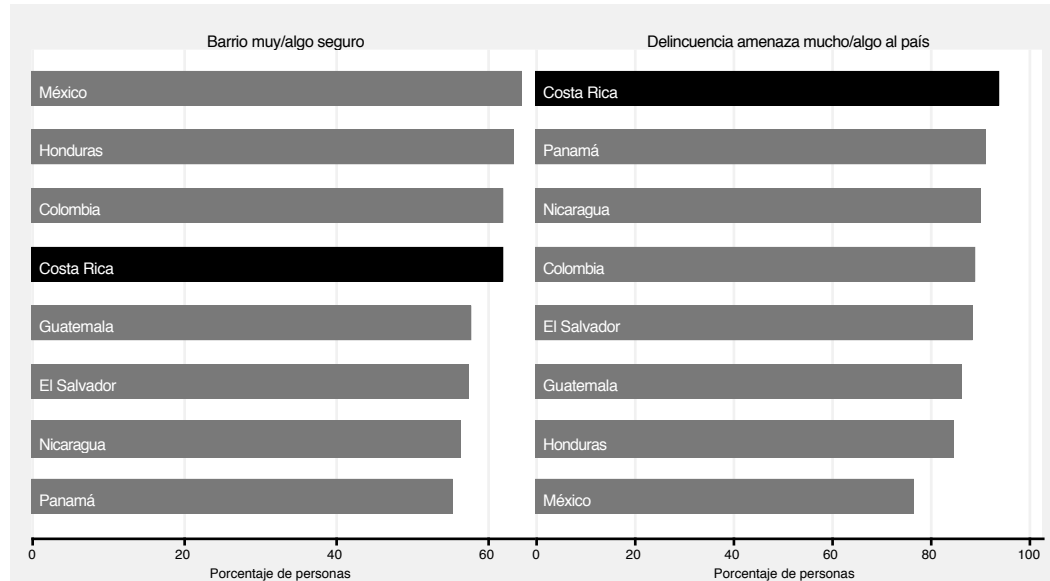
Gráfica V.3 Percepciones de seguridad del país y del barrio

Para estudiar con más profundidad el hallazgo de la extendida percepción de seguridad en los barrios y comunidades, se incluyó en el estudio las preguntas AOJ17 y CRAOJ20. La primera indaga sobre si las pandillas han afectado mucho la vida en el barrio y la segunda explora si las personas evitan pasar por ciertas zonas del barrio por considerarlas peligrosas. Los resultados confirman la sensación mayoritaria de seguridad en el plano local: 69% dicen que las pandillas no afectan, o lo hacen poco, a su barrio y cerca de dos terceras partes nunca o rara vez evitan pasar por zonas peligrosas del barrio y algunas pocas dicen que no hay zonas peligrosas en su localidad (Gráfica V.3). Sin embargo, las minorías inseguras por amenazas locales no son despreciables (entre el 30% y el 40% de los entrevistados).

La constatación sobre una brecha entre la percepción de seguridad local pero de inseguridad en el plano nacional no es exclusiva de Costa Rica (Gráfica V.4). En todos los países incluidos en el estudio mayorías muy amplias (superiores a 85 de cada 100 con

excepción de México) creen que la delincuencia es una amenaza al bienestar del país y, al mismo tiempo, la mayoría de las personas dicen vivir en barrios muy o algo seguros (generalmente por encima de 55 de cada 100). En lo que Costa Rica destaca es en la intensidad con que las personas creen que la delincuencia amenaza al país: se trata de una percepción casi unánime, muy por encima de países con niveles de violencia criminal claramente superiores a Costa Rica (Colombia, México, Guatemala). Esta percepción contrasta con la extendida confianza de las y los costarricenses en las instituciones de protección de derechos –la más alta de la región como fue anotado al inicio del capítulo.

Gráfica V.4 Percepciones de seguridad en el barrio y de amenaza delincencial al bienestar del país en perspectiva comparada



Así pues, los resultados anteriores sugieren dos conclusiones provisionales. Por una parte, la sensación de inseguridad ciudadana tiene al menos dimensiones -nacional y local-, cada una con intensidades distintas. Por otra, esta sensación no se distribuye homogéneamente entre las personas: hay personas que se sienten seguras y otras no –y por distintos motivos. Para ahondar en este tema se elaboraron perfiles de percepciones de seguridad ciudadana y examinar si existen algunos factores asociados a estas percepciones (Recuadro V.3). Una vez examinados los datos, se seleccionaron tres perfiles que agrupan al 94.7% de las personas entrevistados:

- Las personas que sienten inseguridad nacional (delincuencia amenaza al país) pero seguridad local (se sienten seguros en sus barrios). Podría decirse que tienen una sensación de inseguridad ciudadana indirecta (no enfrentan directamente la amenaza delictiva). Incluye a 859 personas, el 57.3% de la muestra.
- Las personas que poseen una sensación de seguridad ciudadana, tanto nacional como localmente. Son un pequeño grupo de 42 personas (2.8% del total).
- Las personas que sienten inseguridad ciudadana, tanto nacional como localmente. Estos son los individuos que más intensamente se perciben amenazados por la delincuencia. Incluye a 519 personas (34.6%), una de cada tres del total.

Recuadro V.3 Definición de los perfiles de percepción de seguridad ciudadana

Los perfiles de seguridad ciudadana se construyen a partir de las respuestas a las preguntas AOJ11A (Nivel de delincuencia como amenaza al bienestar del país) y AOJ11 (Sensación de seguridad en el barrio).

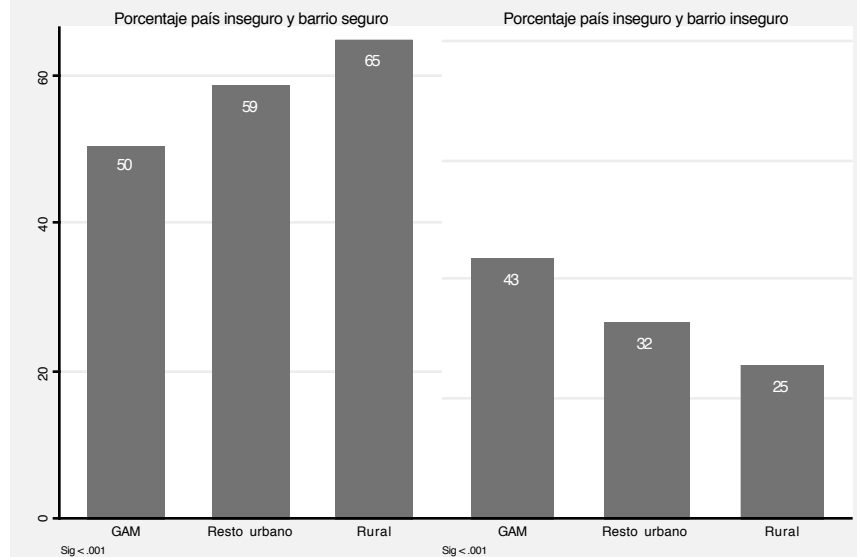
El primer perfil combina las siguientes respuestas: (a) Pregunta AOJ11A: Cree que el país está (1) mucho o (2) algo amenazado. (b) Pregunta AOJ11: se siente (1) muy o (2) algo seguro en su barrio.

El segundo perfil combina las siguientes respuestas: (a) Pregunta AOJ11A: Cree que el país está (3) poco o (4) nada amenazado. (b) Pregunta AOJ11: se siente (1) muy o (2) algo seguro en su barrio.

El segundo perfil combina las siguientes respuestas: (a) Pregunta AOJ11A: (1) mucho o (2) algo amenazado. (b) Pregunta AOJ11: se siente (3) muy o (4) algo inseguro en su barrio.

Los dos grupos más grandes son, en primer lugar, las personas que a pesar de percibir al país amenazado por la delincuencia se sienten seguras en sus comunidades; y, en segundo lugar, las personas que se sienten inseguras en el plano nacional y en el local. Se efectuaron diversas pruebas para determinar si existen diferencias sociodemográficas y de actitudes políticas entre estos grupos y los resultados fueron negativos: las diferencias, cuando existían, no eran estadísticamente significativas. El único factor que resultó importante fue el geográfico (sig <.001): en ambos grupos, la inseguridad es siempre más extendida entre los habitantes del Gran Area Metropolitana que en las áreas rurales (Gráfica V.5). Nótese que un 43% de los residentes en el GAM se sienten amenazados en los dos planos (nacional y local), frente al 25% de los habitantes en áreas rurales.

Gráfica V.5 Porcentaje que perciben: a) país amenazado pero comunidad segura y b) país y barrio inseguro



5.4 Medidas de protección adoptadas por los hogares

Así como no todas las personas experimentan la misma sensación de inseguridad ciudadana, también reaccionan de distinta manera ante el peligro. Algunas adoptan diversas precauciones; otras, por el contrario, no lo hacen pese a sentirse amenazadas –e incluso, como se ha visto, hay personas no se sienten absolutamente afectadas. Ante la extendida pero diferenciada percepción de amenazas (nacionales o locales) a la seguridad ciudadana, en el presente estudio se incluyó un conjunto de cinco preguntas sobre las medidas de protección que en los últimos años los hogares pudiesen haber adoptado para mejorar su seguridad (Recuadro V.4). Es importante aclarar que en vista de la extensión (casi universal) de las rejas como medida de protección de las casas no se incluyó la pregunta de si existen o no rejas –la respuesta hubiese sido abrumadoramente positiva– sino si las personas han reforzado esta seguridad (Pregunta CRSE3 “Mejorar la seguridad de la casa, por ejemplo, mediante la compra de alarmas, alambre navaja, etc.”).

Recuadro V.4 Preguntas empleadas para el análisis de las medidas de protección adoptadas por los hogares

CRSE1 En los últimos años, ¿cuáles de las siguientes medidas de protección se han tomado en su familia? No dejar nunca la casa sola 1. Sí 2. No

CRSE2 Dejar de ir a actividades sociales por temor 1. Sí 2. No

CRSE3 Mejorar la seguridad de la casa, por ejemplo, mediante la compra de alarmas, alambre navaja 1. Sí 2. No

CRSE4 Adquirir, comprada o prestada un arma de fuego 1. Sí 2. No

CRSE5 Pagar servicio de seguridad privada permanente para la casa, cuadra o el barrio (guarda o empresa)? 1. Sí 2. No

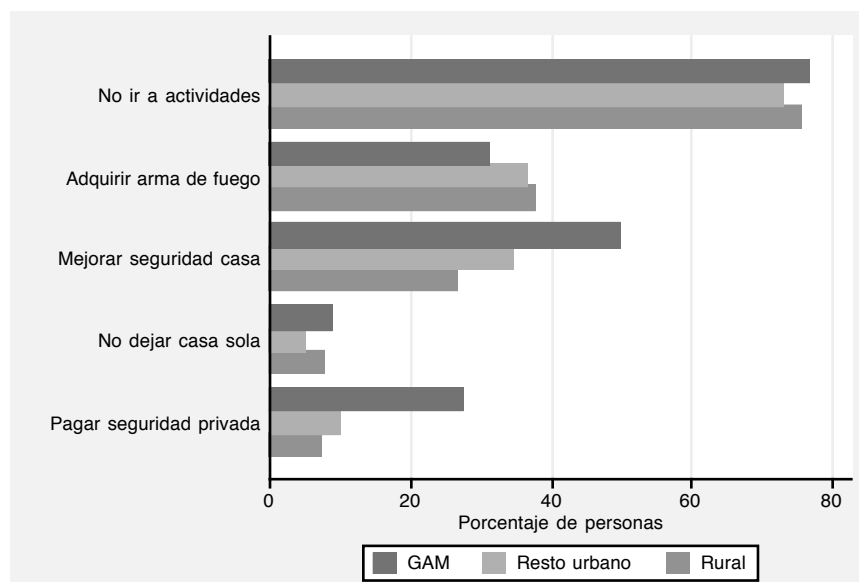
La medida de protección más difundida entre los hogares es no dejar nunca la casa sola (75% responden haber adoptado esta decisión en los últimos años).⁶⁴ Le siguen, a importante distancia dos decisiones que significan inversión de recursos o cambios en estilos de vida: mejorar la seguridad de la casa (38.3%) y afectar la vida social (dejar de ir a actividades sociales, 34.4%). Aproximadamente 1 de cada 3 hogares han adoptado estas medidas. Finalmente, el 16.5% de los hogares pagan un servicio de seguridad privada y el 7.6% han adquirido recientemente un arma de fuego. Las proporciones cambian en algunos casos cuando se introduce el factor geográfico (Gráfica V.6). En efecto, medidas como no dejar la casa sola y dejar de ir a actividades sociales han sido adoptadas por los residentes en distintas regiones del país (GAM, resto urbano y rural) de manera similar. En cambio, la mejora de la seguridad de la casa, mediante la compra de alarmas o el reforzamiento de los dispositivos existentes, y el pago de seguridad privada son medidas adoptadas con más frecuencia por los residentes del GAM.

¿De qué depende el que los hogares adopten una o varias medidas de protección, o no adopten ninguna? Para estudiar este tema se analizó en conjunto las preguntas anteriores para establecer un conteo simple de medidas, donde 0 indica un hogar en el cual no se han tomado ninguna de las cinco protecciones y 5 indica un hogar en el que se

⁶⁴ Putnam ha argumentado que este tipo de comportamientos afecta el capital social –las redes de colaboración y confianza interpersonal (Putnam, 2000). Para un análisis del capital social, véase el capítulo 8.

han tomado las cinco protecciones indagadas.⁶⁵ En promedio, en Costa Rica los hogares puntuaron 1.72 en la escala de 0-5 (casi dos medidas de protección del hogar). Posteriormente se aplicaron dos modelos de regresión lineal. El primero incluyó la batería usual de factores sociales y además la experiencia de haber sido víctima o no de un delito (Modelo A).⁶⁶ El segundo (Modelo B) agregó a las anteriores, los cantones como variables “dummies” (Tabla V.3) Este segundo modelo obedece a la siguiente observación: si una parte importante de las personas sienten que la amenaza a su seguridad es de carácter local, conviene indagar sobre las especificidades locales con el fin de examinar si introduce diferencias.

Gráfica V.6 Medidas de protección adoptada por los hogares en los últimos años por región



Los resultados que se comentan a continuación se refieren al Modelo B pues la inclusión de los cantones como “dummies” elevó la capacidad predictiva del modelo A (R^2 pasó de .076 a .116) y además introdujo un cambio importante en los factores predictivos. De acuerdo con el Modelo A, la variable TAMAÑO era significativa: las personas que residen en las ciudades intermedias –resto urbano– y las que viven en áreas

⁶⁵ Se efectuó un análisis factorial para determinar la posibilidad de crear un Índice de medidas de protección ciudadana. El análisis arrojó la existencia de dos factores: CRSE1 (no dejar casa sola) y CRSE2 (dejar de ir a actividades sociales) se agruparon en un factor; CRSE3 (mejorar seguridad de casa), CRSE4 (adquirir un arma de fuego) y CRSE5 (pagar seguridad privada) se agruparon en otro, ambos casos con cargas relativamente elevadas (superiores a .500). Sin embargo, la confiabilidad de estas medidas no es satisfactoria (alpha de Cronbach=.3930 y .3049, respectivamente). Por tanto, se desistió de crear el índice y en su lugar se hace un conteo simple de medidas de protección.

⁶⁶ x1 = zona (Valle Central), x2 = tamaño (GAM), x3 = sexo(hombre), x4= ocupación (ama de casa), x5 = estado civil (casado-unido), x6 = años de educación, x7 = edad, x8 = ingreso(miles), x9 = índice de riqueza, x10 = religiosidad (Alto), x11=víctima de algún delito; las variables que son categóricas se incluyeron como dummy*

rurales adoptan menos medidas de protección que las que viven en el Gran Area Metropolitana (GAM). En promedio, estas últimas puntúan 1.92 en una escala de 0-5, en comparación con 1.58 de los hogares en el resto urbano y 1.54 en el área rural (Sig. <.10).

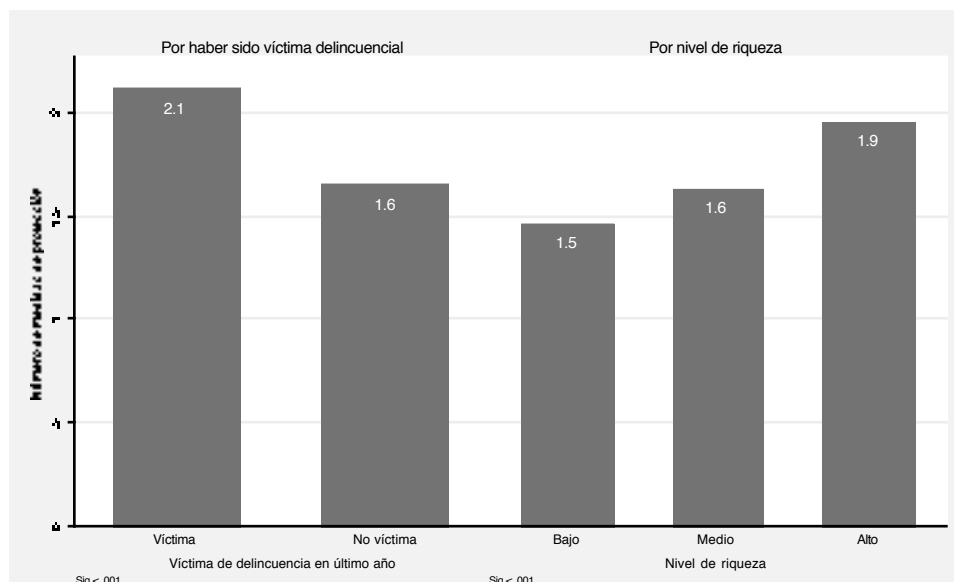
Tabla V.3 Predictores del nivel de medidas de protección adoptadas por las personas en su hogar

Variable	B	Beta	Sig.
(Constante)	,274		.797
REGIONVC Región Valle Central	,802	,355	.438
TAMAÑO1 Resto Urbano	,012	,004	.944
TAMAÑO2 Rural	,007	,003	.964
Q1R Hombre	-,107	-,050	.150
OCUP1R2 Amas de casa	-,067	-,029	.409
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	,058	,027	.312
EDR Años de educación	,000	-,001	.975
Q2 Edad en años cumplidos?	,005	,069	.013
Q10R Ingreso-en miles-	,000	-,009	.806
RIQDX Índice de riqueza	,059	,151	.000
Q4RRC1 Religiosidad media	,095	,042	.141
Q4RRC2 Religiosidad baja	,272	,110	.000
VIC1R Ha sido víctima de algún delito	,376	,127	.000
Cantón (29 dummies)			

Este es un resultado hasta cierto punto esperable. Empero, cuando se introducen los cantones dentro del modelo, la variable TAMAÑO se vuelve no significativa. En otras palabras, las especificidades locales son claves de examinar aún dentro de una misma región. De acuerdo con ambos modelos, la edad, la riqueza, la religiosidad baja y, sobretudo, el haber sido víctima de un delito son factores que ayudan a predecir el que los hogares adopten más medidas de protección (sig < .10). En el modelo B, cuatro de los 30 cantones son significativos y constituyen factores predictivos (sig < .10): las personas que viven en cantones del GAM como Heredia y, especialmente, Desamparados han adoptado más medidas de protección en su hogar que el Cantón Central de San José (capital); en contraste, aquellas que viven en Puriscal o Turrialba, menos.

Al examinar el comportamiento de los hogares, la mayoría de los factores estadísticamente significativos introducen diferencias pequeñas en cuanto a la cantidad de medidas de protección del hogar. Los dos factores que más diferencias marcan en los comportamientos protectores son el nivel de ingreso y, en especial, si la persona ha sido víctima de un delito (Gráfica V.7). Ambos comportamientos son esperables. Por una parte, ciertas medidas cuestan dinero (protección adicional de casa, pagar seguridad privada); por otra, indudablemente la experiencia de haber sido víctima de un delito parece afectar el comportamiento de las personas pues las vuelve más precavidas.

Gráfica V.7 Número medio de medidas de protección adoptadas por los hogares según experiencia de victimización delictual y nivel de riqueza



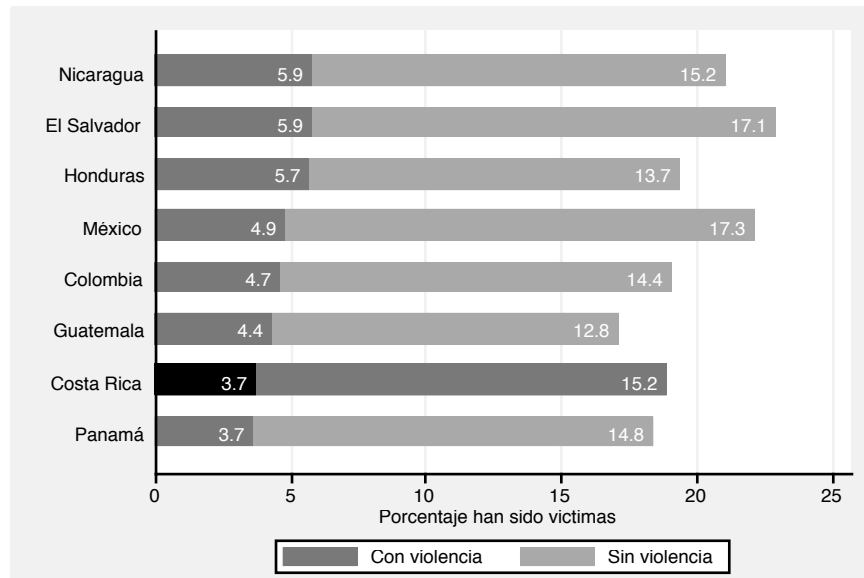
5.5 Victimización de hechos delictivos

En Costa Rica, la percepción de inseguridad ciudadana es mayor a la tasa de victimización –las personas que efectivamente han experimentado un delito, un resultado frecuente en los diversos estudios de opinión realizados tanto en el país como en América Latina (www.latinobarometro.com) y las investigaciones realizadas por Seligson (www.innerstory/nsnd.com). Véase en especial: (Seligson, forthcoming; Seligson & Azpuru, 2001)). El 85% de los entrevistados no han sido víctimas de un acto de delincuencia en los últimos 12 meses (pregunta VIC1 del cuestionario). Es decir, una de cada seis personas fue víctima de hechos delictivos. El acto de delincuencia más común (pregunta VIC2) es el robo sin agresión o amenaza, que comprende el 53 de los actos de delincuencia reportados. Las agresiones físicas con o sin robo y asaltos sexuales (un caso reportado) son crímenes violentos que en el último año han afectado al 4% de los entrevistados, o la cuarta parte de todos los crímenes reportados.

La Comparación con los otros países ubica a Costa Rica, junto con Panamá, con la tasa más baja de crímenes violentos (Gráfica V.8). Pero en lo que respecta a crímenes no violentos, Costa Rica está en el medio de los otros países. Nicaragua y El Salvador muestran los porcentajes más altos de crímenes violentos y México, el más alto de crímenes no violentos.

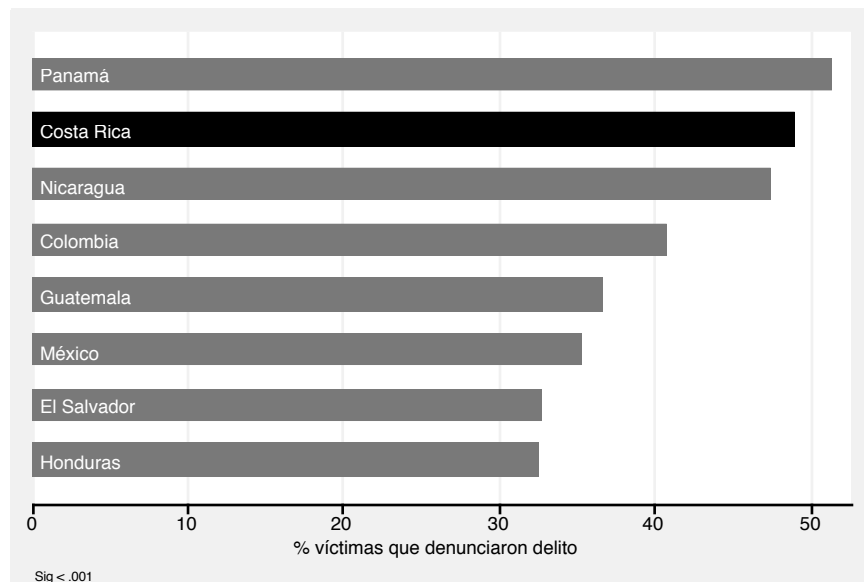
De las 228 víctimas, casi la mitad (112 personas, 49.1%) denunciaron el hecho ante una institución pública. La principal razón para no denunciar es la ineficacia de la respuesta institucional. De las 115 personas que arguyeron una razón para no denunciar, más de la mitad (53%) dijeron que no denunciaron porque “no sirve para nada”; la segunda razón aducida fue que el hecho delictivo no fue grave (30 personas, 26% de los que no denunciaron). La falta de conocimiento o el miedo a denunciar no fueron motivos para desistir.

Gráfica V.8 Proporción promedio nacional de personas víctimas de un hecho delictual por país



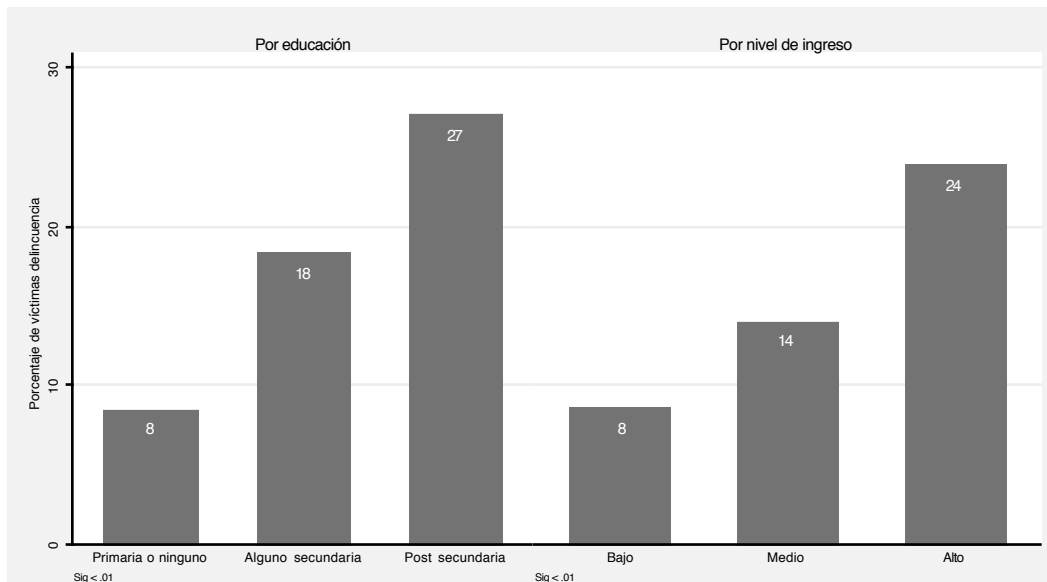
En perspectiva comparada, el nivel de denuncia de un hecho delictivo en Costa Rica es, junto con Panamá, el más alto dentro de los países estudiados, a pesar de que en estos dos países son los de menor prevalencia de crimen violento. En cinco de los países de la región, este nivel de denuncia oscila entre el 32% y el 40% -una proporción decididamente baja que denota un escaso empleo de los medios institucionales para la sanción y eventual reparación de los daños causados por hechos delictivos (Gráfica V.9).

Gráfica V.9 Proporción promedio de víctimas que denuncian hechos delictivos ante instituciones por país



Para examinar las características de las personas que han sido víctimas de un hecho delictivo se aplicó un modelo de regresión logística con VIC1 como variable dependiente (binaria: fue víctima – no fue víctima). Se analizaron los factores sociodemográficos que usualmente se han empleado a lo largo del informe. Los predictores más fuertes fueron el nivel de ingreso y el nivel de instrucción. En términos generales, a mayor ingreso y educación mayor es la tasa de victimización, al punto que las personas con nivel de educación de post secundaria y los de alto nivel de ingreso reportan haber sido tres veces más víctimas de un hecho delictivo que los de primaria o menos y los de bajo nivel de ingreso (Gráfica V.10).

Gráfica V.10 Tasa de victimización delictiva por educación y nivel de ingreso



Capítulo VI. Gobiernos locales

6.1 Contexto

Costa Rica posee un sistema político altamente centralizado. Muy temprano en la historia republicana, las cuasi autónomas municipalidades coloniales perdieron atribuciones a favor del gobierno central.⁶⁷ Aún así, en las primeras décadas después de la independencia de 1821, las municipalidades retuvieron funciones tales como la provisión de servicios de salud pública, la educación y diversas obras sociales de atención a menesterosos. Estas funciones fueron paulatinamente asumidas por instituciones del Estado central. Con la reforma educativa desarrollada en el país a partir de 1880, las municipalidades cedieron el último ámbito clave de control sobre la vida social del país (I. Muñoz, 1988). Así, durante el siglo XX las funciones municipales se fueron gradualmente reduciendo a la prestación de algunos servicios locales que las instituciones centrales, por diversas razones, no prestaron tales como la recolección de desechos, alumbrado público, caminos vecinales. La creación del sector de las instituciones descentralizadas en la Constitución de 1949 –entidades autónomas del Poder Ejecutivo a cargo de la prestación de servicios- y las subsecuentes leyes que, a su amparo, fundaron nuevas instituciones, o establecieron el control público sobre empresas privadas existentes, en ámbitos como el de la prestación de los servicios de agua potable (Instituto Costarricense de Electricidad -1951-, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SNAA- en 1961) redujeron aún más la intervención municipal en la provisión de bienes y servicios a la población. Hoy en día, la prestación de estos servicios hacia la mayoría de la población la realizan las instituciones del gobierno central. No es casual que la mayoría de las demandas ciudadanas se canalicen hacia éste ((Programa Estado de la Nación, 2003a) con base en: (S. Mora, 2004)).

En los últimos años, se han adoptado ciertas medidas a favor del traslado de competencias a las municipalidades. A mediados de la década de 1990, se les traspasó la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. La figura de las partidas específicas – transferencias corrientes para financiar obras locales bajo el control de los diputados del partido en el gobierno- fue sustituida por transferencias directas de Ministerio de Hacienda que, en principio, debían ser asignadas con criterios más técnicos referidos al desarrollo relativo de los territorios. Mediante la aprobación de la reforma al artículo 171 constitucional en el año 2001, se estableció que las municipalidades deben recibir el 10%

⁶⁷ En las primeras dos décadas después de la independencia del imperio español hubo dos conflictos, con alianzas cambiantes, entre los cuatro centros urbanos cabeceras de municipio (1823 y 1838). Triunfante de estos conflictos resultó la ciudad de San José, que arrebató a Cartago el rango de ciudad capital y se convirtió, hasta nuestros días, en la sede territorial del gobierno nacional. Uno de los primeros estudios sobre el régimen municipal en Costa Rica puede encontrarse en: (Baker, Fernández, & Stone, 1972)

del presupuesto del gobierno central; además, una cuarta parte del impuesto recaudado con el propósito de conservar la red vial debe ser también dado a los gobiernos. A la descentralización se ha sumado un esfuerzo por desarrollar las instituciones de la democracia local. La aprobación del nuevo Código Municipal (1998) creó nuevos mecanismos de democracia directa o fortaleció los existentes (revocatoria de mandato, plesbicitio, cabildos). Al mismo tiempo, el Código creó la figura del Alcalde municipal y estableció su escogencia mediante elecciones directas no concurrentes –Costa Rica fue el último país centroamericano en adoptar este mecanismo. La primera elección se llevó a cabo en diciembre del 2002.⁶⁸

En la práctica, el avance de la descentralización es notablemente menor al que podría colegirse de las reformas normativas e institucionales mencionadas. En primer lugar, el traslado del 10% del presupuesto del gobierno central depende de una ley de competencias municipales que no se ha promulgado. En segundo lugar, la base económica de los gobiernos locales sigue siendo extremadamente débil. En el período 1995-2002, la carga tributaria municipal⁶⁹ no excedió el 0.7% del PIB (Programa Estado de la Nación, 2003a). En tercer lugar, el gobierno central no cumple con las transferencias que por ley debe realizar. En el 2002, los municipios recibieron cerca del 5% del presupuesto que les correspondía del impuesto al ruedo para fines de infraestructura vial (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, 2003). Finalmente, en la primera elección directa de alcaldes la abstención fue sumamente elevada: en el promedio nacional, el 70% de los electores se abstuvieron de sufragar –en contraste, el abstencionismo en las elecciones presidenciales y legislativas en la primera ronda electoral de febrero de 2002 fue de 30.7%.

En síntesis, el sistema político costarricense muestra un tímido y gradual proceso de descentralización de competencias y de democratización de los gobiernos locales.⁷⁰ El curso de evolución de esta descentralización dependerá decisivamente del desempeño que las municipalidades exhiban en el manejo de las nuevas atribuciones económicas y políticas que les han sido conferidas y, sobretodo, en la capacidad para atender los problemas de las comunidades que en la actualidad no están siendo enfrentados por las instituciones del gobierno central.

6.2 La especificidad de los problemas locales

Por encima de otras instituciones del gobierno central, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades. Aunque comparten territorio y otras condiciones sociales y económicas con otras comunidades, en principio cada gobierno local enfrenta problemas particulares que les define un ámbito

⁶⁸ Hasta 1998 el régimen municipal costarricense podía caracterizarse como un régimen parlamentario. El órgano legislativo de la corporación –el Concejo Municipal- era electo por los ciudadanos y tenía, entre sus potestades, el nombramiento y remoción del Ejecutivo municipal.

⁶⁹ Proporción que representan los ingresos tributarios de los gobiernos locales entre el producto interno bruto.

⁷⁰ En otras dimensiones, sí ha habido cambios importantes en las municipalidades: una notable fragmentación de los sistemas de partidos locales y una fuerte ampliación de la representación de las mujeres en los Concejos Municipales, al punto que éstas representan más del 40% de los regidores electos en el 2002 (Programa Estado de la Nación, 2002).

propio de acción a las municipalidades en relación con otras instituciones del gobierno central. Para abordar la solidez de esta afirmación, en el presente estudio se pidió a las personas que identificaran el problema comunal más serio.⁷¹

No se encontró un tema local dominante. Las personas identifican, en general, una pluralidad de problemas sin uno que domine claramente a los demás. La drogadicción fue señalado como el problema local grave más frecuente por la población que respondió a la pregunta (21.5%), seguido por la mala infraestructura vial (16.4%), la inseguridad ciudadana (14.3%) y el desempleo y la pobreza (11.7%) (Tabla VI.1).

Tabla VI.1 Problema local más importante según región (en porcentajes)

Problema local más importante	Tamaño			Total
	GAM*	Resto Urbano	Rural	
CRMU1RP1 Ninguno	11,0%	8,1%	9,1%	9,8%
CRMU1RP2 Agua y saneamiento	2,5%	2,3%	7,4%	4,3%
CRMU1RP3 Mala infraestructura vial	13,4%	16,3%	20,2%	16,4%
CRMU1RP4 Desempleo, pobreza	3,6%	15,9%	19,3%	11,7%
CRMU1RP5 Inseguridad ciudadana	22,3%	11,6%	5,9%	14,3%
CRMU1RP6 Drogadicción	25,5%	28,7%	13,2%	21,5%
CRMU1RP7 Falta de cooperación, participación	5,8%	3,9%	4,5%	5,0%
CRMU1RP8 Otros	15,9%	13,2%	20,4%	17,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* Gran Area Metropolitana

1/ Agua y saneamiento: falta de agua (3,7%), contaminación del agua (0,6%), alcantarillado, aguas sucias derramadas (2,7%)

2/ Mala infraestructura vial: huecos en las calles, mal estado de caminos (13,7%)

3/ Desempleo, pobreza: falta de trabajo, desempleo (8,9%), mucha pobreza (2,7%)

4/ Inseguridad ciudadana: falta de seguridad, delincuencia, robos (14,3%)

5/ Drogadicción: drogas, drogadicción (21,5%)

6/ Falta de cooperación, participación: falta de unión y cooperación (1,4%), Indiferencia (1,0%), falta de organización (1,7%), cada quien por su lado, vecinos no se relacionan (0,9%).

7/ Otros: fallas en recolección de basura (2,2%), falta de aseo público (,8%), inmigrantes (0,8%), juventud con mala educación (,6%), espacio para que niños jueguen (0,6%), administración local (0,8%), mal servicio de buses (1,7%), falta de vivienda (0,6%) y otros rubro con frecuencias inferiores a 0,5%.

Pueden apreciarse importantes diferencias regionales. Para los pobladores en áreas rurales, los dos principales problemas, señalados casi en la misma proporción, son la mala infraestructura vial y la inseguridad ciudadana (20.2% y 19.3%, respectivamente). En cambio las preocupaciones de los habitantes del Gran Area Metropolitana (GAM) son bastante distintas: la drogadicción y la inseguridad ciudadana (25.5% y 22.3%, respectivamente) constituyen los principales problemas. Los residentes de los centros urbanos intermedios combinan características de los dos anteriores. Por una parte, similar a los habitantes de la GAM, señalan la drogadicción como el problema local más grave con más fuerza que en las otras dos regiones. Por otra, parecido a las

⁷¹ Pregunta CRMU1 En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que tiene esta comunidad en la actualidad? (NO LEER LAS RESPUESTAS) (ACEPTAR UNA SOLA RESPUESTA; SONDEAR, SI MENCIONA MÁS DE UNA: “LO MÁS IMPORTANTE.”

personas de áreas rurales, identifican con cierta frecuencia la mala infraestructura vial y el desempleo y la pobreza como problemas locales serios.

¿Qué tan distintos son los problemas locales de los problemas nacionales? En otras palabras, ¿existe una especificidad de problemas sobre los cuales las municipalidades tengan un ámbito propio de acción, distinto al de otras instituciones públicas, de cobertura nacional? Para responder esta interrogante se examina, primero, el problema nacional más grave que a juicio de las personas el país enfrenta (pregunta CRA4)⁷²; posteriormente, se contrasta si esta identificación de problema nacional es similar o no al problema local más grave.

En el plano nacional, la inseguridad es el problema más severo que el país afronta, casi una de cada tres personas lo señaló así (31.1%) (Tabla VI.2). Le sigue el desempleo y la pobreza (21.5%) y la macroeconomía del país –estabilidad de precios, déficit fiscal- (21.5%). Como puede verse, dos de los tres problemas nacionales (inseguridad y desempleo y pobreza) fueron identificados como problemas nacionales y locales. Nuevamente, existen variantes regionales importantes: para los habitantes de la GAM, la inseguridad es una preocupación más importante que para los habitantes de zonas rurales; para los residentes en los centros urbanos intermedios, el principal problema es el desempleo y la pobreza (28.7%).

Tabla VI.2 Problema nacional más importante según los entrevistados por región

Problema nacional más importante	Tamaño			Total
	GAM*	Resto Urbano	Rural	
CRA4P1 Macroeconomía	19,9%	20,5%	23,9%	21,5%
CRA4P2 Desempleo, pobreza	20,1%	28,7%	23,4%	22,9%
CRA4P3 Inseguridad	36,2%	24,6%	28,2%	31,2%
CRA4P4 Drogadicción	4,7%	10,1%	10,8%	7,9%
CRA4P5 Otros	19,0%	16,0%	13,7%	16,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* Gran Área Metropolitana

1/ Macroeconomía: Inflación y altos precios (5,7%), problemas económicos (14,9%), deuda interna y déficit fiscal (,5%), economía (,5%) y otros rubros con frecuencias inferiores a 0,5%

2/ Desempleo y pobreza: desempleo (16,7%), pobreza (6,2%) y otros rubros con frecuencias inferiores a 0,5%

3/ Inseguridad; delincuencia, crimen, violencia(28,7%), inseguridad ciudadana (1%) y otros rubros con frecuencias inferiores a 0,5%

4/ Drogadicción: drogadicción (7,9%)

5/ Otros: Tratado de Libre Comercio (1,2%), agresión doméstica (1,5%), migración (3,0%), mal gobierno (2,6%), corrupción (2,0%), educación deficiente (1,0%), falta de valores (0,5%) y otros rubros con frecuencias inferiores a 0,5%

Pese a la similitud en la frecuencia de ciertos problemas nacionales y locales identificados por las personas, existe un ámbito de especificidad de los problemas locales. Cuando se analizan en conjunto las preguntas CRA4 (problema nacional) y CRMU1 (problema local), puede verse que cerca de 9 de cada 10 personas nombran problemas nacionales y locales distintos. Solo el 11.4% de la muestra nombró el mismo tema en

⁷² CRA4. Para empezar, en su opinión ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER ALTERNATIVAS]

ambas preguntas (Tabla VI.3). En otras palabras, el problema local que una persona identifica como el más grave, y que sería competencia del gobierno local atender, es distinto al problema nacional que ella nombra –que sería competencia del gobierno nacional enfrentar. Así, pareciera que la demanda sobre la municipalidad puede tener un contenido distinto a la demanda sobre las instituciones del gobierno central.

Tabla VI.3 Proporción de personas que identifican el mismo problema local y nacional

Región	% que indica el mismo problema para comunidad y el país
GAM	11,9%
Resto Urbano	13,1%
Rural	9,6%
Total	11,3%

* Las personas que contestaron la misma categoría de problema nacional y local en las preguntas CRA4 y CRMU1

6.3 Desempeño del gobierno municipal

Uno de los argumentos esgrimidos a favor de la descentralización de competencias hacia los gobiernos locales es que éstos se encuentran “más cerca” de las personas. Por ello, se supone que las municipalidades tienen más sensibilidad hacia los problemas locales y, en consecuencia, cuentan con incentivos para responder más eficazmente a las demandas ciudadanas. Sin embargo, una cosa es la expectativa que los gobiernos locales se desempeñen mejor que las instituciones del gobierno central; otra cosa es que lo efectivamente lo hagan. Esta cuestión tiene una importancia especial en un país tan centralizado como Costa Rica. El apoyo ciudadano al traslado de competencias hacia los gobiernos locales –un giro novedoso en la historia institucional del país– depende no solo de la expectativa sino del desempeño que perciban de sus municipalidades. Si la evaluación de este desempeño es mala, pueden emerger resistencias ciudadanas a que los gobiernos locales asuman responsabilidades que hoy día ejecutan otras entidades.

Para estudiar el desempeño del gobierno local, en el presente estudio se analizan cuatro temas, en su orden: la percepción que las personas tienen acerca de la eficacia de las municipalidades; su sensibilidad o “responsiveness” ante los problemas locales; la satisfacción con los servicios que los gobiernos locales brinda y la percepción sobre la rendición de cuentas que las municipalidades realizan.

.6.3.1 Eficacia y “responsiveness”

La inmensa mayoría de las personas consideran que su municipalidad ha hecho poco o nada para resolver el problema más grave de su comunidad. En general, casi siete de cada diez dice que no ha hecho “nada” (69%), como respuesta a la pregunta CRMU2 “¿Cuánto ha hecho la municipalidad para resolver ese problema [más grave de la comunidad].” La evaluación es más crítica en materia de drogadicción y desempleo y pobreza –por encima de 73% afirman que “nada”– y acaso un tanto más benigna en cuanto a la infraestructura vial, donde la proporción de los más críticos ronda el 52%.

Tomando en conjunto a los que creen que la municipalidad hace algo o mucho para resolver el problema local más grave, este grupo representa apenas el 12% (Tabla VI.4). No hay diferencias significativas en la percepción de eficacia de las municipalidades entre los habitantes de la GAM, las ciudades intermedias y las zonas rurales (r Spearman=.739).

Tabla VI.4 Eficacia percibida de la municipalidad para resolver el problema más grave que afecta a la comunidad

CRMU1R Problema más grave que enfrenta la comunidad	Eficacia de municipalidad en resolución de problemas				Total	N
	Nada	Poco	Algo	Mucho		
Problemas de agua y saneamiento	67,2%	15,5%	13,8%	3,4%	100%	58
Mala infraestructura vial	51,9%	31,2%	11,7%	5,2%	100%	231
Desempleo, pobreza	72,1%	16,2%	10,4%	1,3%	100%	154
Inseguridad ciudadana	68,8%	18,6%	12,1%	0,5%	100%	199
Drogadicción	76,6%	12,7%	8,2%	2,4%	100%	291
Falta cooperación, participación	73,8%	20,0%	1,5%	4,6%	100%	65
Otros	72,0%	18,1%	7,8%	2,2%	100%	232
Total	68,7%	19,1%	9,6%	2,6%	100%	1.230

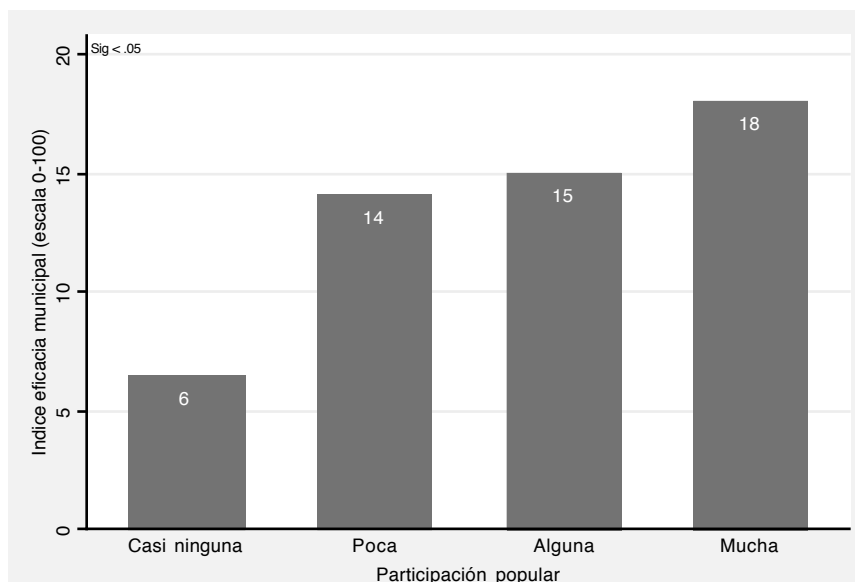
Sig < ,001

Un punto a dilucidar es si la baja eficacia de la municipalidad para resolver los problemas locales es achacable a este ente corporativo o, más bien, a la naturaleza misma del problema. En otras palabras, pudiera ser que un grupo importante de personas considere que la municipalidad no ha hecho nada porque de por sí los problemas locales no pueden resolverse. Una manera de despejar esta incógnita es analizando la pregunta la eficacia municipal CRMU2 en conjunto con la pregunta EFF6, que interroga sobre la probabilidad de resolver el problema de la comunidad mediante la participación del pueblo. Si la mayoría de personas considerasen que la municipalidad no hace nada para resolver dicho problema y que éste tampoco puede resolverse vía participación ciudadana, entonces no estaríamos frente a una evaluación crítica de la eficacia municipal sino ante una actitud de resignación –la creencia que el estado de cosas es imposible de modificar. La pregunta EFF6 dice:

Pregunta EFF6 ¿Qué tan probable cree Ud. que el esfuerzo del pueblo pueda servir para resolver los problemas de esta comunidad? ¿Diría Ud que hay mucha probabilidad de resolverlo, alguna probabilidad, poca probabilidad o casi ninguna probabilidad?

Entre ambas preguntas –eficacia municipal y probabilidad de resolver problemas comunales mediante participación del pueblo- existe una leve asociación positiva (r Spearman=.116, sig<.001). En términos generales, las personas con mejor concepto de la eficacia municipal tienden a creen también en la eficacia de la participación ciudadana. Sin embargo, aún dentro de los que creen que la municipalidad no ha hecho nada, solo una minoría consideran que la participación ciudadana tampoco es eficaz para resolver los problemas locales (Gráfica VI.1). En conclusión la valoración de que la municipalidad no hace nada, pues, pareciera responder a una percepción crítica de su eficacia y no a una actitud de resignación ante problemas supuestamente irresolubles.

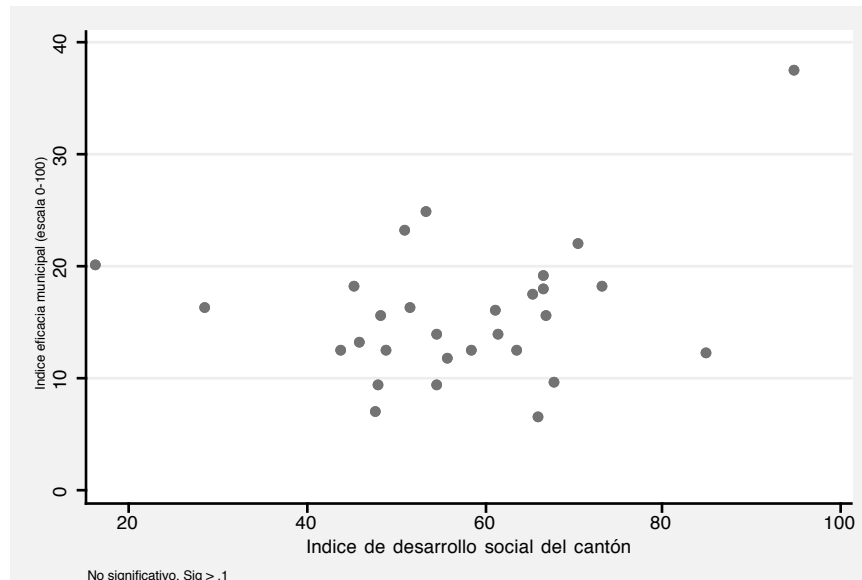
Gráfica VI.1 Percepción de eficacia de municipalidad para resolver principal problema local según la creencia en la participación popular para resolverlo



Se efectuó una exploración adicional en materia de la eficacia municipal procurando despejar ésta se encuentra asociada al nivel de desarrollo social del municipio (cantón). La hipótesis es que en los cantones de más alto desarrollo social las personas tienen, en promedio, un mejor concepto de la eficacia de la municipalidad para resolver sus problemas pues la municipalidad habría sido uno de los actores que han propulsado dicho desarrollo. Para estudiar este tema se utilizó el Índice de Desarrollo Social (IDS) desarrollado por MIDEPLAN, desagregado a nivel de cantones. El IDS está compuesto por 9 variables, y su estimación más reciente es para el año 2001, con base en la información censal.⁷³ Por otra parte, se normalizó la variable CRMU2 para expresarla en una escala de 0-100, donde 0 es la respuesta que la municipalidad “no ha hecho nada” para resolver el problema local y 100, que ha hecho “mucho” (CRMU2RN). Se estimaron los promedios cantonales de esta variable y se vio que la dispersión de las respuestas es similar en todos ellos. Finalmente, se corrió una regresión lineal con IDS como variable independiente y CRMU4RN como variable dependiente. Los resultados no fueron estadísticamente significativos ($r^2 = .069$; $\text{Sig} = .170$). La eficacia municipal promedio no parece ser función del desarrollo social del cantón (Gráfica VI.2).

⁷³ En 1987 el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) elaboró Índice de desarrollo social (IDS), con información del VIII Censo de Población de 1984. Su objetivo es identificar las áreas geográficas más deprimidas. Comprende 8 variables en tres ámbitos distintos: educación, vivienda y salud. Fue actualizado en 1998 con base en registros administrativos y, posteriormente, en el 2001 con información del IX Censo de Población 2000 (M. E. González, 2004).

Gráfica VI.2 Relación entre la percepción promedio cantonal de eficacia municipal según el Índice de desarrollo social de MIDEPLAN



La extendida percepción de poca eficacia municipal se combina con un extendido juicio sobre la falta de “*responsiveness*” de las autoridades y funcionarios municipales ante las necesidades de la gente. Al respecto se formuló dos preguntas a los entrevistados en las que se indaga sobre cuanto caso hacen las autoridades municipales (Recuadro VI.1). Ambas preguntas se encuentran estrechamente asociadas ($r=.561$; $\text{Sig}<.001$).

Recuadro VI.1 Preguntas empleadas para medir el *responsiveness* de la municipalidad NP1B. ¿Hasta que punto cree Ud. que los funcionarios de la municipalidad le hacen caso a lo que pide la gente en estas reuniones?*

Le hacen caso (1) mucho (2) algo (3) poco (4) nada (8) NS

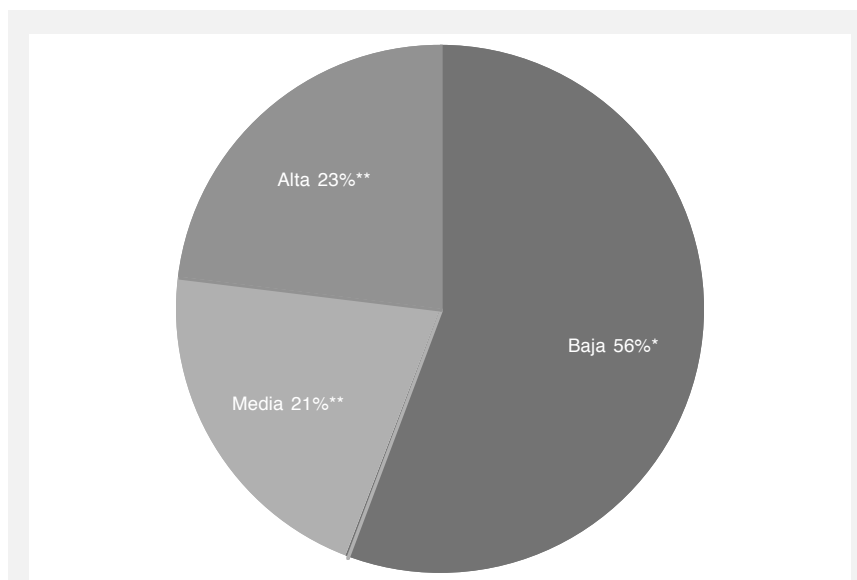
NP1C. Si Ud. tuviera una queja sobre algún problema local, y lo llevara a algún miembro del concejo municipal, ¿Que tanto cree Ud. que le haría caso?

(1) Mucho (2) algo (3) poco o (4) nada? (8) NS

* Se refiere a reuniones convocadas por el alcalde

En general, las personas consideran que tanto el Concejo Municipal –órgano legislativo del gobierno local- como los funcionarios públicos tienen una baja sensibilidad ante las peticiones que les formula la gente. El 55.8% así lo considera, más del doble de quienes creen que ambos actores –Concejo y funcionarios- hacen algo o mucho caso a las peticiones ciudadanas (Gráfica VI.3). Estas proporciones se mantienen de manera similar en las distintas regiones, aunque la percepción es levemente mejor entre quienes habitan en el Gran Área Metropolitana.

Gráfica VI.3 Percepción sobre la sensibilidad (*responsiveness*) del gobierno local ante peticiones de la gente



*Las personas contestaron que tanto el Concejo municipal como los funcionarios municipales hacen poco o nada caso a lo que pide la gente -preguntas NP1B y NP1C.

**Las personas contestaron que al menos uno de los dos -Concejo o funcionarios- hacen algo o mucho caso a lo que pide la gente -preguntas NP1B y NP1C-

***Las personas contestaron que tanto el Concejo municipal como los funcionarios municipales hacen algo o mucho caso a lo que pide la gente -preguntas NP1B y NP1C.

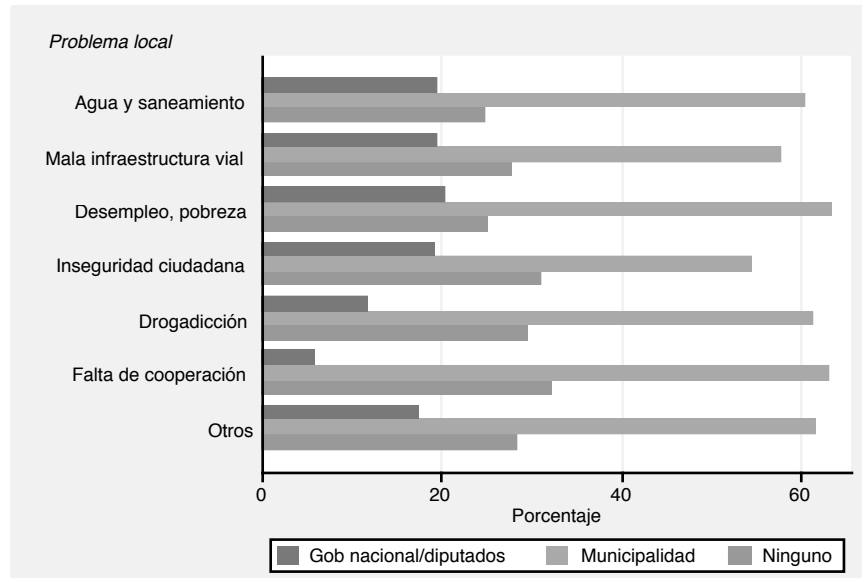
La crítica valoración de las personas sobre la eficacia y la falta de respuesta municipal no implica que ellas descarten a las municipalidades como medios para resolver los problemas de sus comunidades. Cuando a las personas se les pide identificar el ente que mejor responde a la hora de ayudar a resolver los problemas locales, la mayoría de las personas identifican a su municipalidad (que ronda el 60%), independientemente del problema que identificaron (Gráfica VI.4).⁷⁴ En general, por una proporción que varía entre tres a uno (agua y saneamiento e infraestructura vial) y cinco o más a uno (drogadicción, falta de cooperación y participación), la municipalidad aventaja al gobierno nacional y los diputados. Donde la ventaja es ligeramente menor es en el tema de la inseguridad ciudadana. En síntesis, las personas no están contentas con la eficacia de sus municipalidades pero creen que éstos pueden ser el mejor vehículo para atender los problemas locales.

Casi la mitad de la personas consideran que los servicios que brinda la municipalidad “no son ni buenos ni malos” (46% del total de la muestras). Cuando se contrastan las opiniones positivas (buenos y muy buenos) con las negativas (malos y muy

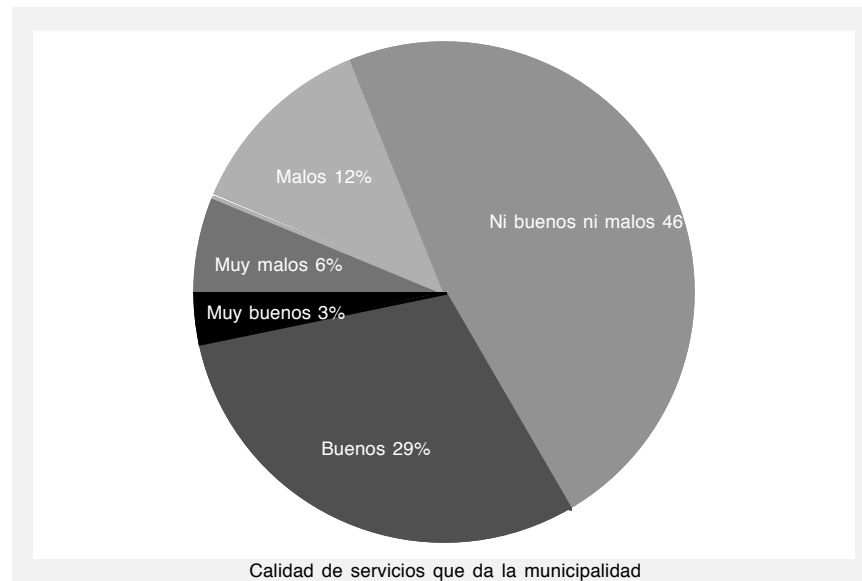
⁷⁴ Pregunta CRMU3: “Hablando más en general, en su opinión, ¿entre el gobierno, los diputados, o la municipalidad quién responde mejor a la hora de ayudar a resolver los problemas de su comunidad o barrio? ¿el gobierno nacional? ¿los diputados? O ¿la municipalidad? (1) el gobierno nacional (2) los diputados (3) la municipalidad (4) [NO LEER] Ninguno (5) [NO LEER] Todos igual (8) NS/NR

malos), las primeras son claramente superiores (33% frente a 19%), respectivamente (Gráfica VI.5).⁷⁵

Gráfica VI.4 Ente que mejor responde para resolver problema de comunidad: Satisfacción con servicios municipales



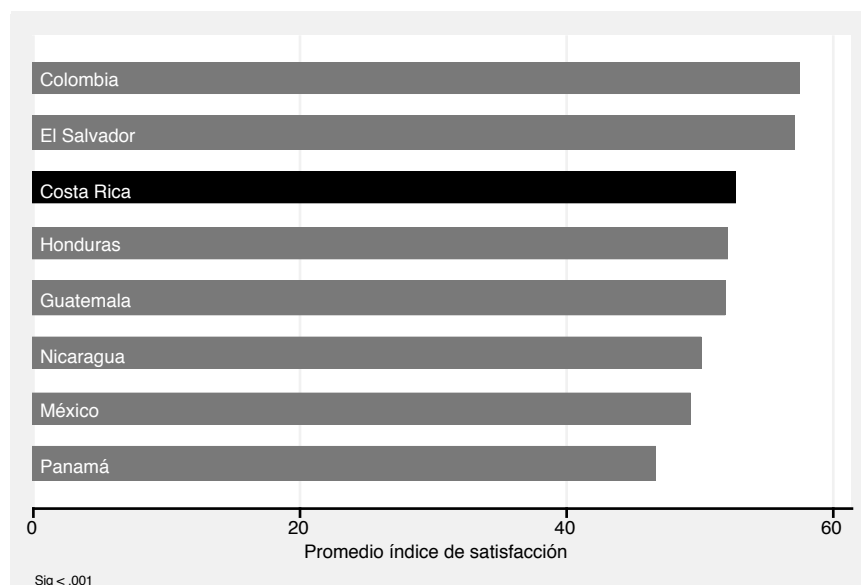
Gráfica VI.5 Percepción de las personas sobre la calidad de los servicios que brinda su municipalidad



⁷⁵ La pregunta SGL1 dice: “¿Diría Ud. que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son ...? 1. Muy buenos 2. Buenos 3. Ni buenos ni malos 4. Malos 5. Muy Malos 8. No sabe”

Para efectos de la comparación internacional, la pregunta se puede transformar en una escala de 0 a 100, donde 0 es la respuesta “Muy malos,” 50 “Ni buenos ni malos” y 100 “muy buenos.” Al igual que en el estudio realizado en Costa Rica hace cuatro años, en promedio, las personas consideran que los servicios son de calidad regular, con un ligero descenso en la puntuación obtenida en aquella ocasión. Al contrastarse este resultado con los de otros países de América Latina incluidos en el estudio, puede notarse que la valoración de los costarricenses es muy similar a las de los demás (Gráfica VI.6).

Gráfica VI.6 Satisfacción de las personas con los servicios municipales en perspectiva comparada, 2004, escala 0-100



Para ahondar los factores que influyen en la percepción ciudadana de la calidad de los servicios municipales se plantearon tres modelos de regresión simple: A, B y C.⁷⁶ El modelo A incluyó únicamente las variables sociodemográficas empleadas a lo largo del estudio. El modelo B incluyó, además, un conjunto de actitudes políticas. Finalmente, el modelo C examina las diferencias locales en la calidad de los servicios municipales y controló las variables sociodemográficas y políticas incluidas en los anteriores por la municipalidad donde viven, introduciendo los cantones como variables “dummies.”

La capacidad explicativa de los modelos es muy dispar. El Modelo A, el más restringido, tiene una capacidad explicativa muy baja $r^2=0.025$ (Modelo A). Ninguna de las variables sociodemográficas constituye un predictor de la evaluación de la calidad de los servicios municipales (con excepción de las amas de casa y la residencia en el Valle Central) –incluso después de controlar por otro tipo de factores. La introducción de variables políticas en el Modelo B aumenta sustancialmente esta capacidad explicativa ($r^2=0.244$) y cuando se introducen los municipios, el r^2 aumenta un tanto más: 0.303 (Modelo C) (Tabla VI.5).⁷⁷

⁷⁶ Véase nota 12 en capítulo 3.

⁷⁷ Por efectos de espacio, la tabla presenta los resultados del Modelo B, aunque en el texto se comentan los obtenidos con el Modelo C.

Tabla VI.5 Predictores de la evaluación de la calidad de los servicios municipales

Predictores	B	Beta	Sig.
(Constante)	34,255		,000
REGIONVC Región Valle Central	5,467	,114	,001
TAMAÑOC1 Resto Urbano	2,834	,049	,140
TAMAÑOC2 Rural	,232	,005	,889
Q1R Hombre	1,104	,025	,473
OCUP1R2 Amas de casa	3,251	,066	,056
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	-1,378	-,030	,260
EDR Años de educación	-,037	-,006	,849
Q2 Cuál es su edad en años cumplidos?	-,054	-,038	,164
Q10R Ingreso-en miles-	,000	,002	,951
RIQDX Índice de riqueza	-,195	-,023	,523
Q4RRC1 Religiosidad media	-1,398	-,030	,299
Q4RRC2 Religiosidad baja	-2,314	-,045	,129
N1 Combate la pobreza	,884	,067	,069
N3 Promueve y protege los principios democráticos	,550	,041	,254
N9 Combate la corrupción en el Gobierno	-,666	-,055	,121
M1 Hablando en general del actual gobierno, diría que el traba	-1,369	-,051	,087
NP1BRN Funcionarios municipales hacen caso pedidos en reuniones	,214	,286	,000
NP1CRN Atención del consejo municipal a quejas	,129	,172	,000
ADEMR Índice de apoyo a la democracia	,086	,074	,018

La residencia de las personas en cinco de los treinta cantones de la muestra es estadísticamente significativa. En otras palabras, las actitudes políticas y el lugar de residencia efectivamente hacen diferencia a la hora de evaluar la calidad de los servicios municipales (Así, las personas que viven en Montes de Oca, Tibás, Heredia y Puriscal (cantones pertenecientes a la GAM o, en el caso de Puriscal, adyacente) tienen una peor evaluación de los servicios municipales. En cambio, los que viven en Belén tienen una mejor evaluación. En consecuencia, pareciera indispensable tomar en cuenta el desempeño del gobierno local específico a la hora de valorar la calidad de los servicios municipales. La Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (Programa Estado de la Nación, 2001a) realizó en 1999 un estudio en profundidad en varios municipios del país, utilizando la metodología de los sitios centinela.⁷⁸ Dos de ellos –Belén y Montes de Oca– están también en el presente estudio –y los resultados fueron significativos. Interesa señalar que los resultados de la encuesta coinciden con los de la auditoría. En ambos estudios, la municipalidad de Belén fue la mejor calificada de cuantas fueron estudiadas. En ella las personas participan más en las reuniones municipales, tienen más confianza en la honestidad y eficacia de las autoridades locales y creen que el gobierno local puede hacerse cargo de servicios hoy en manos del gobierno nacional. En contraste, Montes de Oca –una municipalidad con serios problemas de estabilidad política, pues tuvo 9

⁷⁸ Esta metodología combina técnicas cuantitativas (cuestionario) con técnicas cualitativas (entrevistas, focus groups y grupos grupales ponderados) para el estudio en profundidad de temas locales.

alcaldes en cuatro años, y con denuncias por corrupción de sus funcionarios- puntuó mal en los diversos temas estudiados.

Empero, son las variables políticas las que más inciden de manera sobre la evaluación de la calidad de los servicios municipales. Estas variables pueden agruparse en dos: aquellas referidas a asuntos nacionales como el apoyo a la democracia (ADEMR), la evaluación sobre el desempeño del gobierno (M1) y de su eficacia para combatir la pobreza (N1); y aquellas referidas a asuntos locales, como la percepción de la sensibilidad del Concejo Municipal y de los funcionarios municipales a las peticiones de las personas (NP1B y NP1C).

En cuanto a las variables nacionales, las personas que más apoyan la democracia tienden en promedio a evaluar mejor la calidad de los servicios municipales: entre quienes tienen bajo apoyo al sistema (menos de 50 puntos en el Índice de apoyo al sistema), la calificación promedio de la calidad de estos servicios es 10 puntos por debajo de quienes tienen un alto apoyo al sistema (45 vs. 55 puntos en calidad de servicios municipales, respectivamente).

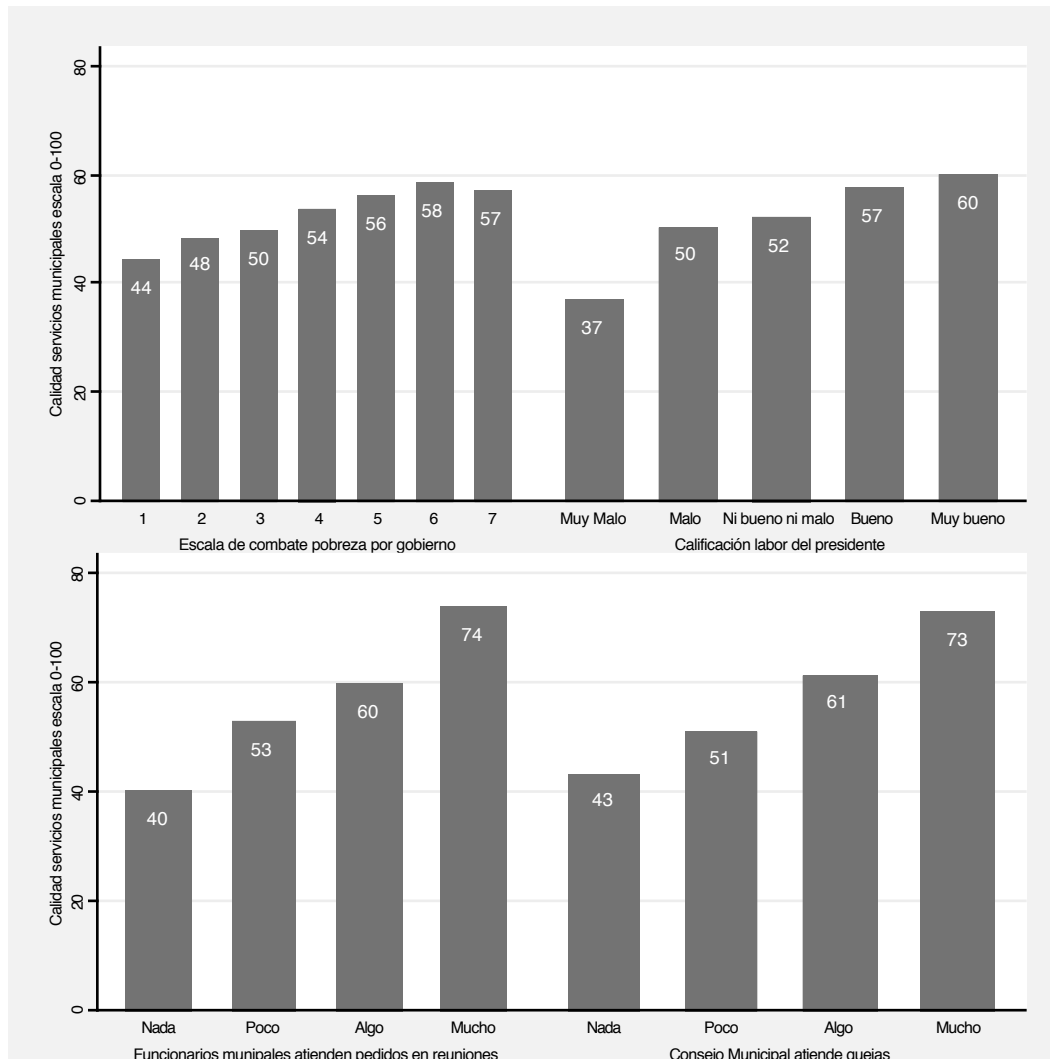
La evaluación sobre el desempeño del presidente y de la eficacia de su gobierno para enfrentar desafíos nacionales son factores que influye poderosamente sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos. Pareciera que, en este tema, la suerte de las municipalidades es arrastrada por un factor ajeno a ellas como lo es el desempeño y eficacia del gobierno nacional (Gráfica VI.7). En efecto, quienes peor califican la eficacia del gobierno para combatir la pobreza (puntajes 1 y 2 en la escala de 7), la evaluación de la calidad de los servicios municipales es inferior en 10 puntos o más de la que manifiestan los que juzgan más positivamente al gobierno. Aún más marcadas son las diferencias según la evaluación de la labor del Presidente de turno.

En el plano local, la percepción acerca de la apertura del gobierno local a las peticiones de la gente juega un papel preponderante en la evaluación de los servicios municipales. Entre menos apertura la gente piensa que la municipalidad tiene, peor es dicha evaluación. En efecto, entre quienes consideran que los funcionarios (NP1C) y el Concejo Municipal (NP1B) tienen poca o ninguna apertura, la evaluación de los servicios municipales es casi 30 puntos inferior a quienes consideran que ambos tienen algo o mucha apertura: los primeros puntúan cerca de 40 en la escala de 0 a 100, mientras que los segundos muestran un promedio superior a 70 (Gráfica VI.7).

.6.3.2 Rendición de cuentas

Otro de los argumentos a favor de la descentralización es que, por estar los gobiernos locales más cerca de las personas, se facilita la rendición de cuentas. Por una parte, las autoridades municipales viven en las comunidades que gobiernan y pueden ser abordados fácilmente por sus vecinos; por otra, por tratar la municipalidad asuntos que afectan más directamente a las personas, y sobre las que ellas tienen un conocimiento de primera mano, éstas se encuentran en mejor posición para exigir a las autoridades municipales que den explicaciones por sus acciones u omisiones. Pero, ¿creen las personas que las autoridades municipales rinden cuentas por la gestión local? Y, si lo hacen ¿acostumbran a rendir cuentas más que las instituciones del gobierno central?

Gráfica VI.7 Valoración de la calidad de los servicios municipales por percepciones de eficacia del gobierno central y de sensibilidad del gobierno local



Para estudiar el tema de la rendición de cuentas local, el presente estudio introdujo tres preguntas. La primera, de carácter abierto, interroga a las personas sobre el significado que tienen para ellos el concepto de rendición de cuentas. Luego, de acuerdo con ese significado, pregunta sobre la frecuencia con que la municipalidad rinde cuentas y si lo hace de manera más frecuente que otras instituciones (Recuadro VI.2)

Rendición de cuentas es una traducción aproximada a la expresión inglesa “[to be held] accountable.” En idioma español, el significado preciso de esta expresión está dado por la frase: dar explicaciones veraces, oportunas, completas y responsables –en el sentido de quien las da asume las consecuencias de sus acciones u omisiones. Así, no toda explicación ni comunicación por parte de la autoridad cumple con las estipulaciones de un acto de rendición de cuentas, pues la información a la ciudadanía puede ser

incompleta, tardía, no veraz e, incluso, aún cuando cumpla con varios de los requisitos, pueden no ser responsables (M. Gutiérrez & Román, 2002) .

Recuadro VI.2 Preguntas empleadas para estudiar la rendición de cuentas municipal

CRMURC1 Hoy en día es frecuente escuchar en distintos medios a personas hablar sobre rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos. Para usted, ¿Qué significa rendir cuentas? ANOTAR RESPUESTA 88. NS (Pase a JC1)

CRMURC2 Y, de acuerdo con ese significado que tiene para usted, ¿Diría que su municipalidad rinde cuentas al pueblo, siempre, casi siempre, casi nunca o nunca?

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS/NR

CRMURC3 Y, en comparación con las instituciones del gobierno y la Asamblea Legislativa, ¿Diría que su municipalidad acostumbra rendir cuentas al pueblo más que esas otras instituciones?

1. Más la municipalidad 2. Más las instituciones del gobierno (NO LEER) 3. Las dos rinden cuentas más o menos igual 4. Ninguna de las dos rinden cuentas 8. NS/NR

Ahora bien, es razonable pensar que el grado que las personas exijan a sus autoridades municipales ejercer la rendición de cuentas, en el sentido antes señalado, está influido por la noción que ellas tengan acerca de lo que esta práctica es. Si no tienen una idea clara, difícilmente pueden exigir que las autoridades rindan cuentas; si creen que se trata solo de publicitar información –pero no de asumir responsabilidades- pudieran contentarse con que las autoridades proporcionen ciertos datos de su gestión. En cambio, si consideran que rendir cuentas implica asumir responsabilidad, es razonable pensar que exigirán mucho más a sus autoridades.

Al indagarse sobre el concepto que las personas tienen sobre rendición de cuentas, se obtuvo más de 70 respuestas distintas que, sin embargo, pueden clasificarse en categorías más amplias. Varias cosas llaman la atención: una buena proporción no pueden articular ningún significado –una de cada cuatro no saben que es rendir cuentas (26.0% del total). Casi la mitad cree que es un acto puramente informativo: que las autoridades den información –sin establecer condiciones a la veracidad, oportunidad y amplitud de la misma (42.7% del total); finalmente una minoría le otorga un significado más cercano al concepto antes enunciados de rendición de cuentas: es un acto de transparencia y de asunción de responsabilidades (22.3% del total). Una de cada once personas cree que rendir cuentas es cumplir con objetivos de gestión –parece confundir eficiencia y rendición de cuentas. Finalmente, una proporción pequeña otorga otros significados al concepto de rendición de cuentas (Tabla VI.6).

La falta de conocimiento sobre el tema de rendición de cuentas queda patente cuando se pregunta a los entrevistados sobre la frecuencia con que la municipalidad rinde cuentas (CRMURC2) y sobre las entidades que más lo hacen -gobierno central o municipios (CRMURC3). En el primer caso, más de una tercera parte de las personas (36.9% del total) no emitieron respuesta; una proporción similar (35.9%) tampoco contestó la segunda. Cabe señalar que, contrario a lo esperado, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el significado que las personas otorgan al concepto de rendición de cuentas y las valoraciones acerca de la rendición de cuentas que las autoridades municipales efectúan.

Tabla VI.6 Significados del concepto de rendición de cuentas según los entrevistados

	Significado	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Validos	Dar información 1/	641	42,7	57,7	57,7
	Transparencia / responder por actos 2/	334	22,3	30,1	87,8
	Cumplimiento de objetivos 3/	88	5,9	7,9	95,8
	Otros	47	3,1	4,2	100,0
	Total	1110	74,0	100,0	
Perdidos	88	390	26,0		
Total		1500	100,0		

1/ Incluye: informar sobre lo que se ha hecho (5,7%), informar en que se usan, invierten los recursos (18,0%), informar lo que se está haciendo (10,6%), da informe económico (0,9%), chequear el gasto de dinero (0,5%), informes claros de ingresos y gastos (4,3%) y otras respuestas con una frecuencia inferior a 0,5% del total de respuestas

2/ Incluye: Que presenten facturas de lo gastado (1,0%), dar información con hechos del manejo del dinero (3,9%), dar explicaciones de lo que hacen (1,9%), ser transparente e informar al pueblo (2,1%), que el pueblo esté enterado de todo (0,5%), demostrar con hechos lo que han hecho con el dinero (1,9%), den cuentas de los objetivos que han logrado en el período (1,9%) y otras respuestas con una frecuencia inferior a 0,5% del total de respuestas

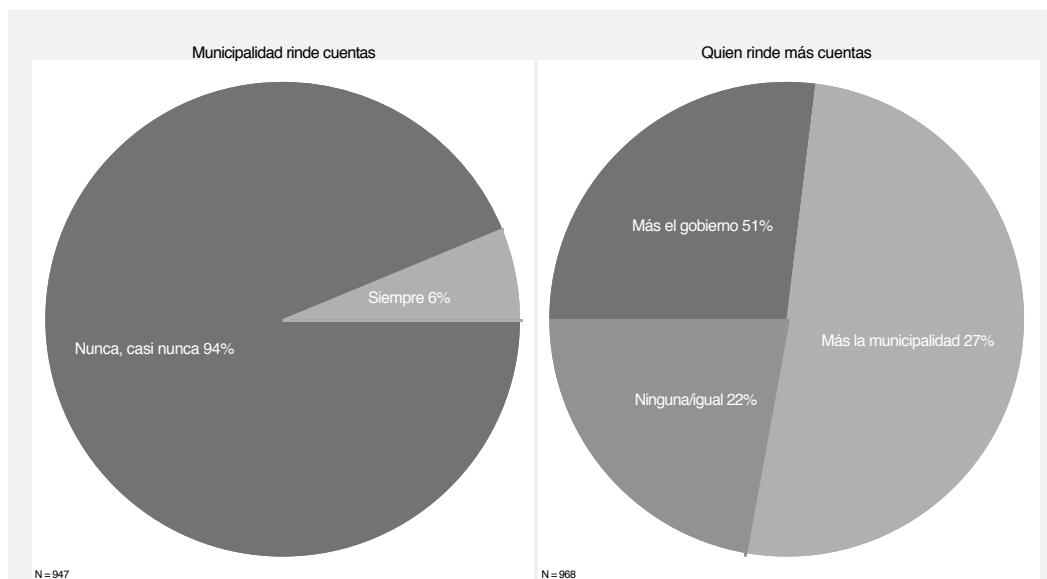
3/ Incluye: ser responsables, que cumplan (1,5%), responder a las necesidades del pueblo (0,4%) y otras respuestas con frecuencias menores que aluden a la solución de problemas

4/ Incluye: significados negativos ("no significa nada", "es una burla, un engaño") u otros no relacionados ("mucha pobreza", "significa como venganza"), que tienen frecuencias inferiores a 0,3% del total de respuestas

Quienes tienen opiniones acerca de la práctica de rendición de cuentas en las municipalidades son fuertes críticos de estas corporaciones: el 93.5% de ellos considera que la municipalidad nunca o casi nunca rinde cuentas. Por otra parte, la mayoría considera que las instituciones de gobierno acostumbran a rendir cuentas más que las municipalidades. La proporción aquí es 2:1 (Gráfica VI.8). No se encontraron variables personales o geográficas que ayuden a predecir estas valoraciones.

En este contexto de crítica a las municipalidades por la falta de rendición de cuentas –o bien, de ignorancia por parte de un amplio segmento de la población sobre lo que rendición de cuentas significa– no es de extrañar que exista una marcada desconfianza en el manejo que las municipalidades realizan de los fondos. En efecto, dos de cada tres (67.1%) que respondieron a esta pregunta (1314 personas) manifestaron que tienen poca o ninguna confianza en dicho manejo de fondos. Cuando se toma en consideración solo la población que tiene opinión acerca de la rendición de cuentas por parte de la municipalidad (pregunta CRMURC2) se encontró que, dentro de un marco de generalizada desconfianza, las personas que creen que la municipalidad siempre o casi siempre rinde cuentas muestran una levemente mayor confianza en el manejo que éstas hacen de los fondos ($r_{\text{Spearman}} = .119$, $\text{sig} = .000$).

Al igual que la percepción sobre la calidad de los servicios municipales, la confianza en el manejo municipal de los fondos está influida por factores locales. Cuando en un modelo de regresión simple se introducen los cantones (Modelo B), el poder explicativo aumenta ($r^2 = .105$, $\text{sig} < .001$). En este caso, 12 de los 30 cantones de la muestra son significativos ($\text{sig} < .1$) y nuevamente la municipalidad de Belén aparece positivamente asociada con la confianza. No obstante, cabe recordar que en todos los lugares prevalece la desconfianza –en mayor o menor grado– con la municipalidad.

Gráfica VI.8 Percepciones sobre la rendición de cuentas por las municipalidades

6.4 Participación ciudadana en asuntos municipales

La contraparte a la evaluación ciudadana sobre los diversos aspectos de la gestión municipal (eficacia, calidad de servicios y rendición de cuentas) es el grado que ellos participan en esta gestión. Pudiera ser que los críticos ciudadanos costarricenses sean, empero, ciudadanos que no participan en la gestión local –críticos inactivos.

La participación en asuntos locales puede estudiarse en dos ámbitos distintos: el involucramiento en actividades convocadas por la municipalidad (NP1) y la petición a las autoridades municipales (NP2) (Recuadro VI.3). En ambos casos, aunque por medios distintos, las y los ciudadanos recurren funcionarios y autoridades municipales como titulares de derechos.

Recuadro VI.3 Preguntas empleadas para medir participación en asuntos municipales

NP1. ¿Ha asistido a alguna reunión convocada por el alcalde durante los últimos 12 meses?

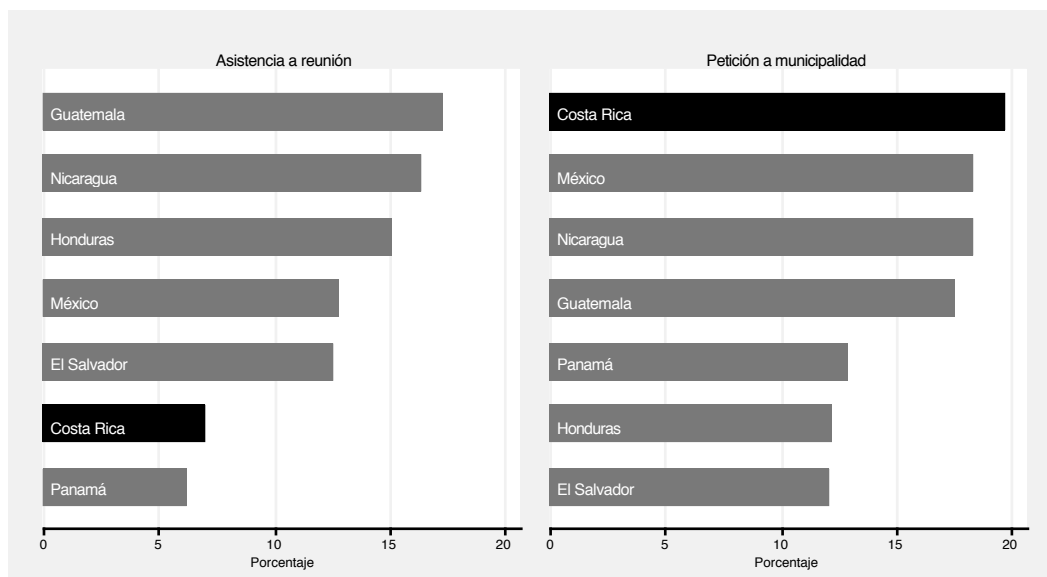
(1) Sí (2) No (8) No sabe/ no recuerda

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal o síndico de la municipalidad durante los últimos 12 meses?

(1) Sí (2) No (8) No sabe/ no recuerda

Solo 7 de cada 100 personas han asistido a una reunión convocada por el alcalde durante los últimos 12 meses (7.2% del total). El presente estudio confirma, pues, la escasa participación que había sido detectada cuatro años atrás, en 1999, cuando a la pregunta NP1 solo alrededor del 5% de las personas contestaron que habían asistido a reuniones municipales. Cuando se compara esta situación con otros países, la conclusión es que –junto con Nicaragua– los costarricenses muestran la más baja participación en asuntos municipales (Gráfica VI.9).

Gráfica VI.9 Proporción promedio de personas que asisten a reuniones y peticionan a municipalidad en perspectiva comparada



Para analizar las características sociales de la población que asiste a reuniones municipales e identificar predictores de la participación, se utilizó una regresión logística (variable dependiente binaria: asiste o no a reuniones). En general, de las condiciones analizadas, solamente la edad y el nivel de educación son significativas. A mayor edad, se registra una ligera mayor asistencia a reuniones municipales (Tabla VI.7).⁷⁹

La variable que más fuertemente incide en la asistencia a reuniones municipales es el nivel de instrucción de las personas. Aquellas con post secundaria (educación superior completa o incompleta) muestran un nivel de asistencia que triplica el de primaria o menos. A mayor educación, más participación. No se encontraron diferencias locales ni regionales en este patrón.⁸⁰ Las personas que más asisten a reuniones municipales creen, con más intensidad que las demás, en el valor de la participación ciudadana como vehículo para resolver los problemas de las comunidades. En efecto, ocho de cada diez personas participativas creen que la participación es eficaz (Tabla VI.8). La proporción es más baja entre quienes no asisten a reuniones municipales (r Spearman=.066, sig<.05).

La segunda dimensión de esta participación es la petición que los ciudadanos puedan realizar ante una oficina, funcionario, concejal o síndico municipal. Esta es otra manera de involucrarse en la gestión de asuntos públicos. En este aspecto, hay una mayor actividad ciudadana: en Costa Rica, casi una de cada cinco personas han ejercitado el derecho de petición ante su municipalidad durante el último año (20%). Este nivel de petición es similar al reportado en los demás países de la región (Gráfica VI.9)

⁷⁹ En este capítulo no se realiza un análisis más profundo sobre el tema de participación, pues este tema será abordado en el Capítulo 8.

⁸⁰ Se corrió la regresión logística introduciendo los cantones como variables “dummies.” El modelo no las incluyó. Por otra parte, nótese que las variables regiónvc (Valle Central-fuera de Valle Central) y tamaño (GAM, Resto urbano, rural) no son significativas.

Tabla VI.7 Predictores de la participación en asuntos municipales

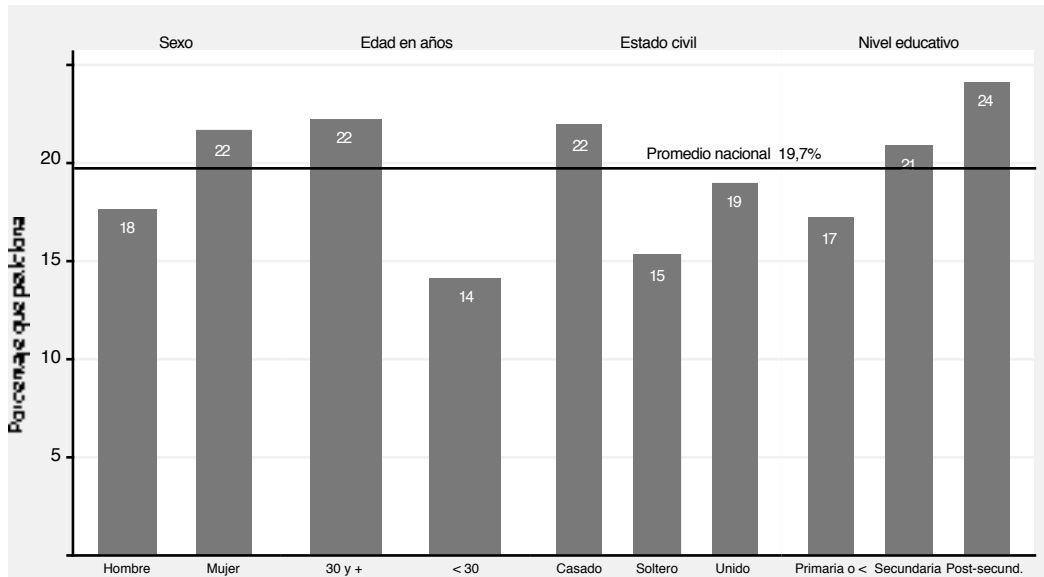
Variables en la ecuación	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
REGIONVC(1)	-,339	,314	1,170	1	,279	,712
TAMAÑO			1,879	2	,391	
TAMAÑO(1)	-,474	,379	1,564	1	,211	,622
TAMAÑO(2)	-,083	,329	,063	1	,802	,921
Q1R(1)	,261	,281	,860	1	,354	1,298
OCUP1R2(1)	-,124	,325	,146	1	,703	,883
Q11R2(1)	,320	,236	1,845	1	,174	1,378
EDR	,134	,034	15,561	1	,000	1,143
Q2	,014	,007	4,216	1	,040	1,014
Q10R	-,001	,001	,530	1	,467	,999
RIQDX	-,011	,056	,041	1	,839	,989
Q4RR			3,717	2	,156	
Q4RR(1)	-,217	,243	,801	1	,371	,805
Q4RR(2)	-,568	,296	3,664	1	,056	,567
Constante	-3,922	,719	29,715	1	,000	,020

Tabla VI.8 Probabilidad de resolver el problema local mediante la participación del pueblo según la asistencia de las personas a la reunión municipal

NPIR Asistencia reunión convocada por alcalde	Probabilidad resolver problema local mediante participación del pueblo		
	Poca o ninguna	Alguna o mucha	Total
No	30,2%	69,8%	100,0%
Si	18,9%	81,1%	100,0%
Total	29,4%	70,6%	100,0%
N	360	866	1226

Al igual que en el tema anterior, se indagó sobre los factores que pueden ayudar a predecir el ejercicio de la petición ciudadana. Para ello se aplicó una regresión logística cuya variable dependiente, de carácter binario, fue el ejercicio de petición en el último año (efectuó petición – no efectuó). Los resultados obtenidos indican que no hay variaciones locales ni regionales significativas en el ejercicio de la petición; tampoco el ingreso ni la riqueza son importantes. En cambio, el sexo, la edad, el estado civil y el nivel de instrucción son factores importantes. En términos generales peticionan ante la municipalidad más las mujeres que los hombres, las personas mayores de 30 años, las personas casadas o en unión libre (y menos los solteros) y, en especial, las que tienen educación post secundaria (sig < .1) (Gráfica VI.10).⁸¹

⁸¹ A diferencia de la variable asistencia a reuniones municipales, el ejercicio de la petición ciudadana no está asociado con una mayor o menor creencia en la participación ciudadana como medio para resolver los problemas de las comunidades.

Gráfica VI.10 Petición a municipalidad y características sociales de las personas

Cuando se analiza en conjunto la asistencia a reuniones municipales y la petición ante las autoridades locales, se observa que ambas variables están asociadas (r Spearman=.222; sig=.000). Quienes asisten tienden también a ejercer más la petición. Con base en esta información pueden identificarse tres grupos: las personas que ni asisten ni peticionan (76.9%), casi tres cuartas partes de quienes respondieron ($n=1413$); los que hicieron una u otra cosa pero no las dos –un nivel intermedio de participación- (18.4%) y, finalmente, el pequeño núcleo más participativo, que asistió y ejerció su derecho a peticionar a su municipalidad (3.7%).

6.5 Nota final: transferencia de obligaciones a municipalidades

El estudio ha mostrado que la mayoría de las personas son críticas del desempeño de las municipalidades en dos ámbitos claves: el de la eficacia para resolver los problemas locales y en su gestión democrática (rendición de cuentas). Además, tienen poca confianza en el manejo de fondos que ellas hacen. Un tanto más atemperada es su valoración sobre la calidad de los servicios municipales que, como se ha visto, se encuentra fuertemente influida por aspectos locales. A pesar de estas valoraciones críticas, se anotó que las personas consideran que las municipalidades responden mejor que las instituciones de gobierno a los problemas locales.

Esta tensión entre una valoración negativa del desempeño municipal y una opinión positiva acerca de la municipalidad como el ente más adecuado para resolver los problemas locales queda patente cuando se pregunta a la gente sobre el traslado de competencias a las municipalidades. La opinión de los costarricenses sobre este tema está francamente dividida: entre quienes responden, 50.7% considera que se debe dar más obligaciones a la municipalidad y 49.3% consideran que deben darse más obligaciones al gobierno nacional, no cambiar nada la situación actual (de alta centralización de

competencias en el gobierno central) o, a lo sumo, trasladar servicios condicionado al desempeño de la municipalidad.

Tabla VI.9 Traslado de obligaciones y servicios a las municipalidades

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Más obligaciones gobierno nacional	573,0	38,2	41,9	41,9
No cambiar nada	52,0	3,5	3,8	45,8
Más a la municipalidad si da mejores servicios	49,0	3,3	3,6	49,3
Más a la municipalidad	692,0	46,1	50,7	100,0
Válidos Total	1366,0	91,1	100,0	
Perdidos Sistema	134,0	8,9		
Total	1500,0	100,0		

Capítulo VII. Comportamiento electoral

7.1 Introducción

El presente capítulo examina las actitudes y comportamientos electorales de los costarricenses y, al final, presenta algunos resultados sobre el apoyo ciudadano a reformas electorales que han sido planteadas en los últimos años.⁸² Se organiza en cinco secciones, además de esta introducción. La segunda sección trata acerca de las actitudes sobre el voto, percepciones de la libertad de sufragio y la eficacia del voto. La tercera, estudia los comportamientos y la participación electoral, distinguiendo dos dimensiones: el ejercicio o no del voto y las actividades más allá del voto. En ambas dimensiones se analizan los factores predictivos de la participación. La cuarta sección presenta un análisis de tres modos de participación electoral: los inactivos, los que se limitan a votar y los activistas electorales. Finalmente, se estudia el apoyo ciudadano a tres reformas políticas que han sido ampliamente debatidas en los últimos años.⁸³

Cabe mencionar que para el presente estudio hubiese sido de gran utilidad contar con los resultados de la amplia investigación que sobre el abstencionismo está desarrollando el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), a petición del Tribunal Supremo de Elecciones. A la fecha de redacción del presente informe (junio 2004), estos resultados no se encontraban disponibles.

7.2 Actitudes sobre el voto

El voto libre para escoger a los gobernantes es la base de la democracia. Por libre se entiende que el voto responde, sin menoscabo alguno, al ejercicio de la autonomía

⁸² Los alcances del capítulo son modestos: analiza las percepciones de las personas sobre el voto, los factores que ayudan a predecir la decisión de sufragar, las razones argumentadas para no votar y, finalmente, los modos de participación ciudadana en el ámbito electoral. No pretende realizar un estudio histórico del comportamiento electoral (el Capítulo I introdujo alguna información al respecto).

⁸³ La literatura sobre el comportamiento electoral es una de las más ricas en las ciencias políticas, especialmente en los Estados Unidos. Los primeros estudios fueron realizados durante la primera mitad del siglo XX pero la investigación se profundiza en las décadas entre 1950-1970 (Fiorina, 1981; Lyons, 1981; Niemi, 1993). Obras importantes de este período son las de Downs y Rae, que introducen una perspectiva microeconómica al estudio del voto (Downs, 1957; Rae, 1967). Desde una perspectiva más sociológica, Lipset y Rokkan procuran desentrañar el vínculo entre los votantes individuales y la estructura social (Lipset & Rokkan, 1967). Más recientemente, los estudios han procurado determinar, con una perspectiva más institucionalista, la incidencia de las normas e instituciones sobre el voto (Lijphart, 1999; Nohlen, 1993; Norris, 2004). En Costa Rica, uno de los primeros estudios empíricos sobre el tema fue realizado en la década de 1970 por Carvajal (Carvajal, 1978).

moral de cada individuo (Robert Dahl, 1989). En otras palabras, que las personas votan tomando en cuenta únicamente sus creencias sobre lo que más les conviene y, además, que esta decisión no tiene consecuencia alguna sobre su integridad física o patrimonial o las de personas relacionadas a ella. En síntesis, que no existen presiones y amenazas que limitan el rango de opciones que la o el elector enfrenta a la hora de emitir su sufragio.

Por otra parte, el derecho de votar se complementa con el libre ejercicio del derecho a presentarse como candidato a un cargo público. Al igual que en el caso anterior, esto significa que la o el elector que decide presentarse como candidato no experimenta presiones y amenazas a su integridad física y patrimonial.

En Costa Rica, durante el período 1990-2002 –lapso en el cual se realizaron 4 elecciones nacionales– no ocurrieron denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por amenazas a la integridad física y patrimonial de electores y candidatos a cargos públicos. Tampoco se encontró denuncias de este tipo en algún medio de comunicación colectiva (Programa Estado de la Nación, 2001a, 2002). Cabría esperar, entonces, que pocas personas sientan algún menoscabo a sus derechos de elegir y ser electo. Sin embargo, esta conclusión es insuficiente. Pudiera ser que no existan reportes en el TSE o en los medios de comunicación colectiva porque las personas tengan temor a denunciar. Por ello, es necesario complementar lo anterior con una indagación directa a las personas acerca de si han experimentado temores, presiones o amenazas a la hora de ir a votar. Un estudio previo, realizado en 1999, arrojó que una muy pequeña proporción de personas reportan la existencia de presiones y amenazas, o de incentivos para “comprar el voto” (Programa Estado de la Nación, 2001a).⁸⁴ Es importante, sin embargo actualizar esta información. Para estudiar este tema, se formularon tres preguntas (Recuadro VII.1).

Recuadro VII.1 Preguntas empleadas para el estudio del voto libre

Si usted decidiera participar en algunas de las actividades que le voy a mencionar, ¿lo haría usted sin temor, con un poco de temor, o con mucho temor?

DER2. ¿Votar en una elección nacional?

DER4. ¿Postularse para un cargo de elección popular?

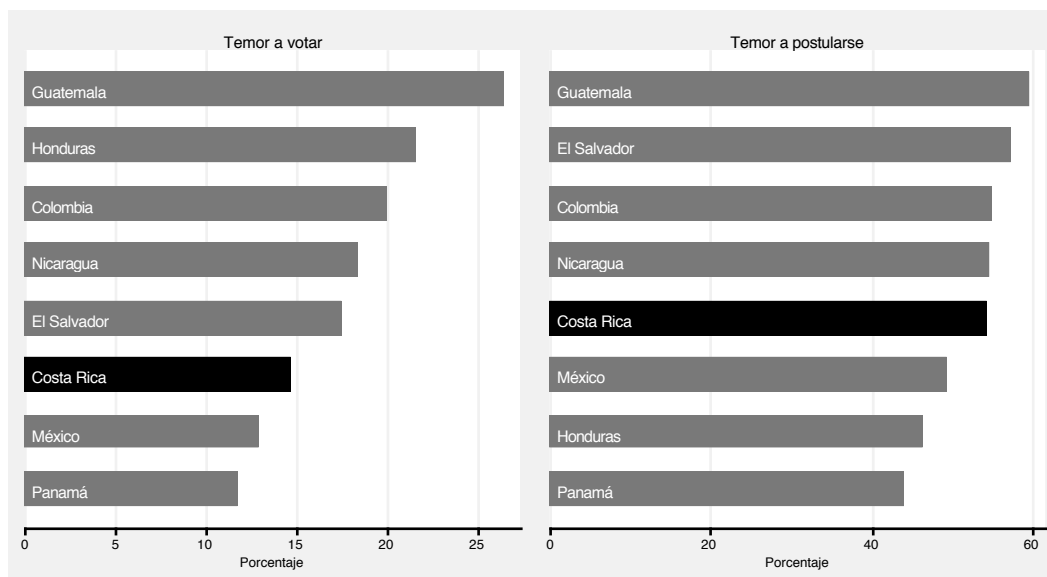
CRVB1 ¿Puede decirme si en algunas de estas elecciones, alguien lo presionó, o Ud. recibió algo a cambio por votar de cierta manera o no votar? 1. Sí 2. No 8. NS/NR

La mayoría de las personas (85%) dice que no ha tenido temor a la hora de votar en una elección nacional; solo 3% manifiestan haber sentido “mucho temor,” y casi 12%, “algún temor”. En perspectiva comparada, Costa Rica está (con México y Panamá) entre los países donde menor proporción de personas confiesan haber sentido temor a la hora de votar (Gráfica VII.1). Ahora bien, como las personas pueden sentir temor por distintos motivos –no necesariamente relacionados con amenazas– es importante examinar estos resultados con los que arroja la pregunta CRVB1, que alude a presiones o a intentos de “comprar” su voto. Casi nadie (2%) admite haber sido presionado de una u otra manera. De esto puede inferirse que, en efecto, el voto en Costa Rica es un voto libre.⁸⁵

⁸⁴ La pregunta CRVB1 se formuló en la encuesta que se realizó en 1999 como parte de la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (Programa Estado de la Nación, 2001a).

⁸⁵ El resultado de la pregunta DER4 es, a primera vista, interesante. Más de la mitad de las personas admiten sentir algún temor o mucho temor de postularse a un cargo público (54.1%). Estas cifras deben, sin embargo, tomarse con cuidado. Esta pregunta tiene dos problemas. En primer lugar, el “temor” a presentarse como candidato podría estar más relacionado –no lo

Gráfica VII.1 Proporción de personas con temor a votar y a postularse a un cargo público en perspectiva comparada



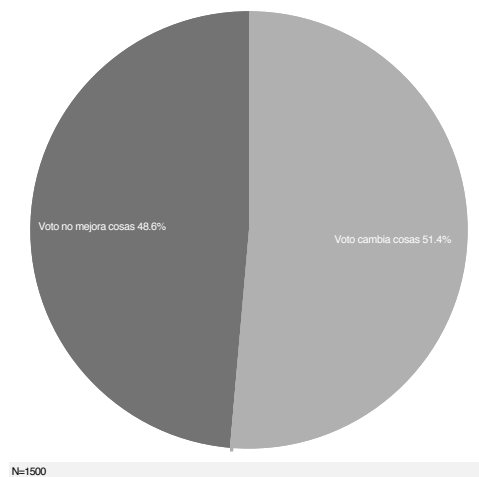
Ahora bien, las personas pueden considerar que tienen la libertad de votar, pero: ¿consideran útil el voto como instrumento para influir en el gobierno de su sociedad? Este tema es importante pues para la democracia es nocivo que una parte importante de la ciudadanía considere que el voto es un instrumento ineficaz o fútil. En este caso, más que una herramienta que da poder a la ciudadanía, el votar puede ser visto como un acto ritual y, si esta percepción perdura, podría eventualmente desestimular la participación electoral. Para indagar sobre la eficacia del voto se incluyó la pregunta:

ABS5. ¿Cree que el voto puede mejorar las cosas en el futuro o cree que como quiera que vote, las cosas no van a mejorar? (1) El voto puede cambiar las cosas (2) Las cosas no van a mejorar (8) NS/NR

Los resultados son preocupantes: casi la mitad de los ciudadanos considera que, como quiera que voten, las cosas no van a mejorar (48% del total) –debido al margen de error de la encuesta, podría decirse que están empatados con los que consideran que el voto es una herramienta eficaz (Gráfica VII.2). Esto sugiere la existencia de extendidas dudas sobre la eficacia del acto central de la democracia: el sufragio. Visto en conjunto, puede decirse que la mayoría de los costarricenses piensa que hay un voto libre, pero se encuentran profundamente divididos en la creencia sobre la eficacia del voto.

sabemos- a otros factores tales como: “pánico escénico” o no estar preparado para ser objeto de un intenso escrutinio público –factores poco relacionados con lo que aquí interesa analizar. En segundo lugar, colocan a las personas ante un escenario improbable: postularse como candidato. No es de extrañar que haya una importante cantidad de missings (249). Como lo indica la Gráfica VIII.1 en todos los países proporciones importantes y similares a las de Costa Rica indican haber sentido temor a postularse a un cargo público, lo que pareciera reforzar el argumento anteriormente esbozado.

Gráfica VII.2 Percepción de la eficacia del voto como medio para cambiar las cosas



7.3 Participación electoral

La libertad de sufragio es indispensable para la democracia pero insuficiente. En efecto, la libertad no garantiza que las y los ciudadanos deseen participar en la escogencia de sus gobernantes y, en última instancia, que lo hagan. Para esto último, las personas deben querer ejercer sus derechos.

Sin participación ciudadana, la democracia electoral no es viable. Los ciudadanos, como fuente de soberanía del poder, son quienes eligen a sus gobernantes. Si deciden masivamente abstenerse de hacerlo, la legitimidad y la vigencia del régimen democrático sufre y éste no podría perpetuarse pues las elecciones son el mecanismo mediante el cual se reproduce (Benavides et al., 2003).⁸⁶ De ahí que es crítico examinar el nivel y modalidades mediante las cuales los electores participan en el terreno electoral.

Ahora bien, la participación electoral no es sinónima a votar. En un proceso electoral, las y los ciudadanos pueden realizar una amplia variedad de actividades más allá del voto: persuadir a sus conciudadanos, manifestarse públicamente, trabajar a favor de un candidato. Por ello, esta sección analiza dos dimensiones de la participación electoral: el ejercicio del voto y el involucramiento de las personas en actividades del proceso electoral más allá del sufragio.

7.3.1 El ejercicio del voto

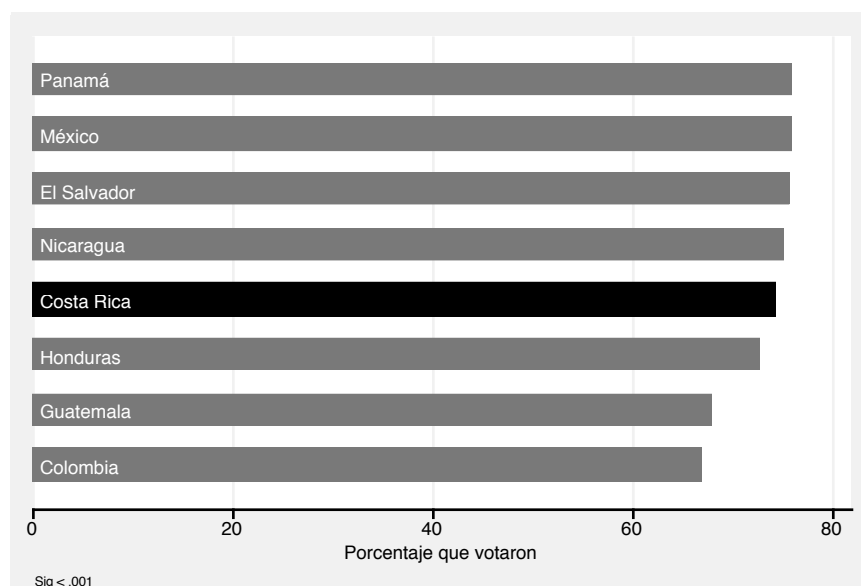
En Costa Rica votar es una obligación cívica pero, a diferencia de otras democracias latinoamericanas, abstenerse no implica sanciones específicas (República de Costa Rica, 2004). En las elecciones presidenciales del 2002 –primera ronda– votaron el 69% de las y los ciudadanos. Este nivel de participación, similar al ocurrido en 1998, es inferior al promedio de las nueve elecciones presidenciales celebradas durante el período 1962-1994 (aproximadamente 80%) y solo comparable con el registrado en las primeras

⁸⁶ Lo contrario, que el funcionamiento de la democracia electoral requiere de una alta participación no es necesariamente cierto. A la fecha no existe una teoría capaz de establecer cuál es el nivel ideal y óptimo de participación ciudadana (Ibid, loc. Cit)

elecciones presidenciales luego de la guerra civil de 1948.⁸⁷ Vista en una perspectiva centroamericana, el descenso en la participación es parte de una tendencia regional (con excepción de Nicaragua y Panamá, el nivel de participación electoral disminuyó en cuatro de los seis países durante el período 1985-2002), aunque el país mantiene niveles similares o superiores a los de Honduras, Guatemala y El Salvador (Programa Estado de la Nación, 2003b; Seligson, 2001).⁸⁸

El nivel de participación electoral en la primera ronda de las elecciones presidenciales del 2002 registrado en el presente estudio (Pregunta VB4: 74% dijeron haber votado) es un tanto superior al realmente observado (69%). El orden de la votación de los partidos es el que efectivamente sucedió (PUSC, PLN y PAC) no así las magnitudes –hay una fuerte subestimación de la votación a favor del PAC y una sobreestimación de la votación por los partidos tradicionales (Pregunta CRVB3). Como el nivel de votación es similar al real –pero no el voto partidario- el análisis que sigue utiliza la pregunta VB1 (“¿Votó en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, en febrero de 2002?”) y descarta la pregunta CRVB3 (“Siempre hablando de esa primera vuelta, ¿por cuál partido votó para Presidente?”). En perspectiva comparada, el nivel reportado de la declinante votación de Costa Rica es similar al reportado en la mayoría de los países incluidos en el estudio, con excepción de Guatemala y Colombia que muestran niveles claramente inferiores (Gráfica VII.3).⁸⁹

Gráfica VII.3 Proporción de personas que dicen haber votado en la última elección presidencial en perspectiva comparada



⁸⁷ En la elección de 1953, sin embargo, las fuerzas políticas derrotadas en 1948 fueron proscritas.

⁸⁸ No se incluyen aquí los resultados de las elecciones nacionales celebradas en el 2004 en tres países de la región: Guatemala, El Salvador y Panamá.

⁸⁹ En la mayoría de los países, el nivel de votación reportado por la encuesta fue distinto al nivel de votación real. Sin embargo, estas diferencias fueron relativamente reducidas (inferiores a 7 puntos porcentuales), como ocurrió en el caso de Costa Rica.

¿Hay factores que ayudan a predecir la participación electoral? Para responder esta pregunta, se empleó una regresión logística, donde la variable dependiente es el ejercicio del voto (VB2: Sí votó / No votó). Los resultados se muestran en el Tabla VII.1. En general, al menos para las elecciones del 2002, la región de residencia, el grado de urbanización, la ocupación y el nivel de participación comunitaria de las personas no ayudan a predecir el voto. En cambio, características personales como el sexo, el estado civil, la edad y el nivel de escolaridad sí son predictores. Por otra parte, variables de capital social, como la confianza interpersonal, las redes de colaboración social y el nivel de acción comunitaria, no tienen efecto sobre la decisión de sufragar. Lo mismo puede decirse de la tolerancia política de las personas: tampoco incide sobre el voto. En cambio el nivel de apoyo a la democracia y la percepción sobre la eficacia del voto sí ayudan a predecir la decisión de votar en las elecciones presidenciales del 2002.

Tabla VII.1 Regresión logística para identificar los predictores del voto en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2002

	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
REGIONVC(1)	-,069	,183	,142	1	,707	,934
TAMAÑOC1	-,270	,223	1,466	1	,226	,763
TAMAÑOC2	-,127	,199	,408	1	,523	,880
Q1R(1)	-,631	,189	11,162	1	,001	,532
OCUP1R2	-,247	,211	1,370	1	,242	,781
Q11R2(1)	,476	,141	11,384	1	,001	1,609
EDR	,042	,024	3,018	1	,082	1,043
Q2	,032	,005	43,447	1	,000	1,033
Q10R	,001	,001	2,529	1	,112	1,001
RIQDX	-,012	,035	,106	1	,744	,989
Q4RRC1	,009	,163	,003	1	,957	1,009
Q4RRC2	-,392	,172	5,183	1	,023	,676
PSOLP	,000	,002	,002	1	,964	1,000
CONFI2	,001	,001	,806	1	,369	1,001
CONSOCR	,002	,003	,473	1	,492	1,002
ADEMR	,007	,004	3,616	1	,057	1,007
ABS5R(1)	,382	,140	7,487	1	,006	1,466
TOLERPR	,001	,003	,059	1	,808	1,001
Constante	-1,008	,544	3,439	1	,064	,365

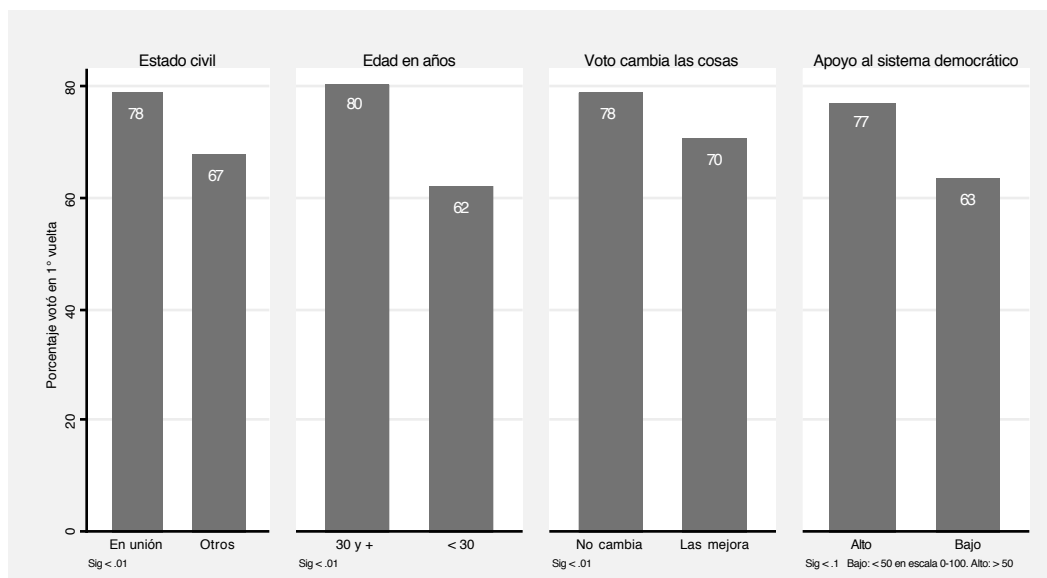
En las elecciones del 2002, las mujeres participaron más que los hombres, 78% a 70%; los mayores a 30 años lo hicieron notablemente más que los menores (80% vs. 62%) ; los casados o unidos votaron más que los solteros, 78% a 67% (Gráfica VII.4). Las personas con post secundaria fueron las más participativas de todas (83%).

Las variables políticas con efecto significativo son las que denotan “inversión” de las personas en el sistema. Por una parte, el nivel del apoyo a la democracia ayuda a predecir el voto, pues quienes más la apoyan⁹⁰ sufragaron con más frecuencia (78%), mientras que entre quienes manifiestan un bajo apoyo, la participación fue mucho menor

⁹⁰ Puntúan 51 o más (escala 0-100) en el Índice de apoyo de Mitchel Seligson –véase capítulo 3.

(63%). Por otra parte, las personas que creen en la eficacia del voto tienden a votar con más frecuencia (Gráfica VII.4).

Gráfica VII.4 Porcentaje que votó en las elecciones de febrero de 2002 por estado civil, edad, percepción de eficacia del voto y apoyo al sistema democrático



Conviene poner atención ahora al abstencionismo. Sabemos que entre quienes no votaron hay más hombres, jóvenes, solteros, de menor nivel de instrucción, menor nivel de apoyo a la democracia y menor creencia en la eficacia del voto. Pero, ¿cuáles razones adujeron para no votar? ¿fue el temor una variable de peso o, por el contrario, la abstención fue resultado de libre escogencia? Para estudiar estos temas, se incluyó la pregunta VB4, en la que se sondean más de 12 razones de abstención, que posteriormente fue recodificada para simplificar el análisis del tema (Recuadro VII.2).

Recuadro VII.2 Pregunta y recodificación empleada para el análisis del abstencionismo VB4. Si no votó, ¿Por qué no votó en esas elecciones?

(01) Falta de transporte (02) Enfermedad (03) Falta de interés (04) No le gustó ningún candidato/partido (05) No cree en el sistema (06) Falta de cédula de identidad (07) No se encontró en el padrón electoral (10) No tener edad (11) Llegó tarde a votar/estaba cerrado (12) Tener que trabajar Otro (88) NS/NR 99. No aplica.

Las anteriores alternativas de respuesta se clasificaron en tres grupos:

1. *Fuerza mayor*: (02) Enfermedad (10) No tener edad (11) Tener que trabajar
2. *Falta de interés*: (01) Falta de transporte (03) Falta de interés (06) Falta de cédula de identidad (07) No se encontró en el padrón electoral (11) Llegó tarde /estaba cerrado⁹¹
3. *Protesta*: (04) No le gustó ningún candidato/partido (05) No cree en el sistema

⁹¹ En Costa Rica, más del 99% de las personas tienen cédula de identidad, el único requisito para poder votar; la ubicación en el padrón electoral es sencilla, pues las personas cuentan con servicios telefónicos y vía internet de respuesta inmediata; las urnas electorales son accesibles en todo el país –están cerca de la residencia de la población y se habilitan 12 horas.

Un total de 358 entrevistados dijeron no haber votado en la primera ronda de las elecciones presidenciales del 2002 (24% de la muestra). La encuesta reporta, pues, un nivel inferior al realmente ocurrido (31%).⁹² La razón más frecuentemente aducida fue la falta de interés (38% de los abstencionistas). Le siguen la protesta (30%) y las razones de fuerza mayor (27%). En general, dos de cada tres abstencionistas no ejercieron el voto por falta de interés o por protesta (Tabla VII.2).

Tabla VII.2 Comparación de las razones para abstenerse a votar según el nivel de temor para sufragar

DEB2R Temor para votar	VB4R Razones de abstención				Total	N
	Fuerza mayor	Falta de interés	Protesta	Otros		
Mucho temor	5,3%	36,8%	36,8%	21,1%	100,0%	19
Un poco temor	25,% ^a	39,3%	35,7%	0,0%	100,0%	56
Sin temor	28,6%	37,8%	27,9%	5,7%	100,0%	283
Total	26,8%	38,0%	29,6%	5,6%	100,0%	358

^a Correlación de Spearman= -,092, sig <,1

No ir a votar tiene poco que ver con un temor por ejercer este derecho (Pregunta DER2). Suponiendo que las razones de no votar son una escala ordinal (protesta es una razón más fuerte para abstenerse que la falta de interés, la que a su vez es más fuerte una razón de fuerza mayor), la correlación entre las razones del no voto con el grado del temor es baja (Correlación de Spearman=-.09, sig <.10). En todo caso, la gran mayoría de los desinteresados y los que protestan no sintieron ningún temor de ir a votar. En resumen, abstenerse parece ser el resultado de una libre decisión ciudadana.⁹³

7.3.2 Participación electoral más allá del voto

Más allá del voto existe un mundo de actividades que la o el ciudadano pueden realizar durante un proceso electoral. Para estudiar este tema en el estudio se incluyeron dos preguntas que procuran captar las otras actividades de participación electoral que las personas realizan (Recuadro VII.3).

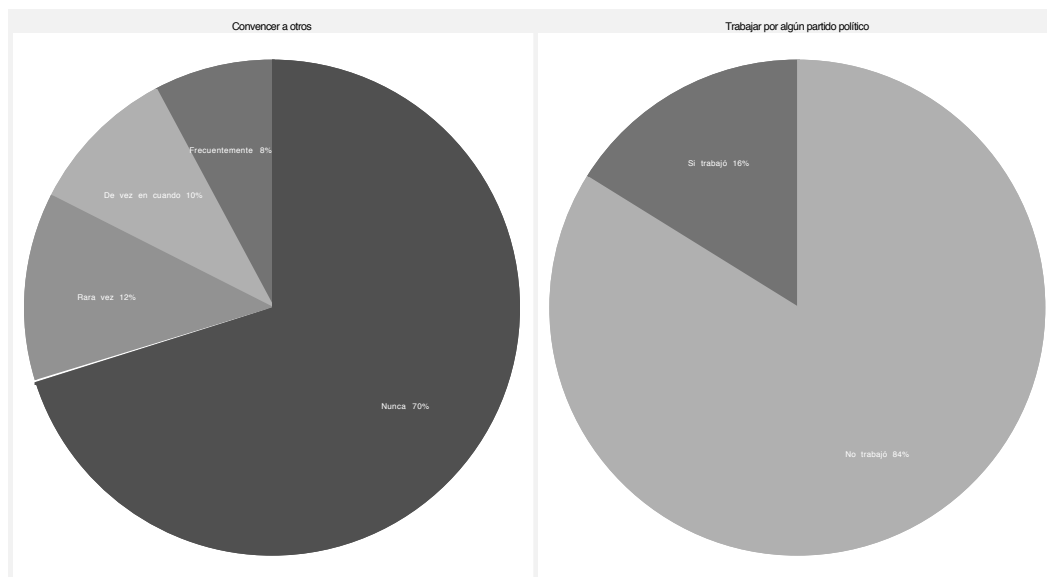
Recuadro VII.3 Preguntas empleadas para estudiar la participación más allá del voto
 PP1. Ahora para cambiar el tema...Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otras personas para que vote por algún partido o candidato. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que vote por un partido o candidato? [lea las alternativas] (1) Frecuentemente (2) De vez en cuando (3) Rara vez (4) Nunca (8) NS/NR
 PP2. Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las campañas electorales. ¿Trabajó para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales de 2002? (1) Sí trabajó (2) No trabajó (8) NS/NR

⁹² Por esta razón, los resultados deben tomarse con cierta precaución. La diferencia entre 100 y la suma de personas que dicen haber votado o no votado (74.3% + 23.9% = 98.2%) son las personas que no votaron por no tener edad.

⁹³ Recuérdese que, como mínimo, en una elección la o el ciudadano puede libremente optar por seis opciones: (1) Votar por el candidato A; (2) Votar por el candidato B; (3) Votar por los dos; (4) Votar por ninguno; (5) No acudir a votar (O'Donnell, 2003).

En términos generales, cerca del 70% de personas nunca intentan persuadir a los demás para que voten por un partido o candidato. La cifra de inactivos sube a 84% cuando la pregunta es si trabajaron por un partido o candidato (Gráfica VII.5).

Gráfica VII.5 Participación electoral más allá del voto: procuraron convencer a otros y trabajaron para un candidato en las elecciones pasadas



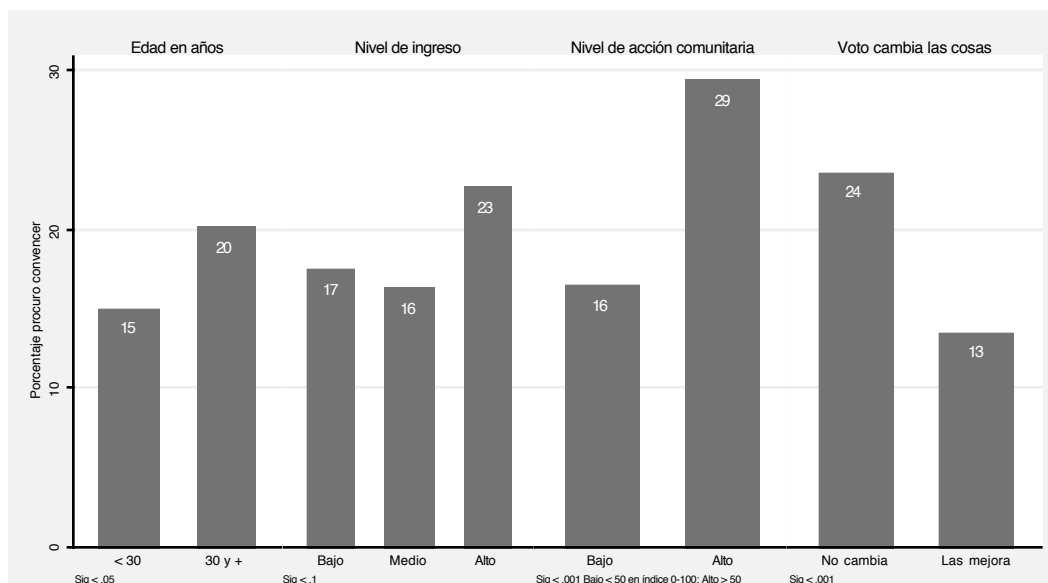
Para avanzar en la comprensión de la participación electoral más allá del voto se seleccionó la pregunta PP1 –tratar de convencer a los demás- que es la que refiere a la actividad más frecuente (aunque siempre minoritaria) de las dos registradas en el estudio. Se aplicó una regresión lineal para conocer sobre los factores que predicen el involucramiento ciudadano más allá del voto (Tabla VII.3), previa normalización de la pregunta PP1⁹⁴. En la escala normalizada el promedio nacional fue de 18.5 en una escala de 100 (bajo involucramiento). Varios factores fueron estadísticamente significativos como predictores: la región, edad, nivel de ingreso, ocupación, percepción de eficacia del voto y la participación comunitaria.

De los factores sociodemográficos que resultaron significativos, los dos que introdujeron diferencias más marcadas son la edad y el nivel de ingreso de las personas. Al igual que con la decisión del sufragio, la participación electoral más allá del voto es mayor en las personas de más de 30 años en comparación con los que tienen menos de 30 (20% a 15%, respectivamente). Las personas con alto nivel de ingreso también exhiben una mayor participación electoral que las de bajo y medio ingreso (Gráfica VII.6).

⁹⁴ La variable PP1 se normalizó (PP1RN) en una escala de 0 a 100, donde 0=nunca; 33.3=rara vez; 66.7=de vez en cuando; 100=frecuentemente.

Tabla VII.3 Predictores de la participación política electoral más allá del voto

Predictores	B	Beta	Sig.
(Constante)	5,649		,412
REGIONVC Región Valle Central	-4,691	-,069	,049
TAMAÑOC1 Resto Urbano	1,824	,022	,521
TAMAÑOC2 Rural	-,365	-,006	,887
Q1R Hombre	-4,790	-,075	,040
OCUP1R2 Amas de casa	-5,994	-,087	,019
Q11R2 Casado(a) o unido(o)	-,418	-,006	,818
EDR Años de educación	,104	,013	,724
Q2 Edad en años cumplidos?	,205	,104	,000
Q10R Ingreso-en miles-	,015	,066	,074
RIQDX Índice de riqueza	-,382	-,032	,401
Q4RRC1 Religiosidad media	-2,333	-,035	,247
Q4RRC2 Religiosidad baja	1,482	,020	,515
PSOLP Índice de acción comunitaria	,122	,120	,000
CONFI2 Confianza neta en vecinos	-,025	-,043	,132
CONSOCR Índice de control social	,035	,030	,301
ADEMR Índice de apoyo a la democracia	,025	,015	,594
ABS5R Eficacia del voto	9,915	,156	,000
TOLERPR Índice de tolerancia política	,003	,003	,926

Gráfica VII.6 Porcentaje que procuró convencer a otros en elecciones de febrero de 2002 por edad, ingreso, acción comunitaria y percepción de eficacia del voto

La participación electoral más allá del voto está fuertemente influida por el nivel de participación comunitaria de las personas (de todas las variables analizadas en esta

regresión fue la que más diferencias marcó):⁹⁵ quienes tienen una alta participación comunitaria casi duplican la frecuencia con que ejercen a persuasión política en relación con aquellos que tienen una baja participación comunitaria (29% frente a 16%) (Gráfica VII.6). En otras palabras, dos dimensiones de participación ciudadana –la social y la electoral más allá del voto- se encuentran asociadas. Por otra parte, la percepción sobre la eficacia del voto es también un importante predictor. Quienes consideran que el voto puede cambiar cosas duplican el nivel de ejercicio de la persuasión política que quienes creen que el voto es ineficaz (Gráfica VII.6).

7.4 Modos de participación electoral

Los modos de participación electoral son los tipos de intervención que los ciudadanos realizan en los procesos electorales. Un modo describe un perfil característico de actividades de un ciudadano durante un proceso electoral. Se reconstruye examinando las cosas que las personas hacen en el ámbito electoral (Benavides et al., 2003). El presente estudio tipifica tres modos de participación que agrupan al 77% de la muestra:

- Las personas que no votan, no ejercen persuasión política ni trabajan para un candidato o partido (inactivas). Un total de 319 personas pueden calificarse como completamente inactivas: 21% de la muestra.
- Las personas que se limitan a ejercer el voto sin persuadir ni trabajar para un candidato o partido. Son la mayoría de entrevistados: 765 personas (51%).
- Las personas que votan, ejercen persuasión política y trabajan para un candidato o partido (los activistas). Son un pequeño grupo: 87 personas, 6% de la muestra (Recuadro VII.4).

Recuadro VII.4 Procedimiento para construir los tres modos de participación electoral a partir de las preguntas VB4 (Voto en la última elección presidencial), PP1 (ejercicio de la persuasión) y PP2 (trabajo a favor de un candidato o partido).

Los inactivos combinan: (a) VB4R: 0. No votó en la primera ronda de la última elección presidencial; (b) PP1R: 0. nunca o 1. rara vez trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato; (c) PP2R: 0. no trabajó para un candidato o partido.

Los que solo votan combinan las siguientes respuestas: (a) VB4R: 1. Votó en la primera ronda de la última elección presidencial. (b) PP1R: 0. nunca; o 1. rara vez trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato. (c) PP2R: 0. no trabajó para un candidato o partido en la última elección presidencial.

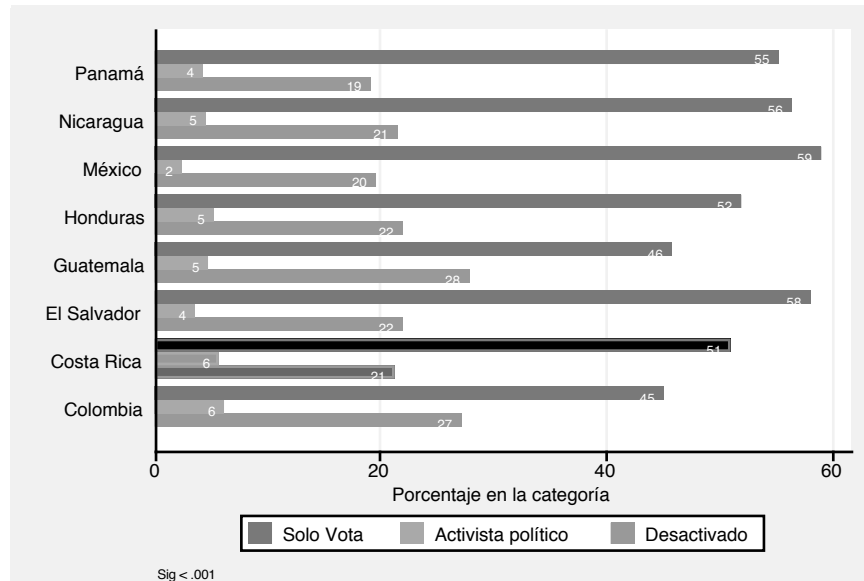
Los activistas combinan las siguientes respuestas: (a) VB4R: 1. Votó en la primera ronda de la última elección presidencial. (b) PP1R: 3. de vez en cuando; o 4. frecuentemente trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato. (c) PP2R: 1. trabajó para un candidato o partido en la última elección presidencial.⁹⁶

⁹⁵ La participación comunitaria de las personas se mide por un índice compuesto por las preguntas CP5A- CP5E que indagan sobre la contribución a solucionar problemas de la comunidad. Véase Capítulo 8 para una explicación de este índice. Para efectos de la gráfica, los resultados de este índice se recodificaron en dos categorías: baja participación (50 o menos puntos en la escala de 0-100) y alta participación (51 a 100 puntos en la escala de 0-100).

⁹⁶ Se efectuó un análisis factorial para determinar si PP1 y PP2 miden una misma dimensión. Los resultados fueron negativos (la medida no alcanzó la confiabilidad, pues el alpha de Cronbach fue 0.443)

En una perspectiva comparada, el peso que en Costa Rica tienen los distintos modos de participación electoral dentro de la ciudadanía no es muy distinto al registrado en los demás países incluidos dentro del estudio (Gráfica VII.7). En todos ellos, las personas que solo votan son el modo de participación más frecuente (cerca del 50% o más); los activistas son un grupo muy reducido –aproximadamente una de cada veinte personas– y los desactivados representan una quinta parte –con excepción de Guatemala y Colombia donde representan el 27%.

Gráfica VII.7 Importancia relativa de los modos de participación electoral en la ciudadanía por país



En términos de las características personales, no existen muchas diferencias entre los tres modos de participación electoral.⁹⁷ La mayor diferencia ocurre en la edad: los activistas electorales son, en promedio, 8.1 años más viejos que los inactivos. Sí hay diferencias notables en cuanto a las actitudes políticas: los activistas exhiben, en promedio, un mayor apoyo a la democracia (71.2 en la escala de 0-100 frente a 63.1 de los inactivos) y son políticamente más tolerantes (61.7 frente a 57.9 de los inactivos) – aunque los grupos no se distinguen en cuanto a su intolerancia a la corrupción. Por último, los activistas electorales son también más activos en el ámbito comunal: en el índice de acción comunitaria obtienen un promedio que duplica el obtenido por los inactivos (Tabla VII.4).

⁹⁷ El perfil sociodemográfico y político que a continuación se realiza de las características promedio de las personas con distintos modos de participación tiene un propósito puramente descriptivo, fáctico, y no con fines predictivos.

Tabla VII.4 Perfil social y político promedio de las personas según sus modos de participación electoral

Características de las personas	Modo de participación electoral					
	No vota, no persuade, no trabaja 1/		Solo vota 2/		Vota, persuade y trabaja 3/	
	N	Promedio	N	Promedio	N	Promedio
REGIONVC Región Valle						
Central	319	63,9	765	68,5	87	65,5
Q2 Edad en años cumplidos	319	35,5	765	41,3	87	43,6
EDR Años de educación	319	7,9	765	8,3	87	8,3
RIQDX Índice de riqueza	319	7,5	765	7,8	87	8,1
TOLICORR	316	89,5	765	90,4	87	91,6
ADEMR Índice de apoyo a la democracia	317	63,1	765	68,5	86	71,2
TOLERPR Índice de tolerancia	311	57,9	765	57,8	85	61,7
PSOLP Índice de acción comunitaria	319	15,8	765	18	87	32

1/ No votó en la primera ronda de la última elección presidencial (pregunta VB4), nunca o rara vez trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato (pregunta PP1), no trabajó para un candidato o partido en la última elección presidencial (pregunta PP2).

2/ Votó en la primera ronda de la última elección presidencial (pregunta VB4), nunca o rara vez trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato (pregunta PP1), no trabajó para un candidato o partido en la última elección presidencial (pregunta PP2).

3/ Votó en la primera ronda de la última elección presidencial (pregunta VB4), frecuentemente o de vez en cuando trata de convencer a otras personas para que voten por un candidato (pregunta PP1) y trabajó para un candidato o partido en la última elección presidencial (pregunta PP2).

7.5 Nota final: apoyo a reformas políticas

Pese a la estabilidad de las normas básicas que reglan el sistema electoral en Costa Rica en las últimas décadas, en años recientes se han presentado propuestas para reformar este sistema. La más ambiciosa propuesta fue la diseñada por la Comisión Presidencial para la Reforma Política en el 2001 –a petición del entonces Presidente Rodríguez Echeverría-, que planteaba la posibilidad de evolucionar a un sistema semipresidencial y a modificar diversos aspectos del sistema electoral (Urcuyo, 2003). Antes, en 1999, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas electorales, que ésta desechó (Programa Estado de la Nación, 2001b).

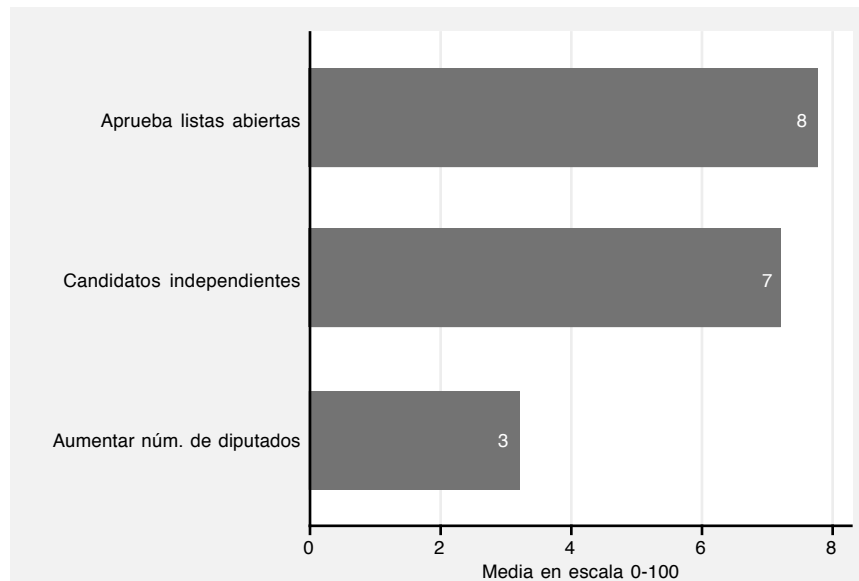
Una parte importante de las reformas políticas son de alta complejidad técnica, de escaso conocimiento y comprensión por parte de la ciudadanía. Por ello, en el presente estudio –basado en un estudio de opinión pública- se seleccionaron tres reformas que cumplen con dos requisitos: han sido objeto de amplio debate público y son sencillas de comprender por personas no especialistas en el tema. Estas reformas son: la disyuntiva entre listas abiertas o bloqueadas para el congreso; el rompimiento del monopolio de los

partidos sobre los cargos públicos y la ampliación del número de diputados a la Asamblea Legislativa (Recuadro VII.5).⁹⁸

Recuadro VII.5. Preguntas empleadas para el estudio del apoyo a reformas electorales
 CREREF1. ¿Hasta que punto aprueba o que a la hora de votar, las personas puedan escoger diputados entre distintos partidos y no por lista de partidos como ahora? [Léame el numero 0-10]
 CREREF2. ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba que las asociaciones y otros grupos puedan inscribir candidatos a diputados y no solo los partidos como ahora?
 CREREF3. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que se amplíe el número de diputados en la Asamblea Legislativa? ¿Hasta que punto aprobaría o desaprobaría?

Existe un amplio apoyo ciudadano para dos de las reformas electorales: la instauración de listas abiertas en las papeletas a diputados, a fin de que las y los electores puedan escoger entre candidatos de distintos partidos y el rompimiento del monopolio de los partidos sobre la postulación de candidatos a cargos públicos, permitiendo que las asociaciones y otros grupos puedan hacerlo también. Solo alrededor del 10% de las personas muestra desacuerdo (puntajes iguales o inferiores a 3), mientras que entre el 45% (CREREF2) y el 60% (CREREF1) muestra acuerdo con estos cambios (puntajes iguales o superiores a 8 en la escala de 1 a 10). La situación es radicalmente distinta para la propuesta de ampliar el número de diputados. El rechazo es contundente: dos de cada tres se oponen a ella (66.0% puntúan 3 o menos). Todo ello hace que el puntaje promedio de apoyo a la ampliación del número de diputados sea menos de la mitad del de los otras dos reformas (Gráfica VII.8).

Gráfica VII.8 Niveles promedio de acuerdo con tres reformas electorales en una escala 0-10



⁹⁸ Actualmente 57 (así desde 1949). Costa Rica tiene una de las razones más elevadas de América Latina de electores por diputado (Artiga, 2003).

Los análisis descartaron la posibilidad de utilizar las variables CREREF1, CREREF2 y CREREF3 para construir un índice de reforma electoral⁹⁹. En su lugar, se seleccionó la pregunta CREREF1 –la disyuntiva sobre listas abiertas o cerradas- para estudiar la existencia de predictores del apoyo a una reforma electoral. Se utilizó una regresión lineal con las mismas variables independientes empleadas para el análisis del voto (ver sección 3). Ninguna de las variables personales y políticas resultaron estadísticamente significativas. La excepción fue el Índice de apoyo a la democracia (sig .001), pero el coeficiente fue bajo (.012) y, en general, el modelo tuvo una muy baja capacidad predictiva ($R^2=.022$). En términos generales, no hay diferencias sociales y políticas entre quienes apoyan o adversan esta reforma electoral.

⁹⁹ Se aplicó un análisis factorial a las preguntas CREREF1, CREREF2, CREREF3 para determinar si miden una misma dimensión y si esta medida es confiable para elaborar un índice de apoyo a reformas electorales. Las preguntas CREREF1 y CREREF2 se cargaron, con altas coeficientes, a un solo factor pero la confiabilidad no fue satisfactoria (Alpha de Cronbach=.607). La pregunta CREREF3 se cargó en solitario a otro factor. Se decidió no crear un índice y escoger la pregunta CREREF1 para ser analizada.

Capítulo VIII. Participación ciudadana y capital social

8.1 Introducción

La participación ciudadana es un concepto más amplio que el puramente electoral. Los ciudadanos, además de manifestarse en las urnas, participan en las decisiones involucrándose en diversos tipos de organizaciones y contribuyendo con recursos o tiempo a la solución de problemas comunitarios. Podría pensarse que una democracia en la que los ciudadanos participan activamente en la vida política y en las decisiones, es más sólida que una en la que la participación se limita al voto. Pero también podría pensarse que una democracia estable, sin turbulencias, en la que los representantes electos y las instituciones se comportan de acuerdo con las expectativas de los electores, puede resultar en una sociedad civil aparentemente apática.

En todo caso, la democracia necesita algún grado de participación ciudadana. Ella es necesaria para tener algún grado de control sobre la gestión pública (Burns, 2001; Conway, 1985; Crotty, 1991; Putnam, 2000; Schlozman, 1999; Sydney Verba, 1995).

Por diversas razones, las últimas décadas han visto un fenómeno global de incremento de la participación en la sociedad civil y la proliferación de organizaciones no gubernamentales. El impacto de la sociedad civil en la política se ha incrementado. El rol de Solidaridad en Europa Oriental o el del “voto por el no” en Chile son ejemplos de la influencia de la sociedad civil para promover la democracia. El activismo de la sociedad civil también puede influir en decisiones importantes del Estado, como ocurrió en Costa Rica con las protestas contra el “combo,” que hicieron cambiar el rumbo de un gobierno en lo referente a privatización de entidades públicas y apertura de monopolios estatales.

El concepto de capital social está ligado al de participación en la sociedad civil. Se postula que la clave para construir democracias es incrementar el capital social (Edwards & Foley, 1997; Putnam, 1993, 1995, 2000). Comunidades y países con elevado capital social son aquéllos en los que los ciudadanos confían entre sí y en sus gobiernos y esta confianza surge de la activa participación en las organizaciones de la sociedad civil (Edwards & Foley, 1997). Aunque también podría argumentarse lo contrario: que donde los ciudadanos confían entre sí y en sus gobernantes, se vuelve innecesario el activismo y hay satisfacción con la delegación del poder en los representantes electos. Se pueden distinguir como componentes del capital social a, entre otros, la confianza interpersonal y la existencia en las comunidades de modelos dignos de imitar.

Un tercer elemento del capital social es la cohesión o control social, el cual está ligado al de “eficacia colectiva.” Sampson (Sampson, Morenoff, & Earls, 1999) y otros autores postulan que la cohesión social es lo que en verdad cuenta del capital social para el progreso de las comunidades y, especialmente, para reducir la delincuencia y otras patologías sociales. No hace falta que los individuos de una comunidad confíen

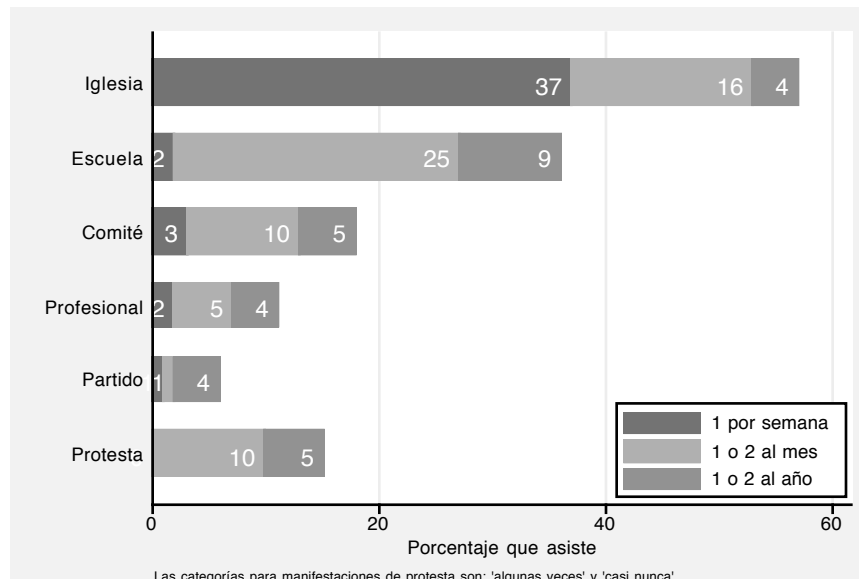
plenamente entre sí o en sus instituciones para que ésta logre control sobre su entorno y se embarque en acciones colectivas por el bien común. Basta únicamente cierto grado de cohesión. En las sociedades modernas los lazos fuertes de amistad entre vecinos y las redes de apoyo son especies en extinción. Conexiones menos íntimas, o “lazos débiles” según Granovetter (Granovetter, 1973) son las que en verdad cuentan para establecer capital social e integrar comunidades. Estas conexiones dan lugar a que haya una mínima confianza para trabajar juntos (“working trust”) y una predisposición compartida para ejercer control social.

En el Capítulo III se observó que capital social y apoyo a la democracia están asociados. Quienes perciben que sus vecinos son confiables o viven en comunidades con cierto grado de cohesión social expresan también un mayor apoyo a la democracia. La misma relación también parece existir cuando se comparan promedios de países. En este capítulo se describen las medidas utilizadas para cuantificar el grado de participación en la sociedad civil y el capital social con que cuenta el país. También se exploran algunas relaciones entre estos conceptos y características de los individuos y las comunidades.

8.2 Niveles de participación

Se preguntó la frecuencia de participación en cinco tipos de reuniones: (1) religiosas (2) asociación de padres de familia, (3) comité de mejoras de la comunidad, (4) asociación de profesionales, comerciantes o productores; y (5) partidos políticos (preguntas CP6 a CP13 en páginas 2 y 3 del cuestionario (Apéndice D). Las posibles respuestas fueron: una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, y nunca (a los individuos sin hijos en escuela o colegio se les imputó “nunca participa” en reuniones de padres de familia). También se preguntó si el entrevistado ha participado en una manifestación o protesta pública: algunas veces, casi nunca o nunca (página 3 del cuestionario). Las respuestas se presentan en la Gráfica VIII.1.

Gráfica VIII.1 Participación en reuniones de organizaciones de la sociedad civil



La participación en organizaciones religiosas es considerable: 52% lo hace al menos una vez al mes. Es posible, sin embargo, que estas respuestas se refieran a “servicios religiosos” y no a “reuniones de organizaciones religiosas.” La participación en reuniones de padres de familia también es considerable; 27% lo hace al menos una vez al mes y las dos terceras partes del grupo de “nunca participa” está constituido por individuos sin hijos en edad escolar. La participación en el resto de organizaciones o en manifestaciones es modesta: del 80% al 95% dijo que nunca ha participado.

Con análisis factorial se identificaron dos componentes o factores implícitos en la información obtenida con estas seis preguntas. Estos dos factores explican el 41% de la variancia en las seis preguntas. Las cargas factoriales de los componentes rotados (Tabla VIII.1), sugieren que el primer componente está dado por la participación en comités comunales, organizaciones profesionales, partidos políticos y manifestaciones de protesta. Estas cuatro preguntas identifican, por ende, una dimensión de participación a la que denominamos “político-profesional.” El segundo componente viene dado por la participación en organizaciones religiosas o en asociaciones de padres de familia en la escuela. A esta dimensión de participación la denominamos “religioso-familiar.”

Tabla VIII.1 Matriz de componentes rotados

Tipo de participación	Componente	
	1	2
Iglesia	-.016	.697
Padres de familia	-.002	.702
Comité comunal	.531	.363
Profesionales, productores	.656	-.003
Partido político	.532	.051
Manifestación de protesta	.578	-.215

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Con base en estos resultados del análisis factorial se calcularon sendos indicadores para estas dos dimensiones de la participación. Los indicadores son la suma simple de las variables correspondientes. Antes las variables fueron recodificadas de modo que los códigos más altos indiquen mayor participación. La suma se normalizó de modo que el índice tenga una variación de cero a cien. Estos indicadores miden la frecuencia de participación en organizaciones de la sociedad civil¹⁰⁰.

8.3 Correlatos de la participación en la sociedad civil

Para identificar las características asociadas con las dimensiones de participación se estimaron dos modelos de regresión lineal múltiple, con los dos índices como variable dependiente. Los modelos estimados se presentan en la tabla VIII.2.

¹⁰⁰ Los coeficientes Alfa de Crombach para los dos índices fueron modestos: 0.19 para participación religioso-familiar y 0.32 para participación político-profesional. Ello se debe a que por lo general son diferentes los individuos que participan en las distintas organizaciones. No se trata, por tanto, de escalas sumativas, sino de conteos de la frecuencia de participación. El valor modesto del Alfa es en este caso irrelevante, pues se trata de conteos que miden la cantidad de organizaciones en que participan los individuos y la frecuencia con que participan en ellas.

Tabla VIII.2 Regresión múltiple explicatoria de los dos índices de participación

Variables explicativas	Participación religioso-familiar			Participación político-profesional		
	B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.
(Constante)	23.147		.001	-8.238		.019
Valle Central	-.795	-.011	.707	-.018	-.001	.987
Resto Urbano	-2.976	-.033	.239	-.577	-.014	.665
Rural	3.299	.046	.143	2.809	.085	.018
Hombres	-10.159	-.148	.000	1.680	.052	.128
Amas de casa	.042	.001	.985	-1.660	-.048	.166
En unión	10.594	.149	.000	-1.655	-.050	.065
Educación (años)	.593	.069	.022	1.130	.281	.000
Edad en años	1.552	.733	.000	.353	.358	.007
Edad cuadrado	-.018	-.804	.000	-.003	-.257	.054
Ingreso (miles c/)	-.016	-.065	.035	.001	.008	.810
Riqueza índice	.137	.011	.735	.029	.005	.892
Religiosidad media	-15.103	-.207	.000	-.678	-.020	.472
Religiosidad baja	-34.539	-.433	.000	-1.446	-.039	.172
R-cuadrado	0.29			0.09		
R-cuadrado con cantones	0.32			0.12		

Los coeficientes Beta sugieren que la edad del individuo es el más importante predictor de las dos dimensiones de participación. El efecto es curvilíneo: la participación aumenta hasta cierta edad y luego disminuye en edades avanzadas. Esto lo muestra la variable “edad al cuadrado” que resultó negativa y significativa. La religiosidad es el segundo determinante más importante de la participación en organizaciones religiosas o familiares. Esta disminuye sustancialmente en personas poco o nada religiosas. (Esta fuerte asociación confirma la sospecha de que algunos entrevistados indicaron la asistencia a servicios religiosos y no a organizaciones religiosas.) La educación es también importante como factor de las dos dimensiones de la participación, especialmente de aquella en los ámbitos político y profesional. Las personas más educadas participan más. Los hombres, las personas no casadas y las con mayor ingreso, especialmente los primeros, participan menos en organizaciones de la iglesia o familiares. En las zonas rurales hay una mayor participación político-profesional.

Los modelos explican mucho más la participación religioso-familiar (R-cuadrado = 0.29) que la político-profesional (R-cuadrado = 0.09). Vale decir que la segunda es más difícil de entender. El grado de explicación mejora muy poco con la inclusión en los modelos de las 29 variables indicatrices del cantón (los coeficientes de determinación R-cuadrado aumentan en solo 0.03). Este resultado, y la inexistencia de efectos significativos de otras variables geográficas, apuntan a que la participación en la sociedad civil depende menos de características comunitarias que de características de los individuos, como la edad, el sexo o la educación.

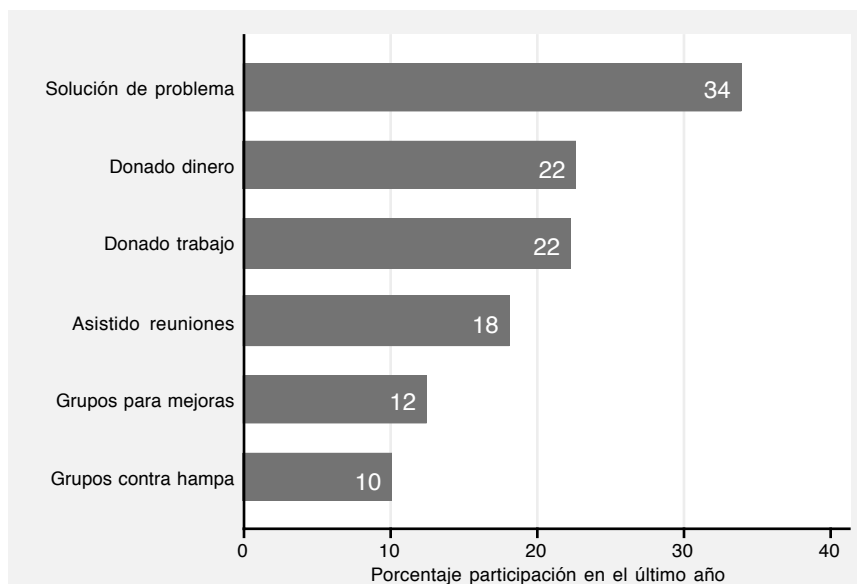
El indicador de participación religioso-familiar quizás no es una buena medida de participación en la sociedad civil, pues se basa en únicamente dos preguntas, cuyas respuestas son problemáticas. Las respuestas sobre participación en actividades de la iglesia es posible que, como indicamos antes, midan más bien asistencia a servicios religiosos. Las respuestas sobre organizaciones de padres de familia están fuertemente

determinadas por el hecho de que más del 40% de los entrevistados no tiene hijos en edad escolar y, por ello, mal puede participar.

8.4 Acción comunitaria

¿Resulta la participación en reuniones, en acciones para solucionar los problemas de la comunidad o se trata solamente de meros eventos sociales? Para responder esta pregunta se midió la participación proactiva de la persona para solucionar problemas de la comunidad. Al respecto la encuesta formuló seis preguntas ($CP5_i$ en página 2 del cuestionario del Apéndice D) que se inicia con una de si en el último año el entrevistado ha contribuido para la solución de algún problema de la comunidad. A quienes respondieron afirmativamente (34%) se les preguntó por cinco tipo de contribuciones específicas: (1) dinero, (2) trabajo, (3) participación en reuniones, (4)organizar nuevos grupos, y (5) grupos para combatir la delincuencia. La Gráfica VIII.2 muestra el porcentaje de entrevistados que indicaron haber hecho los distintos tipos de contribuciones.

Gráfica VIII.2 Participación en la solución de problemas comunitarios en el último año



El análisis factorial identificó a un único componente que explica el 61% de la variancia de estas seis preguntas. El coeficiente Alfa de Crombach resultó de 0.88, indicando que la seis preguntas tienen una buena consistencia interna para derivar de ellas una escala por suma simple. A esta escala la denominamos de “acción comunitaria.”

8.5 Correlatos de la acción comunitaria

La asistencia a reuniones y similares sí parece traducirse en acciones para solucionar problemas. Por ejemplo, entre aquéllos que asisten a reuniones de un comité

de mejoras, semanal o mensualmente, el 82% dijo haber contribuido a solucionar algún problema, porcentaje que es solamente de 24% entre los que nunca asisten a comités. Claro que al interpretar lo anterior debe tenerse en cuenta que el primer grupo comprende solamente al 13% de los entrevistados, mientras que el segundo abarca al 81%. El coeficiente de correlación entre el índice de participación político-profesional y el de acción comunitaria es un respetable 0.46.

Los modelos de regresión múltiple para explicar el índice de acción comunitaria (Tabla VIII.3), identifican a la edad y a la asistencia a reuniones político-profesionales como sus determinantes más importantes (Beta más altos). El efecto de la edad es curvilíneo: la acción comunitaria primero aumenta y luego disminuye. Una menor religiosidad o la residencia en ciudades intermedias (comparada con la residencia en la GAM y en zonas rurales) reduce la participación comunitaria. La educación tiene un efecto indirecto sobre la participación comunitaria que está casi totalmente mediatizado por la asistencia a reuniones político-profesionales; cuando el indicador de asistencia a estas reuniones se introduce en la regresión, desaparece el efecto de la educación. Ni el sexo del individuo, ni la condición de ama de casa, ni el estado conyugal, ni la riqueza muestran efectos significativos en la acción comunitaria.

Tabla VIII.3 Regresiones múltiples explicatorias del índice de acción comunitaria

Variables explicativas	Modelo 1			Modelo 2		
	B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.
(Constante)	-17.41		0.011	-11.89	.	0.053
Valle Central	-0.765	-0.012	0.723	-0.704	-0.011	0.716
Resto Urbano	-5.833	-0.074	0.024	-5.176	-0.066	0.026
Rural	3.399	0.054	0.139	0.860	0.014	0.677
Hombres	2.982	0.049	0.161	2.177	0.036	0.259
Amas de casa	-2.396	-0.037	0.300	-1.013	-0.015	0.626
En unión	1.208	0.019	0.485	1.967	0.031	0.213
Educación (años)	1.154	0.151	0.000	0.177	0.023	0.466
Edad en años	1.142	0.608	0.000	0.755	0.402	0.001
Edad cuadrado	-0.010	-0.499	0.000	-0.007	-0.333	0.007
Ingreso (miles c/)	-0.005	-0.023	0.521	-0.005	-0.022	0.488
Riqueza índice	0.454	0.040	0.269	0.422	0.037	0.254
Religiosidad media	-3.943	-0.061	0.030	-2.490	-0.039	0.137
Religiosidad baja	-7.066	-0.100	0.001	-3.829	-0.054	0.057
Participación religioso-familiar				0.059	0.066	0.014
Participación político-profesional				0.835	0.438	0.000
R-cuadrado	0.07			0.25		
R-cuadrado con cantones	0.10			0.27		

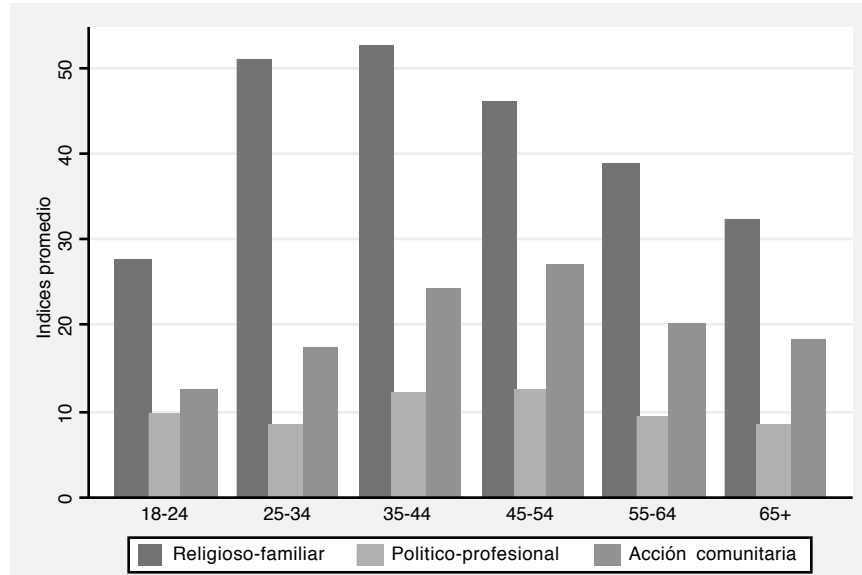
La introducción de los dos índices de participación la regresión incrementa la bondad de ajuste del modelo de R-cuadrado = 0.07 a R-cuadrado = 0.25. La residencia en un cantón determinado explica poco la participación comunitaria. El R-cuadrado se incrementa solamente en 0.02. Pese a ello, el modelo identificó algunos cantones en los que el índice de participación es significativamente distinto del resto, a saber:

- Alajuela, Goicoechea, Aserrí, Turrialba, Escazú y San Ramón con participación comunitaria significativamente mayor, en este orden; y

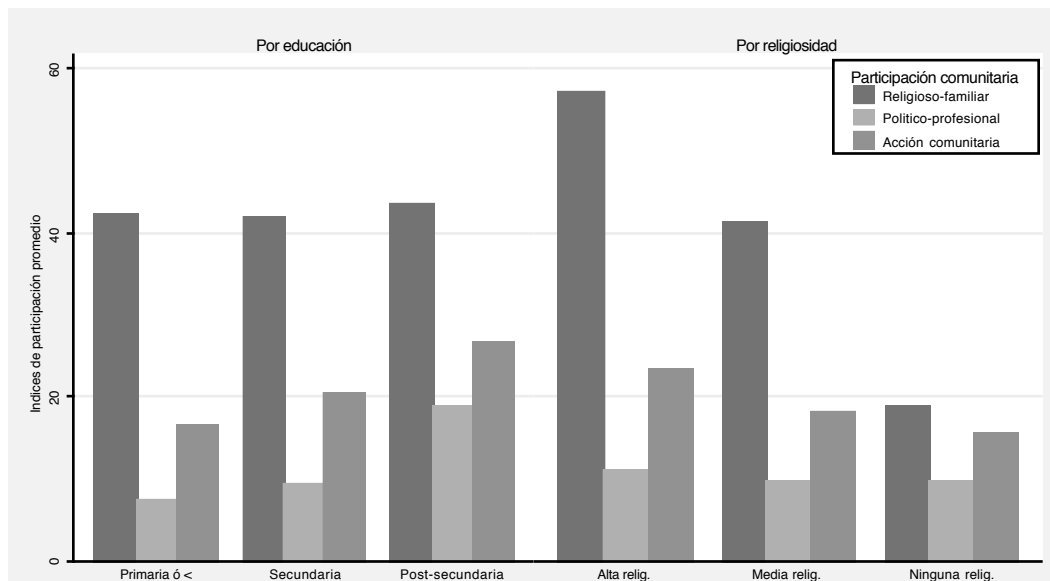
- Desamparados, San Carlos, Limón, La Cruz, Guácimo, San José, con participación significativamente menor.

Las gráficas VIII.3 y VIII.4, muestran los efectos de la edad, la educación y la religiosidad para los tres índices de participación y acción en la sociedad civil.

Gráfica VIII.3 Tres índices de participación comunitaria por edad



Gráfica VIII.4 Índices de participación por educación y religiosidad



Las personas alcanzan su máximo de participación religioso-familiar a los 35-44 años de edad. Este patrón se halla influenciado en parte por la presencia de hijos de edad

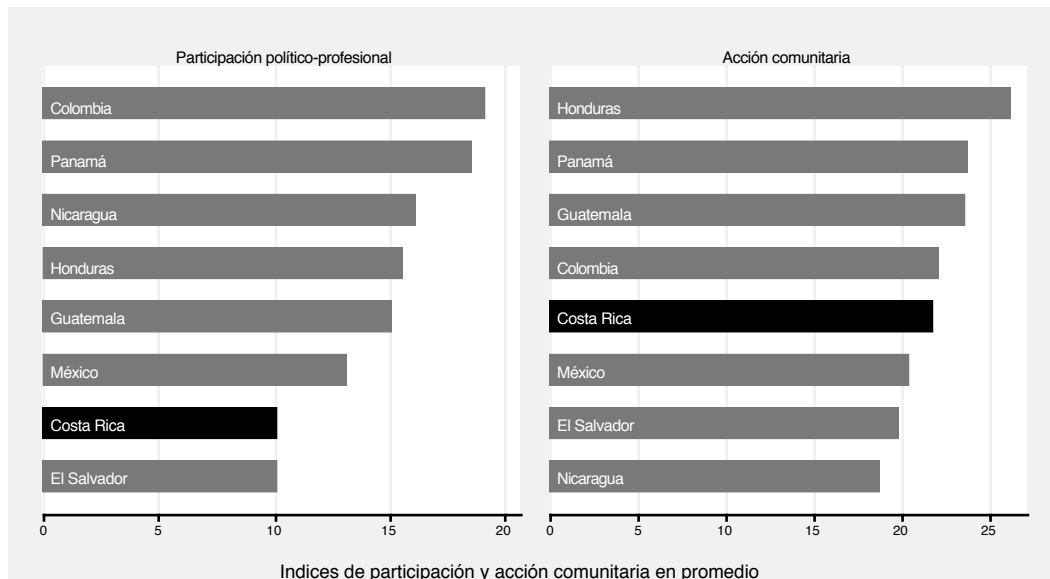
escolar. La edad de máxima participación pro-activa en la solución de problemas es más tardía: a los 45-54 años. No se observa un efecto claro de la edad en la participación en reuniones político-profesionales.

La educación aumenta la participación en reuniones político-profesionales y en la solución de problemas comunitarios, pero no afecta la asistencia a reuniones religioso-familiares. En contraste la religiosidad eleva fuertemente la asistencia a este tipo de reuniones, resultado que, según se indicó, es un tanto tautológico. También aumenta en menor grado, la participación político-profesional, pero no afecta la acción comunitaria.

8.6 ¿Cómo se compara Costa Rica con otros países en el grado de participación?

La Gráfica VIII.5 compara los índices de participación político-profesional y de acción comunitaria¹⁰¹ de los países. Costa Rica, junto con el Salvador, presenta el grado más bajo de participación en actividades político profesionales o manifestaciones de protesta. El índice correspondiente es casi la mitad del observado en Colombia. Pero el índice que mide acciones concretas para solucionar problemas, ubica a Costa Rica en la mitad del grupo. Una situación interesante es la que se observa para Nicaragua (y en menor grado, Colombia), donde parece que muchos individuos se quedan únicamente a nivel de discurso y no pasan a la acción para solucionar problemas.

Gráfica VIII.5 Índices promedio de participación y acción comunitaria por países



¹⁰¹ Dado que en algunos países no se preguntó sobre la organización de grupos contra el hampa, el índice de acción comunitaria se recalculó sin esta pregunta para hacer posible la comparación.

8.7 Capital social

En la introducción de este capítulo se postularon tres dimensiones del capital social. Para medirlas se incluyeron sendos juegos de tres preguntas cada uno (IT1 a CRIT8 en página 3 del cuestionario). El primer juego busca medir la confianza interpersonal y pregunta si: (1) la gente de la comunidad es muy, algo, poco o nada confiable; (2) se preocupa solo de sí misma o trata de ayudar al prójimo; y (3) si, al presentárseles la oportunidad, tratarían de aprovecharse o no se aprovecharían. El segundo juego busca medir la cohesión social y pregunta si en el barrio se acostumbra a: (1) que los adultos vigilen que los niños estén seguros, (2) que cuando una casa está sola otros la cuiden, y (3) que los vecinos se hagan favores como prestarse herramientas. Las cuatro respuestas posibles fueron: siempre se acostumbra, a veces, rara vez y nunca. El tercer juego trata de determinar la existencia en la comunidad de modelos dignos de imitar (“role models”), para lo cual se pregunta si en el barrio hay o no personas que niños y jóvenes pueden admirar por: (1) destacar en el deporte, (2) ser gente muy trabajadora, y (3) ser muy cooperadoras en la solución de problemas. La Tabla VIII.4 presenta las respuestas obtenidas.

Tabla VIII.4 Respuestas a las preguntas sobre capital social (porcentajes)

Características de la comunidad	Porcentaje de respuestas					(N)
Confianza interpersonal,						
Los vecinos son:						
Muy confiables	42					
Algo confiables	35					
Poco confiables	17					
Nada confiables	6					
Total	100					(1,454)
Ayudan al prójimo	33					(1,468)
No se aprovechan de uno	35					(1,409)
Cohesión social						
	Siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Total	
Vigilan a niños	54	16	10	20	100	(1,444)
Vigilan casas solas	60	16	7	17	100	(1,454)
Se hacen favores	68	17	6	10	100	(1,474)
Modelos a imitar						
Deportistas	51					(1,370)
Trabajadores	87					(1,424)
Cooperadores	75					(1,395)

La gran mayoría de entrevistados indicaron que los vecinos son o muy confiables (42%) o algo confiables (35%). Muy pocos (6%) consideran que son “nada confiables.” Sin embargo, confrontados con preguntas más específicas, son minoría los que indican que los vecinos tratan de ayudar al prójimo (33%) o no se aprovecharían de uno (35%). Tenemos, pues, una situación que podríamos caracterizar como de confianza cautelosa.

Las respuestas sobre cohesión social (Tabla VIII.4), denotan que una importante mayoría de los costarricenses perciben que en su comunidad existe control social y cooperación. Por ejemplo, el 85% indica que los vecinos se hacen favores siempre (68%) o a veces (17%). El porcentaje correspondiente al control de los niños es de 70%.

También una mayoría reporta la existencia en la comunidad de modelos dignos de imitar, especialmente como personas trabajadoras (87%) o cooperadoras (75%); en menor grado como deportistas (51%). Debe notarse que en esta última serie de preguntas, un número considerable (entre 5% y 9%) no respondieron.

Análisis factoriales de los tres juegos de preguntas mostraron que cada uno está asociado a un único componente, pero éste explica solo alrededor del 50% de la variancia. Consecuentemente, los coeficientes Alfa de Crombach para escalas sumativas, no son muy elevados (48, 57 y 51 para los tres juegos respectivamente), lo que sugiere que cada juego de preguntas no mide un concepto único; i.e. carece de una alta consistencia interna. En vista de lo anterior, se desistió de crear escalas sumativas con cada juego de preguntas, en su lugar, se crearon índices o tipologías que integran la información de las preguntas como se indica a continuación.

Confianza interpersonal. Las respuestas antes comentadas sobre si las personas de la comunidad son confiables son un tanto engañosas. Así lo sugiere la contrastación de ellas con las percepciones de si los vecinos tratan de ayudar al prójimo y de si tratan de aprovecharse de uno (Tabla VIII.5). En un extremo, entre quienes perciben que sus vecinos son “nada confiables,” solamente el 13% consideran que los vecinos no se preocupan solo de sí mismos y tratan de ayudar al prójimo y un porcentaje parecido indican que “no tratarían de aprovecharse.” Este grupo de entrevistados son bastante coherentes en sus respuestas. Sin embargo, en el otro extremo, entre quienes perciben que sus vecinos son “muy confiables,” siguen siendo minoría los que perciben que “ayudan al prójimo” (44%) o que “no se aprovecharían” (48%). Recordando que la mayoría de entrevistados (77%) indicó que la gente de su comunidad es algo o muy confiable, se tiene un grupo considerable de cerca del 50% de los entrevistados que manifiestan confiar en la gente de su comunidad, pero que al mismo tiempo creen que los vecinos solo se preocupan de sí mismos o que se aprovecharían de uno si pudieran. Esta es la actitud mas prevalente en la muestra.

Tabla VIII.5 Coherencia entre las tres respuestas de confianza interpersonal

La gente de su Comunidad es:	Ayuda al prójimo		No se aprovecharían	
	%	(N)	%	(N)
Nada confiable	13	(89)	14	(86)
Poco confiable	22	(241)	26	(234)
Algo confiable	29	(504)	29	(477)
Muy confiable	44	(593)	48	(575)
Total	33	(1,427)	35	(1,372)

Dado que no hay elementos para clasificar en una escala de confianza-desconfianza a entrevistados que demostraron ambivalencia en sus respuesta, se optó por identificar únicamente las dos actitudes extremas. (1) Quienes “desconfían” plenamente pues respondieron que sus vecinos son poco o nada confiables, que solo se preocupan de sí mismos y que tratarían de aprovecharse. Estos representan el 14% de los entrevistados. (2) Quienes “confían” en todo sentido, pues respondieron que sus vecinos son algo o muy confiables, que tratan de ayudar al prójimo y que no se aprovecharían de uno. Estos representan el 15% de los entrevistados. Con propósitos analíticos se creó la variable “confianza interpersonal” con valor de -100 para el primer grupo, +100 para el segundo y

cero para el resto. El promedio de esta variable indica la diferencia entre el porcentaje que confían menos el porcentaje que desconfían.

Cohesión social. Se creó un indicador de percepción de la frecuencia con que los vecinos “vigilan a los niños para que no se metan en problemas,” “vigilan las casa solas” y “se hacen favores como prestarse herramientas.” El indicador se computó por suma de las respuestas y el resultado se normalizó a una escala de cero a cien (promedio de 74).

Modelos a imitar. Este es un indicador muy simple por conteo de las respuestas sobre la existencia de los tres tipos de modelos (deportistas, trabajadores e individuos cooperadores) en la comunidad. El resultado del conteo también se normalizó a una escala de cero a cien (promedio de 66).

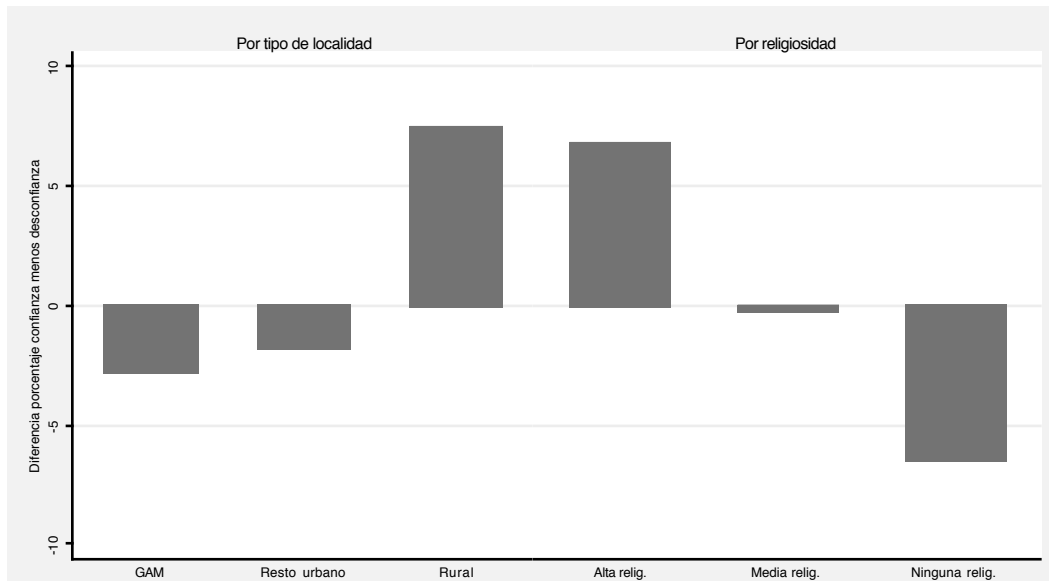
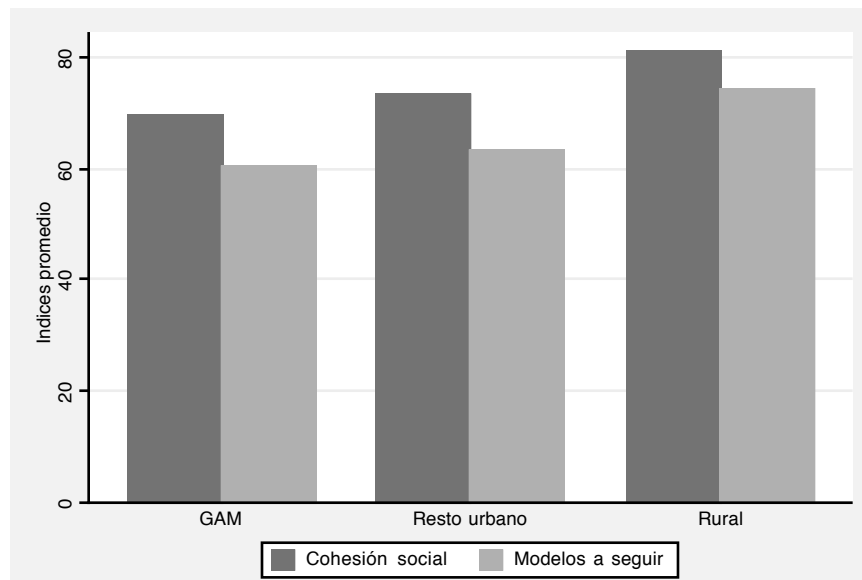
8.8 Correlatos del capital social

Se estimaron sendos modelos de regresión múltiple para identificar los correlatos de los tres indicadores de capital social (Tabla VIII.6). Los resultados de las regresiones sugieren que el capital social es una característica más comunitaria que individual, puesto que los factores de tipo geográfico predominan sobre las características personales. Así, el factor más importante en la explicación de los tres indicadores, de acuerdo con los valores de Beta, es residir en el área rural. La gráficas VIII.6 y 7 ilustran este punto. Los tres índices de capital social son más altos en las comunidades del “resto urbano” que en la GAM, y son aún mayores en el área rural.

Tabla VIII.6 Regresiones múltiples para los tres indicadores de capital social

Variables explicativas	Confianza interpersonal			Cohesión social			Modelos a imitar		
	B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.
(Constante)	-37.828	.	0.000	65.733	.	0.000	58.225	.	0.000
Valle Central	13.018	0.115	0.001	6.579	0.116	0.001	5.729	0.084	0.011
Resto Urbano	11.686	0.085	0.010	8.013	0.116	0.001	5.554	0.067	0.040
Rural	22.720	0.206	0.000	15.235	0.276	0.000	15.133	0.229	0.000
Hombre	2.297	0.022	0.540	-0.798	-0.015	0.683	3.246	0.051	0.144
Amas de casa	0.050	0.000	0.990	0.203	0.004	0.924	-1.571	-0.023	0.517
En unión	0.896	0.008	0.759	-1.718	-0.031	0.256	-0.168	-0.003	0.923
Educación (años)	-0.313	-0.023	0.500	-0.046	-0.007	0.850	-0.623	-0.078	0.024
Edad en años	0.295	0.090	0.001	-0.013	-0.008	0.779	0.013	0.007	0.813
Ingreso (miles c/)	0.002	0.005	0.896	0.001	0.004	0.921	-0.007	-0.028	0.430
Riqueza índice	1.674	0.085	0.022	0.035	0.003	0.927	0.447	0.038	0.301
Religiosidad media	-6.272	-0.056	0.052	-0.560	-0.010	0.737	0.856	0.013	0.654
Religiosidad baja	-9.943	-0.080	0.006	-3.187	-0.051	0.089	-6.752	-0.091	0.002
R-cuadrado	0.06			0.05			0.06		
R-cuad. con cantones	0.09			0.08			0.13		

Nótese que los indicadores de participación en la sociedad civil, examinados anteriormente, dependían de atributos individuales antes que comunitarios. La situación contraria se da para los indicadores de capital social que dependen más de donde uno vive que de quien uno es.

Gráfica VIII.6 Diferencia en los porcentajes de confianza y desconfianza**Gráfica VIII.7 Indicadores de cohesión social y modelos a seguir por tipo de localidad**

No obstante lo anterior, hay características individuales, como la edad o la religiosidad, con una asociación significativa con los indicadores de capital social. Es posible, empero, que ello responda más a percepciones que a realidades. Es decir que personas con ciertas características, como ser de mayor edad o poco religiosas, sean más escépticas de su entorno e indiquen que en su comunidad las personas son poco confiables o poco cooperadoras.

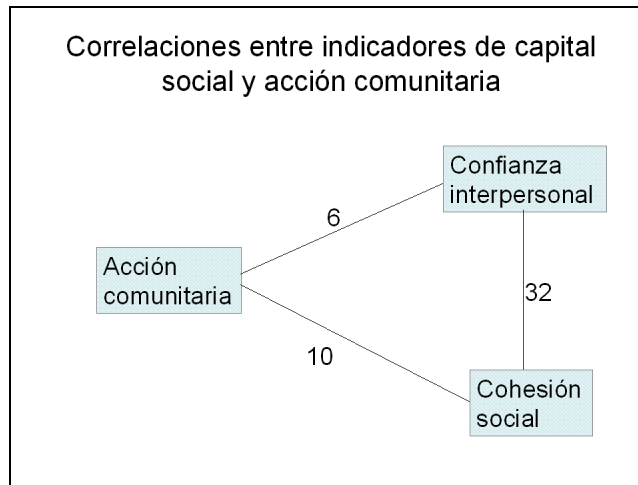
La preponderancia de la comunidad en la formación de capital social es corroborada por el importante incremento en la bondad de ajuste del modelo (el R-cuadrado). Cuando se introducen en la ecuación las variables indicatrices de los cantones, la explicación de los modelos aumenta un 50% o más.

Las regresiones identifican de manera estadísticamente significativa a los cantones que se indican a continuación con mayor y menor capital social, luego de controlar otras características del cantón en la regresión. Destaca el cantón Desamparados que en los tres indicadores presenta el capital social más bajo.

	Confianza interpersonal	Cohesión social	Modelos imitables
Máximo capital social	San Ramón Poás	San Carlos Carrillo	Guácimo San Carlos
Mínimo capital social	Desamparados Alajuela San José	Desamparados Montes de Oca	Desamparados Aserri San José

¿Hay relación entre los indicadores de capital social y de ellos con participación en la sociedad civil estudiada anteriormente? La Gráfica VIII.8 muestra los coeficientes de correlación entre indicadores seleccionados. La relación entre participación en la sociedad civil (medida por la escala de acción comunitaria) y capital social es débil, con correlaciones de 0.10 o menos. En contraste, hay una correlación importante (0,32) entre el indicador de confianza interpersonal y el de cohesión social.

Gráfica VIII.8 Correlaciones entre capital social y acción comunitaria

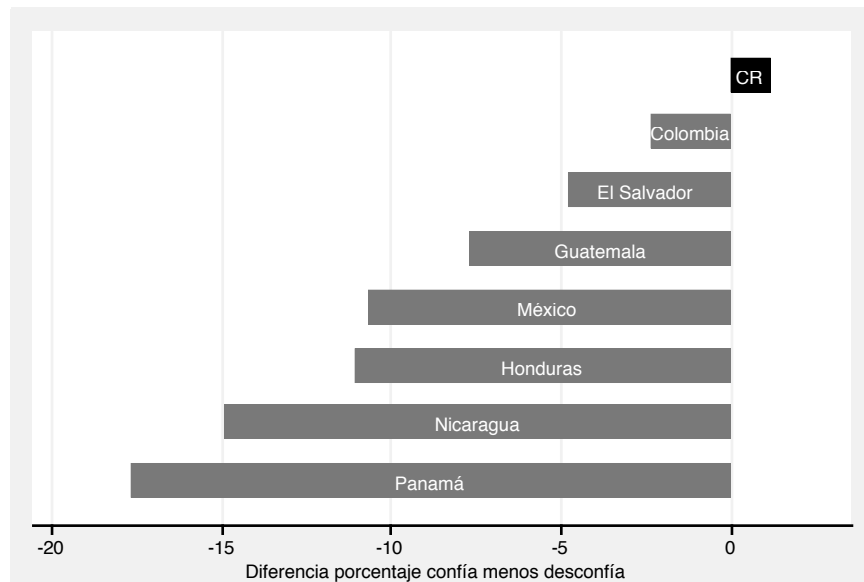


8.9 El capital social de Costa Rica en perspectiva comparada

Costa Rica es el único país de los 8 estudiados en el que el número de los individuos que confían en las personas de la comunidad supera al número que desconfía, aunque la diferencia es de solo dos puntos porcentuales (Gráfica VIII.9). En los otros países la desconfianza predomina sobre la confianza. La situación más dramática se observa en los dos vecinos de Costa Rica: Nicaragua y Panamá. En estos países, el porcentaje que desconfía de sus vecinos supera en 15 o más puntos al porcentaje que

confía. Aunque los otros aspectos del capital social se midieron solo en Costa Rica y por tanto no es posible hacer comparaciones, los resultados con respecto a la confianza interpersonal sugieren que el capital social de Costa Rica es más elevado. Si a este hallazgo se suma el de que el capital social tiene un efecto favorable en las actitudes individuales de apoyo a la democracia (Capítulo III), ésta podría ser una de las claves para entender la adhesión o no al sistema democrático de ciertas sociedades.

Gráfica VIII.9. Diferencia entre los porcentajes que confían menos los que desconfían



Capítulo IX. La inmigración nicaragüense

9.1 Introducción

La inmigración nicaragüense es uno de los fenómenos sociales más importantes en la Costa Rica de las dos últimas décadas. Por lo menos así lo percibe la opinión pública. Muchos de los acontecimientos importantes en el país, especialmente aquellos negativos, tienden de modo casi reflejo a vincularse o atribuirse a la migración nicaragüense. Si la pobreza o la tasa de mortalidad infantil no disminuyen, la culpa, creen muchos, es de los inmigrantes. Lo mismo si el crimen, la violencia doméstica o el desempleo aumentan. El imaginario colectivo tiende también a sobredimensionar la importancia de la inmigración. Noticias de prensa y declaraciones de funcionarios con frecuencia mencionan cifras exageradas, como la de que el número de inmigrantes es de un millón. La realidad, demostrada por el censo del 2000, es que no llegan a los 300.000, ni siquiera luego de corregir por un 12% de subenumeración (INEC & CCP, 2002). Estas percepciones en parte se deben a la mayor visibilidad de los inmigrantes en ciertos ámbitos donde tienden a concentrarse, como por ejemplo en el Área Metropolitana de San José -y ciertos barrios como la Carpío, los Guidos y el Parque de la Merced- entre los adultos jóvenes o en los grupos ocupacionales dedicados al servicio doméstico, la construcción y la seguridad privada.

Esta percepción exagerada, de que el número de inmigrantes es grande y de que tienen gran impacto en la vida nacional, podría repercutir en la democracia costarricense. Cuando una minoría importante, como en este caso los nicaragüenses, no tiene derechos de ciudadanía, la democracia debe necesariamente garantizar sus derechos civiles. Si no lo hace, sería una perversión del concepto de democracia. El irrespeto de los derechos civiles de estos no-ciudadanos puede originarse en actitudes y valores de aquéllos con derecho de ciudadanía, por lo que es importante determinar el clima de aceptación o tolerancia existente hacia los inmigrantes.

Cabe también la posibilidad de que algún político trate de (y lo logre) alcanzar cuotas de poder sobre plataformas xenofóbicas y, por definición, anti democráticas. Aunque nada de esto ha ocurrido en Costa Rica, la experiencia de otros países enseña que bien podría suceder. La existencia de más de un 10% de nicaragüenses en la población adulta de Costa Rica es, ciertamente, un hecho a considerar en este estudio de la democracia en el país.

La encuesta solo entrevistó a costarricenses. Los inmigrantes que conservan su nacionalidad de origen no están representados en la muestra y, por ende, sus opiniones, valores y normas hacia la democracia tampoco lo están. Por lo menos no directamente. Pero a los costarricenses entrevistados, la encuesta les hizo una serie de preguntas relativas a la inmigración, con el propósito de medir la aceptación de los inmigrantes y el grado de integración (preguntas CRMI de la página 13 del cuestionario).

9.2 Actitudes hacia los inmigrantes

Se preguntó a los entrevistados si:

- a los inmigrantes ilegales el gobierno debía: (1) deportarlos, (2) investigarlos y dejar aquí a los sin antecedentes penales, (3) darles facilidades par que se queden legalmente;
- los nicaragüenses hacen los trabajos que no quieren hacer los costarricenses o le quitan el trabajo a los costarricenses;
- los nicaragüenses reciben menos beneficios, reciben lo que merecen o reciben demasiados beneficios; y
- los nicaragüenses tienen malas costumbres o tienen costumbres diferentes, pero no peores o mejores que los ticos.

Las respuestas a estas preguntas denotan que, sin ser mayoritarias, las opiniones negativas de los inmigrantes están muy difundidas (Tabla IX.1). Por ejemplo el 33% opina que ellos le quitan el trabajo a los nacionales, el 28% que reciben demasiados beneficios y el 39% que tienen peores costumbres. El 51% está porque se deporta inmediatamente a los ilegales. Aunque en el país aun hay una importante reserva de buena voluntad hacia los inmigrantes, es preocupante que alrededor de un tercio de la población presente manifestaciones de intolerancia. Muy pocos (7%) están a favor de que se facilite la permanencia de los inmigrantes ilegales, tal y como se hizo en la amnistía de 1999.

Tabla IX.1 Actitudes hacia los inmigrantes nicaragüenses

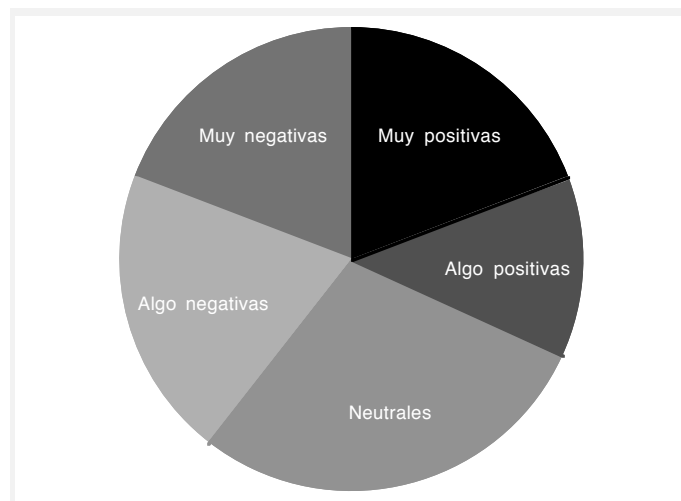
Desfavorables	%	Neutras	%	Favorables	%
Qué hacer con ilegales? (N=1,484)					
Deportarlos tan pronto los descubran	51%	Investigarlos y dejar aquí a los sin antecedentes	42%	Facilitarles procedimientos para quedarse	7%
Los trabajadores nicaragüenses: (N=1,460)					
Le quitan el trabajo a los costarricenses	33%			Hacen lo que costarricenses no quieren hacer	67%
Los nicaragüenses respecto a costarricenses: (N=1,442)					
Reciben demasiados beneficios	28%	Reciben lo que merecen	23%	Reciben menos beneficios	49%
Las costumbres de nicaragüenses son: (N=1,472)					
Peor que las de ticos	39%	Diferentes pero no peor	50%		
		Algunos peor y otros no	11%		

La Tabla IX.1 clasifica la respuestas según si las actitudes son desfavorables, neutras o favorables respecto a los inmigrantes. De las 54 posibles combinaciones de respuestas, formamos la siguiente tipología de 5 actitudes hacia la inmigración (en paréntesis los puntajes o códigos asignados, de modo que el promedio expresa un porcentaje neto de actitudes favorables menos desfavorables):

- Muy negativas: sin respuestas favorables y al menos dos desfavorables (-100)
- Muy positivas: sin respuestas desfavorables y al menos dos favorables (100)
- Algo negativas: una respuesta favorable y al menos dos desfavorables (-50)
- Algo positivas: una respuesta desfavorable y al menos dos favorables (50)
- Neutras: las demás respuestas válidas (0).

El mayor número de entrevistados (29%) tiene actitudes neutras o ambivalentes (Gráfica IX.1) hacia los inmigrantes de Nicaragua. Porcentajes similares (19%) están polarizados con actitudes muy negativas o muy positivas. Quienes tienen actitudes algo negativas (20%) superan a los con actitudes “algo positivas” (13%). En balance, el promedio del índice indica que la diferencia entre actitudes positivas y negativas es de -4%, es decir que predominan ligeramente las actitudes desfavorables hacia la inmigración¹⁰².

Gráfica IX.1 Actitudes hacia los inmigrantes nicaragüenses



9.3 Integración con los inmigrantes

El grado de integración con los inmigrantes se determinó con las siguientes cinco preguntas de si en los últimos cinco años tiene o ha tenido a un nicaragüense de: (1) vecino cercano, (2) amistad con, (3) compañero de trabajo, (4) empleado u otro trabajador doméstico, y (5) guarda de seguridad en la casa o el barrio. Las alternativas de respuesta fueron sí o no.

Casi las tres cuartas partes de los entrevistados señalaron relaciones de amistad con algún nicaragüense (Tabla IX.2). Este es un indicador de que la integración es relativamente elevada. El 59% dijo haber tenido de vecino cercano a un nicaragüense y el 36% algún compañero de trabajo. Si se excluye a quienes no trabajan, este último

¹⁰² Una análisis factorial confirmatorio mostró que las cuatro preguntas se alinean, en efecto, en un solo factor, el cual explica el 41% de la variancia. El Alfa de Crombach para una escala sumativa sería de 0,50. Debido a este valor relativamente modesto se optó por elaborar la tipología antes descrita, en lugar de construir una escala.

porcentaje sube a 49%. Vale decir que entre la mitad y las tres cuartas partes de los costarricenses tiene contacto con los inmigrantes, lo que a su vez es un indicador de la importancia y ubicuidad del fenómeno de la inmigración. Los porcentajes de contacto son bastante menores a través de servicio doméstico y los servicios de seguridad que con frecuencia prestan los inmigrantes: 15% y 13%.

Tabla IX.2 Tienen interacción con nicaragüenses

Tipo de interacción	%	(N)
Como vecino	59	(1,496)
Por amistad	73	(1,497)
En el trabajo	36	(1,494)
Servicio doméstico	15	(1,491)
Guarda	13	(1,476)

El análisis factorial demostró que hay dos dimensiones implícitas en las cinco preguntas anteriores (Tabla IX.3). La primera dimensión, que la denominamos “integración horizontal” está dada por los contactos por amistad, en el trabajo o como vecinos. La segunda, que denominamos “integración vertical,” agrupa los contactos con empleados domésticos o guardas de seguridad del barrio. Los dos componentes explican el 55% de la variancia de las cinco preguntas.

Tabla IX.3 Matriz de componentes rotados

Tipo de interacción	Componente	
	1	2
Como vecino	.663	-.006
Por amistad	.758	.037
En el trabajo	.611	.095
Servicio doméstico	.078	.811
Guarda	.025	.819

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Atendiendo los resultados del análisis factorial se definieron dos índices por conteo de las respuestas positivas. El índice de integración horizontal, con rango de 0 a 3, indica con cuántos tipos de nicaragüenses ha tenido relación en un plano de igualdad. El índice de integración vertical, rango 0 a 2, con cuántos, en una relación subalterna¹⁰³. Ambos se normalizaron a valores de 0 a 100. Se obtuvo un promedio de 56 para integración horizontal y 14 para integración vertical.

¿Quiénes están integrados en mayor o menor grado con los inmigrantes nicaragüenses? La respuesta puede extraerse del análisis de regresión múltiple de la Tabla IX.4. En lo que respecta a la integración horizontal, los residentes fuera del Valle Central y en la Gran San José están significativamente más integrados con los inmigrantes. También lo están los hombres, las mujeres que no son amas de casa, los casados o unidos, los de más edad y los de mayores ingresos, aunque la asociación con ingreso y

¹⁰³ Los coeficientes Alfa de Crombach para estas dos escalas no son altos: 0.42 y 0.50, respectivamente. Sin embargo, esto no es importante pues se trata de un conteo de relaciones con diversos tipos de inmigrantes.

estado conyugal es, de acuerdo con el coeficiente Beta, más bien débil. La educación, riqueza acumulada o religiosidad no son factores de la integración con los inmigrantes.

En algunos aspectos los resultados son parecidos para la integración vertical. Las excepciones son las siguientes. Los hombres ostentan una menor integración de este tipo y la educación y la riqueza presentan ahora una asociación positiva y estadísticamente significativa. La integración vertical se da, por tanto, más en los estratos económicos más elevados y con mayor educación, e involucra a las mujeres en mayor medida. La integración horizontal, en cambio, no está asociada con la condición socioeconómica y, más bien, lo está con el lugar donde uno vive. Así lo corrobora el hecho de que el ajuste del modelo casi se duplica cuando se introducen los cantones en la ecuación de regresión (el R cuadrado pasa de 0,12 a 0,20).

Tabla IX.4 Regresión múltiple explicatoria de los dos índices de interacción con nicaragüenses (coeficiente de regresión simple y estandarizado)

Variables explicativas	Interacción horizontal			Interacción vertical		
	B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.
(Constante)	64.224			-8.813		
Valle Central	-6.559	-.096	.000	-1.242	-.021	.125
Resto Urbano	-7.614	-.092	.003	-8.435	-.115	.494
Rural	-4.647	-.070	.004	-6.380	-.109	.000
Hombre	10.357	.161	.048	-6.113	-.108	.001
Amas de casa	-7.861	-.114	.000	-3.096	-.051	.001
En unión	.692	.010	.001	-3.340	-.057	.114
Educación (años)	-.533	-.066	.696	.999	.140	.022
Edad en años	.591	.298	.048	.265	.152	.000
Edad cuadrado	-.011	-.491	.024	-.001	-.043	.222
Ingreso (miles c/)	.006	.026	.000	.059	.282	.725
Riqueza índice	-.760	-.064	.444	.584	.056	.000
Religiosidad media	1.084	.016	.072	1.212	.020	.093
Religiosidad baja	4.959	.067	.560	5.754	.087	.430
R-cuadrado	0.12			0.24		
R-cuadrado con cantones	0.20			0.28		

9.4 Correlatos de la aceptación o tolerancia de los inmigrantes

Con los datos anteriores podemos ahora despejar la incógnita de ¿qué factores o características de los costarricenses están asociadas a una mayor o menor tolerancia de los inmigrantes? así como la cuestión más específica de ¿hasta qué punto el conocimiento o integración con los inmigrantes reduce la intolerancia?

Los resultados del análisis de regresión múltiple sugieren que no es sencillo explicar lo que hace de una persona más o menos tolerante hacia la inmigración (Tabla IX.5). La bondad de ajuste del modelo en su conjunto (el R-cuadrado) es de solamente 0.05. El sexo, la edad, el estado conyugal, el ingreso, la riqueza o la religiosidad no influyen significativamente. La única característica individual con una relación significativa es la educación. Los individuos con educación postsecundaria tienen actitudes más favorables hacia la inmigración. No así los individuos con solo educación secundaria, quienes no se diferencian significativamente de aquellos con primaria o menos. La Gráfica IX.2, muestra que entre las personas con educación postsecundaria las

actitudes favorables hacia los inmigrantes superan en 12 puntos porcentuales a las desfavorables. En cambio, en los otros dos grupos de educación, las actitudes negativas hacia los inmigrantes superan en de 6% a 9% a las actitudes positivas.

Tabla IX.5 Regresión múltiple del índice de aceptación de los inmigrantes nicaragüenses(coeficiente de regresión simple y estandarizado)

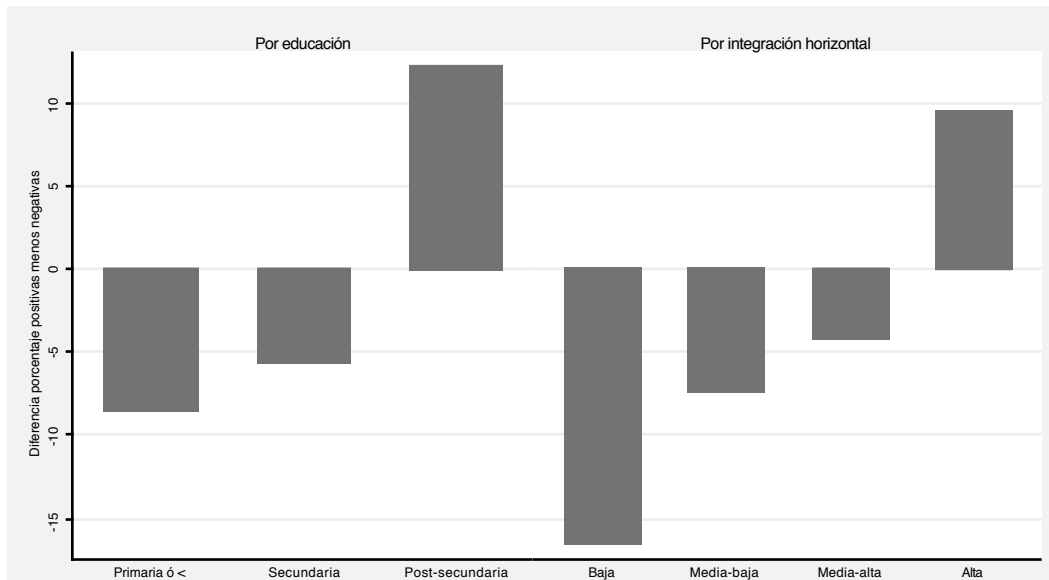
VARIABLES EXPLICATIVAS	B	BETA	SIG.
(Constante)	-36.153	.	0.006
Valle Central	-7.593	-0.053	0.131
Resto Urbano	10.457	0.060	0.086
Rural	4.572	0.033	0.403
Hombre	4.611	0.034	0.361
Amas de casa	3.648	0.025	0.506
En unión	-3.334	-0.024	0.391
Educación secundaria	-2.815	-0.020	0.535
Educación postsecundaria	13.261	0.075	0.040
Edad en años	-0.192	-0.046	0.124
Ingreso (miles c/)	0.030	0.060	0.109
Riqueza índice	1.494	0.059	0.120
Religiosidad media	-3.359	-0.023	0.431
Religiosidad baja	-5.969	-0.038	0.216
Cohesión social	0.136	0.054	0.048
Interacción horizontal	0.243	0.115	0.000
Interacción vertical	0.009	0.004	0.908
R-cuadrado	0.045		
R-cuadrado con cantones	0.063		

También muestran una actitud significativamente más positiva hacia la inmigración las personas que indicaron residir en comunidades con una mayor cohesión social y quienes tienen un mayor grado de integración horizontal con los inmigrantes. En particular, tener un amigo o vecino o compañero nicaragüense puede llevar a que una persona acepte en mayor grado a los inmigrantes. Y mientras más inmigrantes se conozcan, mejor (Gráfica IX.2). Existe, sin embargo, la posibilidad de que la dirección de causalidad vaya en la otra dirección: que las personas más tolerantes se integren más con los inmigrantes.

La localidad específica de residencia, representada por el cantón, parece también ser de cierta importancia. La bondad de ajuste del modelo se incrementa en 40% cuando las variables indicatrices de los cantones se incluyen en la ecuación (Tabla IX.5). Y este efecto ocurre luego de controlar el de interacción con migrantes, que en cierto modo mide la importancia de la inmigración en cada localidad. Aunque el número de entrevistas es pequeño (50 por cantón), la regresión permite identificar algunos cantones extremos en los que la aceptación de los inmigrantes es significativamente mayor o menor que el resto, a saber:

- Pérez Zeledón San Carlos, Guácimo y La Cruz con actitudes favorables a la inmigración.
- Limón, con baja tolerancia de la inmigración.

Gráfica IX.2 Diferencia en el porcentaje de aceptación menos rechazo de inmigrantes



Estos resultados referentes al impacto que el cantón tiene en la tolerancia del inmigrante sugieren que las actitudes y valores correspondientes son, en gran medida, configurados por la localidad –el pueblo, el barrio— en un proceso probablemente de difusión interpersonal o imitación. Procesos de esta naturaleza, que no tienen una fuerte raigambre socioeconómica, a menudo pueden ser influenciados, en una u otra dirección, a través de la educación, información y propaganda, como bien lo saben los mercadólogos y publicistas.

Apéndice A: Bibliografía

- Achard, D., & González, L. (Eds.). (2004). *Un desafío a la democracia: los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. San José: Banco Interamericano de Desarrollo - Organización de Estados Americanos - IDEA Internacional.
- Acuña, V. (1993). *Conflicto y reforma en Costa Rica (1940-1949)* (Vol. 17). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Acuña, V. (1995). Historia del vocabulario político en Costa Rica: estado, república, nación y democracia (1821 - 1949). In A. Taracena & J. Piel (Eds.), *Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica* (pp. 281). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Acuña, V., & Molina, I. (1991). *Historia económica y social de Costa Rica*. San José: Editorial Porvenir.
- Aguilar, M. (1989a). *Clase trabajadora y organización sindical*. San José: ICES - Editorial Porvenir - FLACSO.
- Aguilar, M. (1989b). Los derechos civiles en Costa Rica, 1940-1980: historia de un proceso democrático. San José: Instituto Costarricense de Estudios Sociales.
- Aguilar, O. (1977). *Democracia y partidos políticos en Costa Rica, 1950-1962*. San José: Imprenta Lil.
- Alfaro, R. (2002). Magnitud y direccionalidad del cambio electoral en las elecciones municipales en Costa Rica, período 1994-2002. San José: Programa Estado de la Nación.
- Alfaro, R. (2003). *Gestión presupuestaria municipal en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Programa Estado de la Nación.
- Almond, G. (1980). The Intellectual History of the Civic Concept. In G. Almond & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited*. Boston, Ma: Little, Brown and Company.
- Almond, G., & Verba, S. (1965). *The Civic Culture*. Boston, Ma: Little, Brown and Company.
- Baker, C., Fernández, R., & Stone, S. (1972). *El gobierno municipal en Costa Rica: sus características y funciones*. San José: Associated Colleges of the Midwest Central American Field Program - Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
- Barahona, M. (1994). *Las sufragistas de Costa Rica*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Becker, D. (1999). Latin America: Beyond Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 10(2).
- Benavides, T., Vargas Cullerell, J., Gómez, M., & Kikut, L. (2003). Nota conceptual sobre participación ciudadana. San José: Documento preparado para el Informe sobre el desarrollo democrático de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Booth, J. (1995). Elites and Democracy in Central America. In M. Seligson & J. Booth (Eds.), *Elections and Democracy in Central America* (pp. 244-263). Chapel Hill, Estados Unidos: University of North Carolina Press.
- Booth, J. (1998). *Costa Rica: Quest for Democracy*. Boulder: Westview Press.

- Booth, J., & Seligson, M. (1994). Paths to Democracy and the Political Culture of Costa Rica, Mexico and Nicaragua. In L. Diamond (Ed.), *Political Culture and Democracy in Developing Countries*. Boulder: Lynne Reinner.
- Burns, N. (2001). *The Private Roots of Public Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Camp, R. A., Coleman, K., & Davis, C. (2000, Mayo 17-18). *Public Opinion About Corruption: An Exploratory Study in Chile, Costa Rica and Mexico*. Paper presented at the Annual Meeting of the World Association of Public Opinion Research, Portland.
- Campos, D. (2000). *Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica*. San José: Editorial Guayacán.
- Canache, D., Mondak, J., & Seligson, M. (2001). Measurement and Meaning in Cross-National Research on Satisfaction with Democracy. *Public Opinion Quarterly*.
- Carey, J. (1998). Strong Candidates for a Limited Office: Presidentialism and Political Parties in Costa Rica. In S. Mainwaring & M. Shugart (Eds.), *Presidentialism and Democracy in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Carranza, E., & Solana, E. (2004). La seguridad ciudadana frente al delito en Costa Rica: veinte años de medición (pp. 45). San José: Programa Estado de la Nación.
- Carvajal, M. (1978). Actitudes política del ostaricense: análisis de opinión de dirigentes y partidarios. San José: Editorial Costa Rica.
- Cerdas, J. M., & Contreras, G. (1988). *Los años 40. Historia de una política de alianzas*. San José: Editorial Porvenir - ICES.
- Cerdas, R. (1998). *La Otra cara del 48*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Cerdas, R. (1999). *Unidad cívica nacional, sentido pertenencia y democracia en Costa Rica* (Informe de consultoría). San José: Proyecto Estado de la Nación.
- Chalker, C. (1995). Elections and Democracy in Costa Rica. In M. Seligson & J. Booth (Eds.), *Elections and Democracy in Central America Revisited* (pp. 103-122). Chapel Hill: University of Carolina Press.
- Conway, M. (1985). *Political Participation in the United States*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- Coppedge, (1996). Venezuela, The Rise and Fallof Partyarchy. In J. I. Dominguez & A. Lowenthal (Eds.), *Constructing Democratic Governance: South America in the 1990s* (Vol. 1, pp. 10-18). Baltimore, Md: The Johns Hopkins University Press.
- Crotty, W. (1991). Political Participation: Mapping the Terrain. In C. William (Ed.), *Political Participation and American Democracy*. Wesport, Greenwood Press.
- Cruz, J. M. (2003). Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra. *América Latina Hoy*, 35(Diciembre), 19-59.
- Dahl, R. (1971). *Polyarchy*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. (1999). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- De la Cruz, V. (1977). *Las luchas sociales en Costa Rica 1870-1930*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Delgado, J. (1997). *Costa Rica: Régimen político*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.

- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper Collins.
- Easton, D. (1975). The Concept of Political Support. *British Journal of Political Science*(5).
- Eckstein, H. (1988). A Culturalist Theory of Political Change. *American Political Science Review*, 82(3), 789-804.
- Eckstein, H. (1990). Political Culture and Political Change. *American Political Science Review*, 84, 253-258.
- Edwards, B., & Foley, M. W. (1997). Social capital, civil society, and contemporary democracy. *American Behavioral Scientist*, 40(5).
- Fallas, H. (1984). Crisis económica en Costa Rica: un análisis económico de los últimos veinte años. San José: Editorial Nueva Década.
- Fernández, O. (1996). Partidos políticos: su interrelación y rasgos centrales en la sociedad costarricense. *Anuario de estudios centroamericanos*. 22 (2).
- Fiorina, M. (1981). *Retrospective Voting in American Elections*. New York: Yale University Press.
- Fournier, M. V., Gutierrez, A. L., & Cruz, C. (2002). Resquebrajándose una tradición electoral. *Revista de Ciencias Sociales*, 43(98).
- Fournier, M. V., Raventós, C., & Sandoval, C. (2003). *¿Qué sabemos los ticos del TLC?* Unpublished manuscript, San José.
- Freedom House. (2004). *Freedom in the World*. Retrieved May 16, 2004, 2004, from www.freedomhouse.org/survey2003
- Garita, N., & Poltronieri, J. (1989). *Estructuras de opinión pública en Costa Rica*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Garita, N., & Poltronieri, J. (1997). Algunos datos seriados de la opinion publica en Costa Rica (pp. 26). San Jose, CR.
- Garnier, L. (1990). Gasto público y desarrollo social en Costa Rica. *Cuadernos de política económica*, 2.
- Gómez, M. (1998). Resultados generales de la encuesta sobre satisfacción con la vida y valores básicos, *Serie aportes al análisis del desarrollo humano sostenible*. San José: Programa Estado de la Nación.
- Gómez, M., & Madrigal, J. (2004). La visión de la democracia de los estudiantes de secundaria costarricenses. In F. Rodríguez, S. Castro & J. Madrigal (Eds.), *Herencia de paz*. San José: Editorial Universidad Nacional Autónoma.
- González, C., & Céspedes, V. H. (1995). Costa Rica. In S. Rottemberg (Ed.), *The Political Economy of Poverty, Equity, and Growth: Costa Rica and Uruguay*. New York: Oxford University Press.
- González, M. E. (2004). Índice de rezago social. In L. Rosero (Ed.), *Costa Rica a la luz del Censo del 2000* (pp. 3-27). San José: Centro Centroamericano de Población - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Programa Estado de la Nación.
- Granovetter, M. (1973). The strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*(78), 1360-1380.
- Gurr, T., & Jagger, K. (2000). *Polity 98 Project Regime Characteristics 1880-1998*. Retrieved 24 June, 2001, from www.bsos.umd.edu/cidcm/polity
- Gutiérrez, C. J. (1983). Síntesis del proceso constitucional. In C. J. Gutiérrez (Ed.), *Derecho constitucional costarricense*. San José: Editorial Juricentro.

- Gutiérrez, M., & Román, M. (2002). Rendición de cuentas sobre ingresos tributarios. In F. Herrero (Ed.), *Sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional*. San José: Contraloría General de la República.
- Hilje, B. (1997). *La colonización de Costa Rica (1840-1940)* (3 ed. Vol. 10). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Inglehart, R. (1988). The Renaissance of Political Culture. *American Political Science Review*, 82(November), 1203-1230.
- Inglehart, R. (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, R. (1999). Postmodernization Erodes Respect for Authority but Increases Support for Democracy. In P. Norris (Ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Nueva York: Oxford University Press.
- Jiménez, A. (2002). *El imposible país de los filósofos*. San José: Ediciones Perro Azul.
- Jiménez, M. A. (1974). *Desarrollo constitucional de Costa Rica*. San José: Editorial Costa Rica.
- Jurado, J. (2000). El valor de la constitución y el desarrollo constitucional costarricense (pp. 1-33). San José: s.e.
- Kaufman, D. (1998, Abril 2-4). Corruption Diagnostics: A New technocratic Framwwork for the Analysis of Corruption and Its Implicatons for the Design of Action Programs. Paper presented at the Miami Anticorruption Summit, Miami.
- Kaufman, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999). Governance Matters, *Policy Research Working Paper* (Vol. 2196). Washington D. C.: World Bank.
- Kikut, L., Vargas Cullell, J., & Gómez, M. (2003). Metodología empleada para determinar las orientaciones hacia la democracia de las y los ciudadanos de América Latina. San José: Documento preparado para el Informe sobre el desarrollo democrático de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Klingemman, H. D. (1999). Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis. In P. Norris (Ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Nueva York: Oxford University Press.
- Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. (2003). La situación de la infraestructura vial en Costa Rica. San José: Programa Estado de la Nación.
- Lehouq, F. (1992). Conflicto de clases, crisis política y destrucción de las prácticas democráticas en Costa Rica. Reevaluando los orígenes de la Guerra Civil de 1948. *Revista de Historia*, 25(Enero - junio 1992), 65-96.
- Lehouq, F. (1995). La dinámica política institucional y la construcción de un régimen democrático: Costa Rica en perspectiva latinoamericana. In A. Taracena & J. Piel (Eds.), *Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica* (pp. 281). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Lehouq, F. (1998). *Instituciones Democráticas y Conflictos Políticos en Costa Rica*. Heredia: Editorial Universidad Nacional Autónoma.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy*. New Haven: Yale University Press.

- Linz, J. J. (1978). Crisis, Breakdown, and Reequilibration. In J. J. Linz & A. Stepan (Eds.), *The Breakdown of Democratic Regimes* (pp. 1-97). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Lipset, S., & Rokkan, S. (1967). *Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives*. New York: Free Press.
- Lyons, S. (1981). *Who Votes and Why: A Review of American Electoral Behavior*. Boston: Paper written for the R. A. Taft Institute of Government, Tuft University.
- Mahoney, J. (2001). *The Legacies of Liberalism*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Molina, I., & Lehouq, F. (1999). *Urnas de lo inesperado*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Molina, I., & Palmer, S. (Eds.). (1992). *Héroes al gusto y libros de moda*. San José: Editorial Porvenir - Plumsock Mesoamerican Studies.
- Molina, I., & Palmer, S. (Eds.). (1994). *El paso del cometa. Estado, política social y culturas populares*. San José: Editorial Porvenir - Plumsock Mesoamerican Series.
- Mora, J. (1989). La organización comunal y DINADECO, 1964 - 1987. San José: ICES.
- Mora, S. (2004). Acciones colectivas de la población en la prensa escrita de Costa Rica. In I. d. I. S. d. I. U. d. C. Rica (Ed.). San José: Programa Estado de la Nación.
- Muller, E., Jukam, T., & Seligson, M. (1982). Diffuse Support and Antisystem Political Behavior. *American Journal of Political Science*(26), 240-264.
- Muñoz, I. (1988). Estado y poder municipal: un análisis del proceso de centralización escolar en Costa Rica 1821 - 1992. Universidad de Costa Rica, San José.
- Muñoz, M. (1990). *El Estado y la abolición del Ejército*. San José: Editorial Porvenir.
- Murillo, C. (1995). *Identidades de hierro y humo*. San José: Editorial Porvenir.
- Niemi, R. (Ed.). (1993). *Classics in Voting Behavior*. Washington D.C.: CQ Press.
- Nohlen, D. (1993). *Elecciones y sistemas de partidos en América Latina*. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Norris, P. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering, Voting Rules and Political Behavior*. Nueva York: Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. (2003). Democracia, derechos humanos, desarrollo humano. In G. O'Donnell, O. Iazzetta & J. Vargas Cullell (Eds.), *Democracia, desarrollo humano, ciudadanía*. Rosario: Editorial Homo Sapiens.
- O'Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1).
- O'Donnell, G. (1997, August, 1997). *Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America*. Paper presented at the The Quality of Democracy and Democratic Consolidation, Washington, D.C.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability and New Polyarchies. In A. D. Schedler, Larry y Mark Plattner (Ed.), *Institutionalizing Horizontal Accountability*. Baltimore: University of Johns Hopkins Press.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. In G. O'Donnell, P. Schmitter & L. Whitehead (Eds.), *Transitions from Authoritarian Rule* (pp. 81). Baltimore: The Johns Hopkins University.
- Oliva, M. (1985). *Artesanos y obreros urbanos costarricenses, 1880 - 1914*. San José: Editorial Costa Rica.

- Oliva, M. (1997). *Movimientos sociales en Costa Rica (1825-1930)* (Vol. 13). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Paige, J. (1997). *Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America*. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.
- Pateman, C. (1980). The Civic Culture: A Philosophical Critique. In G. Almond & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited* (pp. 57-102). Boston, Ma: Little, Brown and Company.
- Peeler, J. (1985). *Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica, Venezuela*. Chapel Hill, Estados Unidos: University of North Carolina Press.
- Peeler, J. (1991). Elite Settlements and Democratic Consolidation. In J. Highley & R. Gunther (Eds.), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southeastern Europe*. (pp. 81-112). New York: Cambridge University Press.
- Peralta, H. (1962). *Las constituciones de Costa Rica*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
- Pérez, H. (1997). *Historia de Costa Rica 1840-1940. Una síntesis interpretativa*. (Vol. 16). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Philps, M. (2002). *Meanings of Corruption*. Unpublished manuscript, Oxford.
- Piszk, S., & Segura, J. (1983). *Los partidos políticos y la democracia interna: el Partido Liberación Nacional 1950-1982*. Unpublished Licenciatura en ciencias políticas, Universidad de Costa Rica, San José.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). *Informe sobre el Desarrollo Democrático en América Latina*. México: Santillana.
- Programa Estado de la Nación. (2001a). *Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia*. San José: Editorama.
- Programa Estado de la Nación. (2001b). VII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2000). San José: Editorama.
- Programa Estado de la Nación. (2002). VIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2001). San José: Editorama.
- Programa Estado de la Nación. (2003a). IX Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2002). San José: Editorama.
- Programa Estado de la Nación. (2003b). Segundo Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá. San José: Editorama.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, R. (1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in American. *Political Science and Politics*, 4.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Quesada, J. R. (1999). La educación en Costa Rica, 1821-1914. In A. M. Botey (Ed.), *Costa Rica, desde las sociedades autóctonas hasta 1914* (pp. 339-444). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Rae, D. (1967). *The Political Consequences of Electoral Laws*. New Haven: Yale University Press.
- República de Costa Rica. (2004). *Constitución Política de la República de Costa Rica*. San José: Tribunal Supremo de Elecciones.

- Rivera, R. (2001). Cultura política en torno a los gobiernos locales y la descentralización en Costa Rica: informe final de encuesta. San Salvador: FLACSO - Programa El Salvador.
- Rodríguez, F., Castro, S., & Espinoza, R. (1998). La intolerancia anda suelta el estado actual de la cultura política costarricense. In F. Rodríguez, S. Castro & R. Espinoza (Eds.), *El sentir democrático: estudios sobre cultura política centroamericana*. Heredia: Editorial Universidad Nacional Autónoma.
- Rodríguez, F., Castro, S., & Madrigal, J. (2004). Desde la mirada de la juventud. valoración de la longeva democracia costarricense. In F. Rodríguez, S. Castro & J. Madrigal (Eds.), *Herencia de paz*. Heredia: Editorial Fundación Universidad Nacional Autónoma.
- Rodríguez, J. C. (2003). Sala Constitucional y equilibrio de poderes. San José: Programa Estado de la Nación.
- Rojas, M. (1986). *Lucha social y guerra civil en Costa Rica*. San José: Editorial Alma Máter.
- Rojas, M. (1990). La democracia costarricense: mitos y realidades. In DEI-CEPAS (Ed.), *Mitos y realidades de la democracia en Costa Rica* (pp. 25-30). San José: DEI-CEPAS.
- Román, A. C. (1995). Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuentes (1870-1948). San José: Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica.
- Rosenberg, M. (1980). *Las luchas por el seguro social en Costa Rica*. San José: Editorial Costa Rica.
- Rovira, J. (1982). Estado y política económica en Costa Rica, 1948 - 1970. San José: Editorial Porvenir.
- Salazar, J. (1981). *Política y reforma en Costa Rica, 1914-1958*. San José: Editorial Porvenir.
- Salazar, J. (1990). El modelo político electoral de la democracia costarricense, 1920-1980. *Revista de Ciencias Sociales*(48), 17-30.
- Salazar, O. (1997). *El apogeo de la república liberal en Costa Rica* (3 ed.). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Salazar, O., & Salazar, J. (1992). *Los partidos políticos de Costa Rica* (2 ed.). San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Samper, M. (1992). *El trabajo en la sociedad rural costarricense (1840-1940)* (7 ed. Vol. 11). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Samper, M. (1993). Policultivo, modernización y crisis: paradojas del cambio técnico/social en la caficultura centroamericana. *Revista de Historia*, 27(Enero-Junio 1993), 111-148.
- Sampson, R., Morenoff, J. D., & Earls, F. (1999). Beyond social capital: spatial dynamism of collective efficacy for children. *American Sociological Review*(64), 663-660.
- Sánchez, F. (2002). El cambio en el comportamiento electoral en el 2002 visto a través de los patrones de volatilidad históricos, 1958-2002. Unpublished manuscript, San José.
- Sánchez, M. (1985). Bases sociales del voto en Costa Rica 1974-1978. San José: Uruk.
- Sartori, G. (1997). Understanding Pluralism. *Journal of Democracy*, 8(4), 58-69.

- Schlozman, K. (1999). Civic Participation and the Equality Problem. In T. Skocpol & M. Fiorina (Eds.), *Engagement in American Democracy*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Segura, J. (1990). *La clase política y el poder judicial en Costa Rica* (2 ed.). San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Seligman, A. (1995). *The Idea of Civil Society* (First Princeton edition ed.). Princeton,: Princeton University Press.
- Seligson, M. (1996). Political Culture and Democratization in Latin America. In R. A. Camp (Ed.), *Democracy in Latin America: Patterns and Cycles*. Wilmington: Scholarly Resources.
- Seligson, M. (1999). Costa Rican Exceptionalism: Why Ticos Are Different. In *Democracy Through Latin American Lenses: Citizen Views from Mexico, Chile and Costa Rica*. New Orleans: Tulane University.
- Seligson, M. (2000). Toward a Model of Democratic Stability: Public Culture in Central America. *Estudios interdisciplinario de América Latina*, 11(2), 5-29.
- Seligson, M. (2001). ¿Problemas en el paraíso? La erosión del apoyo al sistema político en Costa Rica, 1978-1999. In J. Rovira (Ed.), *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI* (pp. 87-120). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Seligson, M. (2002). Trouble in Paradise: The Impact of the Erosion of System Support in Costa Rica, 1978-1999. *Latin America Research Review*, 37(1), 160-185.
- Seligson, M. (2004). Incidencia de la corrupción en los países de Europa Occidental comparado con el hallado por el estudio en Costa Rica. In J. V. Cullell (Ed.). San José.
- Seligson, M. (forthcoming). Democracy on Ice: The Multiple Paradoxes of Guatemala's Peace Process." In F. Hagopian & S. Mainwaring (Eds.), *Advances and Setbacks in the Third Wave of Democratization in Latin America*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Seligson, M., & Azpuru, D. (2001). Las dimensiones y el impacto político de la delincuencia en la población guatemalteca. In L. Rosero (Ed.), *Población del istmo 2000: Familia, migración, violencia y medio ambiente*. San José: Universidad de Costa Rica.
- Seligson, M., & Booth, J. (1993). Political Culture and Regime Type: Evidence from Nicaragua and Costa Rica. *Journal of Politics*, 55(3), 777-792.
- Seligson, M., & Carrión, J. (2002). Political Support, Political Skepticism and Political Stability in New Democracies: An Empirical Examination of Mass Support for Coups D'Etat in Peru. *Comparative Political Studies*, 35(1), 58-82.
- Seligson, M., & Caspi, D. (1983). Toward an Empirical Theory of Tolerance. Radical Groups in Israel and Costa Rica. *Comparative Political Studies*, 15, 385-404.
- Seligson, M., & Córdova, P. (2001). *Auditoría de la democracia: Ecuador*. Quito: USAID - Proyecto de Opinión Pública de la Universidad de Pittsburgh.
- Seligson, M., & Gómez, M. (1987). Elecciones ordinarias en tiempos extraordinarios: la economía política del voto en Costa Rica. *Anuario de estudios centroamericanos*(13), 71-92.
- Seligson, M., & Muller, E. (1990). Estabilidad democrática y crisis económica: Costa Rica 1978-1983. *Anuario de estudios centroamericanos*, 16-17(2-1), 71-92.

- Shifter, J. (1986). *La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Silva, M. (1993). Las fiestas cívico electorales en San José y el reconocimiento de la autoridad de los elegidos. *Revista de Historia, Enero - Junio 1993*(27), 31-49.
- Sojo, A. (1984). *Estado empresario y lucha política*. San José: EDUCA.
- Sojo, C. (2000). Dinámica sociopolítica y cultural de la exclusión social. In E. Gacitúa, C. Sojo & S. Davis (Eds.), *Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina y El Caribe* (pp. 51-89). San José: FLACSO - Banco Mundial.
- Sojo, C., & Rivera, R. (2002). Cultura tributaria. In F. Herrero (Ed.), *Sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional*. San José: Contraloría General de la República.
- Soto, G. (1985). *La iglesia costarricense y la cuestión social*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Soto Harrison, F. (1991). *¿Qué pasó en los 40?* San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- UNIMER R.I. (1996). Encuesta UNIMER para La Nación, Setiembre 1996. San José: La Nación www.nacion.com.
- UNIMER R.I. (1999). Encuesta UNIMER para La Nación, Junio 1999. San José: La Nación, www.nacion.com.
- UNIMER R.I. (2000). Segunda encuesta nacional de opinión de 2000, Junio 2000. San José: La Nación www.nacion.com.
- UNIMER R.I. (2001). Segunda encuesta nacional de opinión de 2000, Agosto 2001. San José: La Nación www.nacion.com.
- UNIMER R.I. (2002). II encuesta nacional de opinión de 2002, Junio 2002. San José: La Nación www.nacion.com.
- United Nations. (1999). *Global Report on Crime and Justice*. Nueva York: Oxford University Press.
- Urcuyo, C. (2003). *Reforma política y gobernabilidad*. San José: Editorial Juricentro.
- Vanhanen, T. (1990). *The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States 1980-1988*. New York, NY: Taylor and Francis Inc.
- Vargas, C. (1999). Historia política, militar y jurídica de Costa Rica entre 1870 y 1914. In A. M. Botey (Ed.), *Costa Rica, desde las sociedades autóctonas hasta 1914* (pp. 271-302). San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Vargas Cullell, J., Benavides, T., Gómez, M., & Kikut, L. (2003a). Medición de la participación ciudadana en América Latina. San José: Documento preparado para el Informe sobre el desarrollo democrático de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Vargas Cullell, J., Benavides, T., Gómez, M., & Kikut, L. (2003b). Nota conceptual y planteamiento analítico sobre las orientaciones hacia la democracia de las y los ciudadanos en América Latina. San José: Documento preparado para el Informe sobre el desarrollo democrático de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Verba, S. (1980). On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript. In G. Almond & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited* (pp. 394-410). Boston, Ma: Little, Brown and Company.

- Verba, S. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Villegas, G., & Núñez, B. (1997). *El espíritu del 48*. San José: Editorial Costa Rica.
- Volio, F. (2000). Diez años de Sala Constitucional (pp. 50). San José: Proyecto Estado de la Nación.
- Walzer, M. (1995). Pluralism: A Political Perspective. In W. Wymlicka (Ed.), *The Rights of Minority Cultures* (pp. 138-154). New York, NY: Oxford University Press.
- Wiarda, H. (1989). *Politics and Social Change in Latin America*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- World Bank. (1997). *World Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Yashar, D. (1997). *Demanding Democracy*. Stanford: Stanford University Press.
- Young, I. M. (1995). Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship. In R. Beiner (Ed.), *Theorizing Citizenship* (pp. 175-208). Albany, NY: State University of New York.
- Zeledón, M. (1992). Periodismo, historia, democracia. *Revista de Ciencias Sociales*(57), 7-16.

Apéndice B: El proceso de organizar el trabajo científico de este estudio

Nos embarcamos en 2004 con la esperanza de que los resultados del estudio fueran de interés y relevancia política para los ciudadanos, ONGs, académicos, gobiernos y la comunidad internacional de donantes. Nuestra esperanza era que los resultados pudieran ser usados no sólo para ayudar al avance de la agenda de democratización, también sirvieran a la comunidad académica que ha estado involucrada en la tarea de y que valores la desestabilizan terminar qué valores son los que más probablemente promueven una democracia estable. Por esta razón, estuvimos de acuerdo en incluir un núcleo común de preguntas en nuestra encuesta. Acordamos ese núcleo en una reunión sostenida en Ciudad de Panamá, en enero de 2004, cuyo anfitrión fue nuestro colega Panameño Marco Gandásegui Jr. Todos los equipos de los países estuvieron representados, así como la organización donante, USAID. No fue fácil para nosotros acordar un núcleo común dado que casi todos los presentes tenían unas preguntas favoritas, y sabíamos desde el comienzo que no queríamos que las entrevistas tomaran más de 45 minutos cada una pues extenderse más implicaba arriesgarse a la fatiga del encuestado y comprometer la confiabilidad de los datos. Como resultado, el tiempo promedio de la entrevista para todas las 12,401 entrevistas fue de 42 minutos, un acierto casi perfecto. El núcleo común nos permitió examinar, para cada nación y entre naciones, temas tan fundamentales como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a la democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, estado de derecho, participación en y evaluación del gobierno local, victimización por crimen, victimización por corrupción, y comportamiento electoral. Cada estudio contiene un análisis de esas importantes áreas de los valores y comportamientos democráticos. En algunos casos encontramos similitudes sorprendentes de país a país, mientras que en otros casos encontramos contrastes agudos.

Para asegurar comparabilidad, un diseño muestral común fue crucial para el éxito del esfuerzo. Antes de llegar a Panamá, el autor de este capítulo preparó para cada equipo los lineamientos para la construcción de una muestra probabilística, estratificada de múltiples etapas con un N objetivo de 1,500 individuos. En la reunión de Panamá, cada equipo se entrevistó con el Dr. Polibio Córdova, Presidente de CEDATOS, Ecuador, consultor general sobre las muestras del proyecto, un experto regional en diseño de muestras, entrenado por Leslie Kish, fundador del muestreo de encuestas moderno, en la Universidad de Michigan. Los refinamientos en el diseño de las muestras fueron hechos en aquella reunión y luego revisados por el Dr. Córdova. En un Apéndice del informe de cada país está incluida la descripción detallada de cada muestra.

La reunión de Panamá fue también una ocasión para que los equipos acordaran un marco común para el análisis. No quisimos imponer restricciones a los equipos, dado que reconocimos desde el principio que cada país poseía circunstancias únicas, y que lo que era muy importante para un país (v.g., crimen, abstención electoral) podría ser irrelevante para otro. Sin embargo, quisimos que todos los equipos pudieran hacer comparaciones directas con los resultados de otros países. Por esta razón, acordamos un método común para la construcción de índices. Usamos como estándar un coeficiente de confiabilidad de Alpha mayor de .6, con preferencia por .7, como el nivel mínimo

necesario para que un grupo de ítems fuera considerado una escala. La única variación en esa regla ocurrió cuando utilizamos “variables de conteo” para construir un *índice* (por oposición a una *escala*) en el que simplemente queríamos saber, por ejemplo, cuántas veces un individuo participó en cierta forma de actividad. De hecho, la mayoría de nuestras confiabilidades estuvieron muy por encima de .7 o mayor, y muchas superiores a .8. También animamos a todos los equipos a utilizar un análisis factorial para establecer la dimensionalidad de sus escalas. Otra regla común, aplicada a todo el conjunto de datos, fue en el tratamiento de los datos perdidos. Con el fin de maximizar los N de las muestras sin distorsionar irrazonablemente los patrones de respuesta, sustituimos el puntaje promedio de la elección individual del encuestado por cualquier escala o índice en el que hubiera datos perdidos, pero sólo cuando los datos perdidos comprendieran menos de la mitad de todas las respuestas de ese individuo. Para una escala de cinco ítems, por ejemplo, si el encuestado respondió tres o más de los ítems, asignamos la media de esos tres a esa persona para esa escala. Si menos de tres de los cinco ítems tuvieron respuesta, el caso completo fue considerado como perdido.

Otro acuerdo que cerramos en Panamá fue que cada sección principal de los estudios sería accesible al lector lego, lo que significa que las gráficas bivariadas y de tres variables serían usadas frecuentemente. Pero también acordamos que esas gráficas seguirían un análisis multivariado (regresión lineal o regresión logística), de tal forma que el lector técnicamente informado pudiera asegurarse de que las variables individuales en las gráficas fueran realmente predictores significativos de la variable dependiente estudiada. También acordamos un formato común para las gráficas (usando las plantillas producidas por SPSS 11.5). Finalmente, un formulario de “consentimiento informado” común fue preparado, y la aprobación para la investigación con sujetos humanos fue concedida por el Comité de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de Pittsburgh. El documento de aprobación está contenido en el reporte de cada país.

Una preocupación desde el principio fue la minimización del error y la maximización de la calidad de la base de datos. Lo hicimos a través de diferentes formas. Primero, acordamos un esquema común de codificación para todas las respuestas cerradas. Segundo, preparamos un conjunto común de formatos para el ingreso de datos, incluyendo un cuidadoso control de rangos, usando el programa CSPro 2.4 del *Census Bureau* de Estados Unidos. Tercero, todas las bases de datos fueron construidas en sus países respectivos, y verificadas después de que los archivos fueran enviados a una oficina central para su revisión. En ese punto, una lista aleatoria de 100 números de identificación de cuestionarios fue regresada a cada equipo, a quienes se les pidió que enviaran esas 100 encuestas a través de correo certificado a la oficina central para la auditoría. Esa auditoría consistió en dos pasos: el primero implicó comparar las respuestas escritas en el cuestionario durante la entrevista con las respuestas ingresadas por los equipos codificadores. El segundo paso implicó una comparación de las respuestas codificadas con la base de datos en sí misma. Si se encontraba un número significativo de errores a lo largo de ese proceso, la base de datos completa era reingresada y el proceso de auditoría repetido sobre la nueva base de datos. Finalmente, las bases de datos fueron combinadas en un archivo único para los ocho países, y las copias fueron enviadas a todos los equipos para que pudieran llevar a cabo los análisis comparativos sobre el archivo completo.

El siguiente paso en nuestro esfuerzo por maximizar la calidad estuvo en manos de los equipos que se reunieron nuevamente en una sesión plenaria una vez habían escrito los borradores de los informes, esta vez en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, generosamente albergado por nuestros colegas costarisenses Luis Rosero-Bixby y Jorga Vargas-Cullell. Como preparación para esa reunión, sostenida a mediados de junio de 2004, parejas de investigadores fueron asignados para presentar temas que emergieron de los estudios. Por ejemplo, un equipo hizo una presentación sobre corrupción y democracia, mientras que otro discutió los resultados sobre el estado de derecho. Esas presentaciones, hechas en PowerPoint, fueron después criticadas por un pequeño equipo de nuestros metodólogos más calificados, y después el grupo completo de investigadores y los miembros de USAID-democracia discutieron los resultados. Ese proceso fue repetido en un período de dos días. Fue muy emocionante ver nuestros resultados allí en “blanco y negro”, pero también fue el momento de aprender más sobre el fuerte vínculo entre datos, teoría y método. Por ejemplo, dedicamos una gran cantidad de tiempo a discutir las modalidades apropiadas para hacer comparaciones entre países cuando queríamos controlar factores macroeconómicos como PBI o crecimiento del PBI.

Después de la reunión de Costa Rica, el autor de este capítulo, en su papel de coordinador científico del proyecto, leyó y criticó cada borrador de los informes, que fueron después regresados a los equipos de los países para corrección y edición. Adicionalmente, la descripción de los diseños maestres fue refinada al incluir para cada estudio un cuadro preparado por Luis Rosero, de nuestro equipo de Costa Rica, sobre el impacto de la estratificación y conglomeración en intervalos de confianza (i.e. el “efecto del diseño”). Los informes revisados fueron corregidos una segunda vez, los ajustes apropiados fueron hechos, y después se circularon a USAID para sus comentarios. Esos comentarios fueron tomados en consideración por los equipos y la versión final para publicación fue producida, mientras que simultáneamente una versión fue traducida al inglés para la amplia audiencia internacional. Esa versión así como la base de datos están disponibles en el sitio de internet:

www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/dsd/).

Apéndice C: Diseño de la Muestra

Universo

El universo de la Encuesta es todo el territorio continental de Costa Rica.

Población

Las unidad de estudio es la población no institucional con ciudadanía costarricense y edad de 18 años o más. Esta definición excluye a los inmigrantes no naturalizados (aproximadamente 10% de la población), a los menores y a los residentes en viviendas colectivas. También se excluyen las personas con discapacidades físicas o mentales para responder el cuestionario. La población de interés fue de 2.169.000 en el censo de Junio del 2000. la población excluida por razón de discapacidad o residencia en viviendas colectivas se estima en 80.000 personas o el 4% de los con derecho a voto. Por otra parte, dada una tasa de crecimiento de 2% anual, a la fecha de la encuesta – febrero de 2004 – la población de interés se estima en 2.250.000 personas.

Unidad de Observación

La unidad estadística de observación es el hogar. Toda persona debe pertenecer a un solo hogar. En este estudio no se hace distinción entre hogares y viviendas. Todo hogar habita una vivienda. Aunque ésta puede ser compartida con otros hogares, tal situación es rara en Costa Rica. Según el censo del 2000, tan solo el 0,1% de los hogares compartía una vivienda. La vivienda es una unidad de fácil identificación en el terreno, con relativa permanencia en el tiempo, característica que la habilita para ser considerada como la unidad final de selección, identificada en la cartografía de un “segmento compacto.”

Consideraciones para el Muestreo

Para la selección de métodos de muestreo se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

- (a) Obtener muestras representativas para los siguientes estratos de estudio.

Total del país

Estratos de primera etapa:

1. Área Metropolitana de San José (AMSJ)
2. Resto del Valle Central (VC)
3. Fuera del Valle central (FVC)

Estratos de segunda etapa:

1. Área urbana
2. Área rural

- (b) Efectuar cálculos de los errores de muestreo que corresponden a estos estratos.
- (c) Facilitar la operatividad de la encuesta
- (d) Afijación óptima que permita un equilibrio razonable entre presupuesto, tamaño de la muestra y nivel de precisión de los resultados.
- (e) Utilizar el mejor y más actualizado marco de muestreo disponible.
- (f) Que la muestra sea auto-ponderada.
- (g) Tamaño muestral de 1.500 entrevistas.
- (h) Muestra conglomerada en cantones (municipios) con similar número de entrevistas por cantón.
- (i) Número deseado de entrevistas por cantón de 50, de modo que permita efectuar análisis de multi-nivel.
- (j) Conglomerados de 12 entrevistas en el área rural y 6 en el área urbana.
- (k) Muestreo por cuota dentro de cada conglomerado.

A partir de estos antecedentes, el método utilizado correspondió a un sistema de muestreo probabilístico en todas sus etapas, estratificado, multietápico, por conglomerados, con selección aleatoria de unidades en cada etapa, incluyendo la selección final del adulto a ser entrevistado dentro del hogar de muestra.

El muestreo es estratificado por regiones (AMSJ, VC y FVC) y áreas (urbana y rural) y es multietápico por cuanto parte de la selección de Unidades Primarias de Muestreo (UPM, cantones); seguido de Unidades Secundarias en cada UPM conformadas por segmentos censales estratificados en área urbana o rural; y Unidades Finales de Muestreo conformadas en conglomerados (segmentos compactos) de tamaño 6 en áreas urbanas y 12 en áreas rurales. En cada unidad de vivienda de estos conglomerados se selecciona y entrevista a uno y solo a un costarricense en edad de votar, mediante un proceso aleatorio (fecha de cumpleaños más cercana a la entrevista). Como norma de selección probabilística, no se admite sustitución ni reemplazo de las unidades seleccionadas.

La muestra considera la asignación de tamaños que aseguran la consistencia, suficiencia y eficiencia muestral para cada estrato y a nivel agregado total. La muestra es autoponderada a nivel nacional y dentro de cada estrato. En cada estrato la selección de la muestra se realiza con probabilidad proporcional al tamaño de cada dominio.

Marco Muestral

El marco de muestreo está constituido por la cartografía del censo de población y vivienda de junio del 2000. Esta cartografía identifica los segmentos censales (grupos de alrededor de 60 viviendas definidos con propósitos de enumeración) y en ellos las viviendas que los integran. En una visita preliminar a los segmentos seleccionados se efectuó una actualización cartográfica cuando se identificaron cambios importantes con respecto al mapa usado en el censo.

Los micro-datos del censo del 2000 están disponibles en el Centro Centroamericano de Población para tabulación en línea en internet (<http://censos.ccp.ucr.ac.cr>). La disponibilidad de los microdatos censales permitió establecer cuotas específicas para cada conglomerado. La cartografía censal para los 194 segmentos censales seleccionados fue proporcionada por el Instituto Nacional de

Estadística y Censos. En el mapa censal actualizado se identificaron las viviendas que debían ser visitadas por los entrevistadores (en Costa Rica no existe un sistema de direcciones manejable, por lo que no es posible entregar a los enumeradores un listado de direcciones, en su lugar se les entrega un croquis con identificación de las viviendas a visitar).

La población de interés y el número de viviendas ha aumentado en aproximadamente 7% entre la fecha del censo y la de la encuesta. Este aumento no afecta la probabilidad de selección de los cantones, pero sí puede afectar ligeramente la probabilidad de selección de segmentos censales. Parte sustancial del aumento probablemente se concentra en nuevas urbanizaciones en las que predominan familias jóvenes. Estas nuevas urbanizaciones estarían, por tanto, sub-representadas en la encuesta. Actualizar el marco con este tipo de información está, sin embargo, fuera de las posibilidades económicas de esta encuesta. Pero el sesgo de no hacerlo probablemente es negligible.

Tamaño de la Muestra

Para la determinación del tamaño de muestra se parte de los siguientes criterios: se utiliza un procedimiento de muestreo por conglomerados finales de tamaño 6 en áreas urbanas y 12 en áreas rurales. Esta última es la variable explicativa del diseño y la función de la variabilidad (Kish, 1987). El efecto diseño resultante del muestreo de conglomerados (DEF) se estimó de manera preliminar en 1.1, en promedio. (Una vez completada la encuesta se estimó este efecto -y los errores muestrales- para un selección de variables, como se indica en el Capítulo II.) El DEF mide la relación de variancias del diseño de muestreo utilizado, por conglomerados, respecto a un muestreo simple aleatorio. Este valor resultó *a posteriori* de entre 1.0 y 2.5 para una selección de 16 preguntas. El DEF tiende a ser menor conforme es menor el tamaño del conglomerado y la real variancia de la muestra estratificada.

Selección de la Muestra

En una *primera etapa* se seleccionaron las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) dentro de cada uno de los tres estratos de primer nivel, con afijación proporcional al tamaño del estrato. Las UPM son 81 cantones del país. Los cantones se seleccionaron en cada estrato con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) del cantón (población costarricense de 18 y más años de edad), de manera sistemática y con arranque aleatorio. La tabla A.1 muestra los cantones seleccionados en las tres grandes regiones. El cantón San José, que tiene una población excepcionalmente grande, cayó dos veces en la muestra. La muestra incluye, por tanto, 29 cantones o municipalidades, con 50 entrevistas cada uno, excepto el cantón San José que incluye 100 entrevistas.

En una *segunda etapa* se seleccionaron los segmentos en cada cantón, previa estratificación urbano – rural, con afijación proporcional al. La selección fue también con PPT, de manera sistemática y arranque aleatorio dentro de cada estrato-cantón. Según el censo del 2000, cada segmento tiene en promedio 125 individuos de interés. El país está dividido en 17.200 segmentos de aproximadamente 60 viviendas cada uno. El número de

segmentos a seleccionar en cada cantón-estrato se estableció tomando en cuenta el requisito de formar conglomerados de tamaño 6 en el área urbana y 12 en el área rural.

Tabla A.1. Cantones seleccionados por estrato

Área Metropolitana de SJ		Resto Valle Central		Fuera del Valle Central	
Cantón	Poblac*	Cantón	Poblac*	Cantón	Poblac*
San José&	177,832	Puriscal	17,787	Pérez Zeledón	67,296
San José&	177,832	Santa Ana	19,832	San Carlos	63,194
Escazú	28,842	Alajuela	131,247	Sarapiquí	20,043
Aserri	112,695	San Ramón	39,761	Carrillo	14,928
Desamparados	28,830	Grecia	38,024	La Cruz	6,715
Goicoechea	71,469	Poás	14,118	Puntarenas	59,226
Alajuelita	36,460	Cartago	80,742	Garabito	5,328
Tibás	45,357	Turrialba	41,098	Limón	47,620
Montes de Oca	32,101	Oreamuno	23,397	Pococí	54,199
		Heredia	62,412	Guácimo	17,999
		Belén	11,837		

* Costarricenses de 18 y más años de edad, residentes en viviendas no colectivas, datos del censo de 2000.

& San José, que tiene una población sustancialmente mayor que el resto, resultado seleccionado dos veces en la selección sistemática con arranque aleatorio y PPT

En una *tercera etapa* se dividió cada segmento en segmentos compactos, cada uno con el número deseado de viviendas (6 en el área urbana y 12 en el área rural). Se seleccionó aleatoriamente un compacto por segmento.

En total fueron 194 puntos de muestra: 71 en el AMSJ, 78 en otras áreas urbanas y 45 rurales, distribuidos en 29 cantones. La tabla A.2 muestra el número de segmentos seleccionados por estrato y compara la distribución de las entrevistas por estratos con el censo. La muestra reproduce bien la distribución de la población por estratos. El mapa 1 muestra la localización de los puntos de muestra seleccionados para la encuesta.

Tabla A.2. Distribución de la población y la muestra por estrato

Estrato	Votantes censo		Seg- mentos	Muestra	
	Núm.	%		Entre vistas	%
Área Metropolitana de SJ	594,464	27	71	450	30
Resto Central urbano	493,171	23	50	314	21
Valle Central rural	360,153	17	19	236	16
Urbano no Central	266,688	12	28	178	12
Rural no Central	455,327	21	26	322	21
Total	2,169,803	100	194	1,500	100

Selección de Individuos por Cuota

Para cada uno de los 194 segmentos censales seleccionados en la muestra, se determinaron individualmente cuotas de entrevistas a completar. Las cuotas se establecieron para cuatro grupos o estratos dentro de cada segmento, a saber:

- hombres de 18-29 años de edad;
- hombres de 30 y más años de edad;
- mujeres amas de casa (incluye pensionadas y desempleadas); y
- mujeres que trabajan o estudian al menos medio tiempo.

Estos cuatro estratos identifican grupos que la experiencia ha mostrado tienen diferente probabilidad de estar disponibles para la entrevista (Sudman, 1966).

Las cuotas en cada segmento se determinaron por sorteo probabilístico de tipo Monte Carlo, con probabilidades proporcionales a la cantidad de individuos en cada estrato en el segmento. Por ejemplo, en un segmento del área rural fuera del valle central en el que debían completarse 12 entrevistas, la distribución de los 145 votantes del censo era 22%, 33%, 41% y 4% para los cuatro grupos; y las cuotas sorteadas resultaron: 2, 3, 7 y 0. Esta manera de asignar las cuotas asegura que no se le pedirá al entrevistador imposibles, como entrevistar un número grande de mujeres que trabajan en donde este tipo de población es rara. Aunque por azar las cuotas no reproducen con exactitud la distribución poblacional de un segmento específico, para el conjunto de toda la muestra de 194 segmentos las cuotas reflejan bien la distribución poblacional (Tabla A.3).

Tabla A.3. Distribución poblacional y muestral según los grupos de cuota

Grupos de cuota	Censo 2000		Muestra	
	Núm.	%	Núm	%
Hombres				
18-29 años	352,243	16%	225	15%
30 y más años	709,000	33%	538	36%
Mujeres 18 y más				
Amas de casa	716,462	33%	446	30%
Trabajan/estudian	382,903	18%	291	19%
Total	2,160,608	100%	1,500	100%

La localización geográfica de los segmentos seleccionados se muestra en el mapa 1.

Para evitar sesgos en la integración de las cuotas en el campo y reducir la homogeneidad del conglomerado se adoptaron tres medidas adicionales:

- El entrevistador recibió un listado de las viviendas a visitar en cada segmento.
- El horario para visitar las viviendas en las zonas urbanas fue de 3 a 8 PM y fines de semana.
- Las viviendas a visitar no fueron contiguas.

Niveles de Confianza y Márgenes de Error

Por tratarse de un diseño complejo, no fue posible determinar *a priori* el error muestral. Este se determinó, para variables seleccionadas, *a posteriori* con los resultados de la muestra (Capítulo II). Para la preparación de la muestra se consideró que en encuestas demográficas con diseños similares, el efecto de diseño (DEF) es del orden de 1,1. Asumiendo un DEF de esta magnitud y con las conocidas fórmulas de muestreo irrestricto aleatorio, la tabla A.4 muestra el error muestral para proporciones de 0.50 (en cualquier otra proporción el error muestral es menor). El error máximo supuesto para porcentajes en la muestra nacional es de 2.8 puntos porcentuales con 95% de confianza. Cuando la muestra se desagrega por estratos, este error puede llegar a 8 puntos porcentuales en el estrato más pequeño (urbano no central).

Tabla A.4. Estimación *a priori* de errores muestrales

Estrato	N	MSA	MPC
Área Metropolitana de SJ	450	0.046	0.051
Resto Central urbano	314	0.055	0.061
Valle Central rural	236	0.064	0.070
Urbano no Central	178	0.073	0.081
Rural no Central	322	0.055	0.060
Total	1500	0.025	0.028

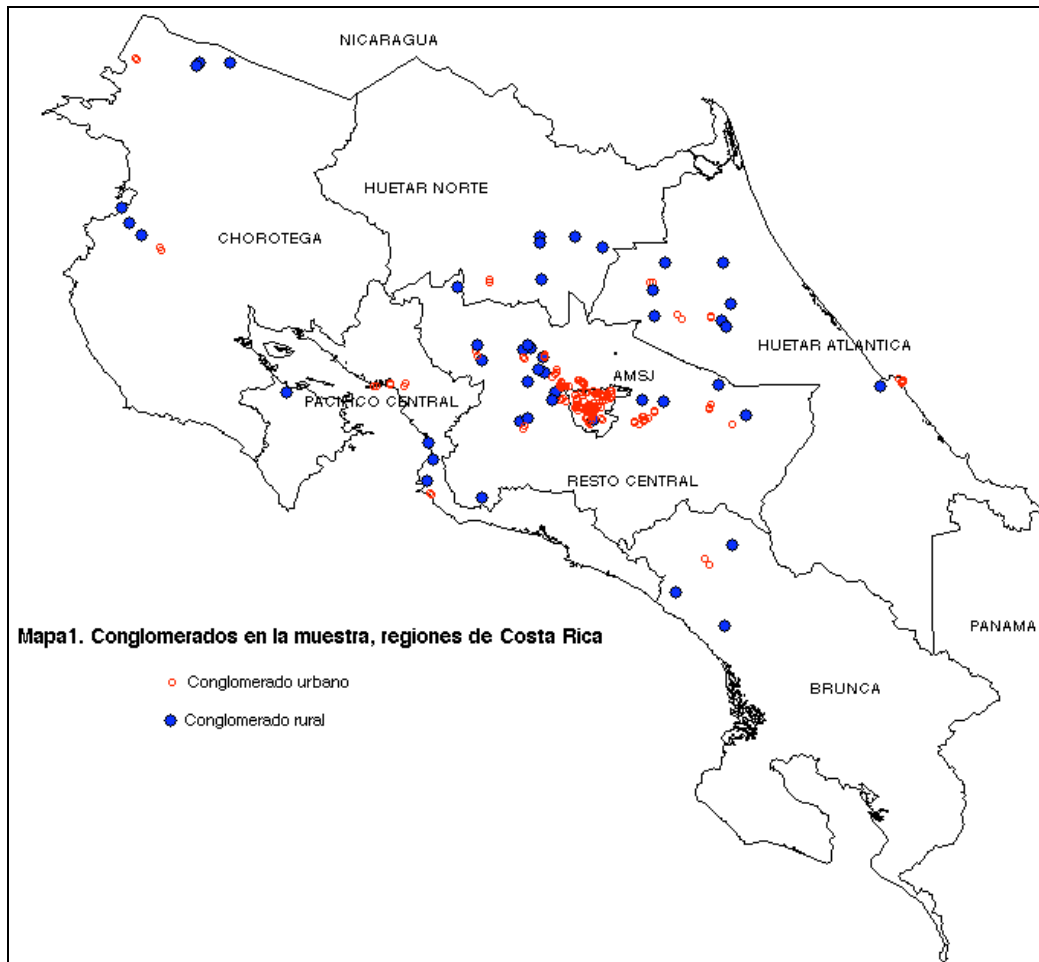
Ajuste por no Cobertura y no Elegibilidad

Para asegurar la eficiencia, suficiencia y precisión de la muestra se adoptó un sistema de muestreo con "Ajuste por no cobertura," el cual garantiza la ejecución de la muestra con los tamaños estimados como mínimos dentro de los niveles de confianza y de error máximo permisible. El sistema asegura la eliminación de sesgos resultantes de sustitución de unidades que no pueden ser objeto de entrevista. Este sistema garantiza la calidad de la información. El método requiere algún conocimiento de la "no cobertura" de estudios similares y probable proporción de unidades elegibles en cada conglomerado. El sistema consiste en aplicar a los tamaños de muestra (n) estimados para cada UFM un factor de no cobertura (t) y otro factor de no elegibilidad (e), con lo cual se calcula el tamaño operativo final de selección (n*), dado por:

$$n^* = (1 + t)(1 + e)n$$

- t = Razón de no entrevista. Esta tasa considera situaciones de no cobertura (no entrevista, rechazos, ausencia del adulto, o imposibilidad de entrevistarlo después de la tercera visita, entre otros posibles eventos). Según la experiencias de otras encuestas, la tasa (t) es diversa por estrato y nivel socio económico del hogar. La tasa t promedio para la muestra nacional se estimó en 0.20, lo que significa que los entrevistadores recibieron listados con un número de viviendas 20% más grande en promedio.
- e = Razón de no elegibles para la entrevista debido a discapacidad o a que no son ciudadanos. La discapacidad se asumió proporcional al número de adultos mayores de 75 años de edad en el segmento censal, con un promedio nacional de 3%. La proporción de extranjeros varía enormemente entre segmentos, de 0% a 49% en los 194 segmentos seleccionados, para un promedio nacional de 8%. En un segmento donde alrededor de la mitad de la población es extranjera, debieron seleccionarse el doble de viviendas.

Gráfica A.1. Mapa de conglomerados en la muestra, regiones de Costa Rica



Apéndice D: Cuestionario

Apéndice D. Cuestionario



UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

AUDITORIA DE LA DEMOCRACIA: Centroamérica y México, 2004

Entrevistador: Lea y entregue la nota de consentimiento informado

País: 1. México 2. Guatemala 3. El Salvador 4. Honduras 5. Nicaragua 6. Costa Rica 7. Panamá 8. Colombia	<input type="text"/>	PAIS	
Número de entrevista [asignado en la oficina no en campo]	<input type="text"/>	CRIDNUM	
Provincia:	<input type="text"/>	CRPROV	
Cantón:	<input type="text"/>	CRCANT	
Distrito:	<input type="text"/>	CRDIST	
Segmento:	<input type="text"/>	CRSEG	
Compacto:	<input type="text"/>	CRCOM	
Estrato: 1. AMSJ 2. Urbano - Bajura 3. Urbano - Central 4. Rural – Bajura 5. Rural – Central	<input type="text"/>	CRESTR	
Zona: 1. Urbano 2. Rural	<input type="text"/>	CRUR	

Hora de inicio: _____ : _____

Q1. ANOTE: Sexo: (1) Hombre (2) Mujer	Q1
CRA4. Para empezar, en su opinión ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER ALTERNATIVAS]	CRA4
(01) Problemas económicos (02) Inflación, altos precios (03) Desempleo (04) Pobreza (05) Delincuencia, crimen, violencia (06) Protestas populares (huelgas, cierre carreteras, paro, etc.) (07) Falta de tierra para cultivar (08) No sabe (09) Falta de crédito (10) Problemas del medio ambiente (11) Drogadicción (12) Narcotráfico (13) Corrupción (14) Pandillas (15) Mal gobierno (16) Migración (17) La guerra contra terrorismo	
Anotar si no existe código:	

Con qué frecuencia ...	Todos los días	Una o dos veces por semana	Rara vez	Nunca	NS	
A1. Escucha noticias por la radio	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	A1
A2. Mira noticias en la TV.	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	A2
A3. Lee noticias en los periódicos	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	A3

SOCT1. ¿Cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? (1) Muy buena (2) Buena (3) Ni buena, ni mala (4) Mala (5) Muy mala (8) No sabe	SOCT1
SOCT3. ¿Cree Ud. que en los próximos doce meses la situación económica del país será mejor, igual o peor que la de ahora? (1) Mejor (2) Igual (3) Peor (8) No sabe	SOCT3

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su comunidad y los problemas que afronta...	CP5
CP5. ¿En el último año usted ha contribuido o ha tratado de contribuir para la solución de algún problema de su comunidad o de los vecinos de su barrio? (1) Sí [Seguir con CP5A] (2) No [Pasar a CP6] (8) NS [Pasar a CP6]	
CP5A. ¿Ha donado dinero o materiales para ayudar a solucionar algún problema de la comunidad o de su barrio?	(1) Sí (2) No (8) NS CP5A
CP5B. ¿Ha contribuido con su propio trabajo o mano de obra?	(1) Sí (2) No (8) NS CP5B
CP5C. ¿Ha estado asistiendo a reuniones comunitarias sobre algún problema o sobre alguna mejora?	(1) Sí (2) No (8) NS CP5C
CP5D. ¿Ha tratado de ayudar a organizar algún grupo nuevo para resolver algún problema del barrio, o para buscar alguna mejora?	(1) Sí (2) No (8) NS CP5D
CP5E. ¿Ha tratado de ayudar a organizar algún grupo para combatir la delincuencia en su barrio?	(1) Sí (2) No (8) NS CP5E

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste a reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca

	Una vez a la semana	Una o dos veces al mes	Una o dos veces al año	Nunca	NS	INAP	
CP6. ¿Reuniones de alguna organización religiosa? ¿Asiste...	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)		CP6
CP7. ¿Reuniones de una asociación de padres de familia de la escuela o colegio? ¿Asiste...	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	CP7
CP8. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad? ¿Asiste...	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)		CP8

CP9. ¿Reuniones de una asociación de profesionales, comerciantes o productores?	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	CP9
CP13. ¿Reuniones de un partido político?	(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	CP13

PROT1. ¿Ha participado Ud. en una manifestación o protesta pública? Lo ha hecho algunas veces, casi nunca o nunca?	(1) algunas veces	(2) casi nunca	(3) nunca	(8) NS	PROT1
---	-------------------------	----------------------	--------------	-----------	--------------

Ahora, para hablar de otra cosa, a veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolver por sí mismos y para poder resolverlos piden ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno.

¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido Ud. ayuda o cooperación ... ?	Sí	No	NS/NR	
CP2. A algún diputado de la Asamblea Legislativa	(1)	(2)	(8)	CP2
CP4. A algún ministerio, institución pública u oficina del gobierno nacional	(1)	(2)	(8)	CP4
CP4A. A alguna autoridad local (alcalde, municipalidad)	(1)	(2)	(8)	CP4A

LS3. Hablando de otras cosas. En general ¿hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida? ¿Diría que se encuentra ..?	LS3
(1) Muy satisfecho (2) Algo satisfecho (3) Algo insatisfecho (4) Muy insatisfecho (8) NS	

IT1. Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es ..?	IT1
(1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable (8) NS	
IT2. ¿Cree que la mayoría de las veces la gente se preocupa sólo de sí misma, o cree que la mayoría de las veces la gente trata de ayudar al prójimo?	IT2
(1) Se preocupa de sí misma (2) Trata de ayudar al prójimo (8) NS	
IT3. ¿Cree que la mayoría de la gente, si se les presentara la oportunidad, tratarían de aprovecharse de Usted, o cree que no se aprovecharían de Usted?	IT3
(1) Sí, se aprovecharían (2) No se aprovecharían (8) NS	

CRIT3 Y, hablando de las costumbres de su barrio, dígame por favor si en este barrio se acostumbra que los adultos vigilen que los niños estén seguros y no se estén metiendo en problemas (LEER OPCIONES):	CRIT3
(1) Siempre se acostumbra (2) a veces (3) rara vez (4) Nunca (8) NS/NR	
CRIT4 ¿Se acostumbra en este barrio que cuando un vecino deja la casa sola, otros la cuidan? (LEER OPCIONES)	CRIT4
(1) Siempre se acostumbra (2) a veces (3) rara vez (4) Nunca (8) NS/NR	
CRIT5 ¿Se acostumbra que entre los vecinos se hagan favores: por ejemplo, se regalan comida, se prestan herramientas? (LEER OPCIONES)	CRIT5
(1) Siempre se acostumbra (2) a veces (3) rara vez (4) Nunca (8) NS/NR	
CRIT6 ¿Podría decirme si en este barrio hay o no personas que niños y jóvenes pueden admirar por destacar en el deporte? ¿Sí o no?	CRIT6
(1) Sí (2) No (8) NS/NR	
CRIT7 ¿Y por ser gente muy trabajadora?	CRIT7
¿Sí o no? (1) Sí (2) No (8) NS/NR	
CRIT8 ¿Y hay personas que puedan admirar por ser muy cooperadoras a la hora de resolver los problemas del barrio?	CRIT8
¿Sí o no? (1) Sí (2) No (8) NS/NR	

Ahora vamos a hablar de su comunidad...

<p>CRMU1 En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que tiene esta comunidad en la actualidad? (NO LEER LAS RESPUESTAS) (ACEPTAR UNA SOLA RESPUESTA; SONDEAR, SI MENCIONA MÁS DE UNA: “LO MÁS IMPORTANTE” (00) Ninguna (PASE A CRMU3) (01) Falta de agua (02) Huecos, mal estado calles o caminos (03) Falta de trabajo, desempleo (04) Mucha pobreza (05) Falta de seguridad, delincuencia, robos, asaltos (06) Contaminación del agua (07) Fallas en la recolección de basura (08) Falta de vivienda (09) Falta de aseo público (10) Seguridad ambiental (11) Drogas, drogadicción (12) Narcotráfico (13) Mal servicio, problemas con el servicio de buses (14) Alcantarillado, aguas sucias derramadas (88) NS/NR (PASE A CRMU3) Otros (ESPECIFIQUE)</p>	<p>CRMU1</p>
<p>CRMU2 ¿Cuánto ha hecho la municipalidad por resolver ese problema? (1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS/NR</p>	<p>CRMU2</p>
<p>EFF3. ¿Cree que Ud. pueda ayudar a solucionar este problema? (1) Sí [sigue con EFF5] (2) No [pasar a EFF6] (8) No sabe [pasar a EFF6] (9) Inap (no mencionó problemas)</p>	<p>EFF3</p>
<p>EFF5. ¿Ha hecho algún esfuerzo alguna vez solo o en grupo para resolver este problema? (1) Sí (2) No (8) NS (9) Inap (no mencionó problemas)</p>	<p>EFF5</p>
<p>EFF6. [Preguntar a todos] ¿Qué tan probable cree Ud. que el esfuerzo del pueblo pueda servir para resolver los problemas de esta comunidad? ¿Diría que hay mucha probabilidad de resolverlo, alguna probabilidad, poca probabilidad o casi ninguna probabilidad? (1) Mucha (2) alguna (3) poca (4) casi ninguna (8) NS</p>	<p>EFF6</p>
<p>CRMU3. Hablando más en general, en su opinión, ¿Entre el gobierno, los diputados, o la municipalidad quién responde mejor a la hora de ayudar a resolver los problemas de su comunidad o barrio? ¿El gobierno nacional? ¿Los diputados? O ¿La municipalidad? (1) El gobierno nacional (2) Los diputados (3) La municipalidad (4) [NO LEER] Ninguno (5) [NO LEER] Todos igual (8) No sabe / no contesta</p>	<p>CRMU3</p>
<p>CRMU4. En su opinión ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero a esta municipalidad, o se debe dejar que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales? (1) Más a la municipalidad (2) Que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales (3) [NO LEER] No cambiar nada (4) [NO LEER] Más a la municipalidad si da mejores servicios (8) NS / NR</p>	<p>CRMU4</p>
<p>NP1. ¿Ha asistido a alguna reunion convocada por el alcalde durante los últimos 12 meses? (1) Sí (2) No (8) No sabe/ no recuerda</p>	<p>NP1</p>
<p>NP1B. ¿Hasta que punto cree Ud. que los funcionarios de la municipalidad le hacen caso a lo que pide la gente en estas reuniones? Le hacen caso (1) mucho (2) algo (3) poco (4) nada (8) NS</p>	<p>NP1B</p>
<p>NP1C. Si Ud. tuviera una queja sobre algún problema local, y lo llevara a algún miembro del concejo municipal, ¿Que tanto cree Ud. que le haría caso? (1) Mucho (2) algo (3) poco o (4) nada? (8) NS</p>	<p>NP1C</p>
<p>NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal o síndico de la municipalidad durante los últimos 12 meses? (1) Sí (2) No (8) No sabe/ no recuerda</p>	<p>NP2</p>
<p>SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son...? (1) Muy Buenos (2) Buenos (3) Ni buenos, ni malos (4) Malos (5) Muy Malos (8) No sabe</p>	<p>SGL1</p>
<p>MUNI6. ¿Qué grado de confianza tiene Usted en el manejo de los fondos por parte de su municipalidad? (3) Mucha confianza (2) Algo de confianza (1) Poca confianza (0) Ninguna confianza (8) NS/NR</p>	<p>MUNI6</p>

CRMURC1 Hoy en día es frecuente escuchar en distintos medios a personas hablar sobre rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos. Para usted, ¿Qué significa rendir cuentas? ANOTAR RESPUESTA _____ 98. NS (Pase a JC1)	CRMURC1
CRMURC2 Y, de acuerdo con ese significado que tiene para usted, ¿Diría que su municipalidad rinde cuentas al pueblo, siempre, casi siempre, casi nunca o nunca? 1. Siempre 2. Casi siempre 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS/NR	CRMURC2
CRMURC3 Y, en comparación con las instituciones del gobierno y la Asamblea Legislativa, ¿Diría que su municipalidad acostumbra rendir cuentas al pueblo más que esas otras instituciones? 1. Más la municipalidad 2. Más las instituciones del gobierno (NO LEER) 3. Las dos rinden cuentas más o menos igual 4. Ninguna de las dos rinden cuentas 8. NS/NR	CRMURC3

Ahora hablemos de otros temas. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que hubiera un golpe de estado. En su opinión bajo qué situaciones se justificaría que hubiera un golpe de estado.

JC1. Frente al Desempleo muy alto	(1) Se justificaría	(2) No se justificaría	(8) NS	JC1
JC4. Frente a muchas protestas sociales	(1) Se justificaría	(2) No se justificaría	(8) NS	JC4
JC10. Frente a mucha delincuencia	(1) Se justificaría	(2) No se justificaría	(8) NS	JC10
JC12. Frente a la alta inflación, con aumento excesivo de precios	(1) Se justificaría	(2) No se justificaría	(8) NS	JC12
JC13. Frente a mucha corrupción	(1) Se justificaría	(2) No se justificaría	(8) NS	JC13
JC1A. En resumen, ¿Cree Ud. que alguna vez puede haber razón suficiente para un golpe de estado o cree que nunca hay suficiente razón para eso?	(1) Si podría haber	(2) Nunca habría razón	(8)NS	JC1A

VIC1. ¿Ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? (1) Sí [sigá] (2) No [Pasar a CRSE1] (8) NS	VIC1
VIC2. ¿Qué tipo de acto delincencial sufrió? [No lea las alternativas] (1) Robo sin agresión o amenaza física (2) Robo con agresión o amenaza física (3) Agresión física sin robo (4) Violación o asalto sexual (5) Secuestro (6) Daño a la propiedad (7) Robo de la casa Otro (especifique) _____ (99) Inap (no vic.)	VIC2
AOJ1. [Si responde "Sí" a VIC1] ¿Denunció el hecho a alguna institución? (1) Sí [sigá] (2) No lo denunció [Pasar a AOJ1B] (8) NS/NR (9) Inap (no víctima)	AOJ1
AOJ1A. ¿A quién o a qué institución denunció el hecho? [marcar una sola alternativa y pase a CRSE1] (1) OIJ (2) Policía (3) Juzgados (6) Prensa Otro: _____ (8)NS (9) Inap (no víctima)	AOJ1A
AOJ1B. ¿Por qué no denunció el hecho? [no leer alternativas] (1) No sirve de nada (2) Es peligroso y por miedo de represalias (3) No tenía pruebas (4) No fue grave (5) No sabe adónde denunciar (8) NS (9) No víctima	AOJ1B

	Si	No	NS/NR	
CRSE1 En los últimos años, ¿cuáles de las siguientes medidas de protección se han tomado en su familia? No dejar nunca la casa sola	1	2	8	CRSE1
CRSE2 Dejar de ir a actividades sociales por temor	1	2	8	CRSE2
CRSE3 Mejorar la seguridad de la casa, por ejemplo, mediante la compra de alarmas, alambre navaja	1	2	8	CRSE3
CRSE4 Adquirir, comprada o prestada un arma de fuego	1	2	8	CRSE4
CRSE5 Pagar servicio de seguridad privada permanente para la casa, cuadra o el barrio (guarda o empresa)?	1	2	8	CRSE5

De los tramites que Ud. ha hecho con las siguientes entidades. ¿Se siente muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho? **(REPETIR LAS OPCIONES DE RESPUESTA EN CADA PREGUNTA)**

	MUY SATISFECHO	ALGO SATISFECHO	ALGO INSATISFECHO	MUY INSATISFECHO	NO HIZO TRAMITES	NS/NR	
ST1. La policía	1	2	3	4	9	8	ST1
ST2. Los juzgados o tribunales de justicia	1	2	3	4	9	8	ST2
ST3. El OIJ	1	2	3	4	9	8	ST3
ST4. La municipalidad	1	2	3	4	9	8	ST4

AOJ8. Para poder capturar delincuentes, ¿Cree usted que: las autoridades siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley? (1) Deben respetar las leyes siempre (2) En ocasiones pueden actuar al margen (8) NS	AOJ8
AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿Se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro? (1) Muy seguro (2) algo seguro (3) Algo inseguro (4) Muy Inseguro (8) NS	AOJ11
AOJ11A. Y hablando del país en general, ¿Qué tanto cree Ud. que el nivel de delincuencia que tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro futuro? (1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS/NR	AOJ11A
AOJ12. Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial castigaría al culpable? (1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS/NR	AOJ12
AOJ17. ¿Hasta que punto diría que su barrio esta afectado por pandillas? ¿Diría mucho, algo, poco o nada? (1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada (8) NS	AOJ17
CRAOJ20 ¿Con que frecuencia Usted evita pasar por algunas zonas del vecindario por considerarlas peligrosas? ¿Siempre, a veces, rara vez o nunca? (NO LEER) 0. En el barrio no hay zonas peligrosas (1) Siempre (2) a veces (3) rara vez (4) nunca (8) NS/NR	CRAOJ20

[Déle la tarjeta "A" al entrevistado]

Ahora vamos a usar una tarjeta... Esta tarjeta contiene una escala de 7 puntos; cada uno indica un puntaje que va de 1- que significa NADA hasta 7- que significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto confía en las noticias que da a conocer la televisión, si usted no confía nada escogería el puntaje 1, y si, por el contrario, confía mucho, escogería el puntaje 7. Si su opinión está entre nada y mucho elija un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué punto confía en las noticias que da a conocer la televisión? Léame el número. **[Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].**

1	2	3	4	5	6	7	8
Nada						Mucho	No sabe

Ahora, usando la tarjeta "A", por favor conteste estas preguntas.

	Anotar 1-7, 8 = NS	
B1. ¿Hasta qué punto cree que los tribunales de justicia de Costa Rica garantizan un juicio justo? <i>Si cree que los tribunales no garantizan en <u>nada</u> la justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan <u>mucho</u> la justicia escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio.</i>	B1	
B2. ¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Costa Rica?	B2	
B3. ¿Hasta qué punto cree que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político costarricense?	B3	
B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político costarricense?	B4	
B6. ¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político costarricense?	B6	
B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?	B10A	
B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones?	B11	
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Asamblea Legislativa?	B13	
B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Nacional?	B14	
B17. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Defensoría de los Habitantes?	B17	
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Policía?	B18	
B19. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Contraloría General de la República?	B19	
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica?	B20	
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos?	B21	
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?	B31	
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?	B32	
CRB1 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad?	CRB1	
CRB2 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Caja Costarricense del Seguro Social?	CRB2	
CRB3 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el INS, el Instituto Nacional de Seguros?	CRB3	
B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación?	B37	
B43. ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser costarricense?	B43	
B47. ¿Hasta que punto tiene usted confianza en las elecciones?	B47	
B48. ¿Hasta que punto cree usted que los tratados de libre comercio ayudarán a mejorar la economía?	B48	

[NO RECOJER TARJETA "A"]

1	2	3	4	5	6	7	8
Nada						Mucho	No sabe

Ahora, en esta misma escala, hasta que punto diría que el Gobierno actual, o sea el gobierno del Presidente Pacheco (seguir con tarjeta A: escala de 1 a 7 puntos)	Anotar 1-7, 8 = NS		
N1. Combate la pobreza.		N1	
N3. Promueve y protege los principios democráticos.		N3	
N9. Combate la corrupción en el Gobierno.		N9	

[Recoja tarjeta "A"]

[Entréguele al entrevistado tarjeta "B"]

Ahora, vamos a usar una tarjeta similar, pero el punto 1 representa "muy en desacuerdo" y el punto 7 representa "muy de acuerdo." Yo le voy a leer varias afirmaciones y quisiera que me diga hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo con esas afirmaciones.

1	2	3	4	5	6	7	8
Muy en desacuerdo						Muy de acuerdo	No sabe

	Anotar 1-7, NS=8		
ING4. Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier forma de Gobierno. ¿Hasta qué punto esta de acuerdo o en desacuerdo?		ING4	
PN2. A pesar de nuestras diferencias, los costarricenses tenemos muchas cosas y valores que nos unen como país. ¿Hasta que punto esta de acuerdo o en desacuerdo?		PN2	

Ahora, siempre usando la tarjeta B, quiero que me dé su opinión sobre las acciones del Presidente cuando el país tiene serias dificultades. Dígame, si el país tiene serias dificultades, hasta qué punto estaría Ud. de acuerdo con que el Presidente (LEER) (USE LA TARJETA POR FAVOR)

	Anotar 1-7, NS=8		
CRDE01 Ponga orden por la fuerza ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE01	
CRDE02 Controle los medios de comunicación ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE02	
CRDE03 Pase por encima de ciertas leyes ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE03	
CRDE04 Deje de lado a la Asamblea Legislativa ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE04	
CRDE05 No tome en cuenta a los partidos políticos ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE05	

Siempre con la misma tarjeta, quisiera que me dijera hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que:

	Anotar 1-7, NS=8		
CRDE06 Un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE06	
CRDE07 La democracia permite que se solucionen los problemas del país ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE07	
CRDE08 Puede haber democracia sin Asamblea Legislativa ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE08	
CRDE09 Puede haber democracia sin que existan partidos políticos ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo?		CRDE09	
CRCO1 Finalmente, y en relación con otro tema, dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: No me importaría que un Presidente se aproveche de su puesto con tal de que resuelva los problemas del país		CRCO1	

[RECOGER TARJETA B]

[Entréguele al entrevistado tarjeta "C"]

Ahora le voy a entregar otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escala de 10 puntos, que van de 1 a 10, con el 1 indicando que **desaprueba firmemente** y el 10 indicando que **aprueba firmemente**. Voy a leerle una lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para llevar a cabo sus metas y objetivos políticos. Quisiera que me dijera con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las siguientes acciones.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(88)
Desaprueba firmemente							Aprueba firmemente			No sabe

	Anotar 1-10, 88 NS		
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley.	E5		
E8. Que las personas participen en un grupo para tratar de resolver los problemas de las comunidades.	E8		
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o candidato.	E11		
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras.	E15		
E14. Que las personas invadan propiedades o terrenos privados.	E14		
E2. Que las personas tomen fábricas, oficinas y otros edificios.	E2		
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un gobierno elegido.	E3		
E16. Que las personas hagan justicia por su propia mano cuando el Estado no castiga a los criminales	E16		

[No recoja tarjeta "C"]

Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Seguimos usando una escala de uno a diez. Favor de ver la tarjeta C. En esta escala, 1 significa que desaprueba firmemente, y 10 significa que aprueba firmemente.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(88)
Desaprueba firmemente							Aprueba firmemente			No sabe

	Anotar 1-10,88= NS		
D37. ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba que el gobierno censure a los medios de comunicación que lo critican?	D37		

Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven en Costa Rica. Use siempre la escala de 10 puntos **[sigue tarjeta C]**.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(88)
Desaprueba firmemente							Aprueba firmemente			No sabe

	Anotar 1-10, NS=88		
D1. Hay personas que siempre hablan mal del sistema de gobierno de Costa Rica. En general, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala: [Sondee: ¿Hasta que punto?]	D1		
D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor léame el número.	D2		
D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos ?	D3		
D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas salgan en la televisión para dar un discurso ?	D4		

D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales , ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos ?	D5
---	-----------

[Recoja tarjeta "C"]

Usted cree que ahora en el país tenemos:	(1) Muy poca	(2) Suficiente	(3) Demasiada...		
LIB1. Libertad de prensa	(1) Muy poca	(2) Suficiente	(3) Demasiada	(8) NS	LIB1
LIB2. Libertad de opinión	(1) Muy poca	(2) Suficiente	(3) Demasiada	(8) NS	LIB2
LIB3. Participación política	(1) Muy poca	(2) Suficiente	(3) Demasiada	(8) NS	LIB3
LIB4. Protección a derechos humanos	(1) Muy poco	(2) Suficiente	(3) Demasiado	(8) NS	LIB4

ENTREGUE TARJETA C-1.

En esta tarjeta aparecen tres afirmaciones. Las vamos a leer y luego quiero que Ud. me diga el número de la opción que más se ajusta a su forma de pensar.
(ENTREGAR TARJETA, LEER PAUSADAMENTE LAS OPCIONES, ESPERE LA RESPUESTA DEL ENREVISTADO Y LUEGO MARQUE EL CODIGO DEBIDO, SI DUDA LEER DE NUEVO)

ACR1. Ahora le voy a leer tres frases. Por favor dígame cual de las tres describe mejor su opinión: (1) La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente cambiada por medios revolucionarios, o... (2) Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas, o... (3) Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios. (8) NS	ACR1
--	-------------

PN4. En general, ¿diría que está satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en Costa Rica? (1) muy satisfecho (2) satisfecho (3) insatisfecho (4) muy insatisfecho (8) NS/NR	PN4
PN5. En su opinión Costa Rica es ¿muy democrático, algo democrático, poco democrático, o nada democrático? (1) muy democrático (2) algo democrático (3) poco democrático (4) nada democrático (8) NS	PN5
PN6. Basado en su experiencia en los últimos años, Costa Rica se ha vuelto mas democrática, igual de democrática o menos democrática? (1) muy democrática (2) igual de democrática (3) menos democrática (8) NS/NR	PN6

ENTREGUE TARJETA C-2.

En esta tarjeta aparecen tres afirmaciones. Las vamos a leer y luego quiero que Ud. me diga el número de la opción que más se ajusta a su forma de pensar.
(ENTREGAR TARJETA, LEER PAUSADAMENTE LAS OPCIONES, ESPERE LA RESPUESTA DEL ENREVISTADO Y LUEGO MARQUE EL CODIGO DEBIDO, SI DUDA LEER DE NUEVO)

DEM2. Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo: (1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. (2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. (3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. (8) NS/NR	DEM2
DEM6. Ahora le voy a leer un par de frases sobre la democracia. Por favor, dígame con cual está más de acuerdo: (1) En general, y a pesar de algunos problemas, la democracia es la mejor forma de gobierno (2) Hay otras formas de gobierno que pueden ser tan buenas o mejores que la democracia (8) No sabe	DEM6

<p>CRDE10 Si usted tuviera que escoger entre la democracia y el desarrollo económico, Ud. diría que (LEER OPCIONES)</p> <p>(1) El desarrollo económico es lo más importante (2) La democracia es lo más importante (NO LEER) (3) Ambas son igualmente importantes. (8). NS/NR</p>	CRDE10
--	---------------

ENTREGUE TARJETA D

<p>CRDE11 En esta tarjeta aparecen cuatro afirmaciones. Las vamos a leer y luego quiero que Ud. me diga el número de la opción que más se ajusta a su forma de pensar. (ENTREGAR TARJETA, LEER PAUSADAMENTE LAS OPCIONES, ESPERE LA RESPUESTA DEL ENREVISTADO Y LUEGO MARQUE EL CODIGO DEBIDO, SI DUDA LEER DE NUEVO)</p> <p>1. La democracia es indispensable para llegar a ser un país desarrollado 2. No es indispensable pero es el mejor medio para llegar a ser un país desarrollado, 3. En realidad, pueden haber mejores medios que la democracia para llegar a ser un país desarrollado 4. Creo que un sistema de gobierno no democrático es indispensable para llegar a ser un país desarrollado</p>	CRDE11
---	---------------

RECOJA LA TARJETA D

<p>AUT1. Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto. Otros dicen que aunque las cosas no funcionen bien, la democracia electoral, o sea el voto popular, es siempre lo mejor. ¿Qué piensa?</p> <p>(1) Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido (2) La democracia electoral es lo mejor (8) NS/NR</p>	AUT1
--	-------------

<p>PP1. Ahora para cambiar el tema... Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otras personas para que vote por algún partido o candidato. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que vote por un partido o candidato? [lea las alternativas]</p> <p>(1) Frecuentemente (2) De vez en cuando (3) Rara vez (4) Nunca (8) NS/NR</p>	PP1
---	------------

<p>PP2. Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las campañas electorales. ¿Trabajó para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales de 2002?</p> <p>(1) Sí trabajó (2) No trabajó (8) NS/NR</p>	PP2
---	------------

<p>ABS5. ¿Cree que el voto puede mejorar las cosas en el futuro o cree que como quiera que vote, las cosas no van a mejorar?</p> <p>(1) El voto puede cambiar las cosas (2) Las cosas no van a mejorar (8) NS/NR</p>	ABS5
---	-------------

<p>M1. Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que está realizando el Presidente Pacheco es:</p> <p>(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (4) Malo (5) Muy malo (8) NS/NR</p>	M1
--	-----------

<p>En la vida diaria, pasan muchas cosas. Me gustaría que me diga su opinión en los siguientes casos:</p>	
<p>CRC1 Supongamos que hay muchos atrasos y trámites excesivos en una oficina pública y una persona paga una propina o da un regalo a un funcionario para que salga rápido el asunto que necesita. CRC1A Hablando de la persona que paga la propina. Usted diría que esa persona (LEER OPCIONES)</p> <p>1. No actúa mal, simplemente resuelve su problema 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada</p>	CRC1A
<p>CRC1B. Y pensando ahora en el funcionario que recibió la propina. Ud diría que el funcionario:</p> <p>1. No actúa mal, ayuda a resolver un problema 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado</p>	CRC1B

<p>CRC2 Una persona paga un poco menos impuestos de lo que debía pero es descubierto por un funcionario de Tributación Directa. Para evitar un fuerte castigo, le da una propina. CRC2A Hablando de la persona que paga la propina. Usted diría que esa persona (LEER OPCIONES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No actúa mal, simplemente resuelve su problema 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada 	CRC2A
<p>CRC2B. Y pensando ahora en el funcionario que recibió la propina. Ud diría que el funcionario (LEER OPCIONES):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No actúa mal, evita un castigo excesivo 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado 	CRC2B
<p>CRC3 La empresa que construyó bien y a tiempo una carretera que el país necesitaba urgentemente, infló el costo para pagar a un ministro porque si no, no le daban el contrato CRC3A Hablando de la empresa que pagó al ministro. Usted diría que esa empresa (LEER OPCIONES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No actúa mal, simplemente resuelve un problema nacional 2. Actúa mal, pero se justifica 3. Actúa mal y debiera ser castigada 	CRC3A
<p>CRC3B. Y pensando ahora en el ministro que recibió el dinero. Ud diría que el funcionario (LEER OPCIONES):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No actúa mal, ayuda a resolver un problema nacional 2. Actúa mal, pero no es falta grave 3. Actúa mal y debiera ser castigado 	CRC3B

<i>Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...</i>	No	Sí	NS	INAP	
EXC1. ¿Ha sido acusado durante el último año por un agente de policía por una infracción que no cometió?	(0)	(1)	(8)		EXC1
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en el último año?	(0)	(1)	(8)		EXC2
EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida en el último año?	(0)	(1)	(8)		EXC6
EXC11. ¿Ha tramitado algo en la municipalidad en el último año? [Si dice no marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]	(0)	(1)	(8)	(9)	EXC11
Para tramitar algo en la municipalidad (como un permiso, por ejemplo) durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?					
EXC13. ¿UD. trabaja? [Si dice no marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]	(0)	(1)	(8)	(9)	EXC13
En su trabajo, ¿le han solicitado algún pago no correcto en el último año?					
EXC14. ¿En el último año, hizo algún trámite con los juzgados, incluyendo juicios de tránsito? [Si dice “no,” marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]	(0)	(1)	(8)	(9)	EXC14
¿Tuvo que pagar una mordida en los juzgados en el último año?					
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice “no,” marcar 9, si dice “sí” preguntar lo siguiente]	(0)	(1)	(8)	(9)	EXC15
Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna mordida o biombo?					
EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año? [Si dice “no” marcar 9 si dice “sí” preguntar lo siguiente]	(0)	(1)	(8)	(9)	EXC16
En la escuela o colegio durante el último año. ¿Tuvo que pagar alguna mordida?					

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿la corrupción de los funcionarios públicos está...?	EXC7
(1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada(4) Nada generalizada (8) NS/NR	

Ahora me puede decir...	
G11. ¿Recuerda usted cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? [No leer, George W. Bush]	G11
(1) Correcto (2) Incorrecto (no sabe)	
G13. ¿Recuerda usted cuantas provincias tiene Costa Rica? [No leer, 7]	G13
(1) Correcto (2) Incorrecto (o no sabe)	
G14. ¿Cuánto tiempo dura el período presidencial en Costa Rica? [No leer, cuatro años]	G14
(1) Correcto (2) Incorrecto (o no sabe)	
G15. ¿Recuerda usted cómo se llama el presidente de Brasil? [No leer, Luis Ignacio Lula da Silva; acepta "Lula"]	G15
(1) Correcto (2) Incorrecto (o no sabe)	

Hablando de otra cosa, el tema de los nicaragüenses en Costa Rica

CRMI01 En su opinión, qué debería hacer el Gobierno con los nicaragüenses que están ilegalmente en el país (LEER)	CRMI01
1. Deportarlos tan pronto los descubran 2. Investigarlos y dejar aquí a los que no tienen antecedentes penales 3. Facilitarles los procedimientos para darles la residencia y puedan quedarse en el país 8. NS/NR	
CRMI02 En general, los nicaragüenses que vienen a trabajar al país:	CRMI02
1. Hacen los trabajos que los costarricenses ya no quieren hacer, o 2. Le quitan el trabajo a los costarricenses. 8. NS/NR	
CRMI03 Los nicaragüenses que vienen a vivir y a trabajar a Costa Rica, ¿reciben menos beneficios, reciben lo que merecen, o reciben demasiados beneficios?	CRMI03
1. Reciben menos beneficios, 2. Reciben lo que merecen, 3. Reciben demasiados beneficios 8. NS/NR	
CRMI04 En su opinión, los nicaragüenses que vienen a vivir a Costa Rica, ¿tienen malas costumbres o tienen costumbres diferentes, pero no peor o mejor que los ticos?	CRMI04
1. Peor 2. Diferentes, pero no peor 3. (NO LEER) Algunos peor y otros no. 8. NS/NR	

Y siempre sobre el mismo tema,

	Sí	No	NS/NR	INAP	
CRMI05 En los últimos cinco años ¿tiene o ha tenido de vecino cercano a un nicaragüense?	1	2	8		CRMI05
CRMI06 ¿Tiene o ha tenido de amistad a un nicaragüense residente en Costa Rica?	1	2	8		CRMI06
CRMI07 ¿Tiene o ha tenido como compañero de trabajo a un nicaragüense?	1	2	8	9	CRMI07
CRMI08 ¿Tiene o ha tenido contratada a una empleada doméstica u otro trabajador nicaragüense?	1	2	8		CRMI08
CRMI09 ¿Tiene o ha tenido en su barrio, casa o cuadra guarda de seguridad nicaragüense?	1	2	8		CRMI09

L1. MOSTRAR TARJETA "E": Ahora para cambiar de tema.... En esta hoja hay una escala de 1 a 10 que va de izquierda a derecha. Hoy en día mucha gente, cuando conversa de tendencias políticas, habla de izquierdistas y derechistas, o sea, de gente que simpatiza más con la izquierda y de gente que simpatiza más con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se colocaría en esta escala?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	L1 (NS=88)
Izquierda									Derecha	

Si usted decidiera participar en algunas de las actividades que le voy a mencionar, ¿lo haría usted sin temor, con un poco de temor, o con mucho temor? [VAYA LEYENDO LA LISTA, REPITIENDO LA PREGUNTA SI ES NECESARIO]	SIN TEMOR	UN POCO DE TEMOR	MUCHO TEMOR	NS	
DER1. ¿Participar para resolver problemas de su comunidad?	1	2	3	8	DER1
DER2. ¿Votar en una elección nacional?	1	2	3	8	DER2
DER3. ¿Participar en una manifestación pacífica?	1	2	3	8	DER3
DER4. ¿Postularse para un cargo de elección popular?	1	2	3	8	DER4

VB1. ¿Tiene cédula de identidad? (1) Sí (2) No (3) En trámite (8) NS	VB1
VB2. ¿Votó en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, en febrero de 2002? (1) Sí votó [pase a CRVB3] (2) No votó [Siga] (8) NS	VB2
VB4. Si no votó, ¿Por qué no votó en esas elecciones? [anotar una sola respuesta Y PASAR A CRVB5] (01) Falta de transporte (02) Enfermedad (03) Falta de interés (04) No le gustó ningún candidato/partido (05) No cree en el sistema (06) Falta de cédula de identidad (07) No se encontró en el padrón electoral (10) No tener edad (11) Llegó tarde a votar/estaba cerrado (12) Tener que trabajar Otro _____ (88) NS/NR 99. No aplica	VB4
CRVB3. Siempre hablando de esa primera vuelta ¿por cuál partido votó para Presidente? 01 Unidad (PUSC) 02. Liberación Nacional (PLN) 03. PAC 04. Otro _____ 05 Voto Nulo/ Voto en Blanco 88. NS/NR 99. Inap (No votó)	CRVB3
CRVB7. ¿Por cuál partido votó para diputado a la Asamblea Legislativa? 01. Unidad (PUSC) 02. Liberación Nacional (PLN) 03. PAC 04. Movimiento Libertario 05. Otro _____ 06. Voto Nulo/ Voto en Blanco (88) NS/NR (99) Inap (no votó)	CRVB7
CRVB5. Ahora dígame ¿Votó usted en las elecciones para elegir alcaldes en diciembre del 2002? (1) Sí [siga] (2) No [PASE a CRVB1] (9) Aún no tenía edad (Inap) (8) NS/NR	CRVB5

CRVB6. ¿Por cuál partido votó para Alcalde en esas elecciones? 1. PONER NOMBRE _____ 2. Voto Nulo/ Voto en Blanco 88. NS/NR 99. Inap (No votó)	CRVB6
--	-------

CRVB1. ¿Puede decirme si en algunas de estas elecciones de las que hablamos, alguien lo presionó, o Ud. recibió algo a cambio por votar de cierta manera o no votar? 1. Sí 2. No 9. Aún no tenía edad (Inap) 8. NS/NR	CRVB1
--	-------

Hoy en día se habla mucho sobre reformas electorales. Me interesa conocer sus opiniones sobre las siguientes reformas. Vamos a usar otra vez la tarjeta "C". **[Entregue la tarjeta "C"]**.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(88)
Desaprueba firmemente							Aprueba firmemente			No sabe

CREREF1. ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba que a la hora de votar, las personas puedan escoger diputados entre distintos partidos y no por lista de partidos como ahora ?[Léame el número]	CREREF1	
CREREF2. ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba que las asociaciones y otros grupos puedan inscribir candidatos a diputados y no solo los partidos como ahora?	CREREF2	
CREREF3. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que se amplíe el número de diputados en la Asamblea Legislativa? ¿Hasta que punto aprobaría o desaprobaría?	CREREF3	

Ahora para terminar, le voy hacer algunas preguntas para fines estadísticos...

ED. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que aprobó?

[Encestador: llenar:] _____ Año de _____ (primaria, secundaria, universitaria) = _____ años total **[Usar tabla abajo para código y poner un círculo alrededor del número que corresponde]**

Nivel	Años de estudio						ED
00. Ninguno	(00)						
1. Primaria	1	2	3	4	5	6	
2. Secundaria	1	2	3	4	5+		
3. Educación superior	1	2	3	4	5+		
88. No sabe/no responde	(88)						

Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? _____ años	Q2	_ _
Q3. ¿Cuál es su religión? (1) Católica (2) Cristiana no católica (3) Otra no cristiana (4) Ninguna (8) No sabe o no quiere mencionar	Q3	
Q4. ¿Cuántas veces ha asistido Ud. a la iglesia (culto, templo) durante el mes pasado? (1) Todas las semanas (2) De vez en cuando (3) Rara vez (4) Nunca	Q4	

<p>Q10. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de esta casa, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan? [Mostrar lista de rangos Tarjeta F</p> <p>(0) Ningún ingreso (1) Menos de 40 mil colones (2) Entre 40 mil – 79 mil colones (3) Entre 80 mil – 119 mil colones (4) Entre 120 mil – 159 mil colones (5) Entre 160 mil – 199 mil colones (6) Entre 200 mil – 239 mil colones (7) Entre 240 mil – 279 mil colones (8) Entre 280 mil – 319 mil colones (9) Entre 320 mil – 399 mil colones (10) 400 mil colones y más (88) NS</p>	Q10	
<p>Q10A. ¿Recibe su familia dineros que envían parientes desde del exterior? (1) Si [siga] (2) No [saltar a Q11] (8) NS/NR</p>	Q10A	
<p>Q10B. ¿Hasta que punto dependen los ingresos familiares de esta casa de esos dineros? (1) mucho (2) algo (3) poco (4) nada (8) NS/NR</p>	Q10B	
<p>Q11. ¿Cuál es su estado civil? [no leer alternativas]</p> <p>(1) Soltero (2) Casado (3) Unión libre (acompañado) (4) Divorciado (5) Separado (6) Viudo (8) NS/NR</p>	Q11	
<p>Q12. ¿Cuántos hijos vivos tiene? _____ (0 = ninguno)</p>	Q12	
<p>CRQ13. ¿Cuántos hijos debería tener una persona como usted en toda la vida? _____</p>	CRQ13	____ ____
<p>Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años? (1) Sí (2) No (8) NS</p>	Q14	
<p>Q15. ¿Vivió Ud. en los EEUU en los últimos tres años? (1) Si (2) No (8) NS/NR</p>	Q15	

<p>CRETID. ¿Pertenece usted a la cultura.....? (1) Indígena (2) Afrocostarricense o negra (3) China (4) Ninguna de las anteriores (8) NS/NR</p>	CRETID	
---	---------------	--

Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: **[leer todos]**

R1. Televisor	(0) No	(1) Uno	(2) Dos	(3) Tres o más	R1	
R3. Refrigeradora [nevera]		(0) No		(1) Sí	R3	
R4. Teléfono convencional no celular		(0) No		(1) Sí	R4	
R4A. Teléfono celular		(0) No		(1) Sí	R4A	
R5. Vehículo	(0) No	(1) Uno	(2) Dos	(3) Tres o más	R5	
R6. Lavadora de ropa		(0) No		(1) Sí	R6	
R7. Microondas		(0) No		(1) Sí	R7	
R12. Agua potable dentro de la casa		(0) No		(1) Sí	R12	
R14. Servicio sanitario dentro de la casa		(0) No		(1) Sí	R14	
R15. Computadora		(0) No		(1) Sí	R15	

<p>OCUP1. Cuál es su ocupación principal?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional, directivo 2. Oficinista 3. Vendedor, comerciante 4. Campesino 5. Peon agricola 6. Servicio Doméstico 7. Otros servicios 10. Obrero especializado 11. Obrero no especializado 12. Estudiante 13. Ama de casa 14. Pensionado rentista <p style="margin-left: 100px;">} Pase a DESOC1</p> <p>15. Otro: _____</p> <p>88. NS</p>	<p>OCUP1</p>
<p>OCUP1A En esta ocupación Usted es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asalariado del gobierno o autonoma? 2. Asalariado sector privado? 3. Patrono o socio de empresa de menos de 5 empleados? 4. Patrono o socio de empresa de 5 o más empleados? 5. Trabajador por cuenta propia? 6. Trabajador no remunerado 8. NS 	<p>OCUP1A</p>
<p>DESOC1. ¿Ha estado desempleado (desocupado) durante el último año?</p> <p>(1) Sí</p> <p>(2) No</p>	<p>DESOC1</p>

<p>Hora terminada la entrevista _____ : _____</p> <p>TI. Duración de la entrevista [<i>minutos, ver página # 1</i>] _____</p>	<p>TI</p>
---	------------------

Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración.

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.

Firma del entrevistador _____ *Fecha* ____ / ____ /04 *Firma del supervisor de campo* _____

Firma del codificador _____

Comentarios: _____

Firma de la persona que digitó los datos _____

Firma de la persona que verificó los datos _____

Tarjeta "A"

Mucho	7
	6
	5
	4
	3
	2
Nada	1

Tarjeta "B"

Muy de Acuerdo	7
	6
	5
	4
	3
	2
Muy en Desacuerdo	1

Tarjeta "C"

Aprueba Firmemente	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
Desaprueba Firmemente	1

Tarjeta C-1.

1. La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente cambiada por medios revolucionarios.
2. Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas.
3. Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios.

Tarjeta C-2.

1. A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.
2. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
3. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.

Tarjeta "D"

1. La democracia es indispensable para llegar a ser un país desarrollado
2. No es indispensable pero es el mejor medio para llegar a ser un país desarrollado.
3. En realidad, pueden haber mejores medios que la democracia para llegar a ser un país desarrollado
4. Creo que un sistema de gobierno no democrático es indispensable para llegar a ser un país desarrollado

Tarjeta "E"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izquierda					Derecha				

Tarjeta "F"

Los ingresos familiares *mensuales*
de esta casa:

- (00) Ningún ingreso
- (01) Menos de 40 mil
- (02) Entre 40 mil – 79 mil
- (03) 80 mil-119 mil
- (04) 120 mil-159 mil
- (05) 160 mil-199 mil
- (06) 200 mil-239 mil
- (07) 240 mil-279 mil
- (08) 280 mil-319 mil
- (09) 320 mil-399 mil
- (10) 400 mil y más.